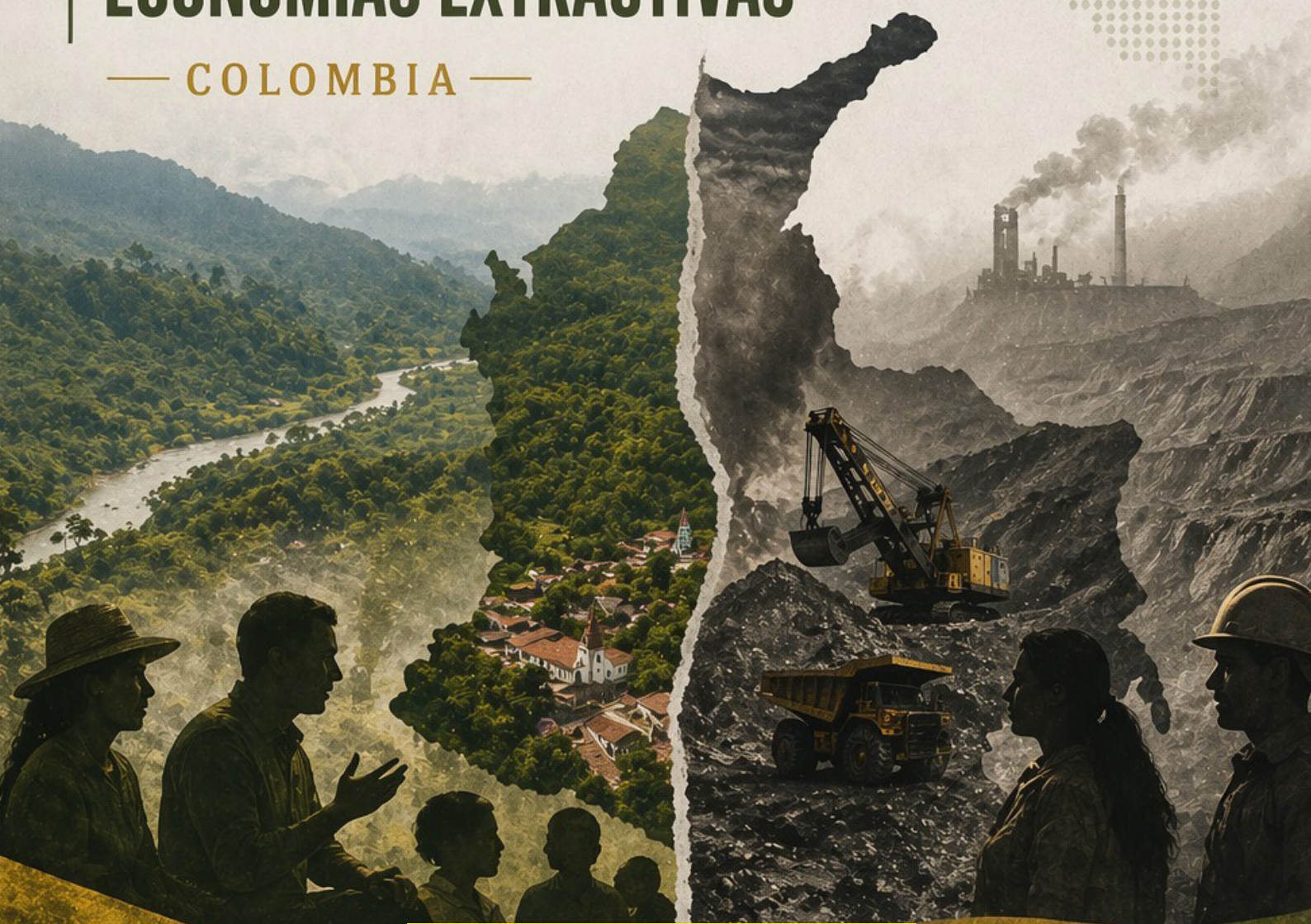


# DIÁLOGO SOCIAL GOBERNANZA Y CONFLICTO TERRITORIAL

— EN —  
ECONOMÍAS EXTRACTIVAS

— COLOMBIA —



**PROCURADURÍA**  
**GENERAL DE LA NACIÓN**  
COLOMBIA

# PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

---

COLOMBIA

**DIÁLOGO SOCIAL  
GOBERNANZA Y CONFLICTO  
TERRITORIAL EN ECONOMÍAS  
EXTRACTIVAS**

**Procuraduría General de la Nación  
2026**

**Editor**

Instituto de Estudios del Ministerio  
Público

**Dirección:** Carrera 5 # 15-80, Bogotá  
D.C., Colombia

**Contáctenos:**

<https://www.procuraduria.gov.co>

**Carolina Hoyos Villamil**

Directora Instituto de Estudios del  
Ministerio Público - IEMP

Coordinador Editorial

**Gary Hernández Guerrero**

Diseñador Editorial

**Diego González Trujillo**

**Autores:**

Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo  
Walter Rafael Azula Trajano

**División de Investigaciones  
Sociopolíticas y Asuntos  
Socioeconómicos - IEMP**

ISBN: 978-958-734-355-7

---

El Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y su Grupo de Gestión Editorial no se hacen responsables de las opiniones, errores u omisiones expresadas por los autores/as de esta publicación. Asimismo, los autores asumen la responsabilidad por el uso, citación y referenciación de fuentes, así como por los contenidos y derechos de autor relacionados con ideas, citas textuales, material gráfico de otros autores/as, documentos, publicaciones o contenido generado mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

# **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

---

**COLOMBIA**

**Gregorio Eljach Pacheco**  
Procurador General de la Nación

**Julián Fernández**  
Viceprocurador General de la Nación

**Carolina Hoyos Villamil**  
Directora Instituto de Estudios  
del Ministerio Público

**DIÁLOGO PARA  
CONSTRUIR  
CONSENSOS**

**PROCURADURÍA EN LAS  
REGIONES**

**Paz  
Electoral**

## **Autores:**

### **Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo**

Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, con posdoctorado en Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil. Especialista en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, y en derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la Universidad Externado de Colombia. Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en humanidades y énfasis en historia. Investigador y docente en ciencias sociales, especialmente en temas asociados al progreso social, perfiles productivos territoriales, políticas públicas y planes de desarrollo territorial e institucional con Enfoque Basado en Derechos Humanos. Docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible y coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Consultor del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación.

<https://orcid.org/0000-0002-2258-3927>  
ricsanchez@unisalle.edu.co  
ricardosanchezcarcamo@gmail.com

### **Walter Rafael Azula Trajano**

Magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica de Colombia y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como investigador del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) de la Procuraduría General de la Nación, donde ha participado en procesos de investigación aplicada orientados al análisis de problemáticas sociales, educativas y territoriales, así como a la reflexión sobre políticas públicas y acción institucional. Ha sido autor y colaborador en publicaciones académicas y de divulgación institucional del IEMP, aportando desde una perspectiva sociológica al estudio de la desigualdad, la formación ciudadana y los retos del sector público en Colombia.

walter.azula@gmail.com  
wazula@procuraduria.gov.co

## **Nota aclaratoria**

El presente libro es el resultado de una investigación aplicada desarrollada bajo el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales n.º 207-08-2025, suscrito entre el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo. Este contrato tuvo como propósito llevar a cabo una investigación orientada a comprender y sistematizar herramientas para la transformación de conflictos sociales en territorios con influencia del sector de hidrocarburos.

La iniciativa surgió a partir de la identificación de vacíos de conocimiento por parte de la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP, que detectó la necesidad de abordar el impacto social del extractivismo petrolero. Dado que este desafío no podía ser atendido con suficiencia por el personal de planta del instituto, se consideró indispensable contar con una experticia especializada capaz de integrar metodologías cualitativas, un análisis comparativo y un enfoque de análisis crítico del discurso.

Desde esta perspectiva, el contrato no se considera un trámite administrativo aislado, sino una apuesta estratégica que articula la producción de conocimiento con la misión institucional del IEMP, la cual es fortalecer los procesos de gobernanza territorial y acompañar los espacios de diálogo social.

## **Agradecimientos**

La investigación fue coordinada por Luis Enrique Martínez Ballén, jefe de la División de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, quien orientó el proceso general y articuló el desarrollo del trabajo investigativo. María Lucía Flórez Saldarriaga, psicóloga, quien realizó las entrevistas y estuvo a cargo de su transcripción, contribuyendo de manera significativa al trabajo de campo y a la sistematización de la información cualitativa. Finalmente, la investigación contó con el apoyo de Mariangel Peñaloza Ortega, antropóloga y asistente de investigación del IEMP, quien apoyó la recopilación y organización de documentos empleados como insumos técnicos para el diseño de la investigación y el análisis de la información.

# Tabla de contenido

Introducción .....	09
<b>Marco teórico</b> .....	<b>19</b>
Modelo económico extractivista y desigualdades estructurales .....	20
De la desigualdad estructural a las privaciones relativas .....	25
Inseguridad ontológica como ruptura de la cohesión social .....	27
Conflictividad social como manifestación visible .....	31
El diálogo como estrategia de transformación .....	34
Supuesto general de la investigación .....	37
<b>Marco metodológico</b> .....	<b>39</b>
Entrevistas semiestructuradas .....	42
Análisis crítico del discurso (ACD) .....	47
Nivel textual .....	48
Nivel discursivo .....	51
Nivel sociopolítico .....	53
Fases de recolección, análisis de datos y resultados .....	55
<b>Resultado</b> .....	<b>57</b>
<b>II. Análisis crítico del discurso en Barrancabermeja</b> .....	<b>60</b>
A. Nivel textual (Barrancabermeja) .....	61
B. Nivel discursivo (Barrancabermeja) .....	86
C. Nivel sociopolítico (Barrancabermeja) .....	108
<b>III. Análisis crítico del discurso en Yopal</b> .....	<b>142</b>
A. Nivel textual (Yopal) .....	143
B. Nivel discursivo (Yopal) .....	150
C. Nivel sociopolítico (Yopal) .....	158
<b>IV. Comparación sistemática entre Barrancabermeja y Yopal</b> .....	<b>167</b>
Mapa léxico comparado .....	168
Metáforas dominantes por territorio .....	172
Estrategias discursivas convergentes y divergentes .....	175
Relaciones de poder y legitimación .....	177

Modos de resistencia y articulación comunitaria .....	180
Implicaciones para políticas públicas y gobernanza .....	182
<b>V. Convergencias estructurales del extractivismo: desigualdad, privación y resistencia .....</b>	<b>184</b>
De las diferencias territoriales a la matriz causal compartida .....	189
Desigualdad estructural como punto de partida .....	189
Privación relativa: sentir que se perdió más de lo que se ganó .....	193
Inseguridad ontológica: la vida en riesgo .....	198
Repertorios de resistencia como respuesta a la inseguridad .....	201
<b>Conclusiones generales .....</b>	<b>207</b>
Implicaciones para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza .....	213
<b>Glosario analítico .....</b>	<b>217</b>
A. Conceptos estructurantes del extractivismo .....	218
B. Categorías del análisis crítico del discurso aplicadas al conflicto petrolero .....	220
C. Conceptos sociohistóricos de Barrancabermeja .....	222
D. Conceptos socioterritoriales de Yopal .....	224
<b>Referencias .....</b>	<b>227</b>
<b>Anexo 1 .....</b>	<b>233</b>
<b>Entrevista semiestructurada central .....</b>	<b>234</b>
<b>Anexo 2 .....</b>	<b>237</b>
<b>Formato de consentimiento informado y autorización de uso de la información .....</b>	<b>238</b>

# Introducción



Desde su creación, las escuelas regionales de diálogo social (ERDS) buscaban transformar la manera como Colombia aborda los conflictos territoriales derivados de la presencia de industrias extractivas, megaproyectos de infraestructura y dinámicas de acumulación desiguales. Bajo el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), las ERDS se conciben como espacios institucionales destinados a fortalecer capacidades de diálogo, mediación, participación ciudadana y construcción de acuerdos desde los territorios. Estas escuelas tienen la misión de proveer herramientas de investigación, formación y acompañamiento que faciliten la identificación, prevención, transformación y seguimiento de conflictos, promoviendo el respeto por los derechos humanos, la participación comunitaria y la convivencia pacífica (PGN, s.f.).

El presente libro asume como eje central esa vocación de las ERDS, proponiendo que no basta con diseñar instrumentos técnicos de gobernanza, por lo que es necesaria una comprensión profunda de los territorios (de sus historias, memorias, dolores, resistencias y narrativas) para que el diálogo social sea legítimo, pertinente y transformador. Este

no es un libro de recomendaciones genéricas, sino un intento de construir un puente entre el conocimiento producido desde la academia, el análisis crítico de discurso y las voces concretas de comunidades que han vivido la experiencia extractiva. El objetivo es entregar insumos que puedan ser útiles (no solo para comprender) sino para orientar procesos reales de mediación, formación y gobernanza territorial en contextos vulnerables y conflictivos.

Estudiar territorios con perfiles diferentes (como Barrancabermeja, tradicional enclave petroindustrial con memoria obrera, y Yopal, ciudad del llano marcada por un boom petrolero reciente y dinámicas rurales y urbanas en tensión) es clave porque permite mirar la diversidad de expresiones del conflicto petrolero en Colombia. Barrancabermeja representa la herida del despojo laboral, la privatización y la cultura sindical desmantelada. Yopal revela la violencia sobre el territorio, la ruptura de la cultura campesina, la corrupción de regalías, el deterioro ambiental y la fragmentación comunitaria. Estudiar ambos casos permite identificar patrones estructurales compartidos, pero también reconocer las variaciones territoriales que condi-

cionan cómo se vive, interpreta y se resiste la extracción de hidrocarburos. Este enfoque comparativo ofrece a las ERDS un mapa analítico tangible que enseña que no existe un único «conflicto petrolero», sino múltiples geografías del conflicto que requieren respuestas contextualizadas. Permite también reconocer que las comunidades, a pesar de sus diferencias, desarrollan repertorios de resistencia creativos (sindical, comunitario, ambiental, territorial) que pueden ser la base de nuevas formas de gobernanza, de diálogo social auténtico y de construcción de paz territorial. De esta manera, el libro aspira a contribuir no solo al debate académico sobre extractivismo, territorio y conflicto, sino a fortalecer la capacidad práctica de las ERDS para actuar en escenarios reales. Propone que las escuelas de diálogo no sean espacios neutrales, técnicos o burocráticos, sino espacios vividos, reconocidos, legitimados por las comunidades y nutridos por su sabiduría territorial. Solo así puede transformarse, de verdad, el conflicto petrolero en oportunidad de reconocimiento, justicia y democracia territorial.

Así, el objeto apunta a una investigación orientada a identificar, organizar y traducir en productos concretos las prácticas sociales, los discursos y las experiencias comunitarias que emergen en contextos de conflictividad petrolera que contribuyan a las ERDS. Por ello se escogieron

dos escenarios emblemáticos: Barrancabermeja, ciudad que se constituyó como enclave urbano-industrial desde los años veinte, marcada por la presencia de la refinería, el sindicalismo obrero y la confrontación con políticas de privatización, y Yopal, municipio de tradición agropecuaria que experimentó en los años noventa la irrupción abrupta de la industria con el boom de Cusiana y Cupiagua, proceso que trajo consigo transformaciones demográficas, urbanas y ambientales de gran envergadura. La comparación entre estos dos casos no responde a un capricho metodológico, sino a la intención de mostrar cómo la industria petrolera produce trayectorias sociales y territoriales radicalmente distintas según las estructuras históricas y las formas de organización local, y cómo esas diferencias se convierten en fuente de aprendizajes útiles para otros contextos del país.

En los territorios colombianos donde opera la industria petrolera, la conflictividad social ha sido una constante que trasciende las coyunturas locales y expresa tensiones estructurales del modelo económico extractivista. La concentración de beneficios, la repatriación de utilidades y la débil redistribución de la riqueza han producido profundas desigualdades territoriales, alimentando sentimientos de frustración e inseguridad frente al futuro. En lugares como Barrancabermeja y Yopal, estas tensio-

nes se manifiestan de manera diferenciada: en el primero, a través de una larga tradición de organización obrera y sindical que confronta las políticas de privatización y la precarización del trabajo; en el segundo, mediante resistencias campesinas y ambientales frente al impacto abrupto del boom petrolero sobre la vocación agropecuaria y la sostenibilidad del territorio. Estas expresiones de conflicto no son anomalías del orden social, sino respuestas a la erosión de la cohesión colectiva que produce un modelo económico que concentra beneficios y externaliza costos.

En este contexto, la investigación parte del reconocimiento de que la conflictividad en territorios petroleros constituye una manifestación visible de desigualdades estructurales que generan privaciones relativas e inseguridad ontológica en las comunidades. El desafío no consiste solo en describir los conflictos, sino en identificar cómo las comunidades elaboran repertorios discursivos, organizativos y pedagógicos que les permiten resistir, negociar y transformar esas condiciones. De ahí que surja la pregunta que orienta el estudio: ¿cómo se manifiestan y transforman los conflictos sociales en territorios con presencia de la industria petrolera, y qué herramientas discursivas, organizativas y comunitarias pueden sistematizarse a partir de las experiencias de Barrancabermeja y Yopal para fortalecer las escuelas re-

gionales de diálogo para la gobernanza territorial?

De esta forma, el objetivo general de la investigación se centra en identificar y sistematizar herramientas de transformación de conflictos sociales en territorios con presencia de la industria petrolera, a partir de la comparación entre Barrancabermeja y Yopal, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las escuelas regionales de diálogo que impulsa el IEMP. Este objetivo se despliega en la necesidad de analizar los impactos sociales y territoriales que genera la industria, sistematizar las prácticas organizativas y de resistencia que han surgido en cada escenario, construir un análisis comparativo que permita extraer aprendizajes transferibles y elaborar un documento curricular que convierta estos hallazgos en material pedagógico para la formación de actores sociales y comunitarios.

La importancia de este proyecto radica en que no se limita a producir un informe académico, sino que vincula la investigación con la acción institucional, buscando que los hallazgos se conviertan en herramientas prácticas para la formación, la mediación y la gobernanza en escenarios de alta conflictividad social. El conocimiento que aquí se genere como libro de investigación será propiedad del IEMP y estará orientado al fortalecimiento de sus funciones misionales,

de modo que los productos no solo sean evidencia de cumplimiento contractual, sino aportes directos a la consolidación de capacidades institucionales en materia de diálogo social y transformación de conflictos; por eso, la elección de Barrancabermeja y Yopal como territorios de estudio no responde a un criterio de conveniencia geográfica ni a una simple delimitación administrativa, sino a la necesidad de construir un contraste analítico que permita comprender la manera en que la inserción de la industria petrolera produce trayectorias sociales y territoriales profundamente diferenciadas. Este contraste constituye la base misma de la investigación, ya que posibilita al IEMP identificar cómo las particularidades históricas, organizativas y territoriales condicionan no solo el tipo de conflictividad que emerge, sino también las herramientas que las comunidades elaboran para enfrentarlas.

Barrancabermeja representa el caso paradigmático de una ciudad que nació y se consolidó alrededor del petróleo. Desde la década de 1920, la presencia de la Tropical Oil Company y luego de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) convirtió a este municipio en un enclave urbano-industrial, articulando migraciones obreras, crecimiento urbano acelerado y la formación de una identidad colectiva fuertemente ligada al trabajo petrolero. La historiografía

muestra que esta configuración produjo una cultura sindical y laboral con una incidencia decisiva en el ámbito nacional. Serrano (2013) demostró cómo el crecimiento urbano de la ciudad en los años veinte y treinta fue inseparable de las dinámicas de la industria, mientras que Vega (2008) caracterizó las huelgas de la Unión Sindical Obrera no como simples protestas laborales, sino como auténticas confrontaciones sociales. En este escenario, Becerra (2009) señala que la conflictividad de la ciudad estuvo atravesada por privatizaciones, violencia política y la presencia paramilitar, mostrando que el petróleo no solo generó riqueza, sino también profundas tensiones sociales y políticas.

Yopal, en contraste, ofrece la imagen de un municipio de vocación agropecuaria que fue transformado abruptamente por el boom de Cusiana y Cupiagua en los años noventa. Su historia revela cómo la llegada súbita de la industria provocó un crecimiento urbano desordenado, migraciones masivas y un déficit estructural en salud, educación y vivienda. Chaves (2014) muestra que, a pesar de los ingresos generados por las regalías, los municipios petroleros del Casanare no experimentaron un progreso social proporcional, en buena medida por la corrupción y la debilidad institucional. Investigaciones más recientes evidencian que el campesinado local fue desplazado hacia formas pre-

carias de trabajo asalariado, perdiendo control sobre la tierra y debilitando su capacidad de reproducción social (Sáenz Pacheco y Vanhellemont, 2024). De este modo, el conflicto en Yopal no se canalizó a través del sindicalismo obrero, sino mediante movilizaciones comunitarias, consultas populares y resistencias en torno a la defensa del agua, la tierra y la identidad campesina.

Este contraste es metodológicamente pertinente porque permite analizar cómo en un caso el petróleo fue constitutivo de la identidad urbana-industrial y en el otro se percibió como una irrupción que alteró la vocación agropecuaria. Para el IEMP, este punto de partida es fundamental, ya que al aplicar entrevistas semiestructuradas se podrán recoger narrativas que reflejen estas diferencias en la manera de nombrar, resistir y resignificar la experiencia del petróleo. A través del análisis crítico del discurso, siguiendo a Van Dijk (2009), será posible interpretar cómo en Barrancabermeja los discursos sindicales construyen marcos de dignidad laboral y de memoria colectiva, mientras que en Yopal los discursos campesinos articulan representaciones de defensa territorial y ambiental. La comparación de ambos permitirá extraer herramientas diferenciadas de transformación de conflictos, unas vinculadas a la negociación colectiva y otras a la acción comunitaria y ambiental, que al ser sistematizadas

pueden convertirse en insumos para fortalecer las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza territorial.

Barrancabermeja constituye el ejemplo más elocuente de cómo una ciudad puede nacer y crecer al compás del petróleo, convirtiéndose en un enclave urbano-industrial cuya identidad está íntimamente ligada a la refinería y al movimiento obrero. Desde la llegada de la Tropical Oil Company en la década de 1920 y la posterior consolidación de Ecopetrol, el municipio se configuró como un espacio marcado por la concentración industrial, la migración de trabajadores y la formación de un tejido urbano que giraba en torno a la actividad extractiva. Investigaciones como las de Serrano (2013) han mostrado cómo el crecimiento urbano de Barrancabermeja entre 1926 y 1936 se explica casi exclusivamente por la dinámica petrolera, lo que evidencia que la industria no solo organizó la economía local, sino que también definió el trazado de la ciudad, el tipo de población que se asentó en ella y los modos de vida que emergieron a partir del trabajo fabril.

La presencia del petróleo en Barrancabermeja no puede comprenderse sin el papel del sindicalismo. La Unión Sindical Obrera (USO) se constituyó en el actor social más relevante de la ciudad, articulando la defensa de los derechos laborales con la construcción de una identidad

colectiva obrera que trascendió lo meramente económico para inscribirse en la arena política nacional. Vega (2008) ha señalado que la huelga de 1977, organizada por la USO, no fue una protesta laboral ordinaria, sino una auténtica «guerra social» que evidenció la capacidad de la clase trabajadora para disputar al Estado y a las empresas la definición de las condiciones de trabajo y de vida en la ciudad. Barrancabermeja, de este modo, encarna una forma de conflictividad donde el discurso obrero se convirtió en un arma política, en un repertorio de resistencia y en un marco de dignificación del trabajo, y cuya influencia se extendió mucho más allá de los límites del municipio.

Sin embargo, esta centralidad del sindicalismo y de la refinería como motor urbano también generó vulnerabilidades. Becerra (2009) documenta cómo la privatización parcial de Ecopetrol entre los años ochenta y dos mil, sumada a la expansión del paramilitarismo, generó una reconfiguración del conflicto que debilitó las capacidades organizativas del movimiento obrero e introdujo un clima de violencia que dejó profundas huellas en la sociedad local. La ciudad se convirtió en un espacio donde se cruzaban la disputa por el control de la industria, la imposición de políticas neoliberales y la lucha armada, mostrando que la conflictividad petrolera no podía reducirse a la negociación sindical, sino

que se entrelazaba con fenómenos de violencia política y económica de mayor escala.

La relevancia de estudiar Barrancabermeja en el marco de esta investigación radica en que ofrece un escenario histórico para comprender cómo se configura la conflictividad cuando el petróleo no irrumpe de manera súbita, sino que está presente desde el nacimiento mismo de la ciudad. Las entrevistas semiestructuradas a sindicalistas, líderes comunitarios y autoridades locales permitirán recoger testimonios sobre las transformaciones del sindicalismo, las memorias de las luchas obreras y las tensiones actuales frente a la transición energética y la modernización de la refinería. Desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, será posible examinar cómo se construyen las narrativas de dignidad laboral, cómo se han legitimado las resistencias frente a la privatización y cómo persisten discursos de desconfianza hacia el Estado y las empresas, en contraste con aquellos que promueven la industria como motor de progreso.

El análisis textual de estas entrevistas permitirá identificar vocabularios y metáforas vinculados a la memoria del trabajo petrolero, mientras que en el nivel discursivo se observarán las estrategias argumentativas y retóricas que los actores utilizan para legitimar sus posiciones frente al Estado y la empresa. En el nivel

sociopolítico, siguiendo a Van Dijk (2009), se podrá comprender cómo estas narrativas se insertan en un contexto más amplio de relaciones de poder, donde las decisiones nacionales sobre Ecopetrol y las reformas al sistema de regalías determinan la vida cotidiana de los habitantes. Barrancabermeja, en este sentido, es un laboratorio privilegiado para analizar cómo los discursos obreros y comunitarios se enfrentan a las lógicas del mercado, a la presión de la modernización industrial y a los discursos oficiales que presentan el petróleo como sinónimo de desarrollo.

El IEMP encontrará en el estudio de Barrancabermeja no solo la reconstrucción de un caso histórico, sino también la posibilidad de extraer herramientas discursivas y organizativas que han sido empleadas por décadas en la transformación de los conflictos. El sindicalismo, con todas sus tensiones, ha desarrollado repertorios de resistencia y negociación que pueden servir como insumo para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza, en tanto muestran cómo las comunidades se organizan para disputar poder, defender derechos y plantear alternativas en contextos de alta conflictividad.

Si Barrancabermeja constituye el ejemplo de una ciudad que se consolidó históricamente alrededor del petróleo y del sindicalismo, Yopal ofrece una experiencia completamente distinta, marcada por la

irrupción súbita de la industria en un territorio con tradición agropecuaria y campesina. Hasta finales de los años ochenta, Yopal era un municipio de vocación agrícola y ganadera, con dinámicas propias de la economía campesina y con una estructura urbana pequeña, vinculada estrechamente al ciclo de producción de alimentos y al intercambio con poblaciones rurales cercanas. Todo cambió de manera abrupta con el descubrimiento y explotación de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua en la década de los noventa, lo que convirtió al Casanare en uno de los departamentos con mayores ingresos por regalías en el país y transformó radicalmente la fisonomía de la capital departamental.

Este proceso generó un crecimiento urbano acelerado y sin planificación, acompañado de fuertes oleadas migratorias que desbordaron la capacidad de las instituciones locales. Chaves (2014) mostró que, a pesar de los ingresos extraordinarios por regalías, los municipios petroleros del Casanare no experimentaron un progreso económico y social proporcional, lo cual se explica tanto por fenómenos de corrupción y clientelismo como por la debilidad del Estado local para administrar los recursos. El resultado fue una ciudad que creció de manera caótica, con barrios informales, altos índices de desigualdad y precariedad en servicios públicos, situación que aún hoy constituye un rasgo característico de Yopal.

En el plano social, las transformaciones fueron igualmente profundas. La llegada de población foránea modificó los equilibrios demográficos y alteró los sistemas tradicionales de tenencia y uso de la tierra. Muchos campesinos se vieron desplazados o forzados a integrarse como trabajadores asalariados en la industria, en condiciones de inestabilidad y con pérdida de autonomía. Investigaciones recientes como la de Sáenz Pacheco y Vanhellemont (2024) han mostrado que los conflictos por acceso al suelo y por informalidad en la vivienda en Yopal deben entenderse no solo como un déficit urbano, sino como una consecuencia directa del impacto del petróleo sobre el territorio y como un reflejo de la vulnerabilidad estructural de los campesinos frente a la expansión de la frontera extractiva.

En este contexto, la conflictividad no se expresó principalmente a través del sindicalismo, como en Barrancabermeja, sino mediante movilizaciones comunitarias, consultas populares y discursos de resistencia ambiental. El agua, la tierra y la sostenibilidad se convirtieron en ejes de disputa, en tanto que los actores locales comenzaron a articular un discurso que defendía la vocación agropecuaria del territorio frente a la imposición del modelo extractivo. Salman, De Theije y Vélez-Torres (2018) señalan que los conflictos por recursos naturales no pueden comprenderse únicamente como pug-

nas materiales, sino como interacciones complejas donde intervienen estructuras, actores y marcos de representación. Yopal ejemplifica bien esta idea: lo que está en juego no es únicamente la distribución de regalías o el acceso a empleo, sino la disputa por el sentido del territorio y por la legitimidad de un modelo de desarrollo.

Desde la perspectiva metodológica de esta investigación, Yopal constituye un escenario privilegiado para analizar cómo las comunidades construyen narrativas de resistencia en contextos donde la irrupción del petróleo desestabiliza el tejido social y amenaza con erosionar identidades campesinas. Las entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios, campesinos, autoridades locales y representantes de organizaciones ambientales permitirán recoger testimonios sobre las transformaciones recientes y sobre las memorias de resistencia. El análisis crítico del discurso (ACD), siguiendo los planteamientos de Van Dijk (2009), permitirá estudiar cómo estas narrativas se articulan en tres niveles: en el plano textual, identificando expresiones y metáforas que evocan la defensa del agua, la tierra o la vocación campesina; en el plano discursivo, examinando las estrategias retóricas que legitiman las movilizaciones comunitarias y las consultas populares frente al discurso oficial de desarrollo, y en el plano sociopolítico, vinculando estas voces

con el marco más amplio de políticas públicas, instituciones débiles y dinámicas de poder que caracterizan al Casanare.

La pertinencia de incluir Yopal en esta investigación radica en que su análisis aporta herramientas de transformación de conflictos diferentes a las que se encuentran en Barrancabermeja. Mientras en esta última el repertorio está marcado por el sindicalismo y la negociación laboral, en Yopal lo está por el comunitarismo, la defensa ambiental y la construcción de ciudadanía frente a la ausencia de institucionalidad. Esta diversidad metodológica permitirá al IEMP sistematizar un abanico más amplio de prácticas y discursos de transformación que, al ser trasladados a las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza, enriquecerán su capacidad para intervenir en escenarios heterogéneos.

La decisión de poner en diálogo a Barrancabermeja y Yopal no obedece únicamente a una lógica descriptiva, sino que responde a la necesidad de construir un marco metodológico que permita al IEMP comprender la heterogeneidad de los conflictos sociales en territorios con presencia de hidrocarburos. El contraste entre ambos escenarios se convierte en una herramienta analítica de primer orden porque hace posible observar cómo contextos históricos distintos producen repertorios igualmente diferenciados de conflictividad y de resistencia, y, en

consecuencia, de herramientas para su transformación. La investigación no busca unificar las experiencias en un modelo único, sino visibilizar la riqueza de las diferencias y mostrar cómo esas diferencias constituyen recursos formativos para el diseño curricular de las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza.

Barrancabermeja ofrece un caso donde la conflictividad se ha expresado a través de un sindicalismo con larga trayectoria, cuya narrativa se articula en torno a la defensa de la dignidad laboral, la memoria de las luchas obreras y la confrontación con las políticas neoliberales y de privatización (Vega, 2008; Becerra, 2009). Allí, el discurso sindical se erige como un repertorio de resistencia que, mediante huelgas, negociaciones y movilizaciones, ha buscado transformar relaciones de poder enraizadas en la estructura del trabajo industrial. En contraste, Yopal muestra cómo la irrupción abrupta del petróleo sobre un territorio campesino generó resistencias articuladas en clave ambiental y comunitaria, donde el agua, la tierra y la identidad rural se convirtieron en ejes de la defensa colectiva frente a la expansión extractiva (Chaves, 2014; Sáenz Pacheco y Vanhellefont, 2024). El discurso aquí no se centra en la negociación laboral, sino en la protección del territorio y en la reivindicación de derechos colectivos que trascienden lo económico.

El valor metodológico de este contraste radica en que permite aplicar el análisis crítico del discurso de manera comparativa, examinando cómo en dos contextos diferentes se producen, circulan y confrontan narrativas que legitiman o cuestionan la industria petrolera. Desde el nivel textual, se podrán identificar las metáforas y vocabularios que diferencian a un territorio del otro: mientras en Barrancabermeja predominan expresiones vinculadas al trabajo, la producción y la lucha obrera, en Yopal emergen categorías asociadas a la tierra, el agua y la sostenibilidad. En el nivel discursivo, se observarán estrategias retóricas diferenciadas, unas ligadas a la negociación sindical y otras a la movilización comunitaria. En el nivel sociopolítico, finalmente, se podrá interpretar cómo los discursos de ambos territorios se relacionan con estructuras más amplias de poder, ya sea en torno a Ecopetrol y las políticas estatales en el caso urbano-industrial o frente a la debilidad institucional y el manejo de regalías en el caso rural (Salman, De Theije y Vélez-Torres, 2018).

La comparación entre estos territorios también se fortalece con el uso de entrevistas semiestructuradas, que permitirán recoger voces plurales y contrastarlas directamente. Escuchar a un sindicalista de Barrancabermeja relatar la memoria de una huelga y a un campesino de Yopal explicar su participación en una consulta popular no solo mues-

tra experiencias distintas, sino que revela universos discursivos divergentes que deben ser comprendidos en sus propios términos. El ACD permitirá integrar estas voces en un análisis sistemático que reconozca sus diferencias, pero que también identifique patrones comunes, como la desconfianza hacia el Estado, la denuncia de desigualdades territoriales o la búsqueda de alternativas de gobernanza.

El contraste metodológico asegura que la investigación no produzca un diagnóstico limitado a un solo tipo de conflictividad, sino que construya un marco amplio de aprendizajes. Al sistematizar los repertorios de resistencia y de transformación de ambos casos, el IEMP podrá disponer de herramientas aplicables a distintos contextos del país, reconociendo que los conflictos petroleros no son homogéneos y que las respuestas sociales tampoco lo son. La pertinencia institucional de este contraste reside precisamente en su capacidad para enriquecer el currículo de las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza con experiencias diversas que permitan formar actores capaces de intervenir en escenarios de conflictividad complejos, ya sean urbanos-industriales o rurales-campesinos.

# Marco teórico

El estudio que aquí se plantea se fundamenta en la convicción de que los conflictos sociales que atraviesan a los territorios petroleros no son el resultado de coyunturas aisladas ni de tensiones eventuales entre comunidades y empresas, sino la manifestación más visible de una estructura económica que concentra riqueza y distribuye despojo. El modelo primario-extractivista, fortalecido por la inversión extranjera y por las políticas estatales que han incentivado la explotación intensiva de recursos, ha reproducido desigualdades profundas que erosionan la cohesión social. Cuando las comunidades constatan que la riqueza que producen sus territorios no se traduce en bienestar compartido, emergen privaciones relativas que multiplican la frustración y la sensación de injusticia. Esa distancia entre expectativas y realidades se convierte en inseguridad ontológica, es decir, en la pérdida de la confianza básica en el futuro, en las instituciones y en la posibilidad de sostener un proyecto de vida con continuidad. La hipótesis que orienta esta investigación sostiene que la conflictividad social en Barrancabermeja y Yopal es efecto directo de esa cadena causal: desigualdad estructural que produce privaciones relativas, privaciones que alimentan inseguridad ontológica e inseguridad que se manifiesta en repertorios de resistencia obrera, campesina y ambiental.

Con este punto de partida, el marco teórico se organiza en cinco apartados que permiten dar cuenta de la relación causal y, al mismo tiempo, de los contextos concretos donde se expresa. El primero examina el modelo económico extractivista y las desigualdades estructurales que genera, para situar allí la raíz de los conflictos territoriales.

## Modelo económico extractivista y desigualdades estructurales

El modelo económico colombiano se ha estructurado históricamente alrededor de actividades primario-extractivistas, donde los hidrocarburos ocupan un lugar central en la inserción del país en la economía global. En este marco, la inversión extranjera directa ha sido presentada institucionalmente como un mecanismo para promover el desarrollo y equilibrar la balanza de pagos. Sin embargo, investigaciones recientes han mostrado que los flujos de capital asociados a sectores extractivos generan un efecto adverso sobre la balanza comercial, debido a la importación intensiva de bienes de capital y a la repatriación de utilidades. Ello configura economías de enclave con débiles encadenamientos productivos y escasa generación de empleo estable (Sánchez et al., 2025).

La perspectiva crítica sobre este modelo parte de entender la desigualdad no como una simple diferencia de ingresos, sino como un fenómeno estructural que atraviesa múltiples dimensiones de la vida social. La desigualdad estructural se expresa en la concentración de beneficios en sectores reducidos, en la precariedad laboral, en el deterioro ambiental y en la restricción del acceso a derechos sociales básicos. Estos elementos erosionan la cohesión social y alimentan procesos de conflictividad, en tanto incrementan la distancia entre las expectativas colectivas y las condiciones efectivamente disponibles (Sánchez, 2022; 2023; 2024).

El caso de Barrancabermeja permite ilustrar estas dinámicas. Desde su consolidación como enclave urbano-industrial en la década de 1920, la ciudad estuvo vinculada al desarrollo de la refinería y a la formación de una identidad obrera alrededor del sindicalismo petrolero (Serrano, 2013). Sin embargo, las políticas de apertura económica y privatización implementadas entre 1980 y 2000, junto con la violencia paramilitar, profundizaron las desigualdades locales y debilitaron la organización laboral (Becerra, 2009). Incluso procesos recientes de modernización de la refinería, que se presentaron como estrategias de progreso económico, no se tradujeron en beneficios proporcionales para la población (Fedesarrollo, 2015; Ecopetrol, 2022).

En Yopal y en Casanare, la expansión de la industria petrolera a partir de los años noventa provocó transformaciones aún más abruptas. La llegada del boom de Cusiana y Cupiagua produjo migraciones masivas y un crecimiento urbano desordenado, sin que ello se reflejara en mejoras sostenidas de las condiciones sociales (Chaves, 2014; Ramírez, 2022). La expansión extractiva generó conflictos por el uso del agua y de la tierra, así como procesos de resistencia comunitaria frente a los impactos ambientales y sociales (Duarte, 2016; Sáenz Suárez y Pereira, 2017). A su vez, el acceso informal a la vivienda y la urbanización precaria se convirtieron en manifestaciones visibles de las desigualdades estructurales derivadas del modelo (Sáenz Pacheco y Vanhellemont, 2024).

En este sentido, la literatura ha señalado que los conflictos socioambientales en contextos de recursos naturales deben comprenderse como procesos que vinculan estructuras económicas, actores sociales y marcos de interacción política (Salman, De Theije y Vélez-Torres, 2018; Puerto, s.f.). La concentración de los beneficios en manos de empresas multinacionales y élites locales, sumada a la socialización de los costos sobre las comunidades, configura el mecanismo estructural a través del cual el extractivismo reproduce desigualdades y genera tensiones que afectan directamente la cohesión social.

El extractivismo contemporáneo no puede entenderse como una simple actividad económica orientada a la obtención de rentas, sino como una estructura de organización del poder que define las relaciones entre el territorio, el Estado y el capital. Su lógica se fundamenta en la extracción intensiva de recursos naturales sin un retorno proporcional para las comunidades locales, configurando así un régimen económico que concentra beneficios y distribuye costos. Allí donde la tierra, el agua o el subsuelo se convierten en mercancías, el tejido social se transforma en función de una economía que prioriza la acumulación por encima de la reproducción de la vida. El resultado es un modelo que promete prosperidad y deja dependencia, que anuncia progreso y consolida desigualdad.

Las investigaciones sobre las regiones mineras y petroleras andinas muestran que el extractivismo actúa como un régimen de enclave que canaliza la riqueza hacia actores externos y margina las economías locales. En lugar de generar un efecto multiplicador, la extracción desarticula los sistemas productivos tradicionales y los sustituye por circuitos de servicio subordinados a las necesidades de las empresas. Este patrón reproduce una forma de desarrollo que no integra al territorio, sino que lo utiliza como soporte material de una economía diseñada en otra parte

(Arellano-Yanguas, 2017). La desigualdad no es un efecto colateral del modelo, sino su condición estructural. Solo puede existir un enclave próspero en la medida en que su entorno permanezca subordinado.

El funcionamiento del sistema de regalías confirma esta lógica. Aunque los ingresos derivados del petróleo y la minería se presentan como mecanismos de redistribución, su aplicación ha profundizado las brechas entre centro y periferia. Los municipios productores, que soportan los impactos ambientales y sociales de la extracción, no logran convertir la renta en bienestar sostenido ni en infraestructura duradera. La dependencia de los precios internacionales y la falta de autonomía administrativa impiden que los recursos se transformen en desarrollo territorial (Perry y Olivera, 2009). Los flujos de dinero que deberían equilibrar la desigualdad terminan fortaleciendo redes clientelares y burocráticas que consolidan el control central sobre los territorios.

Esta estructura de dependencia fiscal y política produce un tipo particular de desigualdad que atraviesa lo económico, lo institucional y lo simbólico. En el plano económico, la concentración de la renta impide la diversificación productiva y restringe la innovación local. En el plano institucional, la administración centralizada de los recursos de-

bilita la capacidad de decisión de las autoridades regionales y fragmenta la gobernanza. En el plano simbólico, el discurso del desarrollo extractivo oculta los costos sociales y legitima la subordinación de los territorios como sacrificio necesario para el progreso nacional. La desigualdad, de este modo, se naturaliza bajo la retórica del crecimiento y se perpetúa como una forma de organización social.

Comprender el extractivismo como régimen económico de desigualdad exige reconocer que la pobreza no es un residuo de un sistema en transición, sino la base sobre la que se sostiene su rentabilidad. Las regiones productoras son presentadas como beneficiarias de la riqueza nacional, cuando en realidad se les asigna el papel de territorios de sacrificio, lugares donde la abundancia se extrae, pero no se distribuye. Esta condición estructural crea una tensión permanente entre la acumulación y la desposesión, una contradicción que se expresa tanto en las cifras de desigualdad como en los conflictos sociales que atraviesan los territorios. La promesa de desarrollo, sostenida en la extracción, encubre una forma de dependencia que priva a las comunidades de autonomía y las coloca en el margen de las decisiones sobre su propio futuro.

El funcionamiento del modelo extractivo alcanza su coherencia plena cuando

se observa la manera en que el Estado asume la gestión de la renta. La riqueza derivada del subsuelo se convierte en una fuente de poder político y fiscal que sostiene una forma particular de gobernabilidad. El Estado aparece como mediador entre las empresas que explotan los recursos y las comunidades que padecen sus efectos, pero esta mediación se ejerce más como administración del excedente que como redistribución de justicia. En lugar de equilibrar la relación entre centro y periferia, el Estado concentra la autoridad sobre el ingreso y centraliza las decisiones sobre su uso, asegurando así la continuidad del modelo que lo alimenta. En la práctica, el poder de la renta sustituye el ejercicio democrático de la autonomía, pues la asignación de recursos se convierte en un mecanismo de subordinación política que condiciona la dependencia territorial.

Las políticas de descentralización fiscal fueron presentadas como un instrumento de equidad capaz de compensar las desigualdades históricas entre las regiones productoras y el resto del país. Sin embargo, los resultados han mostrado que la distribución de regalías no ha fortalecido la autonomía ni la sostenibilidad de los territorios, sino que ha acentuado su vulnerabilidad. La administración local de los recursos careció de una estructura institucional sólida, y la ausencia de planificación a largo pla-

zo hizo que los ingresos se destinaran a proyectos fragmentarios o al gasto corriente. Las economías regionales, lejos de diversificarse, se ajustaron al ritmo de la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo y los minerales, generando un ciclo de auge y declive que debilitó la capacidad fiscal de los municipios productores (Perry y Oliveira, 2009). En este proceso, el discurso de la descentralización se transformó en una narrativa de control desde el centro, donde la supuesta autonomía se limita a la ejecución de decisiones tomadas en otros niveles del poder.

La lógica del rentismo estatal, consolidada con las reformas posteriores, profundizó estas contradicciones. Las nuevas reglas de distribución beneficiaron a las regiones con mayor capacidad administrativa y técnica, dejando atrás a los territorios que más necesitan los recursos para compensar los impactos sociales y ambientales de la explotación. Las políticas diseñadas para democratizar la renta terminaron institucionalizando la desigualdad, pues la posibilidad de acceder efectivamente a los fondos depende de las mismas condiciones estructurales que la política dice buscar corregir (Haddad, Bonet-Morón y Pérez-Valbuena, 2022). De esta manera, el flujo de recursos se convierte en una corriente que refuerza los desniveles históricos: las regiones más fuertes consolidan su estabilidad,

mientras las más frágiles permanecen atrapadas en la dependencia.

La consecuencia de este orden fiscal es la conformación de un Estado que gobierna a través de la administración de la escasez. Las comunidades productoras perciben que su papel dentro del sistema es el de generar riqueza para sostener una estructura central que no las reconoce como interlocutoras. El vínculo entre Estado y territorio se redefine en términos de control financiero, y la legitimidad institucional se sostiene mediante la promesa de redistribución que rara vez se cumple. El Estado rentista aparece así no solo como garante de la extracción, sino como su principal beneficiario político, pues encuentra en la gestión de la renta un instrumento para sostener su autoridad y para regular los niveles de conflicto social.

Entender esta configuración implica reconocer que la desigualdad no se limita a una cuestión de ingresos, sino que se enraíza en una forma de poder que organiza la dependencia. Mientras la administración de la renta permanezca centralizada y la participación de las comunidades sea solo consultiva, la promesa de equidad seguirá subordinada a los intereses del modelo extractivo. Romper este ciclo exige una transformación profunda del sistema fiscal y político que devuelva a los territorios la capacidad de decidir sobre su

riqueza, que convierta la renta en bien común y no en recurso de mediación. Solo entonces el Estado dejará de ser un administrador de desigualdades para convertirse en un actor de justicia territorial.

De esta manera, la investigación parte de la hipótesis de que la conflictividad observada en Barrancabermeja y Yopal no puede explicarse como un fenómeno coyuntural o exclusivamente local, sino como la manifestación de un patrón estructural que articula el modelo primario-extractivista, la generación de desigualdades, el aumento de privaciones relativas y, finalmente, la erosión de la seguridad ontológica de las comunidades.

## De la desigualdad estructural a las privaciones relativas

El efecto más profundo del modelo primario extractivista no se percibe únicamente en los indicadores agregados de producción, exportaciones o regalías, sino en la forma en que las comunidades viven la distancia entre lo que esperan recibir como fruto legítimo de la riqueza producida en sus territorios y lo que efectivamente experimentan en su vida cotidiana. Esta distancia no siempre se traduce en carencias abso-

lutas, pues en muchos casos los territorios petroleros registran ingresos por encima de otras regiones del país; sin embargo, la llegada de capitales, la expansión de infraestructura industrial o el crecimiento urbano no logran cubrir las expectativas colectivas de bienestar ni consolidar condiciones de vida dignas. Lo que se produce es una fractura entre las promesas de progreso y los resultados concretos, una brecha que alimenta sentimientos de privación relativa y que se convierte en un catalizador de desconfianza social. Desde una perspectiva crítica, esta privación relativa no es un fenómeno accesorio sino un mecanismo que traduce la desigualdad estructural en experiencias vitales de exclusión y precariedad, haciéndola visible en la esfera cotidiana y movilizándolo resistencias que interpelan la legitimidad del orden institucional (Sánchez, 2022; 2023).

La privación relativa adquiere especial relevancia en contextos extractivos porque la magnitud de las rentas generadas y la visibilidad de la riqueza contrastan de manera más aguda con la persistencia de necesidades básicas insatisfechas. Cuando se anuncian planes de modernización, se presentan cifras récord de exportación o se difunden proyecciones de crecimiento económico, los discursos oficiales elevan las expectativas de las comunidades que esperan beneficiarse de esos logros.

Sin embargo, si las inversiones se concentran en procesos técnicos con escasa creación de empleo, si los ingresos fiscales se pierden en dinámicas clientelares o si la infraestructura urbana crece sin planificación y sin provisión de servicios, las comunidades perciben que el progreso se aleja y que la riqueza circula sin transformar sus condiciones. Esa constatación genera frustración y erosiona el pacto de confianza sobre el cual descansa la cohesión social, produciendo un vacío que rápidamente se llena con narrativas de resistencia que buscan explicar y enfrentar la contradicción. De ahí que la privación relativa no se reduzca a una percepción subjetiva, sino que constituya la forma en que las desigualdades estructurales se vuelven experiencia compartida y se transforman en motor de conflictividad (Sánchez et al., 2025).

El caso de los territorios seleccionados ilustra este proceso con claridad. En Barrancabermeja, la modernización de la refinería fue presentada como símbolo de progreso nacional y promesa de dinamización local, pero la población percibió que los beneficios se distribuyeron de manera desigual y que las oportunidades laborales disminuyeron en lugar de crecer, reforzando memorias de precarización y privatización que habían marcado décadas anteriores. En Yopal, el boom de Cusiana y Cupiagua atrajo migraciones masivas y aceleró la

urbanización, pero lo hizo sin garantizar acceso a vivienda, servicios básicos ni condiciones de sostenibilidad ambiental, consolidando la percepción de que la riqueza petrolera no se traducía en bienestar colectivo. En ambos escenarios, la experiencia no fue de ausencia total de recursos, sino de distancia creciente entre expectativas de desarrollo y realidades de exclusión, lo cual explica que la conflictividad no surgiera únicamente de necesidades materiales inmediatas, sino de la frustración frente a un horizonte de progreso anunciado que nunca se cumplió (Chaves, 2014; Duarte, 2016; Ramírez, 2022; Sáenz Pacheco y Vanhellemont, 2024).

Desde esta perspectiva, el análisis de la conflictividad social en territorios petroleros debe incorporar las privaciones relativas como categoría analítica central, porque ellas muestran cómo la desigualdad estructural no permanece en el plano abstracto de las cifras macroeconómicas, sino que se encarna en narrativas y experiencias que ponen en cuestión la legitimidad del modelo extractivista. La hipótesis de esta investigación sostiene que la privación relativa constituye el eslabón mediante el cual las desigualdades estructurales se transforman en inseguridad ontológica, pues al percibir que sus condiciones no alcanzan los estándares socialmente definidos, las comunidades pierden confianza en la estabilidad del futuro y

se ven empujadas hacia formas de movilización y resistencia que expresan la ruptura de la cohesión social (Sánchez, 2022; 2023; Sánchez y Parra, 2025).

## Inseguridad ontológica como ruptura de la cohesión social

La relación entre desigualdad estructural y privación relativa adquiere una expresión más profunda en lo que puede definirse como inseguridad ontológica, entendida como la pérdida de confianza en la continuidad de la vida cotidiana y en la estabilidad de las instituciones que deberían garantizar condiciones de existencia digna. El concepto, trabajado en el marco de la teoría crítica latinoamericana, parte de reconocer que las sociedades no se sostienen únicamente por la provisión material de bienes y servicios, sino también por la capacidad de los individuos y las comunidades de proyectar sus vidas en un horizonte estable, confiable y compartido. Cuando esa posibilidad se ve amenazada por estructuras económicas que concentran beneficios, externalizan costos y amplifican desigualdades, se produce una erosión de la cohesión social que no se limita a la dimensión económica, sino que toca los fundamentos existenciales de la vida colectiva (Sánchez, 2022; 2024).

La inseguridad ontológica no es un estado psicológico individual ni una percepción pasajera, sino un fenómeno social estructural que emerge cuando los determinantes objetivos de la seguridad vital (como el acceso al trabajo digno, la formalidad de las protecciones sociales, la satisfacción de expectativas socialmente compartidas o la posibilidad de proyectar derechos en el tiempo) se debilitan de manera sostenida. Este debilitamiento no ocurre de manera uniforme, sino que se intensifica en territorios donde el modelo extractivista instala economías de enclave, dependientes de ciclos de inversión externos y con bajo multiplicador laboral. En esas condiciones, los ingresos generados por el petróleo no se transforman en bases sólidas de cohesión social, sino en fuentes de volatilidad que fragmentan el tejido comunitario, erosionan el sentido de pertenencia y multiplican las experiencias de incertidumbre sobre el futuro (Sánchez y Parra, 2025).

Los territorios petroleros son escenarios privilegiados para observar este fenómeno, porque allí la contradicción entre riqueza visible e inseguridad vital se vuelve más evidente. En Barrancabermeja, el debilitamiento del sindicalismo y la fragmentación del mundo obrero tras las políticas de privatización no significaron únicamente la pérdida de conquistas laborales, sino la ruptura de una red de confianza y solidaridad

que durante décadas había sostenido la identidad colectiva de la ciudad. Lo que se perdió no fue solo el empleo o los beneficios, sino la posibilidad de proyectar un horizonte común que diera continuidad a la vida social. En Yopal, la llegada desordenada de población durante el boom petrolero generó una presión sin precedentes sobre la tierra, el agua y la vivienda, produciendo una experiencia de precariedad e informalidad que afectó la confianza de los habitantes en que sus territorios podían garantizar un futuro estable. La inseguridad se expresó en la imposibilidad de asegurar condiciones mínimas para la reproducción de la vida, lo que condujo a la emergencia de movilizaciones campesinas y ambientales que buscaron defender los recursos y las identidades frente a un modelo que amenazaba con borrarlos.

Desde un punto de vista conceptual, la inseguridad ontológica constituye la categoría que articula las dimensiones materiales y simbólicas de la desigualdad, porque no solo señala la insuficiencia de recursos, sino la pérdida de confianza en el futuro y en las instituciones encargadas de garantizarlo. Esa pérdida afecta directamente la cohesión social, porque debilita la confianza interpersonal y mina los lazos comunitarios, generando un escenario en el que las comunidades sienten que ya no pueden contar ni con el Estado

ni con los arreglos sociales para sostener su vida cotidiana. En este sentido, la inseguridad ontológica no es solo un resultado de la desigualdad estructural, sino el mecanismo a través del cual las privaciones relativas se transforman en conflictividad social, porque cuando se rompe la confianza básica en el orden social, los sujetos buscan nuevas formas de acción colectiva que les permitan enfrentar la inestabilidad.

El conflicto social que atraviesa los territorios petroleros y mineros del país constituye la manifestación más nítida de las desigualdades que el modelo extractivo produce y necesita para sostenerse. En estos espacios, la promesa de desarrollo se convierte en una experiencia cotidiana de despojo, y la brecha entre la riqueza generada y el bienestar alcanzado se vuelve el punto de partida de una profunda disonancia social. La desigualdad no se expresa únicamente en los ingresos, sino en la distancia entre la abundancia visible de la actividad extractiva y la precariedad persistente de la vida comunitaria. Allí donde el progreso se impone como discurso y la exclusión se vuelve práctica, el conflicto emerge como forma legítima de lenguaje político.

Los estudios sobre la explotación de recursos naturales en Colombia permiten comprender que las causas de esta conflictividad son estructurales y no coyun-

turales. La concentración de las rentas en manos del Estado y de las empresas, la degradación ambiental y la exclusión de las comunidades de los procesos de decisión conforman un entramado que convierte al territorio en un escenario permanente de disputa (Sandoval, Marín y Almanza, 2017). En ese marco, la protesta no es una reacción aislada, sino una respuesta colectiva a la pérdida de control sobre los recursos y sobre las condiciones mismas de la vida. Cuando los impactos se localizan y los beneficios se globalizan, el conflicto adquiere una dimensión ética, porque expresa la exigencia de justicia ante un orden económico que distribuye la riqueza y la vulnerabilidad de forma inversa.

La conflictividad que se reproduce en estos territorios muestra que las comunidades no luchan únicamente por compensaciones materiales, sino por el reconocimiento de su derecho a decidir sobre su destino. El modelo extractivo, al concentrar poder y renta, niega la posibilidad de que los territorios participen en la definición de su futuro. La desigualdad, de este modo, deja de ser solo una cuestión económica y se convierte en una experiencia política que articula memoria, identidad y resistencia. Allí donde el desarrollo se mide por el volumen de lo extraído y no por la dignidad de lo vivido, el conflicto no es una amenaza, sino una forma de defensa del valor de la vida

La expansión del modelo minero-energético no solo redistribuye la riqueza, sino que reordena el poder y redefine el sentido del territorio. La extracción intensiva transforma los espacios en unidades de gestión y desplaza la soberanía desde las comunidades hacia los aparatos corporativos y estatales. En lugar de ser ámbitos de vida, los territorios se convierten en zonas de intervención donde la lógica económica sustituye la lógica del habitar. Este proceso, que puede leerse como una territorialización del poder, concentra las decisiones en manos de quienes controlan la inversión y las políticas públicas, al tiempo que fragmenta la capacidad de acción de las poblaciones locales. El territorio, despojado de su carácter político, se administra como recurso, y sus habitantes son tratados como beneficiarios o como obstáculos, pero no como sujetos de derecho.

La evidencia disponible muestra que este desplazamiento tiene consecuencias profundas sobre las estructuras sociales y ecológicas. En regiones como el norte del Cauca, la expansión minera ha generado fragmentación comunitaria, degradación ambiental y pérdida del control sobre los medios de vida (Trujillo-Ospina, Rojas-Lozano y López-Cerquera, 2019). La desposesión no se limita a la pérdida material de la tierra, sino que implica la ruptura del vínculo simbólico y afectivo que las co-

comunidades mantienen con su entorno. Allí donde el suelo deja de ser territorio y pasa a ser superficie de extracción, la comunidad pierde su lugar como fuente de soberanía. La desigualdad se convierte así en un fenómeno espacial, un proceso de desplazamiento del poder que traslada las decisiones sobre la vida colectiva hacia instancias externas.

La historia de la explotación petrolera en Colombia confirma la profundidad de este fenómeno. Desde los primeros enclaves del siglo XX, la instalación de empresas extranjeras definió un orden social basado en la jerarquía laboral, la dependencia económica y la exclusión de las poblaciones locales de los beneficios de la riqueza generada. Las ciudades petroleras se formaron bajo una lógica de enclave que concentró autoridad y privilegio en las compañías, mientras el Estado garantizaba las condiciones de su permanencia (Ripoll, 2016). Ese modelo fundacional instauró una cultura de subordinación que persiste hasta hoy en los territorios donde la extracción sigue siendo el eje de la economía. La territorialización del poder no es, por tanto, una consecuencia reciente del capitalismo contemporáneo, sino un proceso histórico que ha moldeado la relación entre Estado, empresa y comunidad.

Comprender la desposesión como resultado de la territorialización del poder

permite reconocer que la desigualdad estructural no se limita a la distribución de ingresos, sino que atraviesa la distribución misma de la autoridad. La capacidad de decidir sobre el territorio se convierte en el núcleo de la disputa política. Allí donde las comunidades son desplazadas de esa capacidad, la democracia se reduce a un procedimiento y la justicia se vuelve promesa aplazada. En ese sentido, la lucha por la tierra, el agua o el ambiente no es solo una reivindicación material, sino una demanda por recuperar el derecho a habitar y gobernar el propio espacio. La desigualdad, al inscribirse en el territorio, deja de ser una estadística para convertirse en una experiencia vivida, y el conflicto que de allí surge no es una interrupción del orden, sino la expresión de una soberanía que se resiste a desaparecer.

La investigación asume, por tanto, que la conflictividad en Barrancabermeja y Yopal no puede entenderse como una acumulación de demandas sectoriales ni como una disputa localizada, sino como la manifestación de una inseguridad ontológica que ha sido producida por el modelo extractivista y que se expresa en repertorios diferenciados de resistencia: en el caso de Barrancabermeja, en la tradición sindical que defiende el trabajo y en la confrontación con los procesos de privatización; en el caso de Yopal, en la defensa campesi-

na y ambiental frente a la degradación territorial. Ambos repertorios son respuestas distintas a un mismo fenómeno: la erosión de la cohesión social que surge cuando las comunidades constatan que la riqueza petrolera no se traduce en seguridad vital ni en estabilidad del porvenir (Sánchez, 2022; 2024; Sánchez y Parra, 2025).

En este marco, el diálogo social no puede reducirse a una técnica de mediación de conflictos inmediatos, sino que debe reconocer y poner en la mesa las causas estructurales que producen la inseguridad ontológica. Solo de esa manera, las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza podrán cumplir un papel transformador, porque en lugar de gestionar tensiones episódicas, podrán contribuir a recomponer la confianza colectiva y a reconstruir horizontes de cohesión que reconozcan la centralidad de la justicia distributiva y la sostenibilidad territorial como condiciones para la seguridad de la vida.

## Conflictividad social como manifestación visible

La inseguridad ontológica producida por la desigualdad estructural y experimentada a través de privaciones relativas no permanece en el plano íntimo de

la percepción ni se limita a una sensación individual de precariedad, sino que se traduce en repertorios colectivos de acción que constituyen la conflictividad social. La conflictividad es entonces la expresión visible de procesos que tienen una raíz estructural, y que encuentran en los territorios extractivos un escenario de condensación en el que la riqueza producida contrasta con la inestabilidad vital y con la erosión de la confianza colectiva. Entender el conflicto en estos términos permite desplazar la mirada desde las interpretaciones que lo conciben como anomalía, perturbación del orden público o exceso de demandas, hacia una lectura que lo asume como síntoma de un orden económico que concentra beneficios, externaliza costos y socava las bases materiales y simbólicas de la cohesión social (Sánchez, 2022; 2024).

El modelo extractivo no se sostiene únicamente por la capacidad técnica de las empresas o la intervención del Estado, sino también por una red de esfuerzos invisibles que permiten que la vida continúe en los territorios afectados. Detrás de cada ciclo de producción, de cada oleada de inversión y de cada promesa de desarrollo, existe una trama social que absorbe los impactos y mantiene en funcionamiento las condiciones mínimas para la reproducción colectiva. Allí donde el territorio se transforma en zona de extracción, las comunida-

des reorganizan su vida cotidiana para enfrentar la escasez, reparar los daños ambientales y suplir la ausencia de servicios básicos. Este trabajo silencioso, no reconocido ni remunerado, constituye un soporte esencial del modelo, aunque rara vez se le reconozca como parte de la economía.

La literatura sobre las zonas mineras y petroleras en Colombia ha demostrado que la desigualdad estructural no se limita a la concentración de ingresos o a la pérdida de autonomía territorial. También se manifiesta en la apropiación del tiempo, de la energía y de las formas de cooperación que sostienen la vida cotidiana (Gerstenberg y Villegas González, 2019). La desposesión no consiste solo en el despojo material de los recursos, sino también en la expropiación de las capacidades sociales que hacen posible la resiliencia. En las comunidades afectadas por la minería y el petróleo, el deterioro ambiental obliga a reorganizar el trabajo doméstico, la obtención de agua, la producción de alimentos y el cuidado de las personas, tareas que se intensifican a medida que la actividad extractiva avanza. El sistema económico se apoya así en un tipo de esfuerzo social que no figura en las estadísticas, pero que garantiza la estabilidad de los territorios.

Estas dinámicas revelan que el extractivismo opera como una forma de eco-

nomía dependiente de la reproducción social, aunque no la reconozca. Cada fase de extracción necesita de un entorno que le provea energía humana, cohesión comunitaria y mantenimiento ambiental, sin los cuales la producción sería inviable. Sin embargo, el modelo tiende a agotar precisamente esos recursos. La contaminación, el desplazamiento y la ruptura de los vínculos sociales reducen la capacidad de las comunidades para sostener la vida, generando una crisis silenciosa que se acumula con el paso del tiempo. Este agotamiento de la base vital no se percibe de inmediato porque la estructura del modelo traslada los costos a los márgenes, allí donde la vulnerabilidad se naturaliza como condición de desarrollo.

El sostenimiento invisible del modelo extractivo puede entenderse entonces como una forma de desigualdad relacional. Mientras las empresas y el Estado capitalizan la renta visible del subsuelo, las comunidades producen una renta social oculta basada en su capacidad de resistir, reparar y mantener lo que el sistema deteriora. La economía formal se alimenta de esa reserva de trabajo no contabilizado, de la cooperación que permite reconstruir caminos, limpiar fuentes de agua o cuidar a quienes enferman por la contaminación. Lo que parece una externalidad del desarrollo es, en realidad, uno de sus meca-

nismos fundamentales. La desigualdad estructural se sostiene en la asimetría entre quienes extraen valor económico y quienes proveen, sin reconocimiento, las condiciones para que ese valor exista.

Reconocer esta dimensión del problema implica ampliar la noción de justicia territorial más allá de la redistribución monetaria. La reparación no puede limitarse a compensaciones financieras o programas de asistencia, porque el daño que deja el extractivismo no es solo económico. La pérdida de vínculos, de confianza y de tiempo colectivo erosiona la base misma sobre la que se construye la comunidad. Frente a ello, el desafío consiste en reconstruir la idea de desarrollo desde una economía de la vida, capaz de valorar el trabajo social que sostiene los territorios y de colocar la reproducción de lo común en el centro de la planificación. Solo así será posible revertir el orden actual, en el que la desigualdad se reproduce precisamente en los lugares donde la vida se resiste a desaparecer.

La conflictividad en territorios petroleros adopta formas diferenciadas según las trayectorias históricas y las identidades colectivas. En Barrancabermeja, la conflictividad se ha expresado históricamente a través del movimiento sindical, que construyó una identidad obrera vinculada a la defensa del trabajo, los

derechos laborales y el carácter público de la industria. Las huelgas, paros y confrontaciones de los años setenta y ochenta, así como las luchas contra los procesos de privatización y modernización en las décadas siguientes, muestran cómo el conflicto obrero no fue únicamente una disputa por condiciones económicas, sino la expresión de un modo de vida que se percibía amenazado por el desmantelamiento de conquistas colectivas y por la violencia política que acompañó esos procesos. En esta ciudad, la conflictividad se configuró como una narrativa de resistencia en la que la memoria obrera y sindical constituye el eje desde el cual se confrontan las políticas estatales y empresariales, en un intento por sostener la cohesión social frente a las fuerzas que la fragmentan (Becerra, 2009; Serrano, 2013; Vega, 2008).

En Yopal y en el Casanare, por el contrario, la conflictividad emergió de manera más reciente y con repertorios distintos. Allí, la irrupción abrupta del petróleo en los años noventa generó una rápida transformación de un territorio campesino y agropecuario en un enclave petrolero, produciendo migraciones masivas, urbanización desordenada y tensiones por el acceso a la tierra y al agua. La conflictividad no se expresó principalmente en luchas sindicales, sino en movilizaciones comunitarias, consultas populares, organizaciones

ambientales y resistencias frente a la imposición de proyectos extractivos. En este escenario, la conflictividad se configuró en torno a la defensa de la identidad campesina, la protección de los recursos naturales y la búsqueda de sostenibilidad frente a un modelo económico que transformó de manera abrupta las bases de la vida territorial (Chaves, 2014; Duarte, 2016; Ramírez, 2022; Sáenz Pacheco y Vanhellemont, 2024).

En ambos casos, la conflictividad no debe ser comprendida como un problema de gobernabilidad o de orden público, sino como el mecanismo mediante el cual las comunidades expresan la pérdida de cohesión social y la inseguridad ontológica que experimentan. Los discursos y las prácticas de resistencia son formas colectivas de visibilizar la contradicción entre la riqueza producida y la precariedad vivida, y de disputar el sentido de los territorios frente a la imposición de un modelo extractivo que concentra beneficios fuera de ellos. Así, la conflictividad se convierte en un espacio donde se negocian identidades, se construyen narrativas y se generan alternativas que buscan restituir, aunque sea de manera parcial, la confianza en la posibilidad de un futuro común.

Desde esta perspectiva, la investigación asume que el estudio de la conflictivi-

dad en Barrancabermeja y Yopal no es un ejercicio de descripción de episodios, sino una estrategia para comprender cómo los discursos de los actores sociales ponen en evidencia la cadena causal que conecta el modelo extractivo con la desigualdad estructural, las privaciones relativas y la inseguridad ontológica. Al analizar estos discursos mediante entrevistas y con el apoyo del análisis crítico del discurso, se busca identificar las herramientas narrativas y organizativas que emergen de la conflictividad y que pueden ser sistematizadas como insumos para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza. De este modo, el conflicto no se entiende como un obstáculo a superar, sino como una fuente de aprendizaje y de producción de alternativas para la gobernanza territorial (Sánchez et al., 2025).

## El diálogo como estrategia de transformación

El análisis desarrollado hasta este punto permite afirmar que la conflictividad en los territorios petroleros no surge de circunstancias aisladas ni puede interpretarse como un fenómeno episódico de malestar social. Por el contrario, constituye la expresión visible de una cadena estructural que se inicia en un

modelo económico primario extractivista, continúa en la producción de desigualdades que se viven como privaciones relativas, se profundiza en la pérdida de confianza en el futuro que define la inseguridad ontológica y se manifiesta finalmente en repertorios de resistencia colectiva. Esta secuencia obliga a replantear el lugar del diálogo en los procesos sociales: si el conflicto es estructural, el diálogo no puede ser concebido como un recurso meramente instrumental destinado a gestionar tensiones, sino que debe ser entendido como una estrategia de transformación orientada a poner en cuestión las causas que originan el malestar y a construir horizontes alternativos de cohesión social (De Sousa, 2005; Dussel, 1998/2013).

La tradición pedagógica latinoamericana ofrece un punto de partida decisivo para esta reconceptualización del diálogo. Desde la crítica a la educación bancaria, se ha planteado que los procesos de comunicación no pueden reducirse a la transmisión unilateral de conocimientos ni a la simple extensión de saberes técnicos hacia las comunidades. La propuesta pedagógica del diálogo como práctica de libertad insiste en que la comunicación solo es verdadera cuando se reconoce a los sujetos como protagonistas de su propia historia y cuando se abren espacios horizontales en los que la palabra circula como acto

de concientización. En territorios como Barrancabermeja y Yopal, donde la experiencia de desigualdad y de inseguridad vital ha sido persistente, este enfoque permite pensar las entrevistas y los procesos de sistematización no como instrumentos extractivos, sino como escenarios en los que las comunidades expresan sus memorias y construyen diagnósticos propios de la conflictividad, que deben ser reconocidos como conocimiento legítimo y como insumo fundamental para el diseño de alternativas (Freire, 1970/2005; 1973).

El diálogo, concebido en estos términos, no se limita al intercambio de opiniones entre actores diversos, sino que implica un acto de descolonización epistémica y política. La noción de ecología de saberes ha señalado que toda práctica de comunicación auténtica requiere reconocer la pluralidad de formas de conocimiento y de racionalidad que coexisten en la sociedad. En el caso de los territorios petroleros, esto significa que el saber técnico de la industria y el saber institucional del Estado deben confrontarse y dialogar con el conocimiento campesino, obrero y ambiental, no como un complemento decorativo, sino como una condición para comprender la complejidad de los conflictos. Solo un diálogo que reconozca esas asimetrías epistémicas y que permita la emergencia de voces históricamente silenciadas puede aspirar a transformar la conflicti-

vidad en una oportunidad de recomposición de la cohesión social (De Sousa, 2005).

A nivel ético y político, la concepción de la liberación plantea que el diálogo debe situarse desde la perspectiva de las víctimas y de los excluidos. No es posible construir acuerdos legítimos si las conversaciones se circunscriben a quienes concentran poder económico o político, pues ello reproduciría las mismas relaciones de dominación que generan la desigualdad estructural. El diálogo transformador debe abrir espacios en los que los sujetos históricamente subordinados tomen la palabra y formulen sus demandas en sus propios términos, de modo que lo que se discuta no sea solo la distribución de beneficios, sino las bases estructurales de un modelo económico que concentra la riqueza y externaliza los costos. En este sentido, el diálogo se convierte en una praxis emancipadora, que no busca simplemente gestionar diferencias, sino cuestionar y transformar las condiciones que producen exclusión (Dussel, 1998/2013; 2007/2013).

La tradición de la investigación-acción participativa ofrece otra dimensión fundamental para pensar el diálogo como estrategia de transformación. En lugar de asumir la investigación como un ejercicio neutral de recopilación de datos, la investigación-acción plantea que

el conocimiento debe producirse en interacción con las comunidades y orientarse explícitamente a transformar las condiciones de opresión. El diálogo, en este marco, es el método mismo de producción de conocimiento, porque supone que las comunidades no son objeto de estudio, sino sujetos de saber que reflexionan sobre su realidad y participan en la elaboración de alternativas. Para el caso de esta investigación, ello significa que las entrevistas semiestructuradas deben funcionar no solo como insumo para el análisis crítico del discurso, sino como espacios de coconstrucción de memoria y de conciencia en los que las comunidades articulen su propia interpretación de los conflictos que atraviesan, contribuyendo así a la sistematización de herramientas que luego serán insumo para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza (Fals, 1978/2009; 1981/2025).

En la práctica, esto implica que el diálogo debe incorporar tres dimensiones inseparables. En primer lugar, una dimensión cognitiva, que reconoce la pluralidad de saberes y busca construir diagnósticos colectivos sobre las causas del conflicto. En segundo lugar, una dimensión ética, que coloca en el centro las voces de los excluidos y orienta las conversaciones hacia la restitución de dignidad y de justicia. En tercer lugar, una dimensión política, que entiende el diálogo como un acto de disputa

y de negociación en torno al modelo de desarrollo y no como un simple procedimiento de conciliación. Solo la integración de estas dimensiones permite que el diálogo cumpla una función transformadora, pues no se agota en la administración de tensiones inmediatas, sino que contribuye a recomponer la confianza social y a abrir horizontes de cohesión basados en igualdad y sostenibilidad.

Desde esta perspectiva, el diálogo en los territorios petroleros no puede ser entendido como un fin en sí mismo, ni como un procedimiento técnico que resuelva de manera automática las tensiones derivadas de la industria. Más bien, debe concebirse como un proceso de largo aliento, que reconozca la historicidad de la conflictividad, que asuma las memorias colectivas de resistencia y que proyecte alternativas de futuro en las que la cohesión social no dependa de la ilusión de rentas extractivas, sino de la redistribución equitativa de los beneficios y de la garantía de condiciones mínimas de seguridad ontológica para las comunidades. Este es el puente directo hacia la metodología de la investigación: el análisis crítico del discurso aplicado a las entrevistas permitirá identificar los elementos cognitivos, éticos y políticos de los discursos comunitarios, sistematizarlos como herramientas de transformación y articularlos en propuestas pedagógicas para

las escuelas regionales de diálogo, de modo que el diálogo no sea un recurso retórico, sino una práctica estructural que contribuya a enfrentar las causas profundas de la conflictividad (Freire, 1970/2005; 1973; De Sousa, 2005; Dussel, 1998/2013; 2007/2013; Fals, 1978/2009; 1981/2025).

## Supuesto general de la investigación

El desarrollo de este marco teórico muestra que la conflictividad social en territorios petroleros no puede reducirse a expresiones coyunturales de malestar ni a disputas sectoriales de intereses, sino que debe entenderse como la manifestación visible de una cadena estructural que enlaza el modelo primario extractivista con la generación de desigualdades, la vivencia de privaciones relativas y la ruptura de la seguridad ontológica. El examen del modelo económico permitió constatar que la concentración de beneficios y la repatriación de utilidades debilitan los encadenamientos productivos locales y refuerzan las desigualdades estructurales que atraviesan al trabajo, la tierra, la vivienda y los derechos. El análisis de las privaciones relativas permitió comprender que esas desigualdades no se experimentan únicamente como carencias materiales, sino como una distancia creciente entre las expectativas de

progreso social y la realidad cotidiana de exclusión. La noción de inseguridad ontológica mostró que cuando esa brecha erosiona la confianza en la estabilidad de la vida y en la continuidad de las instituciones, se produce una fractura en la cohesión social que debilita los lazos comunitarios y socava la posibilidad de un horizonte compartido. Y finalmente, la exploración de la conflictividad social evidenció que los repertorios de resistencia no son anomalías del orden social, sino la respuesta colectiva de comunidades que buscan enfrentar la erosión de sus condiciones de existencia.

Sobre esta base, el supuesto de la investigación es que la conflictividad en Barrancabermeja y Yopal constituye la manifestación de un proceso estructural en el cual el modelo extractivista produce desigualdades que, al ser experimentadas como privaciones relativas, conducen a inseguridad ontológica y desembocan en la ruptura de la cohesión social. Esta hipótesis implica que el conflicto no es un exceso por contener, sino un síntoma que revela las condiciones estructurales del modelo económico y que, por lo mismo, requiere ser abordado en su raíz.

En este punto, el diálogo emerge no como técnica neutral de mediación, sino como estrategia de transformación. La tradición crítica latinoamericana ha in-

sistido en que el diálogo auténtico se da cuando se reconocen las asimetrías de poder, cuando se privilegian las voces históricamente silenciadas, cuando se recuperan las memorias colectivas de resistencia y cuando se construyen horizontes alternativos desde el reconocimiento de los excluidos. Entendido de esta manera, el diálogo para la gobernanza constituye la vía mediante la cual las escuelas regionales de diálogo pueden contribuir a recomponer la cohesión social en territorios petroleros, siempre y cuando asuman que la transformación requiere discutir las causas estructurales de la desigualdad y no limitarse a administrar tensiones inmediatas.

# Marco metodológico

La investigación se orienta desde una perspectiva cualitativa, comparativa y crítica que busca comprender en profundidad las formas en que el lenguaje se convierte en un escenario de disputa en los territorios petroleros. En el marco de esta investigación, el análisis de la conflictividad no se reduce a inventariar los impactos sociales, económicos y ambientales de la industria de hidrocarburos, sino que asume que el lenguaje constituye un espacio decisivo en la configuración de las relaciones sociales. El discurso no solo refleja acontecimientos, sino que actúa como práctica social que moldea percepciones, legitima posiciones de poder y articula formas de resistencia. En este sentido, el análisis crítico del discurso propuesto por Van Dijk se convierte en el eje metodológico de la investigación, pues ofrece las herramientas para comprender cómo se construyen y circulan las narrativas en torno al petróleo, cómo se mantienen o disputan las desigualdades, y cómo emergen nuevas posibilidades de acción colectiva (Van Dijk, 1980; 1994; 2009).

El uso de entrevistas semiestructuradas permitirá recoger relatos amplios y flexibles de actores clave como sindicalistas, campesinos, líderes comunitarios, autoridades locales y trabajadores de la industria. La elección de esta técnica metodológica responde a la necesidad de acceder a experiencias situa-

das y subjetivas que, al ser analizadas desde la perspectiva crítica del discurso, revelarán tanto la forma en que los actores viven y narran la conflictividad como las estructuras de poder que enmarcan esas narrativas. No se trata únicamente de recoger testimonios, sino de comprender cómo las palabras, las metáforas, los silencios y las estrategias retóricas de los entrevistados condensan memorias colectivas, ideologías sociales y disputas políticas sobre el destino del territorio.

El ACD aquí adoptado se articula en tres niveles analíticos que permiten pasar de la microestructura textual al contexto sociopolítico más amplio. En el nivel textual, se estudiará el vocabulario, las metáforas y los modos de nombrar a los actores y a los recursos naturales, con atención a los términos que enmarcan el conflicto. Expresiones como «desarrollo», «maldición de los recursos» o «vocación campesina» no son simples etiquetas descriptivas, sino marcas discursivas que condensan luchas históricas, tensiones ideológicas y formas de concebir el mundo. Analizar estas elecciones léxicas permitirá identificar cómo los actores representan la industria, cómo nombran al Estado y cómo definen su propia identidad frente a la extracción de hidrocarburos.

En el nivel discursivo, se examinarán las estrategias argumentativas, narrativas

y retóricas que legitiman posiciones o que generan resistencia. Este nivel permitirá observar, por ejemplo, cómo el sindicalismo en Barrancabermeja construye relatos que apelan a la dignidad laboral y a la memoria de luchas históricas para confrontar a las empresas y al Estado, mientras que en Yopal los discursos campesinos recurren a narrativas de defensa de la tierra, del agua y de la identidad rural como formas de oposición al modelo extractivo. Aquí interesa comprender no solo los argumentos en sí, sino las formas narrativas y los recursos persuasivos mediante los cuales se busca movilizar a las comunidades o disputar legitimidad frente a los discursos oficiales y empresariales.

En el nivel sociopolítico, se analizará cómo los discursos se articulan con contextos más amplios de poder, instituciones, normativa y políticas públicas sobre hidrocarburos. Los enunciados de los actores no flotan en el vacío, sino que se producen en un entramado de relaciones donde operan leyes, reformas al sistema de regalías, políticas de transición energética y prácticas de gobernanza que configuran el terreno sobre el cual se expresan los conflictos. Este nivel permitirá vincular lo dicho en las entrevistas con las estructuras de poder que lo condicionan, mostrando cómo los discursos pueden reproducir dominación o, por el contrario, constituirse en prácticas de resistencia que

cuestionan el orden establecido y proponen alternativas de gobernanza territorial.

Este triple nivel de análisis posibilita articular de manera sistemática las voces de los actores con las condiciones sociales que las atraviesan. En otras palabras, lo que se diga en una entrevista sobre la corrupción en el manejo de regalías o sobre la contaminación ambiental no se interpretará solo como una opinión individual, sino como un discurso que refleja marcos cognitivos colectivos, relaciones de poder históricas y tensiones políticas vigentes. El análisis permitirá así reconocer patrones discursivos que se repiten en ambos territorios, pero también diferencias que muestran cómo cada contexto construye formas particulares de narrar la conflictividad y de plantear herramientas para transformarla.

La pertinencia de este enfoque radica en que el IEMP no solo recibirá un diagnóstico descriptivo de los conflictos, sino un análisis profundo de cómo los discursos estructuran la conflictividad y de qué manera esas narrativas pueden convertirse en recursos para el diálogo y la mediación. El objetivo no es simplemente estudiar el lenguaje como un fenómeno aislado, sino entenderlo como una práctica social en la que se juegan la legitimidad, la identidad y la capacidad de transformación política de las

comunidades. De esta manera, el ACD permitirá construir un conocimiento situado, comparativo y crítico, indispensable para diseñar herramientas formativas que fortalezcan la labor de las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza territorial.

## Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas semiestructuradas (anexo 1) constituyen la herramienta principal de recolección de información porque permiten recoger discursos que no están previamente codificados ni limitados por preguntas cerradas sobre el consentimiento informado y autorización de uso de la información (anexo 2), sino que emergen de la interacción entre investigador y entrevistado. Se trata de un instrumento idóneo para contextos de alta conflictividad, donde lo que interesa no es únicamente conocer hechos objetivos, sino comprender cómo los actores perciben y narran esos hechos, cómo los interpretan en función de sus trayectorias históricas y cómo los convierten en parte de un marco colectivo de resistencia o de legitimación.

El diseño de las entrevistas se realizó con guías diferenciadas por territorio, de esta forma se seleccionaron los siguientes perfiles.

## Barrancabermeja

Para la aplicación de entrevistas semiestructuradas en Barrancabermeja y su zona de influencia (Magdalena Medio), se seleccionó una muestra intencional y heterogénea que permitiera capturar la complejidad sociopolítica, económica y territorial asociada a la industria petrolera. La selección se realizó bajo el criterio de máxima variación, buscando incorporar voces con trayectorias contrastantes, inserciones territoriales diferenciadas y posiciones distintas frente a la presencia del sector hidrocarburos.

Del análisis comparado de las entrevistas emergieron cinco perfiles-tipo, que no corresponden a individuos específicos, sino a abstracciones analíticas derivadas de las características comunes de los participantes. Estos perfiles se describen a continuación y constituyen categorías útiles para el análisis crítico del discurso y la interpretación de dinámicas territoriales.

### **1. Expertos y actores institucionales con trayectoria en desarrollo y paz**

Este perfil integra a investigadores, acompañantes comunitarios y profesionales vinculados a programas de desarrollo territorial y construcción de paz en el Magdalena Medio. Son actores con conocimiento histórico del sur-

gimiento del Programa de Desarrollo y Paz, del papel de la USO, de la Iglesia y de las disputas estructurales entre Ecopetrol, las organizaciones sociales y el Estado. Estas entrevistas permiten desarrollar marcos interpretativos sobre desigualdad, conflictividad histórica, gobernanza territorial y la relación entre industria y cohesión social.

## **2. Profesionales y técnicos vinculados a la industria petrolera**

Se trata de trabajadores con amplia experiencia en operaciones, logística o procesos técnicos de extracción y refinación. Su perspectiva está anclada en la operación cotidiana, en la relación entre empresas, sindicatos, comunidades y autoridades locales. Aportan comprensión de dinámicas laborales, conflictos por acceso al empleo, tensiones con comités y sindicatos, impacto de regalías y percepción interna del funcionamiento industrial.

## **3. Liderazgos comunitarios rurales del entorno de Barrancabermeja**

Incluye mujeres campesinas, presidentes(as) de asociaciones y liderazgos veedales provenientes de corregimientos como San Miguel del Tigre, Mutis y zonas ribereñas. Su vínculo territorial es profundo y da cuenta de transformaciones socioeconómicas derivadas de actividades sísmicas, exploratorias y de contratación local. De esta forma se logran lectura de

deterioro del tejido social, cambios en la cultura campesina, migración rural-urbana, expectativas de empleo y tensiones con empresas contratistas.

## **4. Liderazgos sociales urbanos y poblacionales**

Agrupación de representantes de sectores específicos como población LGBTQ+, organizaciones de mujeres y procesos de participación ciudadana. Son actores posicionados en espacios de incidencia institucional y veeduría social. Aportan análisis de inclusión laboral, persistencia de discriminación estructural, barreras en acceso al empleo local y percepción del estatus social asociado al trabajo petrolero.

## **5. Víctimas del conflicto armado y defensoras del territorio**

Corresponden a mujeres y líderes comunitarios que han vivido hechos victimizantes y participan en procesos de defensa del agua, del ambiente y del territorio. Reconocen afectaciones ambientales por pasivos petroleros, derrames o pozos abandonados, e identifican tensiones con líderes comunales alineados con intereses empresariales. De esta forma se pueden tener una comprensión de impactos ambientales, pasivos socioecológicos, conflictividad intracomunitaria y formas de resistencia y movilización.

# Yopal

Para comprender la incidencia histórica y contemporánea de la industria petrolera en el departamento de Casanare y, en particular, en la ciudad de Yopal, se aplicó un conjunto de entrevistas semiestructuradas a actores con trayectorias diversas y posiciones diferenciadas frente a la actividad extractiva.

Siguiendo los principios del muestreo cualitativo por máxima variación, se incluyeron voces provenientes de academia, Estado, empresas petroleras, comunidades rurales, liderazgos sociales y actores con memoria directa del conflicto armado.

Del análisis comparado emergen cinco perfiles-tipo, construidos como categorías analíticas que sintetizan los rasgos comunes de los entrevistados. Estos perfiles no hacen referencia a personas individuales, sino a arquetipos sociales que permiten interpretar las transformaciones territoriales asociadas al petróleo en Casanare.

## **1. Académicos y expertos en desarrollo territorial con presencia institucional en Yopal**

Este perfil reúne a investigadores, docentes universitarios, directores de centros académicos y profesionales con formación en economía, ciencias

políticas, educación y estudios del territorio, cuya relación con Yopal se ha dado principalmente a través de proyectos como Utopía y procesos de extensión universitaria; se caracterizan por ofrecer lecturas estructurales, basadas en evidencia, sobre la transformación de la economía casanareña durante los últimos 15-20 años, donde la industria petrolera perdió centralidad relativa frente al crecimiento de la agricultura, la ganadería, la manufactura y los servicios, al tiempo que interpretan la urbanización acelerada de Yopal (su consolidación como ciudad intermedia, su infraestructura vial, comercial y educativa, y los cambios en conectividad) como resultado combinado de inversión estatal, dinamización del mercado interno y efectos de las regalías; aportan marcos de análisis sobre ciclos de producción, impactos absolutos y relativos del petróleo, diversificación productiva, gobernanza territorial y relaciones con Boyacá y la Orinoquia, ofreciendo una lectura de largo plazo que permite comprender la transición económica y social del departamento.

## **2. Profesionales y técnicos con experiencia directa en la industria petrolera**

Este perfil agrupa a ingenieros, contratistas, operadores, consultores ambientales y exfuncionarios públicos con trayectoria directa en campos como

Cusiana y Cupiagua, así como en oleoductos, licenciamientos ambientales y procesos de construcción y operación petrolera; sus relatos detallan cómo la llegada del petróleo generó cambios abruptos en los precios de la tierra, en los salarios y en la estructura laboral, transformando actividades tradicionales de ganadería y agricultura hacia empleos de alta remuneración, pero de fuerte inestabilidad (como los trabajos «ventiocheros»), lo que alteró hábitos de consumo, incrementó la migración hacia Yopal, expandió las zonas urbanas sin planificación previa y produjo problemas asociados como prostitución, alcoholización y crecimiento desordenado; aportan análisis sobre la insuficiente preparación del Estado para atender estos choques, la ausencia de anticipación en planes de acueducto, alcantarillado, ordenamiento territorial y equipamientos públicos, y describen cómo los conflictos comunitarios surgieron principalmente por el acceso desigual al empleo, la intermediación de líderes y políticos, la llegada de empresas externas ya contratadas, las debilidades de la consulta social y la poca articulación entre autoridades ambientales, municipios y operadores petroleros.

### **3. Liderazgos educativos y sociales vinculados a la escuela y al territorio**

Este perfil comprende a pedagogos, investigadores en educación, forma-

dores de maestros y actores sociales que desarrollan trabajo territorial en escuelas de Yopal, Paz de Ariporo y veredas cercanas a campos petroleros, quienes interpretan la escuela como un espacio de resistencia social y de contención cultural, donde emergen tensiones entre las lógicas extractivas de la industria y los procesos pedagógicos que buscan fortalecer saberes llaneros, identidades campesinas y capacidades ciudadanas; sus análisis muestran cómo la presencia petrolera permea la vida escolar al influir en los horizontes juveniles (reduciendo expectativas educativas, reforzando imaginarios laborales petroleros y debilitando proyectos de vida académicos) y cómo la ausencia del Estado en zonas rurales permite que iglesias (sobre todo evangélicas) ocupen el vacío institucional, configurando comportamientos, liderazgos y normas dentro de la escuela; además, identifican tensiones entre industria y comunidad educativa, que se expresan en relaciones de apoyo utilitario (donaciones, mejoramientos, capacitaciones) que no logran convertirse en procesos de coconstrucción territorial, especialmente en contextos con identidad indígena o alto valor ecológico, donde los conflictos de creencias y cosmovisiones hacen más profunda la distancia entre actores.

#### **4. Actores comunitarios rurales con memoria de transformación cultural y productiva**

Este perfil integra a campesinos, ganaderos, pequeños productores, habitantes rurales y líderes locales de veredas que vivieron en carne propia la transición del Casanare tradicional (basado en agricultura, ganadería y vida comunitaria) hacia un territorio reorganizado por el petróleo, donde la llegada de salarios altos, la monetización acelerada y el auge de las compañías modificó radicalmente la cultura llanera, debilitó la economía campesina, disparó la venta de tierras y generó migraciones masivas hacia Yopal; sus relatos describen el abandono de prácticas agropecuarias, el deterioro de la vida en veredas, la pérdida de saberes, la expansión de zonas de tolerancia, la consolidación de nuevas economías (arroz, palma, ganadería intensiva) y la sensación de que el territorio se reordenó en función de las dinámicas del petróleo, dejando a muchos habitantes excluidos de los beneficios directos, pero afectados por el aumento del costo de vida, la presión sobre recursos naturales, los cambios en valores culturales y las nuevas dinámicas sociales que emergieron con la urbanización rápida.

#### **5. Actores con memoria del conflicto armado y del ordenamiento violento del territorio**

Este perfil agrupa a líderes sociales, exfuncionarios, habitantes de larga trayectoria y personas con experiencia directa en épocas de fuerte presencia guerrillera y paramilitar (años noventa y dos mil), quienes vivieron cómo el petróleo, los grupos armados y la disputa territorial se entrelazaron en un mismo proceso, moldeando relaciones de poder, control social, seguridad y gobernanza en Casanare; sus testimonios explican cómo el auge del petróleo atrajo a diversos actores armados, cómo se transformaron zonas como el Piedemonte y la Sabana, cómo las economías derivadas del conflicto incidieron en licenciamientos, seguridad de empresas, migraciones, invasiones urbanas y corrupción política, y cómo la comunidad osciló entre la resistencia y la negociación según el nivel de beneficios recibidos; aportan claves para entender la complejidad histórica del territorio, la fragilidad institucional, la persistencia de tensiones entre intereses privados y colectivos, y la forma en que estas dinámicas siguen influyendo en las disputas ambientales, económicas y políticas del Casanare contemporáneo.

El procedimiento contempló la realización de quince entrevistas en cada territorio, con una duración aproximada

de una hora. Todas las entrevistas se desarrollaron con consentimiento informado, garantizando la confidencialidad de los participantes y el uso responsable de la información. Se empleó un registro digital para luego realizar transcripciones completas, lo que permitió un análisis detallado tanto en el plano textual como discursivo. La ética de la investigación exige no solo obtener autorización explícita, sino también reconocer que la voz de los entrevistados es parte constitutiva del conocimiento producido y no un simple insumo instrumental.

En cuanto a la estructura de las guías, las preguntas abordaron experiencias directas con la industria petrolera, formas de conflictividad y resistencia, percepciones sobre el Estado, las empresas y las comunidades, así como estrategias de resolución o transformación de conflictos. La flexibilidad de la entrevista semiestructurada permitió que los actores ampliaran sus relatos, aportaran ejemplos concretos, evocaran memorias y expresaran emociones que en un cuestionario rígido quedarían invisibilizadas.

El valor metodológico de este instrumento se fortalece porque, al aplicar el análisis crítico del discurso a las transcripciones, se pueden examinar las formas lingüísticas, narrativas y retóricas mediante las cuales los actores

construyen sentido. En otras palabras, la entrevista semiestructurada no se limita a recoger datos, sino que funciona como el canal a través del cual emergen discursos que luego serán analizados en los tres niveles planteados por Van Dijk. De este modo, cada entrevista se convierte en un espacio de producción discursiva donde se ponen en juego memorias colectivas, identidades sociales y representaciones del conflicto, que al ser sistematizadas aportarán directamente a la construcción de herramientas de transformación para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza.

## Análisis crítico del discurso (ACD)

Como se mencionó anteriormente, el análisis crítico del discurso se ha definido como la estrategia central para la interpretación de la información recogida en los dos territorios. Este enfoque parte de la premisa de que el discurso no es un simple reflejo de la realidad, sino una práctica social que participa en la producción, reproducción y transformación de las relaciones de poder. Van Dijk (1994, 2009) sostiene que el discurso constituye un espacio donde se condensan cogniciones sociales, estructuras de dominación y mecanismos de resistencia, lo que lo convierte en un campo privilegiado para estudiar cómo

los actores construyen sentido en torno a fenómenos tan complejos como el extractivismo petrolero.

El ACD aplicado en esta investigación se entiende como un proceso sistemático que integra tres dimensiones inseparables: la estructura lingüística de los textos, las estrategias discursivas utilizadas por los actores y el entramado sociopolítico en el que esos discursos se producen. En este sentido, el análisis no se limita a examinar palabras o frases, sino que busca comprender cómo las narrativas de sindicalistas, campesinos, líderes comunitarios o funcionarios estatales se articulan con marcos colectivos de interpretación, disputan significados y se insertan en relaciones de poder históricas.

De manera operativa, el ACD se desarrolla en tres niveles complementarios. El nivel textual identifica vocabularios, metáforas y formas de nombrar que configuran representaciones del conflicto. El nivel discursivo da cuenta de las estrategias narrativas y argumentativas que legitiman o resisten visiones dominantes sobre el petróleo y el territorio. Finalmente, el nivel sociopolítico sitúa estas producciones en el contexto de las políticas públicas, las instituciones y las estructuras de poder que atraviesan los territorios de Barrancabermeja y Yopal. Solo la articulación de estos tres niveles permite ofrecer una comprensión inte-

gral de cómo el petróleo no solo impacta la economía o la ecología de los territorios, sino también sus marcos simbólicos, sus identidades colectivas y sus posibilidades de transformación social.

### **Nivel textual**

El primer nivel del análisis asume el texto de cada entrevista como una unidad semántica y pragmática donde se condensan elecciones léxicas, giros retóricos y huellas de posicionamiento que permiten reconstruir significados compartidos, relaciones de agencia y tramas de valoración. El procedimiento inicia con la construcción del corpus a partir de transcripciones íntegras y literales, respetando marcas de oralidad cuando estas aporten sentido y corrigiendo únicamente errores evidentes de dicción sin alterar el contenido. Luego se realiza una normalización léxica que incluye convertir a minúsculas, unificar variantes ortográficas frecuentes en el español colombiano y estandarizar nombres propios de instituciones y lugares para garantizar la consistencia del análisis posterior. En esta misma fase se anonimizan datos sensibles de las personas entrevistadas, se asignan códigos alfanuméricos que conserven información mínima sobre el perfil del informante y el territorio, y se deja un registro de auditoría con decisiones de edición y criterios de anonimización con el fin de sostener la trazabilidad metodológica exigida por el IEMP.

Una vez estabilizado el corpus se desarrolla una lectura exploratoria y densa que permita elaborar una primera cartografía de vocabularios dominantes, campos semánticos y metáforas orientadoras, poniendo especial cuidado en términos que, por su recurrencia o su carga valorativa, enmarcan el conflicto y la legitimidad de los actores. En Barrancabermeja se espera observar núcleos léxicos asociados a trabajo digno, sindicato, huelga, privatización, modernización de la refinería, seguridad y memoria obrera, mientras que en Yopal es previsible que emerjan campos alrededor de agua, tierra, vocación campesina, regalías, migración, urbanización e informalidad, junto con expresiones que remiten a sostenibilidad y defensa del territorio. Esta primera cartografía no se limita a contabilizar palabras frecuentes, se interesa por la manera en que los entrevistados se nombran a sí mismos y a los otros, por cómo construyen colectivos a través de pronombres inclusivos o excluyentes, y por los adjetivos evaluativos que instalan matrices de reconocimiento o deslegitimación.

El análisis detallado se concentra en fenómenos lingüísticos que, según Van Dijk (1980), articulan microestructura y macroestructura de sentido. Comienza por la agencia gramatical y la transitividad, donde se examina quién aparece como sujeto de acción y quién queda relegado a paciente o beneficiario, en

qué momentos se recurre a pasivas que atenúan responsabilidades y en cuáles se usan nominalizaciones que convierten procesos en entidades, con el efecto de naturalizar o despolitizar los hechos. Se estudia también la modalidad epistémica y deóntica para captar grados de certeza, obligación o posibilidad, con atención a marcadores como parece, se supone, debe o toca, que matizan compromisos y refuerzan o debilitan compromisos colectivos. En esta línea, Van Dijk (1994) subraya la importancia de atender a intensificadores y atenuadores que modulan la fuerza ilocutiva, a negaciones estratégicas que segmentan el campo de lo decible y a presuposiciones que muestran lo dado por sentado en cada comunidad de habla.

De particular interés es el estudio de metáforas y encuadres valorativos, en la medida en que constituyen, en términos sociocognitivos, accesos privilegiados a modelos mentales colectivos. Cuando un sindicalista declara que la ciudad fue levantada a pulso con sudor, cuando un líder campesino afirma que el agua es la vida del llano o cuando un funcionario sostiene que la modernización trae progreso, no solo enuncian opiniones, sino que proyectan esquemas narrativos que conectan memoria, identidad y futuro. Las metáforas se ordenan en familias y se ponen en relación con sus coocurrencias, de modo

que sea posible observar qué actores y qué acciones tienden a aparecer juntos, qué adjetivos se adhieren a Estado, empresa o comunidad, y qué sustantivos abstractos como desarrollo, dignidad, seguridad o sostenibilidad operan como anclas de sentido.

El nivel textual incluye, además, el estudio de la coherencia local y global, en clave de proposiciones y temas, siguiendo la distinción entre microestructuras y macroestructuras propuesta por Van Dijk (1980). En la coherencia local se verifica cómo se conectan las ideas a través de conectores causales y concesivos, cómo se construyen explicaciones y justificaciones, y cómo se organizan episodios narrativos que dan cuenta de eventos clave como huelgas, paros cívicos, consultas populares o contingencias ambientales. En la coherencia global se identifican los temas o tópicos dominantes que organizan el discurso de cada entrevistado y, por extensión, de cada grupo de actores, con el objeto de derivar macroproposiciones que resuman el contenido semántico sin perder la riqueza de los matices territoriales. Esta operación facilita luego el diálogo con el nivel discursivo, puesto que los temas globales suelen anidar las estrategias de legitimación o resistencia.

Para sostener la rigurosidad del proceso, el equipo construye un glosario ana-

lítico y un libro de códigos textual que contiene definiciones operativas, ejemplos representativos y reglas de decisión, con entradas dedicadas a familias léxicas centrales como trabajo, huelga, negociación, privatización, seguridad y transición energética en Barrancabermeja, y tierra, agua, regalías, migración, informalidad, consulta y sostenibilidad en Yopal. Este libro de códigos es iterativo y se actualiza conforme avanza la lectura del corpus, con registro explícito de cambios y justificaciones, y con sesiones de calibración entre analistas para asegurar consistencia interpretativa, prácticas que se traducen en validez interna y confiabilidad interanalista.

La conexión con la entrevista semiestructurada general se preserva en cada decisión analítica, ya que las preguntas de la guía fueron diseñadas para abrir ventanas léxicas y narrativas sobre experiencia con la industria, formas de conflictividad y resistencia, percepción de actores e intentos de resolución. Por esa razón, en la segmentación textual se respetan los bloques temáticos de la guía, lo que permite comparar cómo varía el vocabulario cuando el entrevistado habla de empresa frente a cuando habla de Estado o comunidad, y cómo se desplazan los adjetivos evaluativos y los marcos de agencia según el tema tratado. Esta alineación entre instrumento y análisis facilita la sistematización de hallazgos en matrices que per-

miten al IEMP observar, con evidencia lingüística, qué términos y metáforas activan legitimidad o desconfianza, y en qué medida dichas elecciones varían entre perfiles de actor y entre territorios.

El resultado del nivel textual se consolida en productos intermedios que incluyen resúmenes por entrevista con macroproposiciones, listados comentados de términos clave y metáforas organizados por actor y territorio, y mapas léxico-semánticos que muestran asociaciones recurrentes entre actores, acciones y valores. Estos productos, alimentan de manera directa los niveles siguientes al ofrecer una base empírica precisa para identificar estrategias de legitimación o resistencia en el nivel discursivo y para anclar los hallazgos en estructuras de poder y marcos institucionales en el nivel sociopolítico, cumpliendo así con la orientación sociocognitiva que entiende el discurso como práctica social imbricada en relaciones de dominación y en posibilidades reales de transformación (Van Dijk, 2009).

### **Nivel discursivo**

El segundo nivel del análisis se concentra en las estructuras y estrategias discursivas que organizan las narrativas de los entrevistados. A diferencia del nivel textual, que se detiene en las elecciones léxicas y en la construcción

semántica de los enunciados, el nivel discursivo se interesa por la manera en que los actores estructuran sus relatos, por los modos de argumentar y persuadir, por las oposiciones que trazan entre colectivos y por las estrategias retóricas que buscan legitimar posiciones o producir resistencia frente a visiones dominantes. Según Van Dijk (1994), el discurso no solo transmite contenidos, sino que organiza la interacción social a través de esquemas narrativos y argumentativos que conectan experiencias individuales con modelos mentales colectivos.

El análisis comienza por identificar la organización global de los discursos, lo que implica examinar cómo los entrevistados construyen secuencias narrativas alrededor de episodios clave como huelgas, consultas populares, marchas comunitarias o negociaciones laborales. En estas secuencias interesa observar no solo los eventos narrados, sino la jerarquía que se les otorga, las evaluaciones que los acompañan y los desenlaces que se presentan como inevitables o abiertos a transformación. De acuerdo con Van Dijk (1980), la estructura narrativa y argumentativa revela cómo los actores seleccionan ciertos hechos, omiten otros y organizan las memorias colectivas en torno a tópicos que condensan identidades y proyectos políticos.

Una atención especial se da a las estrategias de legitimación y deslegitimación. En Barrancabermeja es previsible encontrar narrativas que legitiman al movimiento sindical como garante de derechos laborales y como actor político, al tiempo que deslegitiman a empresas o al Estado en momentos de privatización o represión. En Yopal, en cambio, es esperable que las narrativas legitimen la identidad campesina y ambiental, mientras que deslegitimen a las compañías petroleras por el deterioro ambiental, la especulación con el suelo o la falta de planificación urbana. Este tipo de oposiciones se expresan mediante marcos discursivos de «nosotros» frente a «ellos», donde el pronombre y las referencias colectivas se convierten en marcadores de inclusión o exclusión, de solidaridad interna o de antagonismo externo (Van Dijk, 2009).

El nivel discursivo también analiza los recursos retóricos que buscan movilizar emocionalmente a los interlocutores. El uso de metáforas bélicas como «fue una guerra social» (Vega, 2008) en el caso de Barrancabermeja, o de metáforas vitales como «el agua es la vida del llano» en el caso de Yopal, no solo dotan de fuerza expresiva a los relatos, sino que funcionan como dispositivos de movilización simbólica. Se atiende a la construcción de ethos, es decir, a cómo los actores se presentan a sí mismos como sujetos legítimos para ha-

blar del conflicto, ya sea desde la experiencia sindical, la memoria campesina, la autoridad local o la experticia técnica. También se analizan las apelaciones al pathos, que incluyen evocaciones de sacrificio, dignidad, miedo o esperanza, y al logos, es decir, a la construcción de argumentos racionales sobre regalías, empleo, contaminación o derechos.

El procedimiento metodológico contempla la elaboración de matrices de estrategias discursivas, donde cada entrevista es desagregada en fragmentos que muestran claramente cómo los actores legitiman, resisten o negocian significados. Se registran oposiciones binarias recurrentes (trabajo digno vs. explotación, desarrollo vs. despojo, soberanía vs. privatización), así como marcos argumentativos que sitúan la acción de los actores en horizontes colectivos. Se hace un seguimiento a cómo cambian estas estrategias de un perfil a otro: sindicalistas frente a campesinos, autoridades locales frente a líderes ambientales. Este análisis contrastivo permite establecer patrones de legitimación y resistencia propios de cada territorio, y al mismo tiempo, identificar elementos comunes que revelan cómo la conflictividad petrolera activa marcos de desconfianza hacia el Estado, expectativas de redistribución y demandas de reconocimiento social.

Este nivel permite comprender que los entrevistados no solo narran experiencias, sino que se posicionan activamente en el campo de poder mediante recursos lingüísticos y narrativos. Siguiendo a Van Dijk (2009), el análisis muestra cómo el discurso opera como estrategia de control simbólico y como herramienta de resistencia, y cómo las comunidades de Barrancabermeja y Yopal, a través de sus relatos, construyen marcos de interpretación que orientan la acción política y social. De este modo, el ACD no se limita a describir el contenido de las entrevistas, sino que revela las dinámicas de poder y legitimidad que subyacen a la conflictividad, aportando directamente a la sistematización de herramientas de transformación que el IEMP busca transferir a las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza.

### **Nivel sociopolítico**

El tercer nivel del análisis sitúa los discursos recogidos en el marco de las estructuras más amplias de poder y en los contextos sociales, históricos e institucionales donde se producen. Según Van Dijk (1994), el discurso no flota en el vacío, sino que se encuentra profundamente condicionado por sistemas de dominación y al mismo tiempo actúa como un mecanismo para reproducir o transformar dichas estructuras. En consecuencia, cada enunciado pro-

nunciado por un sindicalista, un campesino, un funcionario local o un líder ambiental es examinado no solo como expresión personal, sino como la cristalización de una experiencia social situada en un entramado de relaciones desiguales que atraviesan a los territorios de Barrancabermeja y Yopal.

Este nivel permite observar cómo los relatos sindicales de Barrancabermeja se insertan en la larga historia de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera y los procesos de privatización que marcaron el tránsito hacia políticas neoliberales en las décadas recientes. La narrativa obrera, que apela a la dignidad del trabajo y a la memoria de luchas colectivas, encuentra su lugar en un contexto donde el Estado se ha presentado de manera ambivalente: garante de derechos en algunos momentos y agente de represión en otros, administrador de la riqueza nacional al tiempo que impulsor de reformas orientadas al desmonte de lo público. Lo que los actores narran en sus entrevistas, cuando hablan de huelgas, de violencia paramilitar o de procesos de modernización de la refinería, no son simples recuerdos, sino huellas de una estructura histórica que define qué es posible decir, qué actores tienen voz y cuáles han sido sistemáticamente silenciados.

En Yopal, en contraste, los discursos campesinos y ambientales se producen

en un escenario donde la expansión petrolera coincidió con la debilidad institucional y la incapacidad de los gobiernos locales para gestionar las regalías. El boom de Cusiana y Cupiagua generó un ingreso inesperado que, en lugar de traducirse en bienestar colectivo, alimentó redes de corrupción y clientelismo que profundizaron las brechas sociales. Así, cuando un líder comunitario habla de la informalidad urbana o de la falta de planificación, sus palabras no se limitan a describir deficiencias administrativas, sino que revelan la forma en que las políticas estatales y las decisiones empresariales configuraron un modelo de desarrollo excluyente. Los discursos sobre el agua, la tierra o la vocación campesina aparecen aquí como mecanismos de resistencia frente a un aparato institucional que, en muchos casos, no ha logrado representar ni proteger los intereses de la población.

El análisis sociopolítico permite establecer vínculos entre las microestructuras discursivas identificadas en las entrevistas y los procesos de orden macro que atraviesan a ambos territorios. Van Dijk (2009) insiste en que los discursos deben analizarse como prácticas que se relacionan con ideologías, con la reproducción de desigualdades y con la construcción de hegemonías. En esta clave, los testimonios no solo se leen por lo que dicen de la vida cotidiana, sino también por lo que revelan sobre

el modo en que las comunidades conciben al Estado, a las empresas y a sí mismas en medio de un orden social desigual. En Barrancabermeja, esto se expresa en la lucha por mantener al sindicato como interlocutor legítimo frente a un proceso de debilitamiento del trabajo organizado. En Yopal, se expresa en el reclamo por un territorio que defiende su identidad rural frente a la presión de un modelo extractivo que relega lo campesino a una posición subordinada.

Metodológicamente, este nivel se trabaja mediante matrices de contextualización donde cada enunciado relevante es vinculado con el marco institucional y político en el que aparece. Se cotejan, por ejemplo, referencias a la privatización con la normativa nacional sobre Ecopetrol, alusiones a la corrupción con los registros históricos sobre el manejo de regalías en Casanare, o menciones a la violencia con los procesos de seguridad en el Magdalena Medio. Estas matrices, permiten que los discursos no se reduzcan a expresiones subjetivas, sino que sean interpretados en relación con estructuras históricas, con relaciones de poder y con marcos de gobernanza territorial que condicionan la vida de las comunidades.

Así se espera la construcción de una interpretación densa que muestra cómo las narrativas de los actores locales no solo describen conflictos, sino que inter-

pelan las condiciones estructurales que los generan. De esta manera, el análisis sociopolítico contribuye a identificar en qué medida los discursos reproducen las desigualdades o, por el contrario, cómo abren caminos para transformarlas. La riqueza de este nivel es que permite al IEMP extraer aprendizajes directamente aplicables a las escuelas regionales de diálogo, al mostrar cómo las comunidades de Barrancabermeja y Yopal han sabido traducir sus experiencias en prácticas discursivas que, al ser sistematizadas, se convierten en herramientas para la transformación de conflictos sociales en otros escenarios del país.

## Fases de recolección, análisis de datos y resultados

El proceso metodológico se estructuró en tres fases consecutivas que garantizaron la coherencia entre la preparación, el trabajo de campo y el análisis comparativo de los discursos recogidos. Cada fase se concibió como un eslabón de una cadena que va desde la construcción rigurosa de los instrumentos hasta la elaboración de productos aplicables a la formación en las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza. La secuencia temporal no se limitó a un cronograma técnico, sino que respondió a la lógica de maduración de la investi-

gación, donde la preparación aseguró la pertinencia de los instrumentos, el trabajo de campo abrió el espacio para la emergencia de narrativas y el análisis sintetizó y transformó esas voces en herramientas útiles para el IEMP.

En la **fase de preparación**, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, se profundizó en la revisión documental para ampliar los antecedentes teóricos y contextuales que fundamentan la investigación. A partir de esta revisión se diseñaron guías de entrevistas diferenciadas para Barrancabermeja y Yopal, de modo que recogieran las especificidades de cada territorio y, al mismo tiempo, permitieran la comparación entre ellos. Durante este periodo se estableció contacto inicial con actores clave para garantizar la disposición y la viabilidad de las entrevistas, y se programaron los primeros encuentros en campo. Finalmente, se realizó el pilotaje de dos entrevistas, una en cada territorio, con el propósito de ajustar los instrumentos en función de la claridad de las preguntas y de la riqueza de las respuestas. El producto es un documento metodológico consolidado y un plan de trabajo validado que contiene las guías definitivas de entrevistas.

La **fase de trabajo de campo**, desarrollada entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, estuvo dedicada a la realización de las entrevistas semies-

estructuradas en Barrancabermeja y Yopal, con el compromiso de alcanzar un total de treinta entrevistas, quince por territorio, siguiendo los perfiles previamente definidos. Todas las entrevistas están registradas en audio, con consentimiento informado, y transcritas de manera íntegra para preservar el detalle de los relatos. Al mismo tiempo, se inició la organización de los datos en matrices analíticas que permitieron anticipar la comparación y facilitar la posterior aplicación del ACD. El producto en esta fase es un avance verificable de entrevistas y un conjunto completo de transcripciones, listas para entrar en la etapa de análisis.

La **fase de análisis y síntesis**, comprendida entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, aplicó el análisis crítico del discurso a las entrevistas transcritas, siguiendo los tres niveles definidos: textual, discursivo y sociopolítico. En este momento se identificaron los patrones de conflictividad que emergen en cada territorio, los marcos de resistencia que sostienen las identidades colectivas y las narrativas de transformación que permiten vislumbrar caminos de gobernanza territorial. El contraste entre Barrancabermeja y Yopal fue sistematizado en matrices comparativas que destacaron similitudes y diferencias, con el fin de extraer aprendizajes transferibles a otros escenarios. A partir de este ejercicio se elabó

un documento curricular base que servirá como insumo para la formación en las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza, así como un informe final que sintetiza las herramientas y recomendaciones derivadas de la investigación. Como complemento, se prepararon dos presentaciones diseñadas para socializar los resultados ante audiencias académicas, institucionales y comunitarias. Los productos de esta fase son el documento de sistematización, el informe final de investigación, el insumo curricular y las presentaciones de socialización.

La investigación no se limitó a describir procesos locales ni a recopilar testimonios de manera fragmentada, sino que buscó producir resultados con un impacto académico, pedagógico e institucional claramente definido. A lo largo del trabajo en Barrancabermeja y Yopal se generó un conocimiento comparativo que permitió comprender cómo la industria petrolera configura conflictos diferenciados y cómo las comunidades elaboran repertorios de resistencia y transformación. Este conocimiento, al ser sistematizado, se traduce en herramientas concretas para la formación en las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza y en insumos útiles para el fortalecimiento del IEMP como actor institucional.

# Resultado

En territorios configurados históricamente por la presencia de la industria petrolera, el discurso se convierte en un terreno privilegiado para observar cómo se producen, reproducen y disputan las relaciones de poder que estructuran la vida económica, política y comunitaria. Siguiendo la perspectiva sociocognitiva de Van Dijk (1994, 2009), el discurso no se limita a describir eventos, sino que funciona como una práctica social que organiza percepciones, legitima actores, distribuye responsabilidades y proyecta horizontes de acción. El extractivismo, entendido como un régimen de apropiación intensiva de recursos que reconfigura instituciones, identidades y territorialidades, se expresa discursivamente en marcos de interpretación que dotan de sentido a las intervenciones de empresas, al rol del Estado y a las formas de resistencia de las comunidades.

En este marco, la palabra de un sindicalista que afirma que «la refinería es el corazón político y económico de la ciudad», o la de una lideresa campesina que sostiene que «*el agua es la vida del territorio y está siendo puesta en riesgo*», no constituye una simple opinión individual: condensa memorias colectivas, modelos mentales compartidos y estructuras de dominación sedimentadas en la experiencia histórica de cada territorio. En Barrancabermeja, el discurso se entrelaza con una larga tra-

dición de organización obrera, luchas laborales, violencia política y disputas por la soberanía energética, mientras que en Yopal se articula con la defensa del agua, la vocación campesina, la tensión entre modernización y descomposición social, y los impactos del boom petrolero sobre la gobernanza local. En ambos casos, el discurso actúa como mediación entre la experiencia vivida y las estructuras de poder: permite nombrar injusticias, legitimar demandas, cuestionar jerarquías o reproducir narrativas hegemónicas sobre progreso, desarrollo o sostenibilidad.

Así, analizar el discurso en territorios extractivos implica reconocer que cada enunciado está inscrito en una trama de poder: quién habla, desde dónde habla, de qué puede hablar y qué queda silenciado no es contingente, sino el resultado de relaciones asimétricas entre empresas, Estado y comunidades. En consecuencia, el análisis crítico del discurso aplicado a Barrancabermeja y Yopal permite no solo comprender las representaciones sociales del extractivismo, sino también evidenciar los mecanismos simbólicos mediante los cuales determinados actores obtienen legitimidad, otros son desautorizados y ciertos conflictos se normalizan o se invisibilizan. Esta perspectiva ilumina cómo el petróleo no solo transforma economías y ecosistemas, sino también marcos cognitivos, narrativas identita-

rias y posibilidades de acción colectiva. El corpus analizado está conformado por quince entrevistas semiestructuradas, nueve realizadas en Barrancabermeja y su área de influencia (principalmente el Magdalena Medio santandereano) y seis efectuadas en Yopal y municipios rurales del Casanare. Todas las entrevistas fueron grabadas con consentimiento informado y transcritas de manera íntegra, preservando marcas de oralidad relevantes para el análisis discursivo y garantizando un proceso de anonimización que protege la identidad de los participantes sin sacrificar información contextual necesaria para interpretar sus posicionamientos. Para efectos analíticos, cada entrevista recibió un código alfanumérico que identifica territorio y perfil-tipo del informante.

La muestra se construyó siguiendo criterios de máxima variación, con el propósito de capturar la diversidad de voces que intervienen en los conflictos asociados a la industria petrolera. En Barrancabermeja, las entrevistas corresponden a cinco perfiles-tipo: (1) expertos y actores institucionales con trayectoria en desarrollo y paz; (2) profesionales y técnicos vinculados a la industria petrolera; (3) liderazgos comunitarios rurales; (4) liderazgos urbanos y poblacionales (incluyendo representación LGBTIQ+), y (5) víctimas del conflicto armado y defensoras del

territorio. Esta heterogeneidad recoge la complejidad histórica de un territorio donde coexisten memoria obrera, identidad sindical, violencia política, modernización industrial y disputas por la soberanía energética.

En Yopal, los perfiles-tipo se organizaron en cinco categorías comparables, ajustadas a la especificidad territorial: (1) académicos y expertos en desarrollo territorial con presencia institucional; (2) profesionales con experiencia directa en la industria; (3) liderazgos educativos vinculados a la escuela como espacio de resistencia; (4) actores comunitarios rurales atravesados por transformaciones productivas y culturales, y (5) actores con memoria del conflicto armado y del reordenamiento violento del territorio. En este caso, las entrevistas permiten reconstruir procesos vinculados al boom petrolero, a la expansión urbana descontrolada, al deterioro de la cultura llanera, al impacto ambiental sobre la sabana y a las tensiones entre empresa, Estado y comunidades campesinas.

Las entrevistas fueron realizadas en contextos diversos como oficinas sindicales, hogares rurales, espacios comunitarios, entornos educativos, instituciones públicas y lugares definidos por los propios informantes. Esta decisión metodológica garantizó un ambiente de confianza y permitió que los entre-

vistados manejaran el ritmo, los silencios y la direccionalidad de la conversación, lo cual es fundamental para captar matices discursivos, posicionamientos identitarios y estrategias narrativas. El trabajo de campo se ejecutó entre octubre y noviembre de 2025, siguiendo un protocolo de aproximación territorial que incluyó contacto previo con actores clave, acuerdos logísticos con líderes locales y una adaptación flexible de las guías de entrevista para atender particularidades de cada perfil.

En conjunto, este corpus constituye una base robusta para el análisis crítico del discurso, en tanto refleja la pluralidad de actores, las tensiones históricas y las distintas formas de producción simbólica que configuran la conflictividad petrolera en ambos territorios. Su composición permite observar patrones discursivos consistentes, contrastes entre territorios y variaciones significativas entre perfiles, elementos indispensables para la comprensión integral que busca este estudio.

## II. Análisis crítico del discurso en Barrancabermeja

El análisis del corpus correspondiente a Barrancabermeja se desarrolla a partir del análisis crítico del discurso (ACD),

siguiendo rigurosamente los tres niveles propuestos por Van Dijk: el nivel textual, que examina las elecciones léxicas, las estructuras semánticas y las huellas de posicionamiento presentes en cada entrevista; el nivel discursivo, que identifica las estrategias narrativas, argumentativas y retóricas mediante las cuales los actores construyen sentido, legitiman posiciones o disputan significados, y el nivel sociopolítico, que sitúa estos discursos en la trama histórica, institucional y de poder que ha configurado el territorio. Esta aproximación permite comprender que los relatos de los trabajadores, líderes comunitarios, víctimas del conflicto y técnicos de la industria no solo describen experiencias individuales, sino que cristalizan memorias colectivas e ideologías sedimentadas en la historia petrolera de la ciudad. El ACD aplicado en este capítulo, por tanto, no se limita a estudiar el lenguaje, sino que busca revelar cómo, en Barrancabermeja, el discurso opera como un mecanismo de resistencia, disputa y reproducción de relaciones sociales, económicas y políticas profundamente ligadas al extractivismo y a la identidad obrera del territorio.

## A. Nivel textual (Barrancabermeja)

### 1. Construcción del corpus

La construcción del corpus textual para Barrancabermeja se realizó a partir de las nueve entrevistas semiestructuradas transcritas de manera íntegra, conservando marcas de oralidad relevantes para el análisis discursivo (pausas, reformulaciones y énfasis) y corrigiendo únicamente errores manifiestos de dicción que no alteraran el sentido original. Este proceso incluyó cuatro componentes centrales: normalización léxica, anonimización, códigos de informantes y criterios de edición.

La normalización léxica fue el primer procedimiento aplicado al corpus de entrevistas de Barrancabermeja y tuvo como propósito asegurar la coherencia interna del material lingüístico sin borrar la textura discursiva que caracteriza a las voces locales. Las entrevistas incluyen expresiones propias del habla barranqueña, giros propios de la experiencia obrera y comunitaria, y variaciones frecuentes en la manera de nombrar a los actores del conflicto petrolero. Por esta razón se desarrolló un proceso cuidadoso que respetó el sentido original de los testimonios y, al mismo tiempo, permitió construir una base lingüística homogénea para el análisis crítico del discurso.

En varios fragmentos los entrevistados

se refieren a Ecopetrol con expresiones diversas. Algunos hablan de «*la empresa*», otros de «*la refinería*», otros de «*la estatal*», y en varios casos aparece la denominación coloquial «*el complejo*». Para evitar la dispersión del campo léxico se adoptó Ecopetrol como forma base, sin eliminar las variantes del habla que emergen naturalmente en los testimonios, dado que cada forma revela posicionamientos diferenciales frente a la institución. Algo similar ocurrió con el sindicato. Los entrevistados alternan entre «*la USO*», «*la Unión*», «*los obreros organizados*» o «*los del sindicato*». Para este caso se mantuvo la sigla USO como etiqueta general, pero se conservaron las expresiones originales, porque la manera de nombrar al sindicato está cargada de historia, afecto y tensiones políticas.

La normalización también atendió expresiones coloquiales propias de la oralidad. En distintos testimonios aparecían frases como «*pa' trabajar*», «*pa' la comunidad*», «*pa' nosotros*», o valoraciones enfáticas como «*eso fue muy duro y nos tocó aguantar*». Cuando estas expresiones formaban parte de un énfasis afectivo relevante, se conservaron tal cual, porque enuncian la experiencia emocional del conflicto y de la precarización laboral. No obstante, en los listados analíticos de vocabulario se utilizaron formas completas para evitar dispersión técnica en los conteos y

agrupaciones.

Se unificaron también nombres de territorios y espacios significativos. La refinería aparece como «*la planta*», «*el complejo*» o «*la factoría*», y los barrios son mencionados de forma parcial, por ejemplo «*las Brisas*», «*el Carmen*» o «*Puerto Cali*». En el corpus normalizado se asignó una forma estable para cada lugar, pero se mantuvo la denominación original en los fragmentos textuales, ya que la manera como los hablantes nombran el espacio revela pertenencias comunitarias y marcos de identidad gremial.

Finalmente, se normalizaron términos técnicos de la industria que los entrevistados usan de manera heterogénea. Unos mencionan «*la sísmica*», otros «*la exploración*», otros «*los trabajos de línea*» o «*los contratistas que vienen de afuera*». Para los análisis semánticos se adoptó exploración sísmica como categoría de referencia, aunque se conservaron las expresiones originales porque constituyen marcadores de distancia, apropiación o desconocimiento respecto a la actividad extractiva.

La normalización incluyó además la corrección de errores de transcripción y la eliminación de repeticiones accidentales, manteniendo rasgos de oralidad que aportan densidad pragmática, como silencios, reformulaciones y

expresiones de afecto o indignación. De este modo se obtuvo un corpus que equilibra fidelidad a las voces de Barrancabermeja y claridad analítica para el ACD, preservando en todo momento la fuerza expresiva del testimonio.

La anonimización del corpus de Barrancabermeja fue un proceso esencial para garantizar la confidencialidad de los participantes y, al mismo tiempo, preservar los elementos narrativos necesarios para el análisis crítico del discurso. Las entrevistas contienen referencias frecuentes a trayectorias laborales, situaciones de riesgo, experiencias de violencia política y vínculos con organizaciones sindicales o comunitarias. En varios testimonios los entrevistados mencionan hechos sensibles, por ejemplo, cuando afirman que «*aquí hubo momentos en que uno no sabía si volvía a la casa*» o que «*al sindicato lo querían callar a la fuerza*». En estos casos la protección de identidades no solo responde a criterios éticos, sino a la necesidad de evitar cualquier revictimización o exposición indebida.

El proceso consistió en reemplazar nombres propios por códigos alfanuméricos que conservan información mínima sobre el perfil del hablante y el territorio. Por ejemplo, un líder sindical quedó registrado como BMM-S03, mientras que una lideresa comunitaria se codificó como BMM-C02. Esta estruc-

tura permite rastrear patrones discursivos sin revelar identidades particulares. También se anonimizaron referencias a familiares, amigos, compañeros de trabajo y terceros mencionados en los relatos, especialmente cuando los testimonios aluden a situaciones de amenaza o represión. En frases como «*a fulano lo desaparecieron por defender los derechos*» o «*ese jefe era el que decidía quién entraba y quién no*», los nombres propios fueron retirados y sustituidos por marcadores neutrales como [persona1] o [jefe\_local].

Del mismo modo, se revisaron cuidadosamente los fragmentos donde los entrevistados ofrecían datos que podían llevar a su identificación, como cargos muy específicos, cronologías exactas o eventos reconocibles públicamente. En casos en que el rol era central para el análisis discursivo se conservó la categoría general, por ejemplo, «*funcionario de la empresa*», «*obrero de planta*», «*contratista*» o «*lideresa de un barrio ribereño*», mientras que se eliminó cualquier detalle que pudiera asociarse a una persona concreta. Se mantuvieron, sin embargo, marcas de autoidentificación que son relevantes para el análisis, especialmente cuando los entrevistados construyen su autoridad discursiva a partir de su rol, como cuando alguien dice «*yo toda la vida fui obrero*» o «*yo crecí viendo cómo luchaba la USO*».

El proceso de anonimización respetó la

estructura del discurso original y evitó modificaciones que alteraran el sentido, el tono o las posiciones expresadas por los actores. Cada sustitución fue registrada en un archivo de auditoría metodológica que documenta la decisión adoptada y su justificación. Gracias a ello se mantuvo la trazabilidad analítica exigida por el enfoque de Van Dijk, que requiere comprender cómo los hablantes se posicionan en relación con el poder, la legitimidad y la memoria colectiva. La anonimización no borró estas relaciones, sino que permitió que pudieran estudiarse sin poner en riesgo a quienes las narran.

Para garantizar coherencia analítica y facilitar el seguimiento de los patrones discursivos, cada entrevista de Barrancabermeja fue identificada mediante un código alfanumérico que conserva información mínima sobre el territorio y el perfil del hablante. Se empleó la sigla BMM para marcar el origen territorial y una segunda parte que distingue el tipo de actor. Así, los discursos sindicales quedaron registrados como BMM S, los comunitarios como BMM C, los técnicos de la industria como BMM T, los liderazgos poblacionales como BMM L y las voces de víctimas o defensoras del territorio como BMM V. El número final identifica la entrevista dentro de cada perfil.

Este sistema permitió comparar posicio-

nes sin exponer identidades, manteniendo referencias internas útiles cuando los entrevistados expresan formulaciones como *«yo hablo desde la experiencia de los obreros, nosotros en la comunidad siempre hemos tenido que defendernos»* o *«uno desde la industria ve las cosas de otra manera»*. Gracias a estos códigos fue posible rastrear cómo cada grupo construye metáforas, legitima acciones o define al «otro» en el conflicto.

Los criterios de edición aplicados al corpus de Barrancabermeja buscaron preservar la integridad discursiva de los testimonios y, al mismo tiempo, garantizar la claridad necesaria para el análisis crítico. Se corrigieron únicamente errores evidentes de transcripción, como repeticiones involuntarias, cortes abruptos o palabras incompletas, manteniendo todas las marcas de oralidad que aportaran sentido, especialmente cuando los entrevistados utilizaban énfasis o pausas para expresar tensión, indignación o memoria emocional. Expresiones como *«eso fue un tiempo muy duro»* o *«uno tenía que cuidarse mucho»* se conservaron tal cual, pues son claves para reconstruir la experiencia vivida.

No se alteraron muletillas ni reformulaciones cuando cumplían funciones pragmáticas, por ejemplo: en enunciados como *«yo digo, pues, que a nosotros nos tocó pelearla siempre»*, ya que estas marcas revelan posicionamiento y cer-

canía con el evento narrado. En cambio, se ajustaron elementos que podían entorpecer la lectura, como interrupciones externas o ruidos del entorno, dejando constancia de su presencia sin alterar el flujo del relato. Se respetó la sintaxis original incluso cuando era fragmentaria, dado que la fragmentación forma parte de la narrativa de quienes han vivido procesos de conflicto o precarización.

Estos criterios aseguraron que el corpus editado mantuviera la textura emocional y cognitiva de las voces locales, atendiendo a su valor sociolingüístico sin dificultar el análisis posterior.

## 2. Mapa léxico-semántico

El mapa léxico-semántico permite identificar las palabras y expresiones que organizan la representación del conflicto petrolero en Barrancabermeja. El análisis parte de la observación de los vocablos más recurrentes y cargados valorativamente, continúa con la agrupación de dichos términos en campos semánticos que estructuran la experiencia colectiva y culmina con la interpretación de los términos clave que operan como anclas cognitivas para comprender la ciudad, la industria y la resistencia comunitaria. Este mapa constituye la base interpretativa del nivel textual y permite conectar las microestructuras del discurso con las estrategias narrativas y los marcos sociopolíticos que se desarrolla-

rán más adelante.

El léxico de Barrancabermeja se organiza alrededor de un conjunto de palabras que actúan como ejes de significación y que concentran memorias obreras, tensiones políticas y sentidos de pertenencia. No se trata de simples términos recurrentes. Cada palabra funciona como una puerta de acceso a un modelo mental colectivo que ha sido sedimentado por décadas de industria petrolera, conflictividad y resistencia. El núcleo más robusto es trabajo, que emerge no como categoría técnica sino como fundamento identitario y horizonte moral. Cuando un entrevistado afirma *«el trabajo aquí siempre se ha peleado»*, no describe una condición laboral aislada, sino una trayectoria histórica donde el empleo es sinónimo de dignidad, sobrevivencia y reconocimiento social. En otros fragmentos la expresión *«trabajo de planta»* adquiere un peso particular, ya que no solo nombra un vínculo contractual, sino un modo de vida que contrasta con la precariedad actual y con la fragmentación introducida por los contratos temporales y la tercerización.

Asociado al trabajo aparece el núcleo huelga, que no opera únicamente como un hecho histórico ni como un instrumento sindical, sino como una categoría que organiza prácticas, afectos y memorias intergeneracionales. En varias entrevistas la huelga aparece citada

como parte de la vida cotidiana, como cuando alguien recuerda que *«uno desde pelado veía que la gente paraba cuando tocaba pararse»*. Esta naturalización del paro como recurso legítimo revela que la palabra no designa un evento excepcional, sino una pedagogía social sobre la defensa de derechos. El léxico asociado a la huelga activa además una red semántica que incluye sacrificio, miedo, solidaridad y represión, lo que muestra cómo el término condensa dimensiones laborales, políticas y emotivas.

El núcleo sindicato, nombrado principalmente como la USO, es tal vez el más cargado de valor simbólico. La palabra no funciona como referencia burocrática sino como un sujeto colectivo cuya existencia se entrelaza con la historia de la ciudad. Para varios entrevistados, *«la USO nos defendía a todos»*, mientras que para otros la organización es inseparable de episodios de persecución: *«al sindicato lo querían callar»*. La multiplicidad de sentidos revela que sindicato es un término que articula memoria, poder y vulnerabilidad. También opera como marcador de frontera entre actores, ya que delimita quién pertenece al mundo obrero y quién se ubica por fuera de él.

Violencia constituye un núcleo transversal que aparece de manera explícita e implícita. No siempre se nombra di-

rectamente; a veces emerge en expresiones como «*eso fue un tiempo bravo*» o «*uno tenía que cuidarse mucho*». La violencia no se presenta solo como un trasfondo, sino como un régimen cotidiano que moldeó prácticas de silencio, formas de sociabilidad y percepciones sobre la autoridad. Su aparición constante en el léxico indica que el conflicto armado y la represión estatal no fueron episodios aislados, sino condiciones estructurales que configuraron la relación entre trabajadores, sindicato, empresa y Estado.

Otro núcleo relevante es modernización, que ocupa un lugar ambiguo en el discurso. Para algunos entrevistados designa un avance tecnológico necesario, mientras que para otros representa un proceso que desplazó trabajadores y fragmentó la fuerza laboral. En expresiones como «*modernizaron, pero nos dejaron por fuera*» se evidencia que el término no es neutro: opera como símbolo de una promesa incumplida y de un cambio que privilegió eficiencia sobre derechos. Su ambivalencia muestra que el léxico de la modernización está atravesado por la disputa entre la narrativa empresarial del progreso y la narrativa obrera de la pérdida.

La refinería constituye un núcleo espacial que se vuelve a la vez léxico y simbólico. No se nombra solamente como infraestructura, sino como corazón de

la ciudad, como cuando un entrevistado dice «*la refinería es Barranca*». En otros momentos aparece como «*el complejo*» o «*la planta*», cada denominación activando una relación distinta con el territorio. Su presencia constante en el discurso muestra que la ciudad se piensa y se vive desde esa centralidad industrial, lo que convierte a la refinería en un organizador semántico de identidades y aspiraciones.

La seguridad aparece como un núcleo polisémico. A veces se refiere a la protección de los trabajadores dentro de la industria, en otras ocasiones al control armado que marcó la vida urbana y en otras a la seguridad laboral entendida como estabilidad y continuidad en el empleo. Su uso variable, en frases como «*había seguridad, pero de la otra*» o «*uno buscaba seguridad en el trabajo*», da cuenta de cómo la palabra articula dimensiones económicas, sociales y militares. La seguridad, en este sentido, no es un concepto unívoco sino un anclaje que permite leer las tensiones entre cuidado, vigilancia, protección y miedo.

En conjunto, estos núcleos léxicos no solo organizan el discurso de los entrevistados. Permiten comprender cómo Barrancabermeja construye sentido sobre sí misma y cómo los actores traducen la experiencia petrolera en categorías que condensan conflicto, memoria

y pertenencia.

El discurso de los entrevistados no se articula únicamente a partir de palabras aisladas, sino a través de campos semánticos que funcionan como estructuras cognitivas colectivas. Estos campos no son categorías abstractas, sino modos de ordenar la experiencia, de clasificar actores, de delimitar responsabilidades y de trazar distancias simbólicas dentro del territorio. En Barrancabermeja se identifican tres grandes campos que organizan el sentido: el campo del trabajo, el campo del conflicto y el campo del territorio industrializado. Cada uno se entrelaza con los otros y juntos producen el imaginario a partir del cual la población interpreta su pasado, su presente y sus posibilidades de futuro.

El campo del trabajo es el más robusto y el más cargado de memoria histórica. Este campo no se limita a designar actividades o empleos, sino que expresa una gramática moral y política. Las palabras que lo componen, como «*trabajo de planta*», «*contrato directo*», «*estabilidad*», «*derechos*», «*lucha laboral*», se articulan en narrativas donde el empleo es fuente de dignidad y también de conflicto. En frases como «uno se hacía respetar, porque tenía trabajo fijo» o «el contrato directo era lo que nos daba vida», se observa que el trabajo funciona como eje de reconocimiento social y de diferenciación interna. Este campo está atravesado por procesos de pérdida y nostal-

gia, pues varios entrevistados insisten en que «*antes el trabajo era otra cosa*» o «*a nosotros nos cambió la vida cuando metieron la tercerización*». Es un campo semántico que condensa orgullo, dignidad, desprotección y memoria colectiva.

El segundo campo es el del conflicto, donde convergen términos asociados tanto al enfrentamiento laboral como a la violencia armada. Palabras como «*huelga*», «*paro*», «*resistencia*», «*presión*», «*amenaza*», «*guerra sucia*», se distribuyen en el discurso con una densidad que revela que Barrancabermeja ha vivido el conflicto no como un evento esporádico, sino como un régimen cotidiano. Este campo se nutre de expresiones evocadoras, como «*eso fue un tiempo muy bravo*» o «*uno tenía que andar con cuidado*», que funcionan como marcadores emocionales de la experiencia vivida. Aquí también se entrelazan lenguajes de acción colectiva y lenguajes del miedo, generando un entramado donde la defensa de derechos laborales se encuentra permanentemente tensionada por la presencia de actores armados y por estrategias de control estatal o paraestatal. En este campo, huelga y violencia no son términos opuestos, sino dimensiones complementarias de un mismo proceso de disputa por el poder.

El tercer campo es el del territorio industrializado, que incluye vocablos como «*refinería*», «*planta*», «*complejo*», «*mo-*

*modernización», «contratistas», «seguridad industrial», «barrio petrolero».* Este campo organiza la mirada que los entrevistados tienen sobre la ciudad y sobre su relación con Ecopetrol. En un fragmento donde alguien afirma *«la refinería es Barranca»*, se hace evidente que el territorio no se concibe por fuera de la industria, sino que se piensa desde ella y a través de ella. Otros entrevistados mencionan *«cuando modernizaron, todo cambió»* o *«la ciudad gira alrededor del complejo»*, mostrando que este campo semántico estructura la percepción de continuidad y ruptura, de abundancia y precarización, de pertenencia y exclusión. Es un campo que no solo describe espacios físicos, sino que delimita imaginarios sociales sobre quién pertenece al mundo petrolero y quién queda fuera de él.

El entrecruzamiento de estos tres campos produce un cuarto campo implícito, que atraviesa todo el discurso: el campo de la legitimidad. No se nombra de manera directa, pero emerge en expresiones que diferencian a los actores según su valor moral o su derecho a hablar: *«el trabajador sí sabe cómo es esto»*, *«la USO siempre ha dado la cara»*, *«los de afuera vienen a llevarse todo»*, *«el Estado no cumplió»*. En estas formulaciones se observa cómo cada término se ubica dentro de redes semánticas que ordenan la vida social: el trabajador como sujeto legítimo, la empresa como actor ambi-

valente, el contratista como intruso, el Estado como garante fallido y la comunidad como depositaria de la memoria de la ciudad.

Los campos semánticos en Barrancabermeja no actúan como mapas conceptuales estáticos. Son dispositivos sociocognitivos que organizan relaciones de poder, definen quién puede hablar y desde dónde, y establecen los límites simbólicos del conflicto. Funcionan como la arquitectura profunda que permitirá comprender, en los niveles discursivo y sociopolítico, cómo la ciudad elabora sus narrativas sobre la industria, la lucha obrera y la violencia que la ha marcado durante décadas.

En el discurso de Barrancabermeja algunos términos adquieren una función organizadora que va más allá de su significado literal. Son palabras que cristalizan experiencias históricas, condensan relaciones de poder y permiten que los entrevistados articulen su posición frente a la industria petrolera y al Estado. Funcionan como ejes interpretativos que orientan la lectura del conflicto y, en muchos casos, operan como marcas de identidad colectiva. No son simples descriptores de eventos, sino dispositivos de interpretación que permiten ordenar el mundo social y situarse en él.

Uno de estos términos clave es dignidad. Aunque no siempre aparece de manera explícita, emerge en expresiones como

«uno peleaba por la dignidad» o «a nosotros nos quitaron la dignidad cuando nos sacaron». Dignidad no designa un atributo individual. Es un principio moral que organiza la relación con el trabajo y que funciona como frontera entre lo aceptable y lo intolerable. Su presencia en el discurso revela que el conflicto laboral no se vive únicamente en términos económicos, sino como una disputa por el reconocimiento y la valoración social del trabajador petrolero.

Otro término central es derechos. Los entrevistados lo mencionan en contextos donde evocan tanto conquistas sindicales como pérdidas recientes. En frases como «los derechos nos costaron muertos» o «uno sentía que estaba defendiendo derechos de todos», la palabra activa una memoria colectiva de lucha que vincula a las generaciones actuales con las del pasado. Derechos funciona, por lo tanto, como una categoría que conecta el presente con la historia de la USO y que legitima la acción colectiva como mecanismo para enfrentar transformaciones impuestas desde arriba.

También destaca la palabra modernización, que adquiere un doble sentido. Para algunos entrevistados alude a la renovación tecnológica necesaria, pero para la mayoría aparece asociada a procesos de exclusión laboral, como cuando alguien afirma «modernizaron para sacar gente» o «la modernización no era

para nosotros». Este término se convierte en un significante disputado, donde la empresa promueve una lectura positiva mientras que los trabajadores la interpretan como una narrativa que encubre decisiones que precarizaron la fuerza laboral.

Seguridad es otro término con múltiples capas de significado. En unos casos remite a la protección dentro de la planta, en otros al control armado que caracterizó al territorio durante los años más duros de la violencia. Se escucha en frases como «seguridad había, pero no la que uno quería» o «uno buscaba seguridad en el trabajo, no afuera». Su ambivalencia muestra cómo los entrevistados viven simultáneamente la seguridad como derecho laboral y como imposición militar, y cómo esta palabra sintetiza tensiones entre protección, vigilancia y miedo.

Aparece también el término comunidad, que opera como un sujeto colectivo y como referencia moral. En expresiones como «la comunidad siempre ha sido la que paga las consecuencias» o «aquí la comunidad se ha unido cuando toca», la palabra se convierte en punto de anclaje para describir relaciones entre la industria y el entorno social. Comunidad no significa únicamente un conjunto de personas, sino una experiencia compartida de afectación, resistencia y pertenencia territorial.

En conjunto, estos términos funcionan

como marcos cognitivos que permiten a los entrevistados interpretar su experiencia en la ciudad petrolera. Son conceptos que estructuran la narrativa del conflicto y que permiten comprender cómo la población de Barrancabermeja da sentido a la historia laboral, a la violencia y a las transformaciones de la industria. Su fuerza radica en que, al ser pronunciados, no solo nombran realidades, las producen discursivamente y las inscriben en un horizonte de significado compartido.

### 3. Metáforas y encuadres valorativos

Las metáforas presentes en el corpus no son adornos retóricos ni expresiones fortuitas. Operan como estructuras cognitivas que permiten a los entrevistados ordenar la experiencia petrolera y dotarla de sentido. A través de ellas narran la relación con Ecopetrol, con el sindicato, con la ciudad y consigo mismos. Las metáforas condensan afectos, tensiones y memorias, y marcan la manera en que los actores se ubican dentro del conflicto. En Barrancabermeja, estas metáforas activan encuadres valorativos que revelan cómo se construyen legitimidades, cómo se evocan pérdidas y cómo se proyectan horizontes de posibilidad.

El trabajo petrolero se expresa mediante un conjunto de metáforas que lo representan como esfuerzo corporal ex-

tremo, como batalla sostenida y como fundamento vital. En varias entrevistas, la idea de levantar la ciudad aparece de manera recurrente, como cuando un entrevistado afirma que «*a Barranca la levantamos con sudor*». La metáfora del sudor no solo enfatiza el carácter físico del trabajo, sino que establece una equivalencia entre el esfuerzo individual y la construcción de un bien colectivo. Trabajar es, en ese sentido, un acto de producción de ciudad y de historia.

Otra metáfora relevante es la del aguante. Expresiones como «*tocaba aguantar lo que fuera, uno aguantaba, porque era el trabajo*» o «*el aguante era parte del oficio*» revelan que el trabajo se conceptualiza como resistencia. El aguante funciona aquí como una forma de virtud obrera, una capacidad que legitima al trabajador y que, a la vez, expone la precariedad a la que estuvo sometido. Esta metáfora convierte el sufrimiento en un marcador de pertenencia y, al mismo tiempo, en evidencia de desigualdad.

Aparece además la metáfora de la familia petrolera. Algunos entrevistados afirman «*esto era una familia*» o «*uno se sentía parte de una familia grande*». Esta formulación no solo comunica cercanía afectiva, sino que sugiere un orden moral donde la solidaridad, el cuidado y la lealtad son valores centrales. La metáfora familiar también funciona

como crítica implícita, pues varios entrevistados la evocan para contrastarla con el presente, como cuando afirman *«esa familia la rompieron con la tercerización»*. Se trata de un encuadre que reconstruye el pasado como un tiempo de cohesión social y que, al mismo tiempo, sirve para evaluar negativamente los cambios introducidos por la modernización.

Por último, se observa la metáfora del trabajo como vida. En frases como *«esto era la vida de uno»* o *«uno vivía para esto»*, el trabajo deja de ser una actividad y se convierte en un eje existencial. Esta metáfora produce una equivalencia entre identidad personal y actividad petrolera, donde la pérdida del empleo no implica solo un daño económico, sino una ruptura vital. Desde esta perspectiva, el conflicto laboral se vuelve un conflicto ontológico, pues afecta la manera en que las personas se narran a sí mismas y a su lugar en la ciudad.

Estas metáforas no solo organizan el significado del trabajo. Constituyen piezas clave del imaginario petrolero de Barrancabermeja y articulan la relación entre esfuerzo, dignidad y conflicto. A través de ellas los entrevistados traducen sus experiencias en un lenguaje cargado de memoria y afecto que permite comprender por qué el trabajo, en este territorio, es mucho más que un empleo. Las metáforas de la lucha y la resistencia

constituyen uno de los ejes más potentes del discurso en Barrancabermeja. No aparecen como recursos retóricos aislados, sino como estructuras simbólicas que articulan memoria, identidad y acción colectiva. A través de ellas, los entrevistados narran la experiencia obrera como una confrontación continua, donde defender derechos, sostener el trabajo y enfrentar la violencia se integran en un mismo horizonte de sentido. Estas metáforas, profundamente arraigadas en la historia sindical de la ciudad, permiten comprender que el conflicto laboral nunca fue separado del conflicto político y armado, sino parte de un mismo campo de disputa por la supervivencia colectiva.

Una de las metáforas más presentes es la de la pelea. Los entrevistados hablan de *«pelearla»*, *«dar la pelea»*, *«seguir peleando»* o *«no dejarse caer»*. La pelea no se limita a un enfrentamiento físico ni a un momento puntual, funciona como principio vital que define la forma de relacionarse con la empresa, con el Estado y con los actores armados. Cuando alguien afirma *«esto aquí siempre fue de pelearla»*, está expresando que la resistencia no fue un acto excepcional, sino una condición estructural del trabajo petrolero. En esta metáfora, la lucha se vuelve una práctica cotidiana, una forma de habitar la industria y de sostener la dignidad frente a amenazas múltiples. Otra metáfora central es la de la guerra.

Aparece de forma explícita en frases como *«esto era una guerra social»* o *«uno vivía en guerra, aunque estuviera trabajando»*, donde se expresa que la vida laboral estuvo atravesada por un clima de hostilidad permanente. La guerra no se refiere aquí solamente al conflicto armado; se utiliza para describir la relación con las directivas de la empresa, con actores privatizadores y con estructuras estatales que, según varios entrevistados, vulneraron derechos adquiridos. La metáfora bélica amplifica la percepción de asimetría de poder y muestra que la experiencia obrera se entiende como un combate desigual que exigió organización colectiva.

También destaca la metáfora del aguantar, que no solo se asocia al trabajo sino a la resistencia política. Cuando los entrevistados dicen *«tocaba aguantar, porque si no, nos tumbaban»* o *«había que aguantar para que no desaparecieran la Unión»*, el aguante se transforma en una forma de resistencia moral frente a la presión externa. Esta metáfora convierte la resiliencia en virtud y, al mismo tiempo, denuncia la carga injusta que debieron soportar los trabajadores en momentos de represión y de violencia paramilitar. El aguante se vuelve así una figura doble: expresa fortaleza y, a la vez, revela la crudeza del entorno.

Una metáfora especialmente significati-

va es la del cuerpo como campo de resistencia. Aparece cuando los entrevistados hablan de *«poner el pecho»*, *«dar la cara»*, *«meter el cuerpo»* o *«cargar con todo»*. Estas expresiones sitúan el conflicto no solo en el plano político, sino en el corporal. La lucha se inscribe en el cuerpo del trabajador, que se vuelve vehículo y frontera de resistencia. Dar la cara, por ejemplo, no es únicamente asumir responsabilidad, es exponerse físicamente en un contexto donde la defensa del sindicato podía implicar riesgo de vida. Esta metáfora corporaliza la resistencia y permite comprender por qué la memoria del conflicto está tan ligada a experiencias de temor, sacrificio y pérdida.

Finalmente, se encuentra la metáfora del camino. En expresiones como *«esto ha sido un camino largo, el camino se fue poniendo más duro»* o *«hay que seguir el camino que dejaron los viejos»*, la lucha se presenta como trayectoria, como herencia y como continuidad generacional. Este encuadre le otorga historicidad a la resistencia y la inscribe dentro de una narrativa donde cada generación es depositaria de la anterior. La idea del camino construye un sentido de propósito colectivo y traduce la experiencia del conflicto en una ruta compartida.

En conjunto, estas metáforas constru-

yen un encuadre valorativo que presenta la resistencia no como reacción ocasional, sino como forma de vida y como proyecto político. A través de ellas los entrevistados articulan la memoria obrera, legitiman la acción colectiva y dotan de sentido a los sacrificios que han acompañado la historia del sindicalismo en Barrancabermeja. Gracias a estas metáforas es posible comprender que la lucha no es solo un hecho del pasado, constituye una gramática desde la cual la ciudad interpreta su presente y proyecta sus posibilidades de cambio.

En Barrancabermeja, la ciudad no se describe únicamente a través de su geografía o de su infraestructura industrial. Se narra mediante metáforas que condensan la experiencia histórica de vivir en un territorio configurado por el petróleo y por las tensiones que este ha producido. Estas metáforas no solo capturan la forma en que los habitantes imaginan la ciudad, sino también la manera en que interpretan las transformaciones derivadas de la modernización, la privatización y los ciclos de violencia. Barrancabermeja aparece en el discurso como un organismo vivo, como un cuerpo herido y como un espacio en disputa permanente, metáforas que funcionan como encuadres valorativos desde los cuales se evalúan la industria, el Estado y el futuro del territorio.

Una de las metáforas más recurren-

tes es la de la ciudad como corazón. En varias entrevistas los participantes afirman «*la refinería es el corazón de Barranca*» o «*si la refinería para, la ciudad se muere*». Esta metáfora construye una relación orgánica entre industria y territorio, donde la ciudad se concibe como cuerpo cuya vida depende del latido industrial. Esta imagen no solo resalta la centralidad económica del complejo refinador, sino su capacidad para generar identidad. Sin embargo, esta misma metáfora puede volverse ambivalente: si la refinería es el corazón, cualquier proceso de modernización o de reducción laboral se experimenta como una amenaza al organismo colectivo. De este modo, la metáfora del corazón organiza tanto el orgullo petrolero como el temor a la pérdida.

Otra metáfora relevante es la de Barrancabermeja como motor. Algunos entrevistados afirman «*Barranca era el motor del país*» o «*esto movía a Colombia*». En esta formulación el territorio se inscribe dentro de un imaginario nacional donde la ciudad no es periferia sino centro productivo. La metáfora del motor enfatiza la idea de fuerza, movimiento y capacidad de impulsar a otros. A su vez, esta imagen también contiene una crítica implícita, pues varios entrevistados contrastan ese pasado con el presente, como cuando dicen «*el motor lo dejaron dañado*» o «*ya no nos ven como motor de nada*». La metáfora, en-

tonces, funciona como recordatorio de una época en que la ciudad era reconocida por su aporte económico y como denuncia de la desafección del Estado y de la empresa en el presente.

También aparece la metáfora de Barrancabermeja como campo de batalla. En frases como «*esto era un campo de guerra*» o «*la ciudad era una trinchera*», la metáfora territorializa el conflicto armado y sindical. No se trata de una figura retórica, expresa cómo la violencia se vivió en el espacio cotidiano. La ciudad se convierte en escenario de confrontación donde se cruzan actores armados, fuerzas estatales y trabajadores que debían seguir cumpliendo sus labores en medio del riesgo. Esta metáfora convierte a Barrancabermeja en un territorio sitiado, donde la vida diaria estaba atravesada por el miedo, el control y la vigilancia. También refuerza la idea de que el conflicto petrolero no puede comprenderse por fuera de los dispositivos de guerra que impactaron el Magdalena Medio.

Una metáfora especialmente significativa es la de la ciudad como vitrina. Algunos entrevistados mencionan que «nos vendieron la idea de una ciudad moderna» o «nos mostraban una vitrina que no era la realidad». Aquí la metáfora denuncia la construcción de un imaginario oficial producido por la empresa y por sectores del Estado, un imagina-

rio que prometía progreso, desarrollo y modernidad tecnológica. La vitrina representa una superficie brillante que oculta desigualdades, precarizaciones y tensiones laborales. Funciona como crítica al discurso hegemónico del progreso, mostrando que la modernización no fue experimentada de manera homogénea, sino como un proceso que excluyó a gran parte de la población.

En sentido se destaca la metáfora de la ciudad como puerta, utilizada en expresiones como «*este era el portal del petróleo*» o «*esta puerta se fue cerrando para nosotros*». La metáfora de la puerta organiza narrativas sobre oportunidad y exclusión. En el pasado, la ciudad aparece como puerta abierta que ofrecía trabajo, movilidad social y sentido de pertenencia. En el presente, esa puerta se percibe como cerrada o custodiada por intereses externos, lo que señala una fractura en la relación entre industria y comunidad. Esta metáfora expresa cambios en la estructura económica, pero también en la distribución del poder.

Las metáforas de la ciudad petrolera y del «progreso» permiten comprender cómo Barrancabermeja construye su identidad desde la tensión entre orgullo industrial, recuerdo de la violencia y desencanto frente a la modernización. Son figuras que ordenan la memoria colectiva y que actúan como marcos

interpretativos que permiten leer el conflicto territorial no solo como un fenómeno económico, sino como una disputa simbólica por el sentido de la ciudad y su futuro.

#### 4. Agencia gramatical y posicionamientos

En las entrevistas de Barrancabermeja la distribución de la agencia gramatical no es neutral. A través de quién aparece como sujeto de los verbos, quién queda reducido a objeto o a complemento y quién se diluye en construcciones impersonales, se organiza una cartografía del poder. La gramática se vuelve un espejo de las relaciones asimétricas entre trabajadores, empresa, Estado, actores armados y comunidad. Cuando los entrevistados dicen «*nos tocó aguantar*», «*nos fueron sacando*», «*nos cambiaron las condiciones*», el pronombre nos ocupa el lugar de paciente colectivo. La comunidad obrera no aparece como quien decide, sino como quien recibe el impacto de decisiones ajenas. La forma verbal refuerza la idea de sometimiento a fuerzas que se perciben como externas o superiores.

En contraste, la empresa tiende a ser enunciada como sujeto cuando se habla de acciones estructurales. En frases como «*Ecopetrol decidió modernizar, la empresa empezó a meter contratistas*» o «*la refinería cambió la forma de traba-*

*jar*», la agencia recae en un actor institucional que actúa sobre un colectivo más amplio. Incluso cuando el nombre de la empresa se sustituye por formas como «*ellos*» o «*la administración*», la estructura gramatical mantiene la asimetría. El sujeto explícito o implícito es quien decide, planifica y ejecuta, mientras que trabajadores y comunidades son afectados por esas decisiones. La gramática no solo relata hechos, confirma la sensación de que el poder se ejerce desde arriba.

El Estado ocupa una posición ambivalente. En ocasiones aparece como sujeto enunciator de políticas, como cuando alguien afirma «*el gobierno abrió la puerta a la privatización*» o «*el Estado permitió que hicieran eso*». En otros momentos se diluye en formas impersonales y pasivas que atenúan su responsabilidad, por ejemplo, cuando se dice «*se empezó a hablar de privatización*» o «*se fueron perdiendo los derechos*». En estas construcciones el agente desaparece y lo que queda es un proceso sin rostro que sucede por sí mismo. La pasiva sin agente se convierte en recurso sintáctico para nombrar cambios estructurales sin señalar directamente a quienes los impulsaron.

Los actores armados suelen aparecer como sujetos de verbos relacionados con amenaza, control y daño. Expresiones como «*llegaron los grupos*», «*manda-*

*ban mensajes», «controlaban los barrios» o «hacían listas» muestran una agencia clara y directa. Aquí no se recurre a formas impersonales. La acción se atribuye a un sujeto reconocible, aunque se le nombre de manera genérica como «los grupos», «esa gente» o «los de la noche». Esta precisión contrasta con la difuminación frecuente del Estado, lo que sugiere que para los entrevistados la violencia paraestatal tiene un rostro más nítido que las decisiones institucionales que la permitieron o toleraron.*

El sindicato y los trabajadores, en cambio, alternan entre posiciones de sujeto y de objeto. Cuando se trata de describir la organización y la resistencia, aparecen como agentes: *«nos organizamos», «paramos la planta», «no dejamos que nos pisotearan, salimos a la calle»*. En estos casos la gramática devuelve agencia a los sujetos colectivos y los ubica como protagonistas de la historia. Sin embargo, cuando los relatos se centran en la represión o en la precarización laboral, el mismo grupo pasa a ser objeto de verbos como *«desmontar», «perseguir», «señalar», «sacar»*. Frases como *«al sindicato lo fueron acabando» o «a los líderes los marcaron»* desplazan la agencia hacia otros actores y colocan al movimiento obrero en una posición de vulnerabilidad.

Finalmente, la comunidad aparece muchas veces sin sujeto explícito, a través de formas colectivas difusas como *«la*

*gente», «todo el mundo», «el pueblo»*. En expresiones como *«la gente quedó con miedo» o «el pueblo se fue cansando»*, la comunidad es paciente de procesos que se describen como acumulativos e inevitables. No obstante, en algunos momentos la comunidad recupera agencia cuando se recuerda que *«la comunidad se paró, la gente se unió» o «el barrio decidió no dejarse»*. Estas oscilaciones muestran que la agencia gramatical no está fija, sino que refleja la tensión entre la experiencia de ser objeto de decisiones externas y la memoria de haber sido sujeto de acción colectiva.

En conjunto, la forma en que se distribuye la agencia gramatical en las entrevistas de Barrancabermeja revela una estructura profunda de posicionamientos. Empresa, Estado y actores armados tienden a ocupar el lugar de quienes actúan sobre otros, mientras que trabajadores y comunidades transitan entre ser sujetos de resistencia y objetos de políticas, violencias o modernizaciones impuestas. La gramática del discurso confirma así que el conflicto petrolero no solo se narra, se vive como una experiencia de desigualdad en la capacidad de decidir sobre el propio destino.

En el corpus de Barrancabermeja las nominalizaciones funcionan como mecanismos discursivos que convierten procesos conflictivos en entidades aparentemente neutras. Al transformar

verbos en sustantivos, los entrevistados ubican ciertos fenómenos dentro de un plano abstracto que parece operar por sí mismo, sin agentes visibles. Este recurso lingüístico no elimina la violencia o la precarización que se describe, pero sí altera la forma en que se distribuye la responsabilidad. Las nominalizaciones producen la sensación de que los cambios fueron inevitables, casi naturales, lo que refleja la percepción de enfrentarse a fuerzas estructurales que desbordan la capacidad de acción de los sujetos.

Un ejemplo claro es el uso recurrente de privatización como sustantivo autónomo, sin referencia explícita a quienes impulsaron ese proceso. Los entrevistados dicen «la privatización vino», «la privatización nos golpeó», «la privatización acabó con muchos derechos». En estas formulaciones el sustantivo adquiere agencia propia, como si se tratara de un fenómeno climático o de un movimiento externo que no depende de decisiones políticas. La nominalización invisibiliza a los actores estatales y empresariales que promovieron las reformas, y convierte un proceso histórico en una entidad casi natural que simplemente «llegó». Esta estrategia discursiva revela la asimetría de poder: la población no se describe enfrentando a responsables concretos, sino a una abstracción incontrolable. Algo similar ocurre con modernización.

Aunque algunos entrevistados mencionan actores explícitos, en muchos fragmentos aparece como entidad independiente: «la modernización cambió todo», con «la modernización se perdió la estabilidad», «la modernización trajo problemas». El término se desplaza del plano técnico al simbólico, donde representa un conjunto de transformaciones que exceden la voluntad de los trabajadores. Al nominalizarla, los hablantes expresan la sensación de que la modernización es un proceso inevitable que se impone desde afuera y ante el cual la capacidad de resistencia es limitada. Esta operación lingüística no disminuye la carga crítica del discurso, pero sí traduce el conflicto en un registro donde los responsables concretos quedan desdibujados.

Otra nominalización significativa es violencia. En expresiones como «la violencia no dejaba vivir», «la violencia se metió en todo», «la violencia nos partió como ciudad», el término opera como fuerza omnipresente que atraviesa la vida diaria. La violencia aparece como entidad autónoma, no como acción ejercida por actores específicos. La nominalización permite nombrar el miedo, el daño y la pérdida sin señalar directamente a los perpetradores, lo que puede reflejar tanto autocensura aprendida como persistencia del temor. En estos casos la nominalización funciona como estrategia de protección discursi-

va y, al mismo tiempo, como evidencia de la profundidad del trauma.

También es frecuente la nominalización de términos como deterioro, cambio o desmonte. Los entrevistados dicen «el desmonte de la planta», «el deterioro del trabajo», «el cambio fue duro», evitando la referencia directa a quienes ejecutaron esas acciones. Estas nominalizaciones convierten el conflicto laboral en un proceso sin agentes, donde las decisiones parecen provenir de una lógica técnica o administrativa, no de voluntades políticas. De este modo, la estructura sintáctica reproduce una experiencia de desposesión: los sujetos no solo perdieron derechos, también la posibilidad de nombrar con precisión a quienes los afectaron.

La nominalización de palabras como crecimiento, desarrollo o progreso también merece atención. En expresiones como «el progreso no nos incluyó» o «el desarrollo vino para otros», estas categorías se utilizan como entidades que circulan selectivamente. El discurso adopta el lenguaje oficial de la industria y del Estado, pero lo resignifica mediante una crítica implícita: el progreso no fue universal, el desarrollo no fue neutral. La nominalización convierte esos términos en dispositivos que permiten contrastar un ideal prometido con una experiencia vivida de exclusión.

En conjunto, las nominalizaciones pre-

sentadas en el corpus naturalizan procesos que en realidad fueron conflictivos y disputados. No borran el conflicto, pero lo expresan en un nivel de abstracción que refleja la percepción de estar frente a fuerzas estructurales más grandes que los actores locales. A través de estas construcciones, los entrevistados dan cuenta de una historia donde las decisiones que transformaron el territorio se vivieron como inevitables, opacas y, en muchos casos, inapelables.

En el corpus de Barrancabermeja las construcciones en voz pasiva y las formas impersonales constituyen un mecanismo discursivo fundamental para diluir o desplazar responsabilidades en procesos de alto conflicto. La pasiva sin agente aparece de manera recurrente cuando los entrevistados narran episodios asociados a pérdida de derechos, reformas estructurales o violencia. En expresiones como «se fueron perdiendo los beneficios», «se acabaron los puestos de planta», «se fue dañando la ciudad», la acción se presenta como un proceso que ocurre por sí mismo, sin un sujeto claramente identificable. Estas formas no minimizan la gravedad de lo ocurrido, pero sí traducen el conflicto a un plano donde las fuerzas que actuaron parecen inasibles. La gramática refleja, así, una experiencia de opacidad institucional. Muchos de estos procesos se vivieron como decisiones tomadas lejos del territorio por actores que no daban la cara, lo que

explica la frecuencia de construcciones que borran al agente. Frente a una privatización percibida como inevitable, la pasiva no solo funciona como recurso lingüístico, sino como reflejo de una vivencia política de desposesión.

A esta estrategia se suma el uso sistemático de atenuaciones, especialmente en temas de riesgo, amenazas y violencia armada. Los entrevistados tienden a recurrir a expresiones como «pasaban cosas», «hubo momentos difíciles», «la situación estaba pesada», que permiten nombrar lo ocurrido sin exponerse a una identificación directa con eventos o actores peligrosos. En un contexto donde la memoria del miedo sigue activa, las atenuaciones no implican falta de claridad, sino una forma de protegerse discursivamente, incluso muchos años después. Esto es evidente en fragmentos como «uno sabía cómo estaba la cosa, mejor no meterse en detalles», donde el hablante marca límites sobre lo que puede o debe explicitar. Las atenuaciones funcionan entonces como fronteras discursivas que responden tanto a condiciones históricas de violencia como a la persistencia de relaciones de poder que no han desaparecido del todo.

Las responsabilidades difusas constituyen, finalmente, un rasgo estructural del discurso. Cuando se habla del Estado, de la empresa o de los grupos

armados, los sujetos se desdibujan mediante el uso de terceros genéricos como «ellos», «esa gente», «los de arriba», «los grupos», que operan como categorías amplias que evitan la especificación de actores concretos. En frases como «ellos cambiaron todo», «esa gente mandaba», «los de arriba decidieron por nosotros», la agencia se mantiene, pero la identidad del agente permanece difusa. Este recurso no es simple vaguedad: revela la percepción de que los actores que ejercían poder sobre la ciudad actuaban desde posiciones inaccesibles, con capacidad de decisión, pero sin responsabilidad visible. La difuminación sintáctica reproduce la sensación de haber enfrentado un poder distante e impune, al que se podía resistir, pero difícilmente señalar sin riesgo.

Estas operaciones lingüísticas (pasivas, atenuaciones y agentes difusos) no son debilidades expresivas. Constituyen la huella discursiva de un territorio atravesado por relaciones de poder asimétricas y por formas de violencia en las que nombrar directamente implicaba peligro. La estructura gramatical al suavizar, desplazar o diluir responsabilidades, revela cómo la ciudad experimentó transformaciones profundas sin claridad sobre quién las impulsaba y sin condiciones plenas para interpelarlas directamente. La sintaxis se vuelve así un índice del conflicto: lo que no se

nombra por completo dice tanto como lo que sí puede ser dicho.

## 5. Coherencia local y global

En las entrevistas de Barrancabermeja los conectores causales y concesivos desempeñan un papel central en la forma en que los hablantes organizan sus explicaciones sobre el conflicto petrolero. A través de ellos se construyen cadenas de sentido que permiten vincular hechos dispersos, justificar acciones e interpretar transformaciones del territorio. Lejos de ser simples nexos gramaticales, estos conectores revelan cómo los entrevistados atribuyen causalidad, cómo distribuyen responsabilidades y cómo expresan tensiones entre expectativas y resultados. La coherencia local del discurso se sostiene precisamente en estas articulaciones, que muestran una narrativa donde causas y efectos están profundamente marcados por la experiencia obrera y por la memoria de la violencia.

Los conectores causales aparecen con mayor intensidad cuando los entrevistados explican pérdidas laborales, transformaciones tecnológicas o episodios de represión. En frases como «nos tocó adaptarnos, porque trajeron la tercerización, se dañó todo, porque empezaron a sacar a la gente», o «la cosa se puso más dura, porque los grupos entraron», la causalidad se expresa

de manera directa y contundente. Estos conectores permiten que el hablante construya una secuencia donde las acciones de actores externos producen consecuencias inmediatas y negativas sobre el colectivo. La causalidad no se presenta como un proceso abstracto, sino como una experiencia vivida que impacta el cuerpo, el trabajo y la vida cotidiana. Cuando alguien dice «la empresa cambió y por eso tocó pelearla más», no solo establece una relación de causa y efecto; el conector por eso abre una ventana hacia la lógica interna que sostiene la resistencia obrera.

Los conectores concesivos, por su parte, revelan tensiones profundas entre reconocimiento y crítica. En expresiones como «aunque dijeron que era modernización, nos quedamos por fuera, aunque hablaban de progreso, eso no llegó al barrio» o «aunque había seguridad en la planta, afuera era otra cosa», la concesión funciona como mecanismo para desmontar discursos hegemónicos sin negar que existieron. El entrevistado, aunque permite reconocer la legitimidad del discurso oficial al mismo tiempo que se lo disputa desde la experiencia concreta. Los entrevistados no desmienten directamente las narrativas empresariales, las reinterpretan, mostrando que el progreso prometido no coincidió con la realidad vivida. En estas estructuras la concesión se convierte en estrategia de resistencia dis-

cursiva, porque permite contraponer lo dicho por el poder con lo experimentado por los trabajadores.

Es notable que varios entrevistados utilicen conectores causales seguidos de explicaciones ampliadas, en las que la causalidad se expande hacia procesos históricos de larga duración. En fragmentos como «porque esto siempre fue una lucha», «porque aquí todo ha sido a pulso», «porque así era la ciudad», no introduce una causa concreta, sino un marco interpretativo más amplio. Estos usos dan cuenta de una causalidad histórica, donde los eventos presentes se comprenden a la luz de dinámicas que vienen de décadas atrás. La causalidad no explica solo un hecho puntual, organiza una narrativa identitaria donde la lucha aparece como rasgo estructural del territorio.

En síntesis, los conectores causales y concesivos permiten observar cómo los entrevistados construyen coherencia local al narrar su experiencia. Son claves para entender cómo articulan hechos, cómo justifican acciones colectivas y cómo disputan el sentido de discursos institucionales. A través de ellos se revela la profundidad interpretativa con la que Barrancabermeja piensa su historia: el conflicto no se narra como una suma de eventos aislados, sino como un entramado de causas, consecuencias y contradicciones que, una vez hiladas por el hablante, producen un

relato cargado de memoria y conciencia crítica.

Los relatos de Barrancabermeja se estructuran en torno a episodios que funcionan como hitos narrativos y que organizan la memoria colectiva del territorio. Estos episodios no se presentan como acontecimientos aislados, sino como secuencias cargadas de significado que los entrevistados reconstruyen para explicar la conformación del conflicto social, la transformación del trabajo y el lugar que ocupa la ciudad dentro de la industria petrolera. Huelgas, amenazas, procesos de privatización y experiencias de represión constituyen los ejes sobre los cuales se articula la narrativa, y su presencia constante en el discurso revela que la historia de Barrancabermeja se cuenta a través de estos acontecimientos críticos.

La huelga aparece como el episodio fundante de la identidad obrera. Los entrevistados no la describen solamente como una herramienta sindical, sino como un acontecimiento pedagógico que marcó generaciones. En varias voces se escucha que «uno creció viendo a los mayores parar cuando tocaba» o que «la huelga era la forma de decir que uno valía». Esta narrativa otorga a la huelga un sentido profundamente formativo: fue escuela de resistencia, mecanismo de defensa y ritual de pertenencia. Incluso cuando se habla de huelgas específicas, los entrevistados

no detallan tanto la cronología como el clima emocional. Un trabajador afirma: «esa huelga nos enseñó a perder el miedo», mientras otro recuerda «uno sabía que, si se paraba la planta, toda la ciudad respiraba distinto». La huelga adquiere así una dimensión territorial donde la identidad barranqueña se funde con la acción colectiva.

En contraste, las amenazas aparecen como episodios que fracturan ese mismo tejido colectivo. Los entrevistados narran las amenazas de manera fragmentada, con silencios, vacilaciones y atenuaciones, pero sin restar fuerza al impacto que tuvieron. Frases como «aquí empezaron las llamadas y uno se asustaba, tocaba no hablar mucho, porque lo marcaban»

o «uno se acostumbró a vivir con miedo» revelan que la amenaza operaba como forma de disciplinamiento. Lo significativo es que estas amenazas no se presentan como hechos aislados, sino como parte de un ambiente. Un entrevistado dice: «eso estaba en el aire», otro recuerda «uno sabía cuándo la cosa se estaba poniendo fea». La amenaza es narrada como atmósfera, como condición permanente, no como evento puntual. Esta forma narrativa muestra que la violencia no se experimentaba únicamente en actos explícitos, sino también en lo que los entrevistados llaman «la presión», «la sombra»,

«la mirada de los que mandaban».

Los episodios vinculados a la privatización ocupan un lugar central en la memoria del conflicto, y se narran con un tono distinto: aquí aparece la mezcla de desilusión, indignación y distancia respecto a las decisiones tomadas fuera del territorio. Un entrevistado afirma: «la privatización nos cayó encima», otro dice «uno no entendía quién decidió eso», y un tercero resume «ahí fue cuando empezó la caída». La narrativa no se construye sobre detalles técnicos, sino sobre la sensación de que el proceso fue impuesto. En varias entrevistas aparece la frase «eso vino de arriba», que funciona como marco interpretativo donde el territorio queda situado como receptor de políticas ajenas. La privatización es recordada como punto de quiebre que reconfiguró todo: el trabajo, la seguridad laboral, la estructura de la planta, la relación con los contratistas y la cohesión del movimiento sindical. Se trata de un episodio que se narra con la densidad de un trauma colectivo.

La represión, por su parte, aparece como un episodio que combina dimensiones laborales, políticas y armadas. No es presentada únicamente como acción del Estado, sino también como intervención de grupos paramilitares y de estructuras empresariales que, según los entrevistados, cooperaron de

distintas maneras. Las voces dicen «a los líderes los callaron», «uno no podía aparecer mucho», «al sindicato lo quisieron desaparecer». La represión se narra mediante imágenes de vigilancia, listas, señalamientos y silencios obligados. Los entrevistados no siempre dan detalles, pero la repetición de expresiones como «fue duro», «fue bravo», «fue oscuro», revela que la represión operó como mecanismo de reorganización del poder. En algunos relatos se recuerda cómo «se llevaron gente», «hicieron limpieza», «decían que eran problemas de orden», expresiones que muestran que la represión era narrada desde el eufemismo oficial, mientras se vivía como violencia concreta.

Estos episodios no aparecen como historias independientes. Se entrelazan en una trama narrativa donde huelga, amenaza, privatización y represión construyen una secuencia lógica: primero la lucha, luego la reacción violenta, después las reformas y finalmente el debilitamiento del movimiento obrero. La narrativa de los entrevistados articula estos episodios como proceso histórico, no como acumulación de eventos. En palabras de un trabajador, «primero nos enseñaron a luchar, después nos quisieron quebrar, y al final nos cambiaron todo». De este modo, los episodios narrativos no solo explican el conflicto; lo constituyen discursivamente como trama coherente donde la historia de

Barrancabermeja se entiende a través de sus momentos de tensión más aguda.

Esta coherencia narrativa revela que el discurso de los entrevistados no es un conjunto disperso de recuerdos, es una interpretación situada, una forma de ordenar la experiencia del conflicto petrolero y de producir memoria colectiva. Los episodios funcionan como anclas narrativas que permiten conectar pasado y presente, y que dan cuenta de cómo el territorio se representa a sí mismo: como ciudad marcada por la lucha, herida por la violencia y transformada por decisiones que vinieron de lejos, pero que dejaron una huella profunda en la vida de quienes la habitan.

El análisis de las entrevistas de Barrancabermeja permite identificar un conjunto de macroproposiciones que condensan los significados globales del discurso. No se trata de simples resúmenes temáticos, sino de estructuras semánticas amplias que organizan la interpretación del conflicto, del trabajo y del territorio. Estas macroproposiciones capturan cómo los entrevistados articulan sus experiencias individuales con marcos colectivos de memoria y poder:

## Primera

## macroproposición

### **i. El trabajo petrolero es la base de la identidad y la dignidad obrera, y su transformación se vivió como pérdida material y simbólica.**

Las entrevistas insisten en que el trabajo no era solo empleo, sino identidad. En expresiones como «esto era la vida de uno, uno se hacía respetar, porque tenía trabajo de planta» o «el trabajo era lo que nos daba nombre», se observa que la estabilidad y el contrato directo funcionaban como ejes de reconocimiento social. Cuando estas condiciones cambiaron, la percepción fue de despojo, no solo económico sino moral. La idea de que «con la tercerización nos quitaron la dignidad», sintetiza este vínculo entre trabajo y valor personal.

### **ii. La lucha ha sido una práctica histórica y necesaria, y la huelga constituye el mecanismo central de resistencia colectiva.**

Los relatos afirman que la lucha no fue excepcional, sino cotidiana. La frase «esto aquí siempre fue de pelearla» resume una pedagogía intergeneracional en la que la huelga y la organización sindical no se vivieron como interrupciones del orden laboral, sino como parte del orden mismo. La narrativa de «parar cuando tocaba» o «uno aprendió a no dejarse» muestra que la lucha

se integró en el sentido común del trabajador petrolero, otorgando legitimidad y orgullo.

### **iii. La privatización y la modernización se perciben como procesos impuestos desde afuera, ajenos al territorio y generadores de exclusión.**

Los entrevistados utilizan formulaciones como «la privatización nos cayó encima» o «modernizaron para sacar gente», lo que indica que estos procesos no fueron interpretados como decisiones técnicas, sino como medidas que desplazaron derechos y fragmentaron la fuerza laboral. El uso recurrente de expresiones impersonales —«se fue perdiendo todo», «se acabaron los puestos de planta»— refuerza la percepción de tratarse de cambios inevitables, ejecutados «desde arriba» y sin participación de los trabajadores.

### **iv. La violencia (armada, política y laboral) constituye un componente estructural de la vida en Barranbermeja.**

Las entrevistas reconstruyen la violencia como ambiente, no como episodio aislado. En frases como «uno sabía cuándo la cosa se estaba poniendo fea, las llamadas empezaron» o «el miedo era parte del día a día», la violencia aparece como condición persistente. La presencia de actores armados, la repre-

sión a líderes sindicales («al que hablaba lo marcaban») y el cruce entre política y trabajo, consolidan una narrativa donde la vida cotidiana estuvo atravesada por amenazas, silencios obligados y vigilancia.

**v. Ecopetrol y la refinería son el centro físico, social y simbólico de la ciudad, pero su relación con la comunidad se ha vuelto más distante y desigual.**

Los entrevistados afirman que «la refinería es Barranca» y que si «la planta se para, se para todo». Estas expresiones evidencian que la industria no es solo infraestructura, sino núcleo identitario del territorio. Sin embargo, también emergen voces que sienten que la empresa se alejó: «ya no nos ven como antes», «la puerta se fue cerrando para nosotros». La refinería se mantiene como corazón simbólico, pero el vínculo con la comunidad se percibe erosionado.

**vi. La comunidad obrera y los barrios petroleros sostuvieron la cohesión social, pero los cambios en la industria fragmentaron esa experiencia.**

Las metáforas de familia: «esto era una familia grande, aquí todos nos cuidábamos», muestran que la vida colectiva se estructuraba alrededor de la experiencia laboral común. Con la entrada de contratistas y la precarización del em-

pleo, aparece la sensación de ruptura: «esa familia la rompieron, cada quien quedó por su lado». La comunidad petrolera es narrada como un tejido que existió, pero que fue debilitado por decisiones externas.

**vii. El territorio interpreta los procesos del Estado y de la empresa desde la desconfianza, alimentada por años de decisiones que se vivieron como ajenas y poco transparentes.**

Frases como «el Estado permitió eso», «ellos decidieron todo allá arriba», «nunca nos explicaron nada» muestran que la relación con las instituciones está marcada por la percepción de falta de claridad y participación. La difuminación del agente en expresiones como «se empezó a dañar la ciudad» refuerza la idea de opacidad y abandono.

El recorrido por las estructuras léxicas, semánticas y sintácticas del corpus de Barrancabermeja permite observar que el discurso de los entrevistados no solo nombra la realidad, sino que la organiza desde categorías profundamente arraigadas en la experiencia obrera y en la memoria territorial. Los núcleos léxicos, los campos semánticos, las metáforas, las formas de agencia y las macroproposiciones no operan como elementos separados, sino como componentes de una misma matriz interpretativa que da coherencia al relato colectivo. Lo que

emerge en este nivel es un entramado donde el trabajo se convierte en identidad, la lucha en práctica cotidiana, la violencia en condición estructural y la privatización en fractura profunda de ese orden social.

Sin embargo, estos elementos no adquieren su pleno significado hasta observar cómo se articulan en patrones narrativos, estrategias argumentativas, oposiciones entre actores y marcos de legitimación o deslegitimación. El análisis textual ha mostrado qué dicen los entrevistados y cómo lo dicen; el siguiente nivel permitirá comprender por qué lo dicen de ese modo y qué efectos cognitivos y políticos producen esas formas de hablar. Es en el nivel discursivo donde las palabras se transforman en posicionamientos, donde las metáforas se vuelven dispositivos de sentido y donde las estructuras lingüísticas revelan las relaciones de poder que subyacen a la conflictividad petrolera.

A partir de aquí, el análisis se desplazará hacia esas estrategias globales que dan forma al discurso: cómo se organizan los relatos sobre huelgas y represión, cómo se legitiman las acciones del sindicato y de la comunidad, cómo se disputa el significado del «progreso» y cómo se construyen las fronteras simbólicas entre «nosotros» y «ellos». El nivel discursivo permitirá observar la trama profunda que sostiene la voz co-

lectiva de Barrancabermeja, y abrirá el camino para situar esos discursos dentro del contexto sociopolítico que los produce.

## B. Nivel discursivo (Barrancabermeja)

El nivel discursivo permite observar cómo los entrevistados de Barrancabermeja no solo seleccionan palabras o expresan recuerdos, sino que organizan esos elementos en relatos que producen sentidos colectivos, legitiman acciones y disputan interpretaciones sobre la ciudad petrolera. Mientras el nivel textual mostró las elecciones léxicas, las metáforas y las estructuras sintácticas que sostienen el discurso, este nivel revela cómo esas piezas se articulan en narrativas coherentes que conectan la experiencia individual con marcos históricos de conflicto, trabajo y violencia. Aquí se analizan las estrategias mediante las cuales los hablantes construyen causalidades, establecen oposiciones entre actores, narran episodios críticos y proyectan juicios de valor sobre la empresa, el Estado y la comunidad.

En Barrancabermeja, el discurso adquiere una dimensión política explícita: narrar es posicionarse. Los entrevistados organizan sus relatos en torno a secuencias que justifican la resistencia,

denuncian la represión, cuestionan la privatización y redefinen el sentido del progreso. En expresiones como «nos tocó pelearla», «la modernización no era para nosotros», «la USO siempre dio la cara», «ellos decidieron todo desde arriba», la estructura narrativa permite comprender cómo los trabajadores y líderes comunitarios elaboran sentidos sobre el poder y legitiman su propia lectura del conflicto. El nivel discursivo muestra que la historia petrolera no se cuenta desde la neutralidad, sino desde la necesidad de explicar por qué la ciudad vivió lo que vivió y quiénes fueron los actores centrales de esa trama.

Este nivel permitirá analizar, entonces, las estrategias de legitimación y deslegitimación, la construcción de oposiciones entre «nosotros» y «ellos», los esquemas narrativos que ordenan la memoria obrera y los marcos argumentativos que disputan el significado del desarrollo, la modernización y la seguridad. El discurso de Barrancabermeja no solo describe una historia, la interpreta, la ordena y la proyecta como horizonte de sentido compartido.

### **1. Estructuras narrativas dominantes**

Los relatos de los entrevistados en Barrancabermeja no se presentan como descripciones aisladas, sino como estructuras narrativas que combinan me-

moría, interpretación y posicionamiento político. Cada entrevistado organiza su discurso de manera secuencial, conectando episodios del pasado con explicaciones del presente y advertencias sobre el futuro. Esta organización no es lineal ni cronológica, opera más bien como un movimiento pendular entre momentos de orgullo obrero, fracturas traumáticas y transformaciones impuestas. En la mayoría de los discursos, la narrativa avanza desde un pasado que se interpreta como cohesionado y digno, hacia un presente marcado por pérdida, fragmentación y distancia entre la comunidad y la empresa.

Una característica central de esta organización es que los entrevistados reconstruyen la historia colectiva a través de marcos narrativos amplios, no mediante eventos sueltos. Huelgas, modernización, amenazas, alianzas comunitarias y privatización se integran en un recorrido que se articula como trama coherente. Es común escuchar frases como «esto empezó hace muchos años», «así fue como nos formamos», «de ahí vino el cambio», que funcionan como marcadores estructurales. No describen un hecho puntual, sino que introducen un «capítulo» narrativo desde el cual los hablantes ordenan su historia. El discurso adopta así la forma de una memoria social compartida, donde cada entrevistado aporta variaciones, pero mantiene la misma arquitectura

profunda: un origen, un punto de quiebre y una reconfiguración dolorosa del territorio.

Los relatos organizan la experiencia mediante oposiciones que estructuran la interpretación: antes versus ahora, dignidad versus precarización, comunidad versus fragmentación, trabajo directo versus tercerización, huelga legítima versus represión injustificada. Estas oposiciones le otorgan al discurso una direccionalidad clara. No son simples contrastes temporales, son contrastes morales y políticos que permiten al hablante explicar quién actuó de manera justa, quién traicionó acuerdos históricos y quién defendió el territorio. Por eso, cuando un entrevistado dice «antes uno era respetado», está trazando una evaluación más amplia sobre el deterioro de las relaciones laborales y territoriales. La narrativa no es descriptiva: es diagnóstica.

Los relatos de origen constituyen la columna vertebral del discurso en Barrancabermeja. Son historias iniciales donde los entrevistados explican cómo se formaron como trabajadores, cómo se consolidó el movimiento sindical y cómo la ciudad se convirtió en territorio petrolero. Estos relatos funcionan como cimientos identitarios. No se cuentan únicamente para recordar el pasado, sino para legitimar posiciones en el presente.

Un relato de origen recurrente es el del aprendizaje a través del ejemplo. Varios entrevistados afirman «uno se crio viendo a los mayores pelearla, yo aprendí desde pelado que aquí el trabajo se defendía» o «mis viejos me mostraron cómo era esto». La transmisión intergeneracional de la lucha aparece como una especie de iniciación. No se trata de simple socialización laboral, se presenta como formación moral. El origen se construye como entrada a un linaje, como pertenencia a una tradición donde el trabajo y la huelga son inseparables.

Otro relato fundante es el del barrio petrolero como espacio de cohesión. Se repite la imagen de crecer en entornos donde «todos se conocían», «uno se cuidaba con los vecinos», «esto era una familia grande». En estos relatos el origen no es un hecho individual, sino un espacio social que produce identidad colectiva. Los barrios aparecen como lugares donde se aprende el oficio, se construyen solidaridades y se internaliza la narrativa de dignidad obrera. Es significativo que varios entrevistados mencionen que «ser de un barrio petrolero era un orgullo», lo que indica que el origen se asocia con reconocimiento y pertenencia.

Un tercer relato de origen es el del encuentro con la refinería como símbolo

vital. Muchos entrevistados relatan la primera vez que entraron a trabajar o que vieron la planta de cerca. En frases como «cuando vi la refinería supe que ahí estaba mi vida» o «esa fue la puerta que se nos abrió», la refinería aparece como punto de inicio de la biografía laboral, pero también de la biografía emocional. De esta manera, el origen se inscribe en un espacio industrial que se vive como horizonte de futuro. No es casual que cuando más adelante narran procesos de privatización, usen expresiones como «nos cerraron la puerta» o «ese mundo ya no era para nosotros». El origen se convierte así en referencia clave para interpretar la pérdida.

Finalmente, aparece un relato de origen marcado por la violencia. Algunos entrevistados evocan su juventud diciendo «uno se formó en medio del miedo, así era crecer en Barranca», como si la experiencia de amenaza fuera parte constitutiva del aprendizaje político. En estos relatos, la violencia no es interrupción, sino condición generadora de conciencia. La memoria de que «aquí la violencia venía con el trabajo» produce un origen donde lucha y vulnerabilidad están unidas desde el principio.

En su conjunto, los relatos de origen no son recuerdos neutrales. Son dispositivos discursivos que permiten a los entrevistados anclar su identidad en una tradición compartida, justificar su

posición frente al conflicto y legitimar su lectura crítica sobre la empresa, el Estado y la modernización. A través de ellos, la voz individual se conecta con una historia colectiva, lo que otorga al discurso una profundidad que trasciende de la experiencia personal.

Los relatos de ruptura en Barrancabermeja condensan el momento en que la ciudad petrolera dejó de parecerse a sí misma. Los entrevistados narran esta fractura como un proceso que no llegó de golpe, sino que se fue instalando en la vida cotidiana hasta alterar la estructura íntima del trabajo, de la comunidad y de la seguridad personal. Uno de los hilos más persistentes es la memoria del paramilitarismo. No se lo describe como un episodio del pasado, sino como un régimen de presencia constante que transformó la manera en que se hablaba, se caminaba y se organizaba. En expresiones como «cuando empezaron las listas, cuando uno ya no podía quedarse tarde en la sede» o «ese fue el tiempo en que hablar era peligroso», la violencia aparece como fuerza reorganizadora de la vida social. La ruptura no se explica por un hecho concreto, sino por la sensación de que la ciudad dejó de ser un espacio confiable. El miedo no se enuncia de manera abstracta, sino como experiencia encarnada. Un entrevistado dice «uno sentía que lo estaban mirando», otro recuerda que «tocaba cuidarse de todo

el mundo». Esta experiencia compartida produce un antes y un después que marca la narrativa de toda la comunidad obrera.

Otra forma de ruptura se articula alrededor de la privatización. Los entrevistados la narran como un punto de inflexión que no solo modificó contratos, sino que desató una transformación moral. En frases como «ese día entendimos que ya no contaban con nosotros, nos fueron sacando sin decirlo» o «la empresa se volvió otra cosa», la privatización se presenta como traición a una relación histórica. No se cuestiona únicamente la política institucional, sino su efecto emocional. Varios entrevistados describen un momento de quiebre en el que comprendieron que el modelo laboral que los formó había terminado. La tercerización, la pérdida de beneficios y la entrada de empresas contratistas se narran como dispositivos que deshicieron el mundo social construido durante décadas. En palabras de un trabajador «uno vio cómo se acabó la familia petrolera». El lenguaje de la ruptura no es técnico, es afectivo. Habla del dolor de perder un lugar en el mundo.

Los relatos combinan estas dos fuerzas de ruptura, el paramilitarismo y la privatización, para explicar la transformación de Barrancabermeja. La violencia desestructuró la seguridad y la vida comunitaria. La privatización desestruc-

turó el trabajo y la identidad obrera. Juntas producen una narrativa donde el conflicto petrolero se entiende como despojo múltiple. Por eso, cuando los entrevistados dicen «esto dejó de ser lo que era», la frase no señala nostalgia simple, sino diagnóstico profundo de una fractura estructural.

De igual forma, los relatos de futuro aparecen atravesados por una tensión entre expectativa y temor. La modernización opera como horizonte ambiguo. Por un lado, se reconoce que la industria necesitaba actualizarse. Por otro, se interpreta que esas transformaciones no fueron pensadas para incluir a quienes ya estaban dentro. Expresiones como «dicen que la modernización es progreso, pero veremos para quién, esa modernización no nos asegura nada» o «ahora todo es más tecnológico y menos humano» muestran que el futuro se imagina como algo que puede volver a cerrar puertas. La modernización se narra desde la duda y la desconfianza, nunca desde la promesa.

El futuro laboral es una de las zonas más cargadas de incertidumbre. Los entrevistados no imaginan un retorno al pasado y tampoco visualizan con claridad un camino hacia adelante. En frases como «el trabajo ya no es seguro, uno no sabe qué va a pasar con los jóvenes» o «los puestos buenos ya no se ven», el futuro aparece como espacio

difuso. Quienes vivieron la época de estabilidad laboral no proyectan continuidad. Por el contrario, anticipan escenarios donde la precarización será norma. En esta narrativa la idea de progreso se debilita porque ya no se asocia con bienestar colectivo, sino con reestructuración que beneficia a pocos.

Varios entrevistados expresan preocupación por las nuevas generaciones. Afirman que «los muchachos no alcanzaron a ver lo que era esto, ellos ya no tienen lo que tuvimos» o «el futuro de ellos está más duro». Esta preocupación revela que el futuro no se piensa solo en términos individuales, sino como continuidad o ruptura de una identidad colectiva. El interrogante no es únicamente qué pasará con la industria, sino qué pasará con el sentido de pertenencia territorial que la refinería había sostenido.

Existe además un relato de futuro ligado al territorio mismo. Algunos entrevistados expresan que «Barranca tiene que buscar otra forma de vivir», mientras otros sostienen que «esto seguirá siendo petrolero, pero ya no para nosotros». Estas frases muestran que el futuro del territorio se percibe como algo que ya no depende de la comunidad. El desenlace permanece en manos de decisiones externas que la población siente, cada vez, más distantes.

En conjunto, los relatos de futuro muestran una ciudad que mira adelante con

mezcla de esperanza prudente y desconfianza profunda. La modernización no aparece como sueño de transformación, sino como proceso que podría intensificar la exclusión. La incertidumbre laboral no se vive como consecuencia individual, sino como amenaza colectiva. Por eso, cuando alguien dice «el futuro es incierto», expresa algo más que duda. Expresa una lectura sociopolítica donde el porvenir dejó de ser proyecto compartido y pasó a ser territorio en disputa.

## 2. Estrategias de legitimación

En los discursos de Barrancabermeja el sindicato no aparece como un actor más. Se presenta como piedra angular de la historia obrera y como garante de derechos, memoria y cohesión comunitaria. La legitimación del sindicato se construye mediante relatos que lo reconocen como institución formadora, protectora y, en muchos casos, salvadora. La frase «si no hubiera sido por la USO, esto sería otra cosa», repetida de maneras distintas por varios entrevistados, resume esta valoración. El sindicato se sitúa como sujeto colectivo que dio forma a la vida en la ciudad y que permitió que los trabajadores se reconocieran como grupo con dignidad y agencia.

La legitimación se sostiene en narrativas donde el sindicato aparece vin-

culado a la defensa de la vida, incluso en momentos de riesgo extremo. Los entrevistados evocan escenas de represión y amenazas en las que la organización sindical fue la única instancia que respondió. En expresiones como «la USO siempre estuvo ahí, ellos daban la cara cuando nadie más lo hacía» o «el sindicato nos respaldaba cuando la cosa se ponía fea», se construye una imagen de responsabilidad y valentía. La legitimidad surge del recuerdo de que el sindicato no abandonó al trabajador en los tiempos de mayor violencia. La memoria del paramilitarismo refuerza esta idea. Cuando se narra que «ser sindicalista era prácticamente una sentencia», la legitimación adquiere una dimensión moral. Reconocer la labor sindical es también reconocer el costo que implicó sostenerla.

Otro elemento clave en esta legitimación es la narrativa pedagógica que los entrevistados elaboran sobre la formación obrera. Varios afirman que «uno aprendió a defenderse con el sindicato, ahí fue donde uno se hizo trabajador de verdad», lo que evidencia que la legitimidad no proviene solo de las luchas visibles, sino también de una labor cotidiana de educación política y laboral. El sindicato se presenta como escuela donde se aprendía a negociar, a interpretar contractualmente el trabajo y a enfrentar injusticias. Esta dimensión formativa otorga al sindicato una

profundidad histórica que trasciende cualquier coyuntura. No se le ve como asociación circunstancial, sino como institución estructurante de la identidad obrera.

La legitimación también surge de los resultados concretos que los entrevistados atribuyen al sindicato. En frases como «si se consiguió algo, fue por ellos» o «las mejoras no las regaló la empresa, las arrancó el sindicato», la acción sindical se narra como motor de conquistas reales. Esta forma de relatar revaloriza la agencia obrera y desplaza la idea de que los avances fueron producto del crecimiento empresarial. Se instala un marco en el que la empresa aparece como actor reticente y el sindicato como actor motor. Esta representación contribuye a explicar por qué los entrevistados sienten que la privatización fracturó el pacto histórico. No es solo que se perdieran beneficios, sino que se debilitó al actor que los había conquistado.

De esta forma la legitimación del sindicato se articula a través de metáforas familiares. Algunos entrevistados hablan de la organización como «la casa de uno, el lugar donde uno se sentía acompañado». Estas metáforas no son ornamentales. Funcionan como mecanismo discursivo que vincula la identidad laboral con la pertenencia afectiva. En un territorio donde la violencia y la

privatización produjeron fragmentación, el sindicato se convierte en referencia de estabilidad y memoria. Por eso, cuando alguien dice «eso nos sostuvo», la expresión no se refiere únicamente a salarios o contratos, sino a sentido de vida. El sindicato aparece así legitimado como actor histórico porque encarna protección, lucha, formación y comunidad. No se legitima por discurso ideológico, sino por experiencia vivida.

En el discurso de los entrevistados de Barrancabermeja la lucha por el trabajo digno se presenta como práctica legítima y necesaria. No se la narra como conflicto gratuito ni como exceso sindical, sino como respuesta proporcional a las condiciones laborales y políticas del territorio. La frase «a uno no le quedaba otra que pelearla» resume un sentido compartido de inevitabilidad moral. La lucha aparece anclada en un principio de justicia elemental, una convicción de que defender el trabajo era defender la vida misma. En expresiones como «sin lucha no había respeto, uno se hacía valer peleando» o «si no parábamos, nos pasaban por encima», la legitimidad surge del reconocimiento de que el trabajo digno no estaba garantizado por la empresa ni por el Estado, sino por la acción colectiva.

Esta legitimación se sostiene además en la experiencia de desigualdad es-

tructural. Los entrevistados narran que las decisiones unilaterales de la empresa, la precarización progresiva y la amenaza constante de privatización crearon un ambiente donde la lucha dejó de ser elección y se convirtió en obligación ética. La frase «era pelear o perderlo todo» aparece como justificación que, lejos de radicalizar el discurso, lo sitúa en el terreno de la supervivencia social. En estos relatos el trabajo digno no se asocia solamente a mejores salarios, sino a estabilidad, reconocimiento y trato respetuoso. De allí que la lucha se legitime como mecanismo para equilibrar una relación desigual de poder.

La legitimación también emerge cuando los entrevistados evocan momentos específicos en los que la acción colectiva logró cambiar el rumbo de decisiones empresariales. En frases como «gracias a esos paros logramos que no nos quitaran lo que era nuestro» o «cuando nos uníamos, la cosa cambiaba», la lucha aparece validada por su eficacia. La acción huelguística no se narra como obstáculo para el desarrollo, sino como garantía de derechos. La memoria de victorias pasadas opera como argumento central para mostrar que la lucha tenía sentido, porque producía resultados tangibles que beneficiaban a toda la comunidad obrera. Esto consolida la legitimidad no solamente como creencia moral, sino como evidencia empírica.

Es significativo que la lucha se narre como gesto colectivo más que como acción individual. Los entrevistados usan expresiones como «nos tocaba juntos, uno no peleaba solo, eso era de todos», que muestran que la legitimación proviene del carácter comunitario de la acción. La lucha se concibe como práctica social que construye pertenencia. No es casual que muchos la asocien a la idea de familia. Cuando alguien afirma «la lucha nos hacía más unidos», se legitima no solo el acto de protestar, sino el efecto de solidaridad y cohesión que produjo. En un contexto de violencia y fragmentación, la lucha aparece como espacio de cuidado mutuo, lo que refuerza su valor moral.

La legitimación de la lucha por el trabajo digno se articula con un relato de larga duración sobre la identidad petrolera de Barrancabermeja. Expresiones recurrentes como «esto siempre ha sido así, la lucha viene de los abuelos» o «esta ciudad se hizo luchando» vinculan la acción colectiva con una tradición histórica. La lucha no se presenta como reacción coyuntural a un problema puntual, sino como parte constitutiva de la identidad obrera. En este sentido, luchar por el trabajo digno es legitimado porque es coherente con la historia del territorio y porque representa la continuidad de una memoria colectiva que define lo que significa ser trabaja-

dor petrolero. La acción aparece legitimada por el tiempo, por la experiencia y por el reconocimiento mutuo entre quienes la practicaron.

En los relatos de los entrevistados el territorio de Barrancabermeja aparece legitimado como fuente de resistencia histórica. No se lo concibe como simple escenario, sino como espacio que produce sujetos capaces de enfrentar desigualdades y amenazas. La ciudad se narra como territorio que forma carácter y conciencia política. Esta idea se repite cuando afirman que «aquí uno aprende a resistir desde pelado, Barranca es lucha» o «esta tierra nos enseñó a no dejarnos». En estas expresiones el territorio se convierte en agente que moldea identidades, lo que legitima la resistencia como práctica coherente con la experiencia misma de habitar la ciudad.

El territorio también se legitima como espacio de resistencia porque fue escenario de agresiones que obligaron a la comunidad a organizarse. La memoria del paramilitarismo y de la represión estatal aparece como justificación profunda de esa necesidad. En frases como «si no resistíamos, nos borran» o «aquí sobrevivir ya era un acto político», los entrevistados no solo recuerdan miedo, sino que explican por qué la resistencia fue una respuesta legítima. La violencia se vuelve argumento que da

sentido a la lucha, pues se vivió como amenaza directa a la vida, al trabajo y a la cohesión comunitaria. El territorio no se recuerda solo como lugar golpeado, sino como espacio que exigía acción para no ser destruido.

El vínculo entre territorio y resistencia se refuerza mediante metáforas que lo humanizan y lo presentan como aliado. Hablar de que «esta tierra no se deja» o que «Barranca siempre se levanta» transforma la ciudad en sujeto moral. Las metáforas no decoran el discurso, sino que consolidan la legitimidad de defender el lugar donde se vive. La ciudad es compañera de lucha y testigo de la historia obrera. En ese sentido, resistir no se entiende como confrontación contra un actor específico, sino como defensa integral de un modo de vida tejido durante décadas entre barrios petroleros, sedes sindicales y la presencia imponente de la refinería.

Finalmente, los entrevistados legitiman al territorio como espacio de resistencia porque lo ven amenazado por decisiones externas que no lo reconocen. La privatización, la tercerización y ciertos procesos de modernización son narrados como fuerzas que desconocieron la historia y las necesidades locales. Por eso muchos afirman que «la ciudad se defiende o desaparece», lo que convierte al territorio en causa colectiva más allá de la defensa laboral. En esta narra-

tiva resistir es garantizar la continuidad de una comunidad. El territorio legitima la resistencia porque se concibe como depositario de memoria, identidad y dignidad, y porque su preservación se vive como responsabilidad compartida.

### **3. Estrategias de deslegitimación**

En los discursos de los entrevistados de Barrancabermeja la deslegitimación del Estado no surge como acusación aislada, sino como resultado de una experiencia acumulada en la que la institucionalidad aparece asociada a la represión, la indiferencia y la distancia frente al territorio. Las narrativas muestran que la relación con el Estado se configuró a partir de momentos críticos en los que la comunidad esperaba protección, acompañamiento o al menos reconocimiento, y encontró lo contrario. En expresiones como «el Estado nos dejó solos, nunca dieron la cara» o «cuando mataban gente nadie decía nada», la deslegitimación se articula desde la vivencia de abandono. No se cuestiona un acto puntual, sino un patrón prolongado en el tiempo.

La represión estatal constituye uno de los dispositivos más fuertes de esta deslegitimación. Varios entrevistados recuerdan intervenciones de la fuerza pública durante paros y movilizaciones, y lo hacen mediante frases que subrayan la desproporción entre la acción

obrero y la respuesta institucional. En testimonios como «nos trataban como delincuentes» o «llegaban a darnos sin preguntar», el Estado aparece como actor que no reconoce la legitimidad de la protesta y que responde con violencia frente a reclamos laborales. Esta experiencia se vuelve criterio para evaluar su presencia. La figura estatal no se asocia con garantía de derechos, sino con uso injustificado de la fuerza, lo que debilita su autoridad moral y política.

Otra forma fuerte de deslegitimación proviene de la percepción de indiferencia estatal frente a la violencia paramilitar. Los entrevistados describen un periodo en el que el miedo dominaba la ciudad y en el que las instituciones no actuaban o actuaban de manera insuficiente. En frases como «aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie hacía nada, había muertos y eso quedaba así» o «uno llamaba y no pasaba nada», el Estado se construye discursivamente como actor ausente. Esa ausencia se vuelve más grave porque ocurre en un contexto de amenazas directas contra líderes sindicales y comunitarios. La deslegitimación surge porque la falta de acción se interpreta como complicidad o, al menos, como abandono que pone en riesgo la vida de la gente.

El Estado también se deslegitima mediante narrativas que resaltan su inca-

pacidad para intervenir en procesos que afectaron profundamente la estructura laboral de la ciudad. La privatización y la tercerización se recuerdan como decisiones donde el Estado actuó como contraparte distante que priorizó intereses empresariales sobre derechos colectivos. Cuando los entrevistados dicen «ellos aprobaron todo sin pensar en nosotros» o «nunca consultaron a nadie», no están refiriéndose únicamente a procedimientos administrativos. Están señalando que el Estado dejó de representar al pueblo trabajador y se alineó con fuerzas que transformaron el territorio sin tener en cuenta a quienes lo habitaban. Esta percepción refuerza la idea de un Estado que no solo falla en proteger, sino que participa en la producción de la precariedad.

La deslegitimación se sostiene además en la memoria afectiva. Varios entrevistados evocan momentos de mayor vulnerabilidad y describen la ausencia estatal con un tono que mezcla decepción, dolor y claridad analítica. Frases como «uno esperaba algo y no llegó» o «nos tocó defendernos solos» permiten ver que la deslegitimación no se expresa como rechazo ideológico, sino como respuesta a un vacío vivido. La comunidad esperaba acompañamiento y obtuvo silencio. Ese silencio se convierte en argumento central que explica por qué la voz estatal aparece debilitada en los discursos.

En conjunto, la deslegitimación del Estado se articula mediante tres estrategias discursivas. La primera es la narración de la represión como forma injustificada de ejercicio del poder. La segunda es la construcción del abandono como práctica sistemática que expuso a la comunidad a actores violentos y decisiones laborales perjudiciales. La tercera es la atribución de distancia y ajenezidad al Estado, que aparece como actor que no conoce, no escucha y no representa al territorio. Estas estrategias permiten entender por qué la voz estatal carece de legitimidad para los entrevistados y por qué Barrancabermeja se reconoce a sí misma como comunidad obligada a defenderse sin apoyo institucional.

En las entrevistas de Barrancabermeja la figura del Estado aparece erosionada por una memoria prolongada de ausencia, represión y decisiones tomadas desde una distancia que los entrevistados describen como indiferente. La deslegitimación no surge como postura ideológica, sino como interpretación acumulada de experiencias donde la institucionalidad falló en su papel de garante de derechos y se mostró incapaz de proteger a la comunidad en momentos críticos. La frase «el Estado nunca estuvo para nosotros» funciona como eje conductor de un relato colectivo donde el abandono se vive como constante histórica. En expresio-

nes como «uno esperaba que llegaran y no llegaban, nadie respondía por lo que estaba pasando» o «aquí nos tocó solos», la ausencia estatal se presenta como experiencia compartida que atraviesa generaciones de trabajadores.

La represión estatal constituye un núcleo central en esta deslegitimación. Varios entrevistados evocan intervenciones de la fuerza pública durante movilizaciones sindicales o paros cívicos, y lo hacen a partir de escenas que revelan la percepción de desproporción entre la acción obrera y la respuesta institucional. En frases como «la policía venía a darnos como si fuéramos delincuentes» o «cuando salíamos a protestar nos recibían con bolillo y gas», la fuerza pública aparece como mecanismo para neutralizar la protesta legítima. Los entrevistados no narran estos episodios como momentos aislados, sino como parte de una política más amplia que desconocía el derecho a la organización y al reclamo laboral. Un trabajador relata que «uno solo pedía que respetaran el trabajo, pero ellos venían como si estuviéramos cometiendo un crimen», señalando que la represión minó la confianza en el Estado y transformó la protesta en riesgo vital.

Otra estrategia discursiva clave es la construcción del abandono estatal frente a la violencia paramilitar. Los entrevistados describen un periodo

donde coexistían amenazas, asesinatos selectivos y silencios institucionales. En expresiones como «todo el mundo sabía quiénes eran y nadie hacía nada, los mataban y eso quedaba en el aire» o «se llevaban a la gente y no había autoridad que respondiera», el Estado es representado como actor que no solo se retiró del territorio, sino que dejó abierta la puerta para que actores armados ocuparan su lugar. La percepción de abandono se profundiza cuando evocan llamadas intimidatorias, desapariciones y presencia armada en los barrios sin respuesta oficial. En palabras de un entrevistado «si uno llamaba, eso era como llamar al vacío», lo que convierte la ausencia del Estado en forma de complicidad simbólica. No se afirma explícitamente que el Estado apoyara a los grupos armados, pero su no acción se interpreta como habilitación indirecta de su poder.

La deslegitimación también se articula a través del recuerdo de decisiones estatales que afectaron directamente la estructura del trabajo petrolero. La privatización y la tercerización son narradas como procesos impulsados y autorizados desde la institucionalidad nacional sin consideración alguna por la historia local. En frases como «ellos firmaron eso sin pensar en nosotros, lo aprobaron desde Bogotá y acá fue el desastre» o «nunca consultaron a la gente que vivía de esto», el Estado apa-

rece como agente distante que legisla sin comprender la realidad del territorio. La deslegitimación surge porque estas decisiones no solo modificaron contratos o condiciones laborales, sino que desarticulaban formas de vida y redes de comunidad. En un relato un entrevistado afirma «cuando el Estado decidió privatizar, le quitó la vida a este pueblo», mostrando cómo la legitimidad institucional se desploma cuando sus decisiones destruyen el tejido social.

La narración del abandono adquiere tonos más profundos cuando los entrevistados recuerdan la incapacidad estatal para proteger a quienes eran blanco de la violencia. Líderes sindicales amenazados, trabajadores perseguidos y familias enteras desplazadas son evocadas como víctimas de una institucionalidad que no actuó. Frases como «uno sabía que estaba solo, si lo tocaban todo quedaba así» o «había miedo hasta de ir a poner la denuncia» revelan que la deslegitimación no proviene solo del incumplimiento de funciones formales, sino de la falta de protección en situaciones de riesgo extremo. El Estado pierde legitimidad porque se lo percibe como actor que mira sin intervenir, incluso cuando la vida está en juego. La deslegitimación también se sostiene en la dimensión afectiva del discurso. Varios entrevistados narran momentos de esperanza frustrada, donde espera-

ban acciones y recibieron silencio. En expresiones como «uno confiaba y esa confianza se rompió» o «esperábamos que respondieran, pero nunca pasó», la relación con el Estado se muestra marcada por la decepción. Esta decepción se convierte en argumento que hace coherente la lectura de abandono. La deslegitimación, entonces, no se formula desde el rechazo inmediato, sino desde la pérdida de confianza acumulada a lo largo de años.

En síntesis, las estrategias discursivas que deslegitiman al Estado operan en tres planos. El primero es la memoria de la represión, que lo presenta como actor que castiga la protesta en lugar de garantizar derechos. El segundo es la memoria del abandono, que lo muestra incapaz o no dispuesto a enfrentar la violencia paramilitar o a proteger a las comunidades. El tercero es la percepción de distancia, mediante la cual el Estado aparece como actor ajeno, que toma decisiones sobre el territorio sin conocerlo ni escucharlo. Estas estrategias no son simples críticas. Son estructuras narrativas que explican por qué la comunidad de Barrancabermeja percibe que tuvo que resistir sola y por qué el Estado perdió legitimidad como figura protectora y representativa. La deslegitimación de las empresas privadas que ingresaron a Barrancabermeja en el marco de la tercerización constituye otro de los ejes más fuertes

del discurso comunitario. Para los entrevistados la llegada de contratistas no representa modernización ni eficiencia, sino la ruptura de un orden moral basado en la estabilidad, en el reconocimiento mutuo y en una tradición laboral que otorgaba dignidad. En expresiones como «esas empresas vinieron fue a sacar provecho, los privados llegaron a desbaratar lo que teníamos» o «uno ya no era trabajador, era mano de obra barata», los entrevistados articulan una narrativa donde la tercerización equivale a empobrecimiento identitario y precarización material. La deslegitimación se construye porque las empresas contratistas aparecen como actor que no respeta la historia laboral de la ciudad ni reconoce el valor del trabajador petrolero.

Los relatos muestran que la tercerización trajo consigo no solo cambios contractuales, sino un modo distinto de relacionarse con los empleados. La frase «a los contratistas no les importaba la gente» se repite en distintos tonos, acompañada de evocaciones concretas como «uno ya no conocía al jefe, cada rato cambiaban de empresa» o «eso era como trabajar sin respaldo». En este discurso la deslegitimación surge del contraste entre el modelo estatal o semipúblico y la lógica privada. Los entrevistados enfatizan que antes había estabilidad, reglas claras y sensación de pertenencia, mientras que después de

la tercerización predominó la rotación excesiva, la falta de garantías y la pérdida de cualquier sentido de continuidad. Un entrevistado explica que «uno entraba con un contrato y al mes ya había otro patrón», lo que revela una experiencia de inestabilidad continua que erosiona la legitimidad empresarial.

La percepción de desarraigo también alimenta la deslegitimación. Varios entrevistados afirman que las empresas privadas no conocían la ciudad ni su cultura laboral. En expresiones como «esa gente venía de afuera sin entender nada» o «no respetaban la forma de trabajar de aquí», se destaca un choque entre la identidad local y la racionalidad instrumental de los contratistas. La ciudad petrolera se concibe como territorio donde el trabajo tiene normas no escritas que implican compañerismo, cuidado mutuo y orgullo colectivo. La tercerización, en cambio, es narrada como irrupción que reemplazó ese orden con una lógica fría centrada en reducir costos y aumentar productividad sin considerar la experiencia histórica de los trabajadores.

La deslegitimación se refuerza mediante la memoria de prácticas empresariales que los entrevistados describen como injustas. Algunos relatan que las empresas privadas ofrecían salarios más bajos, contratos más cortos y condiciones de seguridad inferiores. Fra-

ses como «nos pagaban una miseria, no había garantías de nada» o «si uno se accidentaba tocaba ver cómo hacía» son recurrentes. En estos testimonios la deslegitimación se construye a partir de la sensación de abuso, donde la empresa contratista aparece como actor que explota la necesidad laboral sin asumir responsabilidades. La comparación constante con Ecopetrol funciona como mecanismo discursivo para reforzar esta crítica. Un entrevistado afirma que «con la empresa grande uno se sentía persona, con los contratistas se sentía desechable», lo que convierte la tercerización en símbolo de degradación social.

Otra dimensión importante es la percepción de que la tercerización fragmentó la solidaridad obrera y debilitó al sindicato. Los entrevistados explican que las empresas privadas evitaban cualquier vínculo con la organización sindical e incluso fomentaban relaciones laborales donde la unión colectiva era difícil. En frases como «los contratistas no querían saber nada del sindicato» o «ellos metían miedo para que uno no se organizara», la deslegitimación adquiere un componente político, pues se percibe que la tercerización no solo redujo derechos, sino que fue usada como estrategia para desarticular la resistencia. La empresa privada se representa, así, como actor que interviene en la vida comunitaria para fractu-

rarla, no para aportar desarrollo.

La deslegitimación se sostiene en metáforas que condensan el daño percibido. Expresiones como «vinieron a recoger lo que no era de ellos, esos eran como aves de rapiña» o «esa gente dejó esto vuelto nada» traducen la crítica empresarial en imágenes que intensifican la sensación de despojo. Estas metáforas no buscan exagerar, sino representar de manera simbólica la vivencia de pérdida colectiva. La tercerización no se recuerda como ajuste productivo, sino como intrusión que quebró la cultura laboral de la ciudad y deterioró la vida de los trabajadores. Por eso, cuando un entrevistado concluye «con esos privados perdimos todo lo que éramos», no está expresando nostalgia, sino una interpretación estructural del impacto de la privatización y de la lógica empresarial que acompañó ese proceso.

Finalmente, se identifica que la deslegitimación de la violencia paramilitar en los discursos de Barrancabermeja se construye de manera articulada con la deslegitimación del Estado y de las empresas privadas. No aparece como fenómeno separado, sino como parte de un entramado donde distintos actores contribuyeron a fracturar la vida laboral, comunitaria y política del territorio. Los entrevistados describen la violencia paramilitar como forma de control social que operó mediante miedo, silen-

ciamiento y vigilancia permanente. En expresiones como «esto se volvió una ciudad vigilada por ellos, uno vivía con la sombra encima» o «aquí mandaba el que tenía armas», la violencia se representa como poder paralelo que reorganizó la vida cotidiana y despojó a la comunidad de la posibilidad de actuar libremente.

Una de las estrategias discursivas más contundentes para deslegitimar esta violencia es la narración de su irrupción como invasión. Frases como «cuando llegaron, la ciudad cambió de alma, uno sabía que tocaba quedarse quieto» o «eso fue meter el miedo en todas partes» muestran que la presencia paramilitar no es interpretada como respuesta a un conflicto, sino como imposición que buscó subordinar a la población. La violencia se narra como dispositivo que intentó domesticar la resistencia y disciplinar a la comunidad mediante amenazas selectivas, asesinatos y vigilancia territorial. En varios testimonios se afirma que «no querían que la gente hablara» o «el que se movía mucho lo iban marcando», lo que refuerza la idea de que la violencia no fue aleatoria. Su función era frenar la organización y neutralizar la capacidad colectiva de respuesta.

La articulación entre paramilitarismo y Estado aparece en los discursos como

terreno donde la deslegitimación se profundiza. Aunque los entrevistados no afirman de manera explícita una alianza directa, sí señalan que el Estado no actuó con la contundencia necesaria para detener la violencia. Frases como «esto pasaba delante de todos y no hacían nada, uno llamaba y eso era lo mismo que nada, aquí la autoridad brillaba por su ausencia» muestran que la deslegitimación del Estado emerge porque su ausencia permitió que el poder armado se consolidara. Mientras el Estado no protegía, la violencia paramilitar ocupaba el espacio vacío. En ese sentido, la deslegitimación del paramilitarismo y la del Estado se refuerzan mutuamente. La comunidad interpreta que el poder armado creció donde la institucionalidad se retiró o miró hacia otro lado.

Esta violencia también se articula con la deslegitimación de las empresas privadas. Varios entrevistados mencionan que los paramilitares presionaban a trabajadores para aceptar condiciones laborales impuestas por contratistas o para no participar en actividades sindicales. En testimonios como «ellos metían miedo para que uno no fuera al sindicato, tocaba aceptar los contratos, porque si no, lo marcaban» o «los privados venían con su gente y uno tenía que quedarse callado», se observa que la tercerización no solo transformó el modelo laboral, sino que se entrelazó

con dinámicas de control armado que debilitaban la capacidad de resistencia. La violencia paramilitar operó así, como refuerzo simbólico y práctico de la lógica empresarial que buscaba reducir costos, desarticular la organización obrera y fragmentar la comunidad.

La deslegitimación de esta violencia se expresa también en el plano moral. Los entrevistados recurren a palabras que enfatizan el carácter injusto, cruel y destructor del paramilitarismo. En expresiones como «eso no tenía sentido, eran tiempos de oscuridad» o «esa gente acabó con la tranquilidad que quedaba», se rechaza cualquier narrativa que intente justificar su presencia. La violencia no se interpreta como parte del conflicto nacional, sino como ataque directo al corazón social del territorio. Se deslegitima porque atentó contra la vida y porque anuló la posibilidad de ejercer derechos. Un entrevistado lo resume afirmando «nos quitaron la voz», lo que condensa la función que tuvo la violencia como mecanismo de silenciamiento social.

La deslegitimación del paramilitarismo se articula con la afirmación de la dignidad obrera. Los entrevistados señalan que los paramilitares atacaban a quienes consideraban líderes, sindicalistas o voces críticas. En frases como «ser sindicalista era ponerse una cruz en la espalda» o «aquí ser líder era casi una sentencia», la violencia aparece como intento

por destruir las bases de la resistencia. Por eso la deslegitimación es absoluta. La violencia paramilitar no solo generó miedo, sino que buscó desmontar el tejido político de la ciudad. Los entrevistados la rechazan porque destruyó vidas, pero también porque atacó las instituciones que daban cohesión y sentido a la comunidad.

En conjunto esta deslegitimación de la violencia paramilitar se conecta de manera íntima con la deslegitimación del Estado y de las empresas privadas. Los tres actores aparecen, en distintos niveles, como participantes de un proceso que debilitó al trabajador, fragmentó la comunidad y deterioró el territorio. La violencia se entiende como mecanismo de control que se consolidó gracias al abandono estatal y que facilitó la imposición de un modelo laboral precario promovido por actores privados. Esta articulación muestra que la deslegitimación no opera por separado. Es una lectura integral de un proceso donde la comunidad se sintió expuesta, desprotegida y despojada.

#### 4. Oposiciones discursivas

Las entrevistas de Barrancabermeja construyen un entramado de oposiciones discursivas que no operan como simples pares semánticos, sino como divisiones profundas que ordenan el campo simbólico del conflicto petrole-

ro. Estas oposiciones aparecen en casi todas las narrativas recogidas y estructuran tanto la memoria obrera como las percepciones actuales sobre el trabajo, la desigualdad, el poder y la vulnerabilidad territorial. Se trata de fronteras discursivas que no permanecen estáticas, sino que se intensifican o se desplazan según el episodio narrado. La oposición entre el colectivo que habla y los actores que ejercen control o distancia es el eje estructural del discurso, y permite comprender por qué Barrancabermeja se reconoce a sí misma como sujeto histórico, comunitario y político.

Nosotros vs. ellos, en la expresión entre obreros, comunidad y territorio frente a empresas, Estado distante y sector privado, es la oposición central del corpus. El pronombre «nosotros» aparece asociado a una identidad amplia que articula obreros sindicalizados, familias trabajadoras, mujeres lideresas, jóvenes precarizados, comunidades rurales de Yondó y Sabana de Torres, y habitantes que se reconocen como parte de un territorio atravesado por luchas laborales y violencias históricas. Esta identidad se construye en contraste con un «ellos» múltiple, formado por la empresa privada, las contratistas, las instituciones estatales que no responden y los empresarios externos que controlan el empleo.

En varias entrevistas, el «nosotros» se afirma a través de la experiencia, el

arraigo y el sacrificio. En la voz de un entrevistado que recuerda las luchas obreras, se lee que «la gente aquí ha vivido y crecido bajo el manto de la industria», pero también que ha tenido que defenderse sola. Esta memoria se articula con la percepción generalizada de abandono estatal y desigualdad estructural. Una entrevistada afirma que «cuando mataban gente nadie decía nada», mientras otra señala que «el Estado nos dejó solos». Estas frases sostienen discursivamente la idea de que el territorio ha debido cuidarse a sí mismo.

El «ellos» empresarial aparece asociado a prácticas que afectan directamente la vida cotidiana. En múltiples entrevistas, se describe a las contratistas como actores que «venden los puestos, meten a quienes ellos quieren» o «juegan con la necesidad de la gente». Cada testimonio refuerza la percepción de un sistema laboral cerrado donde las decisiones no se toman desde el territorio. En el relato de una lideresa, la frustración se hace evidente cuando dice que «las becas preparan jóvenes, pero después no les dan trabajo». Este tipo de experiencias cristaliza la figura del «ellos» privado como un poder que administra los recursos y define quién puede acceder al trabajo.

En este par de oposición, el territorio aparece como sujeto político. Cuan-

do una mujer afirma que «nos dejaron fue la brecha», está nombrando la distancia material y simbólica entre el «nosotros» que habita el lugar y el «ellos» que decide sobre él. El discurso construye así una frontera que no solo diferencia actores, sino que señala responsabilidades y desigualdades.

Otra oposición constante se articula en torno al lugar del sector público y las mutaciones introducidas por el mercado laboral privatizado. Ecopetrol aparece en el relato de los entrevistados como símbolo de estabilidad, prestigio y trabajo digno. La frase «trabajar en Ecopetrol era una bendición» se repite en diferentes formas. También se narra que «antes era un monopolio», pero uno que garantizaba condiciones laborales mejores que las ofrecidas actualmente por las contratistas privadas.

El contraste con el sector privado se basa en experiencias directas de precarización. Una entrevistada relata que cuando llegaron las empresas privadas «lo que hicieron fue generar expectativas que después destruyeron comunidades enteras», como en Caño Negro, donde después de un auge temporal «la gente quedó sola, sin trabajo y sin tierras». Estas narrativas muestran cómo el privado se asocia a rupturas del tejido social, volatilidad del empleo y deterioro de la vida comunitaria.

En varios testimonios se insiste en que la tercerización debilitó la posibilidad de acceder a un trabajo estable. Una entrevistada describe que «piden tantos requisitos que ya nadie puede entrar», mientras otra señala que «las contratistas siempre traen su gente». Estas prácticas contrastan con la memoria positiva del sector público, donde se percibía que existía al menos cierta posibilidad de negociación colectiva y de reconocimiento al trabajador.

El discurso no idealiza a Ecopetrol, pero sí la coloca en una posición simbólica más cercana al territorio, mientras el sector privado aparece como fuerza corrosiva que rompe vínculos laborales y sociales.

En Barrancabermeja, el discurso sobre el trabajo no es técnico ni abstracto. Es emocional, experiencial y profundamente político. La gente habla de derechos no como nociones jurídicas, sino como pilares de la vida digna que se han erosionado con la llegada de nuevas formas de contratación. El derecho aparece encarnado en expresiones como «teníamos garantías, había estabilidad, uno podía planear la vida». El mercado, por el contrario, se narra como mecanismo que introduce desigualdad, competencia desleal y transacciones opacas. Cuando una mujer afirma que «los líderes cobran para dar puestos», está mos-

trando que la lógica del mercado coloniza incluso los espacios comunitarios. Y cuando otra dice que «Ecopetrol tapa la parte social, pero otras empresas dañan el territorio», está distinguiendo entre lo que debería ser un derecho de las comunidades y lo que termina siendo un conflicto de intereses.

La noción de derechos se articula también en torno a la memoria obrera. Varios entrevistados hablan con respeto de la historia sindical. Uno señala que «allá nacieron los sindicatos del país», lo que convierte el territorio en referente de lucha y dignidad. Frente a esta tradición, el mercado aparece como fuerza que desestructura aquello que daba cohesión a la comunidad. La frase «ya no quieren ir al campo a trabajar, porque se acostumbraron a los jornales altos y temporales» evidencia cómo la lógica volátil del mercado desestabiliza prácticas culturales y productivas.

Una tensión adicional se articula en la oposición entre modernización y precarización. Muchas entrevistas reconocen cambios positivos asociados a la infraestructura, las vías, el comercio y el reconocimiento nacional de la ciudad. Una entrevistada destaca que «Barrancabermeja se convirtió en un referente en el mapa», mientras otra recuerda que la industria impulsó la construcción de centros culturales y mejoras urbanas. La modernización aparece ligada a

la idea de futuro, prestigio y dinamismo económico.

Sin embargo, ese futuro prometido convive con una sensación de pérdida y deterioro. Una lideresa rural afirma que «nos dejaron fueron agujeros por debajo de la tierra», en referencia a pozos abandonados y daños ambientales no reparados. Otra menciona que «no va a haber quien siembre yuca, porque ya nadie quiere trabajar el campo». Estas frases sostienen la otra cara de la oposición: la precarización de las formas de vida.

En varias narrativas, la modernización se asocia a un progreso que no termina de llegar a las comunidades. Cuando un entrevistado señala que «las regalías se van entre los dedos», está sugiriendo que la modernización prometida por el Estado y la industria no se traduce en bienestar tangible. La precarización se hace evidente también en la burocratización del acceso al trabajo. Según una entrevistada, «si no pagan, no los dejan entrar al taladro», lo que muestra cómo los beneficios se vuelven inaccesibles para quienes no tienen capital social o económico.

Estas oposiciones articulan un campo discursivo donde las comunidades interpretan la conflictividad petrolera como una disputa por el sentido del territorio. El «nosotros» se afirma como sujeto histórico que ha sostenido la

ciudad y ha puesto los muertos, mientras el «ellos» aparece como fuerza externa que administra la riqueza sin redistribuirla. Lo público se narra desde la memoria obrera como espacio de derechos, mientras lo privado introduce precariedad y fragmentación. El mercado se concibe como amenaza a la vida digna, y la modernización, aunque valorada, se percibe como proceso excluyente que deja vacíos, brechas y territorios heridos.

## 5. Ethos, pathos y logos

En Barrancabermeja la articulación entre ethos, pathos y logos no es un recurso retórico aislado, sino la trama profunda a partir de la cual la comunidad interpreta su historia y legitima su lucha. El ethos se sostiene en la autoridad moral que da la memoria obrera, una memoria que aparece de forma insistente en las entrevistas cuando los trabajadores afirman que «esto lo levantamos nosotros, que la refinería es la razón de ser de la ciudad» o que «uno venía de familia petrolera y sabía que había futuro». Estas frases no solo describen un pasado, sino que reclaman un lugar en la historia, un derecho adquirido por trabajo y sacrificio. El ethos está construido sobre generaciones que hicieron de la empresa pública y del trabajo digno un horizonte de vida, lo que permite que los reclamos actuales no aparezcan como exigencias nue-

vas, sino como continuidad de un pacto social traicionado.

El pathos emerge de manera abrupta y, en muchos casos, dolorosa. Los entrevistados evocan miedo cuando dicen que «uno ya no sabe si mañana lo sacan», evocan frustración cuando afirman que «todo se fue al piso con la privatización», y reviven dolor cuando recuerdan que «a los líderes los marcaron y después venían por ellos». Estas emociones no son anecdóticas. Estructuran la experiencia cotidiana de precarización, represión y estigmatización. Pero el pathos también produce orgullo, como cuando declaran que «el sindicato defendió la vida de muchos» o que «Barranca siempre ha sabido pararse firme». Este componente emocional sostiene los repertorios de resistencia y reafirma una identidad que no se deja reducir por la violencia ni por la reestructuración económica.

El logos aparece como hilo racional que sostiene el diagnóstico comunitario. Los entrevistados argumentan con claridad que la tercerización redujo salarios, debilitó la estabilidad y deterioró derechos al señalar que «las empresas privadas pagan menos, no respetan antigüedad y contratan por tres meses». Argumentan también que la modernización de la refinería generó beneficios concentrados cuando sostienen que «modernizaron para unos pocos» y que «la ciudad

quedó sin trabajo». Incluso argumentan sobre la desigualdad regional al afirmar que «la plata del petróleo se queda arriba, no baja al barrio ni a la comunidad». Este logos no es técnico ni empresarial, pero sí es profundamente analítico: identifica relaciones de causalidad, señala actores responsables y evidencia patrones estructurales de desigualdad.

Estos tres componentes producen un discurso cohesivo, cargado de legitimidad social y claridad política. La autoridad del ethos, la intensidad del pathos y la racionalidad del logos convergen para construir una narrativa donde el conflicto petrolero no es un hecho aislado, sino una lucha histórica por justicia, dignidad y reconocimiento. El discurso obrero de Barrancabermeja no solo explica la precarización, la violencia y la privatización, las interpreta como quiebre del pacto social que sostuvo la vida de la ciudad. Por eso las voces insisten en que «esto no es progreso, que le arrebataron el futuro a los jóvenes», que «se perdió lo público». El ethos recuerda lo que se construyó. El pathos expresa lo que se sufrió. El logos argumenta por qué la situación actual es injusta. Juntos sostienen una identidad colectiva que se resiste a desaparecer y que convierte la memoria obrera en herramienta política frente al desorden extractivo contemporáneo.

## C. Nivel sociopolítico

## (Barrancabermeja)

El nivel sociopolítico permite situar los discursos de Barrancabermeja dentro de las estructuras históricas, económicas y de poder que han configurado la vida del territorio. Mientras el nivel textual mostró cómo se nombran los hechos y el nivel discursivo reveló cómo se organizan narrativamente las experiencias, este nivel interpreta esas voces en relación con los procesos más amplios que las condicionan. Las narrativas de los entrevistados no solo hablan de huelgas, amenazas o precarización, sino de un orden sociopolítico donde el trabajo, la violencia, la presencia estatal, las empresas privadas y las transformaciones industriales coexisten en tensiones persistentes. En expresiones como «el Estado nos dejó solos», «la empresa se volvió de ellos» o «Barranca siempre tuvo que defenderse», se hace evidente que las experiencias personales se inscriben en fuerzas estructurales que han moldeado el territorio durante décadas. Este nivel permite comprender cómo los discursos reproducen o desafían esas estructuras y cómo la comunidad interpreta su lugar dentro de un sistema marcado por desigualdades, conflictos y memorias profundas de resistencia.

### 1. Inserción histórica de los discursos

Los discursos de Barrancabermeja no surgen en el vacío. Cada testimonio está entrelazado con una historia larga de trabajo petrolero, organización sindical, conflictividades armadas y transformaciones económicas que han marcado al Magdalena Medio durante casi un siglo. Cuando los entrevistados hablan de la empresa, del Estado o de la violencia, no están describiendo únicamente experiencias personales. Están activando memorias colectivas que se han sedimentado en la vida cotidiana del territorio y que moldean la manera en que se interpreta el presente. Frases como «Barranca siempre fue así, esto viene de generaciones» o «la ciudad se hizo luchando» muestran que el sentido de lo que se dice está anclado en procesos históricos que exceden a los hablantes, pero que los atraviesan de manera profunda. La inserción histórica permite entender que los discursos recogidos no solo relatan hechos, sino que reconstruyen una trayectoria donde Ecopetrol, el sindicato, el Estado y los actores armados han configurado identidades, desigualdades y formas de resistencia que siguen vivas en la voz de quienes habitan la ciudad.

En los discursos de Barrancabermeja, Ecopetrol aparece como una institución pública fundante, no solo en términos económicos, sino también en términos simbólicos, comunitarios y políticos. Los entrevistados la evocan como es-

estructura que moldeó la vida de la ciudad, como autoridad legitimada por la historia y como actor que ofrecía estabilidad, prestigio y un horizonte claro para las familias trabajadoras. Esta dimensión histórica se percibe cuando alguien afirma que «Barranca creció a la sombra de la empresa», o cuando otro recuerda que «el sueño de cualquier muchacho era entrar a Ecopetrol». Tales expresiones consolidan la idea de que la empresa no fue únicamente un empleador, sino una institución que organizó la vida urbana, que dio forma al territorio y creó un sentido de ciudadanía laboral.

La memoria de Ecopetrol como entidad pública se ancla en experiencias concretas que los entrevistados relatan con claridad. Para muchos, la empresa representaba un tipo de pacto social en el que el trabajo estable era visto como derecho conquistado y no como concesión. En frases como «antes había garantías», «eso era trabajo de verdad» o «uno podía planear su vida», se revela que la estructura pública no se asocia solo a empleo, sino a dignidad y previsibilidad. Esta memoria contrasta con el presente precario que narran, lo que fortalece la nostalgia de un tiempo en que el Estado, a través de la empresa, actuaba como garante de bienestar laboral y de cohesión comunitaria. Ecopetrol también aparece como espacio donde se consolidó el sindicalismo

histórico del país. Los entrevistados recuerdan que «fue aquí donde nacieron los sindicatos», lo que convierte a la empresa en referente nacional y en símbolo de lucha organizada. Esta asociación entre lo público y la organización obrera forma parte del imaginario que sostiene la identidad de Barrancabermeja. No se habla de Ecopetrol como una simple estatal, sino como institución que reconocía la legitimidad de la representación colectiva. Esa memoria se contrapone directamente a las prácticas de las contratistas privadas, que muchos describen como restrictivas u hostiles frente a la organización.

La inserción histórica se evidencia también en la forma en que los entrevistados interpretan los momentos de privatización parcial o tercerización. En su narrativa estos procesos no rompen solo un modelo laboral, rompen el vínculo histórico con una institución que sentían propia. Por eso expresiones como «la empresa ya no es de nosotros, la volvieron negocio» o «se perdió lo público» no son simples comentarios. Son indicadores de una fractura en la relación entre comunidad e institución. La lógica pública que estructuraba el trabajo, la movilidad social y el sentido de pertenencia se percibe sustituida por intereses externos que no reconocen la historia del territorio.

Ecopetrol aparece entonces como institución que articuló trabajo, ciudad,

identidad y lucha. En esa medida su transformación se vive como transformación del propio tejido social. Los discursos muestran que la empresa pública fue, durante décadas, un ancla moral y social para las comunidades de Barrancabermeja. Esa historia se mantiene viva en los relatos, no como nostalgia vacía, sino como referente que permite evaluar críticamente el presente y explicar la desilusión con las modalidades laborales actuales. La inserción histórica del discurso revela que, para los entrevistados, hablar de Ecopetrol es hablar de Barrancabermeja y que entender la empresa como institución pública es indispensable para comprender la densidad del conflicto y de la identidad obrera del territorio.

La inserción histórica de los discursos en Barrancabermeja muestra que Ecopetrol no fue el único pilar público que dio forma a la identidad del territorio. Junto a ella, la Unión Sindical Obrera se consolidó como actor político central, no solo en la defensa del trabajo sino en la construcción misma de la vida colectiva. La USO aparece en los testimonios como institución histórica que acompañó, organizó y, en muchos casos, protegió a las comunidades frente a poderes que desbordaban lo laboral. La memoria sindical está inscrita en frases que se repiten en distintas voces, como «si no fuera por la USO, esto sería distinto, gracias al sindicato aquí se

logró mucho» o «ellos siempre dieron la cara». Estas expresiones revelan que para los entrevistados la USO no fue únicamente un sindicato, sino un referente de autoridad moral y política.

La legitimidad política de la USO se sostiene en su capacidad para representar al trabajador frente al Estado, frente a Ecopetrol y frente a las empresas privadas que llegaron con la tercerización. Los entrevistados recuerdan que el sindicato fue clave en los momentos más duros de la ciudad. En testimonios como «cuando venía la represión, la USO no se escondía» o «si había persecución, ellos eran los que hablaban», el sindicato se construye discursivamente como actor que asumía riesgos y que no abandonaba a la comunidad. Esa historia de presencia y confrontación cimienta su papel como organización que no solo negocia salarios, sino que intercede en disputas políticas, denuncia abusos y articula resistencias.

La dimensión política de la USO aparece también en la forma en que los entrevistados narran la violencia paramilitar. Varios afirman que «ser sindicalista era ponerse una cruz en la espalda», lo que evidencia que el sindicato operaba como fuerza significativa dentro del territorio, lo suficientemente visible e influyente para convertirse en blanco de actores armados. Esta persecución no debilitó su legitimidad. Al contrario, la

reforzó. Cuando una entrevistada dice que «ellos no se dejaron callar ni cuando había miedo», está reconociendo que la acción sindical fue, en sí misma, acto de defensa comunitaria. La USO se transforma así en figura que encarna la resistencia integral frente a la violencia política y la precarización laboral.

Además, los entrevistados sitúan a la USO como actor que moldeó la identidad colectiva de Barrancabermeja. La organización es narrada como escuela política, un lugar donde se aprendía a leer la realidad social y a interpretar las dinámicas de poder. En frases como «uno se formó allá, esas charlas eran la universidad de nosotros» o «la USO educaba», el discurso revela que su papel político excedía la negociación. Era un espacio de formación de ciudadanía, de construcción de comunidad y de producción de conciencia histórica. En esta dimensión la USO aparece como actor que ayudó a dar sentido a la vida en la ciudad, dotando a los trabajadores de un lenguaje político para comprender el territorio.

La inserción histórica de la USO como actor político también se expresa en su papel articulador entre lo local y lo nacional. Los entrevistados reconocen que desde Barrancabermeja se irradiaron luchas que tuvieron impacto en todo el país. Cuando un entrevistado afirma que «de aquí salieron muchos

de los derechos que hoy existen», está reconociendo que la USO no solo actuaba localmente, sino que encarnaba un proyecto político más amplio que vinculaba el trabajo, la justicia social y la defensa del sector público. En este sentido, el sindicato aparece como institución que no solo sostiene a la comunidad, sino que la conecta con discusiones nacionales sobre equidad, derechos y soberanía.

Por todo ello, en los discursos analizados la USO se consolida como actor político pleno. No es únicamente instrumento laboral, sino fuerza histórica que ha producido identidad, defendido vidas, confrontado poderes y dado densidad moral a la resistencia barranqueña. Su presencia en las entrevistas demuestra que comprender la conflictividad petrolera del territorio exige entender el lugar del sindicalismo como institución que dio forma al territorio y que continúa siendo referencia para interpretar su presente y su futuro.

La modernización de la refinería aparece en los discursos como un punto de inflexión que reconfigura profundamente la relación histórica entre Ecopetrol, la USO y la comunidad de Barrancabermeja. Tras la memoria colectiva que presenta a la empresa pública como garante del bienestar y al sindicato como actor político central, la modernización irrumpe en los relatos como proceso que introduce nuevas ló-

gicas laborales, nuevos actores privados y nuevas formas de desigualdad que transforman las bases mismas sobre las cuales se construyó la identidad obrera del territorio. Los entrevistados reconocen que la refinería necesitaba actualizarse, pero insisten en que el modo en que se llevó a cabo desarticuló prácticas y vínculos sociales que habían sostenido la vida colectiva. Esta tensión se expresa en narrativas como «sí había que modernizar, pero no así, fue un cambio que nos sacó a muchos» o «eso no era modernizar, era reemplazar gente».

La llegada de contratistas privadas es descrita como el eje más problemático de la modernización. Los entrevistados afirman que, mientras Ecopetrol representaba estabilidad y derechos, las empresas externas impusieron condiciones más frágiles y relaciones laborales menos transparentes. En expresiones como «vino la modernización y nos llenaron de terceros, los privados trajeron su gente» o «con la modernización empezó el cambio de reglas», se ve cómo la comunidad interpreta este proceso como ruptura del pacto histórico que existía entre trabajador, empresa pública y territorio. La modernización, en su narrativa, no actualizó la refinería. Transformó la forma en que se distribuía el poder dentro de ella y debilitó a los actores que antes lo graban equilibrarlo.

Este proceso impactó directamente a la USO como actor político. Los entrevi-

tados sostienen que la modernización redujo el margen de acción del sindicalismo porque fragmentó la base trabajadora y disminuyó la capacidad de negociación colectiva. En testimonios como «el sindicato se quedó sin a quién defender, los privados no reconocen la organización» o «perdimos fuerza, porque ya no éramos la mayoría», se observa cómo la modernización es percibida como mecanismo para restar poder político al sindicalismo histórico. La USO aparece enfrentada no solo a contratistas que evitan la negociación, sino a un modelo laboral que privilegia la rotación, la temporalidad y la precarización, dificultando la construcción de comunidad y continuidad sindical.

La modernización también reconfiguró la percepción del territorio. Los entrevistados describen que, antes, la refinería era el corazón productivo y simbólico de Barrancabermeja, pero que la modernización desplazó parte de ese vínculo. Algunos afirman que «ya no sentimos la refinería como antes» o que «se volvió una empresa que no mira a la ciudad». Estas voces muestran que la modernización no solo cambió estructuras internas, sino que alteró la manera en que el territorio se reconoce a sí mismo. Mientras la Ecopetrol pública representaba cercanía y reciprocidad, la modernización produjo sensación de distancia y abandono. Para muchos, la refinería modernizada dejó de ser la

institución comunitaria que conocían y se convirtió en espacio tecnocrático dirigido por intereses externos.

Además, la modernización aparece ligada a una narrativa de exclusión generacional. Varios entrevistados expresan que las nuevas dinámicas cerraron oportunidades para los jóvenes de la ciudad. En frases como «los pelados ya no entran a Ecopetrol, antes uno tenía futuro aquí, ahora no» o «la modernización sacó a la juventud de la ecuación», se evidencia que este proceso es visto como ruptura en las trayectorias de movilidad social que antes estaban garantizadas por la empresa pública. La modernización se vive como fractura del horizonte de futuro y como debilitamiento del vínculo intergeneracional que sostenía la identidad petrolera.

En síntesis, la modernización de la refinería es narrada como transformación estructural que altera las relaciones históricas entre Ecopetrol, la USO y la comunidad. No se la percibe como proceso puramente técnico, sino como reconfiguración del poder laboral, político y territorial. Es la modernización la que, en el relato de los entrevistados, acelera la deslegitimación de las empresas privadas, profundiza el sentimiento de abandono estatal y debilita la capacidad de resistencia organizada. Por eso sus memorias no hablan solo de máquinas nuevas, sino de un cambio que afectó la

vida social del territorio y que modificó los fundamentos sobre los cuales la ciudad había construido su identidad.

La violencia contra líderes y contra el movimiento obrero ocupa un lugar central en los discursos de Barranquermeja y aparece como uno de los elementos que más profundamente ha marcado la historia política, laboral y emocional del territorio. En continuidad con lo descrito sobre la modernización y la inserción histórica de la USO, los entrevistados explican que la violencia no fue un fenómeno aislado ni un conjunto de episodios desconectados, sino un mecanismo de disciplinamiento social que buscó debilitar la organización colectiva, fracturar la capacidad de resistencia y reconfigurar el equilibrio de poder en la ciudad. Esta lectura surge de testimonios donde se afirma que «ser líder era ponerse en la mira», que «uno sabía que lo estaban vigilando» o que «aquí mataron a muchos por hablar», expresiones que muestran cómo la violencia se inscribe en la experiencia cotidiana como amenaza permanente. Para los entrevistados la violencia no solo perseguía a personas particulares. Buscaba romper la estructura política que el sindicalismo había construido. En frases como «ellos querían callar al sindicato, iban por los líderes para que la gente se asustara» o «la estrategia era dejar sin cabeza al movimiento», la violencia se describe como acción dirigida.

No es percibida como daño colateral del conflicto armado, sino como proyecto sistemático orientado a debilitar la capacidad organizativa de los trabajadores. La persecución de dirigentes es narrada como ataque al corazón político de la ciudad, pues la USO no solo representaba intereses laborales, sino que funcionaba como articuladora social y como defensora histórica de los derechos colectivos.

Los entrevistados relatan episodios que ponen en evidencia la crudeza de esa violencia. Cuando alguien dice que «a un compañero lo sacaron de su casa delante de la familia» o que «uno se iba a trabajar sin saber si volvía», se observa la forma en que la violencia se convirtió en dispositivo de control psicológico que quebraba la seguridad básica de la vida cotidiana. Estos relatos explican por qué la memoria de la violencia permanece tan viva. Su función no fue solo eliminar voces críticas. Fue instaurar el miedo como regulador de la conducta social. En palabras de un entrevistado, «la idea era que nadie se atreviera a luchar».

La violencia también aparece vinculada a transformaciones económicas y laborales. Los entrevistados sostienen que los años más duros de amenazas coincidieron con procesos de privatización, llegada de contratistas y debilitamiento del Estado. En esta articulación se señala que «mientras mataban líderes, cam-

biaban las reglas del trabajo» o que «la violencia abrió el camino para los privados». Este vínculo revela que la violencia no se interpreta únicamente como fenómeno armado, sino como parte de una reconfiguración estructural donde la eliminación de figuras sindicales facilitó la implantación de un modelo laboral más precarizado. Desde esta perspectiva, la violencia es entendida como fuerza que sustituyó negociaciones por miedo y que debilitó las bases sociales que podían resistir la tercerización.

La persecución dejó huellas que siguen modelando la identidad del movimiento obrero en el territorio. Los entrevistados afirman que «uno aprendió a ser fuerte, la lucha no se acabó, aunque quisieron» o «seguimos, porque ya no nos queda otra». Estas frases muestran que la violencia, aunque devastadora, también reforzó un ethos de resistencia que se mantiene como parte de la identidad colectiva. La memoria de los líderes asesinados opera como recordatorio moral y como fuente de legitimidad política. En varios testimonios se afirma que «seguimos por ellos», lo que le da a la resistencia un carácter ético que excede lo laboral y que se convierte en forma de honrar la historia.

La violencia contra líderes se inscribe en la narrativa amplia de desprotección estatal y de ausencia de garantías para la organización obrera. Los entrevista-

dos reiteran que «las denuncias no servirían», que «el Estado llegaba tarde» o que «la justicia aquí nunca apareció». Con estas expresiones se deslegitima la capacidad del Estado para proteger la vida, lo que profundiza la percepción de que el sindicato y la comunidad quedaron expuestos frente a actores armados que actuaban con impunidad. Esta sensación de abandono no solo denuncia una falla institucional, sino que alimenta la convicción de que la defensa del movimiento obrero dependía de su propia capacidad organizativa.

En síntesis, la violencia contra líderes y trabajadores no es recordada como conjunto de tragedias aisladas, sino como proceso histórico que buscó quebrar la estructura política del territorio, facilitar transformaciones laborales regresivas y controlar socialmente a una comunidad que tenía una larga tradición de organización y resistencia. Su impacto configuró identidades, fortaleció memorias colectivas y consolidó un sentido de lucha que sigue siendo punto de referencia en los discursos analizados. La violencia es, así, componente estructural del orden sociopolítico narrado por los entrevistados y elemento imprescindible para comprender la conflictividad petrolera de Barrancabermeja.

El nivel sociopolítico muestra que los discursos de Barrancabermeja solo

pueden comprenderse plenamente cuando se sitúan dentro de la historia larga de trabajo, violencia, organización y transformación industrial que ha marcado al territorio. Las voces de los entrevistados revelan que la ciudad no interpreta el conflicto petrolero como fenómeno reciente, sino como trayecto acumulado de luchas, amenazas y rupturas. Esta historicidad se hace evidente cuando afirman que «esto viene de generaciones, aquí la lucha no empezó ayer» o «Barranca siempre fue así, hecha a pulso y a resistencia». Estas expresiones condensan la forma en que la comunidad entiende su presente a partir de un pasado que la atraviesa y que continúa operando como marco interpretativo para evaluar cualquier cambio.

Ecopetrol aparece en los relatos como institución pública que dio estabilidad, identidad y proyecto de vida a miles de familias. No es casual que los entrevistados repitan frases como «el sueño era entrar a Ecopetrol, esa empresa era la vida de la ciudad» o «cuando Ecopetrol era de verdad pública, uno podía planear». Estas memorias funcionan como contraste para denunciar la precarización introducida con la modernización y la tercerización. Los trabajadores narran que la llegada de contratistas cambió radicalmente la relación con la empresa. Testimonios como «nos llenaron de terceros, vino la modernización

y nos sacaron» o «los privados trajeron su gente y la comunidad quedó por fuera» revelan que los cambios tecnológicos fueron, a la vez, cambios en las relaciones de poder.

La USO se consolida como actor político imprescindible. Sus funciones exceden lo laboral y se extienden a la defensa del territorio y de la vida. La centralidad del sindicato en la memoria colectiva se observa cuando los entrevistados dicen que «si no fuera por la USO, esto sería otra historia, ellos siempre dieron la cara» o «allá nos formamos como ciudadanos». La organización no aparece como estructura gremial, sino como institución que sostuvo a la comunidad durante décadas, incluso en los momentos más violentos. La persecución contra líderes sindicales confirma su relevancia política. Los testimonios son contundentes cuando afirman que «ser sindicalista era ponerse una cruz en la espalda, iban por los líderes para asustar a todos» o «aquí mataron a muchos por hablar». La violencia armada, en este sentido, no solo buscó eliminar voces críticas, sino desestructurar el tejido político que sostenía al territorio.

La presencia del Estado se evalúa de manera crítica. Se le recuerda más por su ausencia que por su capacidad de protección. En distintas entrevistas se repite que «el Estado nos dejó solos, uno denunciaba y no pasaba nada» o

«la autoridad no aparecía ni cuando había muertos». Estas declaraciones articulan desconfianza institucional con memoria de desprotección, lo que profundiza la sensación de abandono frente a la violencia paramilitar y frente a los cambios laborales impuestos por actores privados.

La modernización de la refinería opera como punto de quiebre sociopolítico. Los entrevistados reconocen que la actualización tecnológica era necesaria, pero insisten en que el modo en que se implementó fragmentó la comunidad e hizo irreconocible el modelo laboral que había guiado la vida de la ciudad durante generaciones. Frases como «la modernización no fue para nosotros, modernizaron para sacar gente» o «ya no sentimos la refinería como antes» revelan que este proceso se vivió como ruptura del pacto histórico entre empresa, trabajadores y territorio.

La violencia contra líderes y trabajadores constituye una de las huellas más profundas del territorio. No se recuerda como daño incidental, sino como proyecto que buscó disciplinar a la comunidad y debilitar su capacidad organizativa. Los entrevistados relatan episodios con dolor y precisión. Algunos dicen que «uno se iba a trabajar sin saber si volvía», otros recuerdan que «a un compañero lo sacaron de la casa delante de los hijos», y varios coinciden en que «la idea era que nadie se atreviera

a luchar». Estas narrativas muestran que la violencia operó como estrategia de control social y como fuerza que facilitó transformaciones económicas regresivas al reducir la capacidad de negociación del movimiento obrero.

El territorio se presenta como espacio donde se han inscrito estas disputas, y la comunidad se reconoce a sí misma a partir de ellas. Por eso tantas voces afirman que «Barranca es lucha, esta tierra se defiende» o «seguimos, porque ya no podemos quedarnos callados». Estas expresiones condensan la identidad colectiva que emerge del nivel sociopolítico. Una identidad que interpreta el pasado como fuente de legitimidad, que enfrenta el presente con desconfianza crítica y que ve en la resistencia no solo una práctica política, sino una forma de vida.

## 2. Relación discurso-poder

La relación entre discurso y poder en Barrancabermeja se hace visible en la forma en que los entrevistados describen cómo distintos actores han intentado moldear las conductas, las percepciones y las posibilidades de acción dentro del territorio. Los relatos muestran que el poder no se ejerce únicamente a través de decisiones institucionales, sino también mediante narrativas que buscan justificar desigualdades, naturalizar transformaciones laborales y le-

gitimar mecanismos de control social. En expresiones como «tocaba quedarse callado, así eran las reglas nuevas» o «ellos venían a imponer», se evidencia que los discursos producidos por empresas, por actores armados y por instituciones estatales han configurado horizontes de obediencia y subordinación. Frente a estas formas de dominación emergen contradiscursos comunitarios que desafían esa lógica y que se apoyan en la memoria obrera, en la autoridad moral del trabajo y en la identidad territorial para resistir prácticas que consideran injustas o ajenas a la historia de la ciudad. Esta sección explora esas tensiones, mostrando cómo el discurso no solo narra el conflicto, sino que participa activamente en su reproducción y en su transformación.

Los discursos de Barrancabermeja muestran que la dominación no se ejerció solo a través de decisiones institucionales o transformaciones laborales, sino mediante prácticas de disciplinamiento y control social que marcaron la vida cotidiana del territorio. Los entrevistados explican que distintos actores, desde empresas privadas hasta actores armados y sectores del Estado, utilizaron el miedo, la incertidumbre y la precarización para limitar la acción colectiva y debilitar la capacidad organizativa de la comunidad. Esta experiencia se refleja en expresiones como «tocaba quedarse callado, uno ya sabía que no

podía hablar mucho» o «aquí mandaba el que tenía armas», que revelan cómo el poder se encarnó en formas de vigilancia, silenciamiento y castigo simbólico que excedían el ámbito laboral.

Una de las formas más claras de disciplinamiento fue la violencia ejercida contra líderes y trabajadores, la cual los entrevistados describen como estrategia sistemática para controlar políticamente al territorio. En frases como «ser líder era ponerse en la mira» e «iban por los que hablaban», la violencia aparece como mensaje que buscaba instalar la obediencia mediante la eliminación selectiva de voces visibles. Los relatos sobre compañeros asesinados o amenazados no son narrados como episodios aislados, sino como formas de control destinadas a sembrar miedo, inhibir la protesta y obligar a la comunidad a aceptar condiciones impuestas desde afuera. De esta manera la violencia se convirtió en tecnología de poder que reorganizó la conducta colectiva.

El disciplinamiento también operó a través de transformaciones laborales impulsadas por la modernización y la tercerización. Los entrevistados sostienen que los nuevos contratos precarios, la rotación permanente de personal y la pérdida de estabilidad funcionaron como mecanismos para desarticular la cohesión obrera. En testimonios como «con los terceros uno no podía decir

nada» o «si hablaba lo sacaban y metían a otro», se observa cómo la precarización se utiliza como herramienta de control. La pérdida del empleo, antes improbable dentro de la estructura pública, se convirtió en amenaza constante que disuadía la participación política. Para muchos esta forma de dominación fue tan efectiva como la violencia armada porque condicionaba la vida material y restringía la posibilidad de organizarse.

El control social también se ejerció mediante discursos que buscaban redefinir lo aceptable dentro del territorio. Algunos entrevistados afirman que se instaló la idea de que la modernización exigía sacrificios y que la resistencia era obstáculo para el progreso. Se escuchan expresiones como «decían que los que protestábamos éramos atrasados» o «nos culpaban de frenar el desarrollo», lo que evidencia que las narrativas empresariales buscaron deslegitimar la oposición laboral al asociarla con irracionalidad o falta de visión. Estas narrativas actuaron como dispositivos simbólicos que moldeaban percepciones y que justificaban la exclusión de trabajadores antiguos en nombre de la eficiencia.

Asimismo, el control social se ejerció mediante la naturalización del miedo. Varias voces afirman que «uno aprendió a vivir así, el miedo se volvió cos-

tumbre» o «ya sabíamos cómo movernos para no llamar la atención». Estas expresiones muestran que el disciplinamiento no solo operaba desde afuera. También se internalizaba en prácticas cotidianas donde la autocensura, la vigilancia mutua y la reducción de espacios de discusión se volvieron formas de sobrevivencia. El poder disciplinario funcionó entonces no solo por coerción externa, sino por la adaptación de la comunidad a condiciones que limitaban sus posibilidades de actuar.

La dominación y el disciplinamiento transformaron la estructura política del territorio al fortalecer actores que no respondían a la comunidad y al debilitar a instituciones históricas como la USO. Los entrevistados señalan que la violencia y la precarización buscaban restar influencia a la organización obrera. Frases como «la idea era dejarnos sin voz» o «si callaban a los líderes, callaban a todos» muestran que el control social tuvo como objetivo alterar el equilibrio de poder dentro de la refinería y dentro de la ciudad. La comunidad interpreta que estos mecanismos fueron necesarios para imponer un modelo económico que no contaba con apoyo social.

En conjunto los discursos revelan que la dominación en Barrancabermeja operó mediante una combinación de violencia, precarización y discursos de estigmatización que buscaban disci-

plinar a la población. Este entramado produjo formas de control social que transformaron profundamente la vida del territorio y que siguen presentes en la memoria colectiva. Lo que el ACD permite observar es que estas prácticas no se recuerdan solo como hechos, sino como estructuras de poder que moldearon subjetividades, limitaron la acción política y redefinieron la relación entre comunidad, empresa y Estado.

Los discursos de Barrancabermeja muestran que las desigualdades estructurales introducidas o profundizadas por la modernización y la tercerización no se impusieron únicamente mediante prácticas económicas o decisiones administrativas. También se sostuvieron mediante narrativas empresariales que buscaron presentar esas desigualdades como inevitables, necesarias o incluso beneficiosas para el desarrollo del territorio. Esta dimensión simbólica del poder se hace visible cuando los entrevistados recuerdan que «decían que era lo que tocaba, nos repetían que así eran las nuevas reglas» o «nos vendían la idea de que la empresa moderna no podía cargar con tanta gente». Estas frases revelan que el discurso empresarial funcionó como dispositivo de legitimación que transformaba problemas sociales en efectos naturales del progreso.

Una de las narrativas más repetidas fue la que justificó la tercerización como

mecanismo técnico indispensable para la eficiencia. Los entrevistados cuentan que se les decía que «los terceros eran más especializados», que «era lo que pedía la modernidad» o que «la empresa tenía que reducir costos para competir». Estas afirmaciones aparecen una y otra vez en las entrevistas, y aunque reconocen que la refinería necesitaba actualizarse, cuestionan que este argumento técnico se utilizara para avalar la precarización laboral. La comunidad interpreta que se construyó un discurso donde la eficiencia justificaba cualquier sacrificio y donde la pérdida de estabilidad, derechos y continuidad se presentaba como consecuencia normal de la globalización.

El discurso empresarial también buscó legitimar brechas generacionales y territoriales. Algunos entrevistados señalan que se promovió la idea de que «los jóvenes no estaban preparados» o que «había que traer gente de afuera, porque los de aquí no servían para lo técnico». Estas narrativas produjeron división interna y reforzaron la marginación de la población local. La comunidad recuerda que esta forma de hablar instaló la idea de que Barrancabermeja no tenía el capital humano para sostener la modernización, lo que justificó la exclusión sistemática de trabajadores locales y la llegada de mano de obra externa que no se vinculaba con el territorio. Así se legitimó un modelo que

concentraba oportunidades por fuera de la ciudad y que debilitaba la movilidad social que había existido durante décadas.

La desigualdad también se legitimó mediante discursos que asociaban la organización sindical con atraso y conflicto. En varios testimonios aparece que las empresas afirmaban que «el sindicato no dejaba avanzar, la USO era un obstáculo» o «aquí se necesitaba gente que obedeciera y no que protestara». Estas narrativas instalaron un sentido común empresarial donde la resistencia no era expresión de ciudadanía laboral, sino señal de irracionalidad. De esta manera se justificó la exclusión de trabajadores sindicalizados, la reducción de la negociación colectiva y la fragmentación de la base obrera. La deslegitimación discursiva del sindicalismo fue uno de los mecanismos más eficaces para invisibilizar las desigualdades creadas por los nuevos modelos laborales.

Además, las narrativas empresariales promovieron la idea de que la modernización implicaba un ciclo natural de reemplazo poblacional. Los entrevistados recuerdan frases como «los viejos ya no se adaptan, esto es para gente con otra visión» o «las empresas modernas traen su gente». Esta forma de hablar presentó el desplazamiento de trabajadores experimentados como fenómeno inevitable, desvinculándolo de

decisiones políticas y económicas que privilegiaron la subcontratación. Así la exclusión de quienes habían construido la refinería se justificó como consecuencia lógica del cambio tecnológico, borrando el impacto social que esta transformación generó en la ciudad.

El discurso empresarial tendió a presentar la desigualdad como responsabilidad individual y no como resultado de decisiones estructurales. Varios entrevistados cuentan que se les decía que «si uno se quedaba por fuera era culpa de uno» o que «el que no progresaba era porque no se actualizaba». Esta narrativa desplazó la discusión colectiva hacia el plano personal, lo que debilitó la capacidad de la comunidad para interpretar las desigualdades como problemas políticos y para organizarse frente a ellas. En lugar de reconocer la pérdida de derechos como fenómeno estructural, se instaló la idea de que cada trabajador debía responder por su supervivencia individual.

En conjunto los discursos empresariales operaron como dispositivo de legitimación que naturalizó la precarización, justificó la exclusión territorial y sindical, y transformó desigualdades creadas por decisiones estratégicas en supuestos efectos inevitables del desarrollo. Lo que muestran las entrevistas es que la comunidad identificó esta operación simbólica como parte del

conflicto. Por ello tantas voces afirman que «nos vendieron un cuento», que «la modernización era para unos pocos» o que «el progreso que prometieron no era para la gente de aquí». Estas expresiones revelan que el discurso empresarial no pasó inadvertido. Fue leído críticamente y se convirtió en uno de los elementos que fortaleció los contradiscursos de resistencia que analizaremos en el siguiente apartado.

Frente a los discursos empresariales que buscaron legitimar la precarización, la exclusión territorial y la fragmentación del movimiento obrero, los relatos de los entrevistados muestran la emergencia de contradiscursos comunitarios que se afirman como formas de resistencia simbólica, política y emocional. Estos contradiscursos no surgen únicamente como reacción circunstancial. Se apoyan en la memoria obrera, en la identidad sindical y en la experiencia histórica del territorio. La resistencia aparece anclada en expresiones que se repiten en distintas voces, como «aquí siempre hemos luchado, esta tierra no se deja» o «Barranca no se arrodilla», que condensan la convicción de que el territorio ha respondido colectivamente a los intentos de disciplinamiento y control.

Uno de los elementos centrales del contradiscurso comunitario es la de-

fensa del valor del trabajo como pilar moral y político. Mientras el discurso empresarial presenta la productividad como criterio técnico, los entrevistados afirman que «nosotros levantamos la refinería, la empresa es lo que es por la gente de aquí» o «esto lo construimos con las manos». Estas expresiones reivindican el lugar del trabajador como protagonista histórico y devuelven sentido a aquello que la modernización buscó desdibujar. En esta narrativa la dignidad no se mide en eficiencia, sino en la trayectoria comunitaria que hizo posible el desarrollo industrial. El contradiscurso desarma así la idea de que la modernización puede ignorar el aporte de quienes la sostuvieron durante décadas.

Otro componente fundamental del contradiscurso es la afirmación del territorio como comunidad política y no solo como espacio productivo. Los entrevistados recuerdan que «la refinería no existe sin Barranca, esta ciudad ha puesto el pecho por años» o «la gente aquí siempre responde cuando toca defender lo nuestro». Estas frases transforman al territorio en actor colectivo y reivindican la idea de que cualquier decisión empresarial o estatal debe tener en cuenta a la comunidad. Frente a discursos que justifican traer mano de obra externa, el contradiscurso afirma la soberanía territorial y denuncia la exclusión como injusticia social.

El contradiscurso también se fortalece a través de la memoria de la violencia y de quienes la enfrentaron. Los entrevistados evocan a líderes asesinados como referentes éticos que no pueden ser borrados por los discursos que buscaban presentarlos como obstáculos al progreso. En expresiones como «ellos dieron la vida por esta ciudad, los que se fueron siguen siendo ejemplo» o «la lucha sigue por los que ya no están», la comunidad reconstruye un relato donde la resistencia no es solo estrategia política, sino deber moral. Esta memoria desafía directamente la narrativa empresarial que busca desacreditar al sindicalismo y convierte cada recuerdo de persecución en punto de apoyo para sostener la organización colectiva.

La USO constituye uno de los contradiscursos más potentes. Los entrevistados afirman que «el sindicato nos enseñó a no dejarnos», que «allá uno aprendía a hablar con argumentos» o que «la USO siempre estuvo cuando nadie más lo estaba». Estas declaraciones muestran que la organización sindical no solo resistió en el plano material, sino en el plano simbólico. Produjo un lenguaje de dignidad y justicia que neutralizó las narrativas empresariales que buscaban presentar la resistencia como atraso. El contradiscurso sindical ofrece así una alternativa interpretativa donde las luchas obreras se transforman en defensa del bien común y no en amenaza

para la modernización.

La resistencia comunitaria también opera mediante prácticas cotidianas que contradicen la lógica individualizante del discurso empresarial. Los entrevistados recuerdan que «entre nosotros nos cuidábamos, la gente avisaba cuando algo raro pasaba» o «las familias se unieron más cuando vinieron los peores tiempos». Estas acciones no son anécdotas. Constituyen formas de cohesión social que se oponen a la fragmentación laboral y al disciplinamiento basado en el miedo. El contradiscurso se expresa así en la solidaridad, en la protección mutua y en la reconstrucción de redes profundas que preservan la vida del territorio frente a la violencia y la precarización.

El contradiscurso comunitario desmonta la narrativa de inevitabilidad que acompañó la modernización. Varios entrevistados afirman que «sí se podía modernizar sin echar a la gente» o que «desarrollo no es sacar a los de aquí». Estas frases muestran que la comunidad no acepta el progreso como concepto impuesto, sino que disputa su significado. Para los trabajadores el desarrollo no consiste en reducir empleos o traer mano de obra externa, sino en generar bienestar colectivo, proteger la vida y garantizar la continuidad de la identidad petrolera. Al reinterpretar el progreso desde la experiencia local,

el contradiscurso desafía directamente las desigualdades estructurales legitimadas por las empresas.

Los contradiscursos identificados muestran que la comunidad de Barrancabermeja no fue receptora pasiva de los discursos de poder, sino sujeto político capaz de reinterpretarlos, resistirlos y reconfigurarlos desde sus propias matrices de memoria, dignidad y experiencia colectiva. La resistencia se articula como práctica histórica que se sostiene en recuerdos compartidos, como cuando los entrevistados afirman que «aquí siempre hemos luchado, esta tierra no se deja» o «nosotros levantamos todo esto», expresiones que convierten la defensa del territorio en fundamento moral y no solo laboral. La comunidad también activa formas de solidaridad que contrarrestan la fragmentación impuesta por la precarización y la violencia, evocadas en frases como «entre nosotros nos cuidábamos» o «la gente se unió más cuando vinieron los peores tiempos», lo que muestra que la cohesión social operó como respuesta organizada frente al disciplinamiento externo. Además, el contradiscurso reafirma la autoridad moral de quienes resistieron incluso en los momentos más duros, al recordar que «los que se fueron siguen siendo ejemplo» o que «la lucha sigue por los que ya no están», inscribiendo la resistencia en una genealogía ética que refuerza la identidad

territorial. Lo que emerge es un marco sociopolítico donde resistir no es reacción aislada ni acto impulsivo, sino dimensión estructural de la vida comunitaria y modo en que Barrancabermeja se reconoce a sí misma frente al Estado, frente a las empresas privadas y frente a la violencia que ha buscado históricamente silenciarla.

### 3. Articulación con políticas públicas

La lectura sociopolítica de los discursos de Barrancabermeja evidencia que las experiencias de los trabajadores, los líderes comunitarios y las familias del territorio no pueden separarse de las políticas públicas que han regulado el trabajo, la seguridad y la economía petrolera regional. Las voces recopiladas muestran que lo vivido por la comunidad es efecto directo de decisiones estatales que, en distintos momentos, han fortalecido derechos, debilitado las garantías laborales o permitido la expansión de modelos de contratación precarios. En expresiones como «el Estado nos dejó solos, las leyes nuevas fueron para sacarnos» o «todo aquí depende de cómo manejen el petróleo», se hace evidente que las narrativas locales interpretan su historia desde el impacto de estas políticas. Esta sección examina cómo los discursos articulan su experiencia cotidiana con marcos normativos que tocan tres dimensiones centrales: el trabajo y la seguridad,

los derechos laborales y el modelo económico que ha organizado la industria petrolera en el Magdalena Medio.

En los discursos de Barrancabermeja la relación entre trabajo y seguridad aparece como eje estructural para comprender la articulación entre experiencia cotidiana y políticas públicas. Los entrevistados narran que la seguridad nunca fue dimensión separada del mundo laboral, sino condición indispensable para ejercer derechos, organizarse y sostener un proyecto de vida en un territorio históricamente atravesado por la conflictividad. Muchos relatan que «uno podía trabajar tranquilo cuando había garantías» o que «antes el trabajo venía con respeto y con protección», evidenciando que la seguridad no se entendía únicamente como ausencia de violencia, sino como presencia estatal efectiva y como reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos.

Esta visión contrasta con períodos donde la política pública de seguridad se percibió débil o inexistente, lo que permitió que actores armados ocuparan ese vacío e instauraran formas de control que afectaron directamente la vida laboral. Voces que afirman que «ser líder era ponerse en la mira» o que «uno iba a trabajar sin saber si volvía», muestran que la experiencia de inseguridad no solo alteró la vida comunitaria, sino

que erosionó la posibilidad misma de ejercer el trabajo como práctica digna.

La articulación entre trabajo y seguridad también aparece marcada por la percepción de que las transformaciones en el modelo laboral coincidieron con debilitamientos en la política estatal de protección. Los entrevistados recuerdan que, mientras se expandía la tercerización y aumentaban los contratos precarios, la presencia estatal era insuficiente para garantizar la seguridad de quienes cuestionaban esas medidas.

Así se consolidó una lectura donde el cambio en las formas de empleo coincidió con un contexto donde el riesgo de hablar, protestar o cuestionar decisiones laborales era alto. Expresiones como «si uno reclamaba lo sacaban, nadie respondía cuando había amenazas» o «la seguridad no era para el trabajador, era para las empresas», revelan que las políticas públicas fueron interpretadas como orientadas a proteger estructuras productivas más que vidas humanas. Este desequilibrio profundizó la sensación de vulnerabilidad y la percepción de que el trabajador había perdido tanto el respaldo del Estado como los mecanismos colectivos que antes lo protegían.

Además, los discursos permiten observar que la relación entre trabajo y seguridad está atravesada por la memoria histórica del territorio. La comunidad

interpreta que los períodos donde el Estado fortaleció los derechos laborales estuvieron asociados a momentos de mayor protección de líderes y de estabilidad sindical. En contraste, los momentos de mayor violencia política coinciden con retrocesos o transformaciones regresivas en materia laboral. Cuando los entrevistados sostienen que «cuando empezó la modernización también aumentaron los riesgos» o que «las empresas privadas y los grupos armados se movían en los mismos tiempos», no están igualando actores, sino subrayando que los cambios económicos y la inseguridad se entrelazaron en la experiencia vivida. Esta asociación muestra que las políticas públicas de trabajo y seguridad, aunque divididas en los marcos normativos, son vividas como parte de una misma estructura política que define quién puede participar en la vida laboral y en qué condiciones.

Por último, los discursos revelan que la comunidad interpreta que la seguridad en el trabajo no se limita a políticas de protección física, sino que incluye el reconocimiento institucional y el respaldo estatal frente a conflictos laborales. Cuando los entrevistados afirman que «el Estado no estuvo cuando empezó la violencia contra los compañeros» o que «la seguridad social ya no fue la misma con los terceros», están señalando que la seguridad también implica garanti-

zar continuidad, derechos, estabilidad y condiciones laborales que no expongan la vida. Desde esta perspectiva el trabajo y la seguridad son inseparables porque la precarización no solo afecta ingresos y garantías, sino que aumenta la exposición al riesgo, limita la capacidad de denunciar violaciones laborales y fragmenta la fuerza colectiva necesaria para disputar condiciones justas. En esta lectura la seguridad se convierte en indicador de la calidad del pacto social entre Estado, empresa y comunidad, pacto que, según las voces recogidas, ha sido debilitado por decisiones políticas que no han priorizado la vida ni el bienestar de los trabajadores.

La reflexión sobre derechos laborales en los discursos de Barrancabermeja se articula de manera directa con la experiencia de inseguridad y precarización descrita previamente. Los entrevistados no separan el derecho al trabajo digno de las condiciones mínimas de protección, reconocimiento y estabilidad que garantizan la vida en el territorio. Cuando afirman que «antes había garantías, uno entraba a Ecopetrol y tenía futuro» o «los derechos se conquistaron luchando», no están evocando un pasado idealizado, sino señalando que los derechos laborales se vivían como eje fundamental del pacto social entre empresa pública, sindicato y comunidad.

Ese pacto se fractura de manera abrupta con la llegada de la tercerización y la

modernización, lo que explica que tantos entrevistados describan esa etapa con frases como «los derechos se fueron perdiendo de a poquitos, las reglas nuevas eran para sacar gente» o «ya no valía la antigüedad ni el conocimiento». En estas narrativas la pérdida de derechos no se presenta como consecuencia aislada de cambios técnicos, sino como parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional que facilitó la entrada de modelos laborales desregulados.

Los trabajadores enfatizan que la tercerización no solo redujo salarios y estabilidad. También desmanteló el conjunto de garantías que históricamente habían protegido la dignidad obrera. En expresiones como «con los terceros ya no había seguridad, uno no sabía si lo contrataban al mes siguiente» o «el derecho a reclamar se volvió peligroso», se evidencia que los derechos laborales se erosionaron en su dimensión material y simbólica. Lo que antes se vivía como conquista colectiva se transformó en privilegio excepcional o en condición frágil sujeta a la voluntad de contratistas externos.

Para los entrevistados esta transformación tuvo un impacto profundo sobre la organización sindical. Muchos señalan que «los terceros no reconocen el sindicato, se hizo difícil afiliarse» o «la empresa privada no quería negocia-

ción», lo que muestra que los derechos laborales vinculados a la participación colectiva fueron debilitados deliberadamente. El sindicato, figura histórica en el territorio, fue desplazado de su papel como garante de derechos, mientras nuevas empresas operaban bajo marcos contractuales que impedían cualquier forma de organización.

La pérdida de derechos laborales se interpreta también como ruptura generacional. Los relatos que afirman que «los jóvenes ya no entran con derechos» o que «los pelados tienen que aceptar lo que les den», evidencian que la precarización no solo afectó a quienes ya estaban vinculados al sector, sino que destruyó las trayectorias de movilidad social que habían caracterizado a la ciudad. En este punto las narrativas son categóricas. La precarización se entiende como negación del futuro y como debilitamiento de la estructura social que sostenía a la comunidad petrolera.

Los entrevistados articulan la defensa de los derechos laborales con la defensa del territorio mismo. Expresiones como «si se pierden los derechos, se pierde la ciudad, esto siempre fue lucha y derechos» o «la dignidad del trabajador es la dignidad de Barranca», muestran que los derechos no se conciben como beneficios individuales, sino como elementos que nutren la identidad colectiva del territorio. El discurso revela que

la defensa de derechos laborales es, a la vez, defensa de la memoria, del tejido comunitario y del proyecto histórico construido por generaciones de trabajadores.

En conjunto los discursos muestran que la vulneración de los derechos laborales no fue vivida como efecto natural de la modernización, sino como decisión política que alteró las bases más profundas del territorio. Por ello, la comunidad interpreta la precarización como injusticia que contradice la historia y que rompe el pacto que había permitido que Barrancabermeja se consolidara como ciudad petrolera y obrera. Las voces recogidas dejan claro que los derechos laborales no son discurso normativo, sino experiencia vivida que estructura la vida social, sostiene identidades y define el horizonte colectivo de la comunidad.

La economía petrolera regional aparece en los discursos de Barrancabermeja como estructura determinante de la vida colectiva, pero también como campo de disputa donde se dirimen proyectos de ciudad, modelos de desarrollo y formas de distribución del poder. Los entrevistados reconocen que el petróleo ha sido el eje económico del territorio durante generaciones, pero al mismo tiempo denuncian que la riqueza generada no se traduce en bienestar proporcional para la comunidad. En frases como «tanta ri-

queza y la gente sigue igual, el petróleo sale de aquí y no vuelve» o «la ciudad dio todo y recibió muy poco», se observa que la economía petrolera se interpreta como sistema desigual que extrae valor del territorio sin revertirlo en derechos, infraestructura u oportunidades sostenibles.

Esta percepción se intensifica cuando describen cómo la modernización, lejos de fortalecer la economía local, profundizó su dependencia de actores externos. La llegada de contratistas, la importación de mano de obra y el cierre de oportunidades para trabajadores locales son interpretados como síntomas de una economía que dejó de estar anclada al territorio. Expresiones como «trajeron gente de afuera y aquí nada, la plata se la llevan otros» o «los terceros no dejan nada en la ciudad» muestran que los entrevistados perciben que el nuevo modelo económico desvinculó a Barrancabermeja de los beneficios históricos que asociaban al sector público. La refinería, antes símbolo de movilidad social, se transformó en infraestructura productiva conectada a intereses nacionales y globales, pero cada vez más distante de la comunidad que la sostiene. La economía petrolera regional también es vista como generadora de ciclos de inestabilidad que impactan de manera desproporcionada a quienes dependen del empleo local. Los entrevistados señalan que la volatilidad del

sector se trasladó a las familias y a los barrios. En testimonios como «cuando se cae el petróleo se cae la ciudad, si no hay contratos, no hay comida en muchas casas» o «la economía de Barranca depende de un hilo», se evidencia que la dependencia del sector se vive como vulnerabilidad estructural. Esta lectura permite entender por qué la defensa del trabajo digno y de los derechos laborales adquiere un carácter estratégico. No se trata solo de condiciones laborales, sino de proteger la estabilidad económica de un territorio cuya vida está profundamente entrelazada con el funcionamiento de la refinería.

Los entrevistados vinculan estas dinámicas económicas con decisiones de política pública que, en su lectura, favorecieron a las empresas privadas sin fortalecer la economía local. En expresiones como «las regalías nunca se vieron, el Estado no invirtió en lo que debía» o «se olvidaron de que esta ciudad sostuvo a todo el país», se percibe una crítica estructural a la forma en que se gestionó la riqueza petrolera. La comunidad interpreta que existe una desconexión profunda entre la contribución histórica del territorio y la inversión estatal recibida. Esta contradicción alimenta sentimientos de abandono y refuerza la percepción de injusticia distributiva.

La economía petrolera regional se articula con los contradiscursos de resis-

tencia, pues los entrevistados sostienen que el modelo actual no garantiza desarrollo real para las generaciones futuras. Voces que afirman que «los jóvenes ya no ven futuro aquí» o que «el petróleo ya no asegura nada», muestran que la economía petrolera dejó de operar como promesa y se convirtió en estructura en disputa. En este sentido la defensa del trabajo, de los derechos laborales y del territorio no es solo respuesta al pasado, sino esfuerzo por reorientar la economía hacia un modelo donde el desarrollo deje de significar exclusión y despojo.

En síntesis, la economía petrolera regional, tal como se expresa en los discursos, no es únicamente un entorno productivo, sino un entramado político que define quién se beneficia, quién queda subordinado y qué implica vivir en una ciudad que ha entregado su fuerza de trabajo durante décadas sin recibir un retorno equivalente. Los entrevistados insisten en que «el petróleo sale de aquí y no vuelve, la riqueza se va para otros lados» o «la ciudad dio todo y quedó viendo», frases que condensan la percepción de una desigualdad histórica donde el territorio ha sostenido al país sin que ello se traduzca en bienestar colectivo. Por eso la crítica comunitaria no se limita a señalar fallas económicas. Se convierte en lectura ética y política que denuncia la desconexión entre aporte y recompensa, entre sacrificio y redis-

tribución, y entre el trabajo que construyó la refinería y la precarización que hoy lo reemplaza. Voces que afirman que «el progreso no fue para nosotros, las regalías nunca se vieron» o «la empresa creció y la ciudad quedó igual» muestran que el modelo económico actual es interpretado como injusticia estructural y no como simple desajuste técnico. Desde esta perspectiva la economía petrolera es campo de disputa por la dignidad del territorio y por el reconocimiento de su historia laboral. Es también espacio donde la comunidad reclama un lugar en la definición del futuro energético y productivo del país, porque como señalan varios entrevistados, «si no nos tienen en cuenta, esto se acaba», lo que convierte la demanda de redistribución en demanda por un proyecto de desarrollo que reconozca, respete y reintegre a quienes han sostenido la industria desde sus cimientos.

#### **4. Estructuras de desigualdad y conflicto**

Los discursos de Barrancabermeja muestran que la conflictividad petrolera no puede entenderse sin reconocer las estructuras de desigualdad que han organizado la vida del territorio durante décadas. Los entrevistados describen un entramado donde la precarización laboral, las prácticas de privatización, la presencia constante de actores militares y la estigmatización de líderes

sociales se entrelazan para producir un orden desigual que afecta de manera directa la dignidad, la seguridad y la participación política de la comunidad. En expresiones como «las reglas nuevas eran para sacarnos, militarizaron la ciudad como si fuéramos enemigos» o «al que hablaba lo señalaban», se evidencia que estas dimensiones no operan de forma aislada. Constituyen un sistema que reproduce jerarquías, debilita los mecanismos de defensa colectiva y normaliza relaciones de poder que dejan a la población en posición subordinada. Esta sección explora cómo estas estructuras se manifiestan en la experiencia cotidiana, cómo son interpretadas por los trabajadores y cómo han configurado un territorio donde el conflicto no es solo resultado de intereses económicos, sino producto de desigualdades institucionalizadas y prácticas sostenidas de exclusión.

La precarización emerge en los discursos de Barrancabermeja como una de las estructuras de desigualdad más profundas y persistentes, resultado directo de la transformación del modelo laboral impulsado por la modernización, la tercerización y la entrada masiva de empresas contratistas. Los entrevistados describen este proceso no como un ajuste técnico, sino como ruptura radical del pacto social que había sustentado la vida petrolera durante generaciones. Expresiones como

«los derechos se fueron perdiendo de a poquitos, las reglas nuevas eran para sacar gente» o «con los terceros ya no había garantías», revelan que la precarización no solo implicó condiciones laborales inestables, sino el desmonte sistemático de un conjunto de protecciones históricas que daban sentido a la experiencia obrera.

La precarización se manifiesta en la pérdida de estabilidad contractual y en la rotación permanente de trabajadores, percibida por la comunidad como estrategia que fragmenta la unidad laboral y reduce la capacidad colectiva de acción. Muchos recuerdan que «si uno decía algo lo reemplazaban al otro día» o que «ya no importaba la antigüedad ni el conocimiento», lo que evidencia cómo la tercerización convirtió el empleo en un bien frágil, sujeto a decisiones arbitrarias y desconectado de la trayectoria de quienes habían contribuido a construir la refinería. Esta nueva lógica laboral no solo disminuyó ingresos y garantías, sino que instaló un clima de incertidumbre que afectó la vida familiar, los proyectos y la cohesión social que antes unía a los trabajadores del sector.

La precarización también implicó una reconfiguración del estatus del trabajador dentro de la refinería. En la memoria obrera, Ecopetrol representaba reconocimiento, estabilidad y orgullo,

pero con la llegada de las contratistas muchos afirman que «uno se volvió descartable, era como si no valiéramos» o «los terceros trataban distinto a los de planta». Estas narrativas muestran que la precarización produjo una jerarquización interna donde los trabajadores tercerizados ocupaban posiciones subordinadas, con menos derechos, menor protección y escaso reconocimiento institucional. La desigualdad laboral se volvió estructura cotidiana, percibida en la alimentación, el transporte, las condiciones de seguridad y la posibilidad real de participar en procesos de formación o ascenso.

Además, la precarización se vivió como amenaza a la organización colectiva. Los entrevistados afirman que «los terceros no dejaban afiliarse, las empresas privadas no querían negociación» o «uno no podía ni mencionar el sindicato». Este tipo de testimonios evidencia que el nuevo modelo laboral no solo redujo garantías materiales, sino que buscó desactivar las formas históricas de defensa comunitaria. El debilitamiento del sindicalismo no fue accidente, sino efecto de una reconfiguración estructural que favoreció relaciones laborales atomizadas, sin representación y sin capacidad política para disputar condiciones justas.

La precarización se interpreta como mecanismo profundo de producción de

desigualdad territorial, no solo como deterioro de las condiciones laborales individuales. Los entrevistados señalan que «los jóvenes ya no entran a Ecopetrol, que a la gente de aquí la dejaron por fuera» o que «las oportunidades ya no son para la ciudad», expresiones que revelan una percepción extendida de exclusión estructural. En estas narrativas la precarización no afecta solamente a quienes perdieron estabilidad, sino que bloquea los canales de movilidad social que durante décadas definieron a Barrancabermeja como ciudad petrolera y obrera. El trabajo estable que antes permitía construir vivienda, pagar estudios, sostener familias y planear el futuro fue sustituido por contratos temporales, mal remunerados y desprovistos de garantías. Este cambio introdujo un quiebre generacional visible. Mientras los mayores recuerdan que «entrar a Ecopetrol era asegurar la vida», los jóvenes enfrentan un horizonte donde «lo que hay son puros contratos de tres meses», lo que altera la manera en que se imagina la trayectoria vital dentro del territorio. La precarización se vive así, como ruptura del proyecto histórico de la ciudad, como desarticulación del pacto intergeneracional que sostenía la identidad petrolera y como desplazamiento simbólico de la comunidad frente al corazón productivo que ella misma construyó.

En suma, los discursos revelan que la precarización no es fenómeno aislado ni

consecuencia accidental de la modernización, sino estructura de desigualdad incrustada en las transformaciones económicas y políticas del sector petrolero. Para la comunidad significa pérdida de derechos, debilitamiento del tejido social e imposición de un modelo laboral que contradice la historia, la identidad y las expectativas colectivas del territorio. De ahí que las voces recogidas sean categóricas cuando afirman que «esto no es progreso, que modernizaron para unos pocos» o que «la ciudad quedó sin futuro», frases que condensan una crítica ética y política al modelo contemporáneo de empleo. La precarización es interpretada, en esta lectura, como forma de violencia estructural que reconfigura las posibilidades de vida, limita la participación, restringe la organización y consolida un orden desigual que trasciende el mundo del trabajo para instalarse en la manera misma en que Barrancabermeja se piensa, se proyecta y se define como territorio.

La privatización aparece en los discursos de Barrancabermeja como el trasfondo estructural que hizo posible la precarización laboral y el quiebre generacional descritos anteriormente. Para la comunidad no se trata de un proceso administrativo o técnico, sino de una transformación política que alteró de raíz la relación histórica entre territorio, empresa y ciudadanía laboral. Los entrevistados insisten en que la privatización in-

trodujo una lógica distinta a la que había guiado a Ecopetrol como empresa pública. Mientras la refinería era percibida como institución vinculada al bienestar colectivo, los nuevos actores privados y las dinámicas de tercerización son narrados como fuerza que «vino a hacer negocio, a sacar ventaja» o «a ganar sin mirar a la ciudad». Esta lectura sitúa la privatización como ruptura del pacto social que sostenía a Barrancabermeja y como motor de las desigualdades que se consolidaron en la vida cotidiana.

Los relatos muestran que la privatización no se vivió como proceso transparente ni participativo. Muchos afirman que «esto lo decidieron por encima de nosotros, aquí nadie preguntó nada» o «un día nos despertamos y ya no era lo mismo», lo que evidencia que la comunidad interpretó este cambio como imposición distante, desconectada de la realidad local. Esta distancia reforzó la sensación de desposesión simbólica. Lo que antes era sentido como propio, construido por generaciones de trabajadores, pasó a ser administrado por actores sin vínculo territorial. De ahí que expresiones como «la empresa ya no es de nosotros» o «se perdió lo público» no describan solo un cambio institucional, sino una fractura emocional y política en la identidad colectiva.

La privatización también reorganizó la distribución del poder dentro de la refi-

nería y del territorio. Los entrevistados explican que los contratistas privados operan con lógicas que reducen derechos, evitan la negociación colectiva y fragmentan la fuerza laboral. En frases como «los privados no querían sindicato, con los terceros no había con quién hablar» o «todo se manejaba desde afuera», se evidencia que la privatización debilitó deliberadamente las instituciones que históricamente habían protegido a los trabajadores. La USO, que durante décadas había sido actor político central, se encontró frente a empresas que no reconocían su legitimidad, lo que reconfiguró la balanza de poder dentro de la industria. Esta pérdida de capacidad organizativa es relatada como consecuencia directa de la privatización y no como problema aislado de gestión.

En el plano territorial la privatización profundizó la desigualdad al romper los mecanismos que garantizaban que la riqueza generada permaneciera, al menos en parte, en la ciudad. Los entrevistados narran que «la plata ya no se queda aquí», que «los contratos se los llevan los de afuera» o que «lo público se volvió negocio», mostrando que la privatización altera no solo el modelo laboral, sino el flujo económico regional. La comunidad interpreta que esta redistribución regresiva debilita la economía local, reduce oportunidades y desvincula a Barrancabermeja de los

beneficios directos de su propia actividad petrolera. Esta desvinculación alimenta la sensación de injusticia, pues el territorio sigue cargando con los costos sociales, ambientales y de seguridad, mientras pierde participación en la riqueza generada.

La privatización es narrada como fuerza que acelera y profundiza la exclusión generacional ya descrita, un proceso que en los discursos aparece como herida abierta en el territorio. Para los entrevistados el quiebre no solo consistió en perder empleos estables, sino en ver cómo se cerraba el camino que durante décadas había permitido a las familias proyectar un futuro en la ciudad. La frase «los pelados ya no tienen entrada» sintetiza un sentimiento extendido de desposesión. No se trata solo de jóvenes que no encuentran trabajo, sino de jóvenes que han perdido la posibilidad de reproducir el modelo de vida que definió a Barrancabermeja como ciudad petrolera. Expresiones como «ni siquiera miran a la gente de aquí» o el «futuro lo cerraron» revelan que la privatización no se percibe como transformación del sector productivo, sino como cancelación de un horizonte vital que daba sentido social, económico y emocional a la existencia en el territorio. Antes la refinería garantizaba continuidad, movilidad social y orgullo familiar. Ahora, dicen los entrevistados, «esto se volvió contrato sobre contrato

y nadie puede hacer vida así», lo que muestra que la privatización desancló la vida del territorio, debilitando los vínculos que sostenían la identidad obrera y dejando a las nuevas generaciones en un limbo donde el proyecto colectivo parece interrumpido.

Desde esta perspectiva la privatización no solo redefine la estructura productiva, sino que altera la manera en que la comunidad imagina su futuro y evalúa su propio lugar dentro del país. La exclusión de los jóvenes se interpreta como señal inequívoca de que el territorio ha dejado de ser reconocido como sujeto de derechos, como espacio político y como comunidad con historia. Por eso los entrevistados afirman que «nos sacaron a todos, empezando por los muchachos» o que «la empresa ya no mira a Barranca», narrativas que convierten la privatización en eje que articula desigualdad laboral, desarraigo territorial y quiebre generacional. Frente a estas transformaciones el pasado adquiere un peso simbólico mayor, porque recuerda un tiempo en que el trabajo petrolero articulaba familia, comunidad y dignidad, y en que las oportunidades para los hijos formaban parte del pacto implícito entre Ecopetrol y la ciudad.

En conjunto los discursos revelan que la privatización no es solo categoría

económica. Es estructura de poder que reorganiza el territorio, debilita a los trabajadores, desplaza instituciones históricas y profundiza desigualdades que atraviesan la vida cotidiana, la política local y las relaciones sociales. Los entrevistados describen que privatizar significó perder la empresa pública, pero también perder la capacidad de decidir sobre el futuro de la ciudad. De ahí que tantas voces insistan en que «modernizaron para unos pocos, la ciudad quedó sin futuro» o «lo privado vino a acabar lo que teníamos», frases que condensan una lectura que es simultáneamente ética, material y política. En esa lectura la privatización aparece como proceso que no solo transformó la economía, sino que alteró el sentido colectivo de vivir en Barrancabermeja, redefinió los límites de la ciudadanía laboral y dejó una marca que continúa definiendo la conflictividad presente.

En esta dinámica la militarización aparece en los discursos como dimensión estructural del conflicto y como condición que redefinió la vida cotidiana en Barrancabermeja, convirtiendo el territorio en un espacio de vigilancia permanente donde la frontera entre seguridad y control se volvió difusa. Los entrevistados relatan que la presencia militar se intensificó especialmente en períodos de modernización, conflictividad laboral y expansión de actores armados. Frases como «militarizaron

la ciudad como si fuéramos enemigos, uno veía fusiles por todas partes» o «vivíamos entre retenes y patrullas» muestran que la militarización no fue interpretada como protección, sino como señal de sospecha dirigida hacia la población civil y, particularmente, hacia el movimiento obrero. La vida se reorganizó alrededor de dispositivos de control que regulaban la movilidad, imponían silencios y debilitaban los espacios de deliberación colectiva. En este sentido la militarización se articuló directamente con la precarización y la privatización, porque muchos trabajadores recuerdan que el aumento de fuerza pública coincidió con el desmonte de derechos laborales y con el ingreso de contratistas privadas, produciendo una sensación extendida de que la seguridad estaba diseñada para garantizar las operaciones empresariales más que para proteger a la comunidad.

Los discursos revelan que la militarización generó un clima donde la protesta social fue interpretada como amenaza, lo que reconfiguró la relación entre el movimiento obrero y el Estado. Expresiones como «uno protestaba y de una llegaban los del Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios], reclamar era visto como desorden» o «nos trataban como si fuéramos problema» indican que el ejercicio de derechos fue progresivamente criminalizado en nombre del orden y la seguridad. El efecto político de esta transformación fue profundo.

La militarización debilitó la capacidad de acción colectiva, redujo los espacios de negociación y fortaleció la idea de que los sindicatos eran actores inconvenientes para la estabilidad del sector. Esta estigmatización institucional se volvió terreno fértil para justificar medidas regresivas que afectaron al movimiento obrero. A los ojos de los entrevistados, la militarización contribuyó a un proceso más amplio de silenciamiento y disciplinamiento social que limitó la resistencia y facilitó la imposición de un modelo laboral precarizado.

La militarización no actuó sola en la producción de desigualdad y control social. Los discursos muestran que su eficacia dependió de un entramado simbólico que definió quiénes eran vistos como amenaza y quiénes como sujetos legítimos de protección. En ese contexto la figura del líder sindical se convirtió en blanco privilegiado de sospecha. Los entrevistados explican que el aumento de presencia militar vino acompañado de rumores, señalamientos y campañas de desprestigio que asociaban la acción colectiva con desorden, atraso o infiltración. Esta narrativa no solo justificó la vigilancia intensa y la intervención coercitiva de la fuerza pública. También preparó el terreno social para que el castigo y la violencia selectiva se normalizaran. De este modo la militarización creó las condiciones materiales del control, mientras la estigmatización de líderes instaló las condiciones

simbólicas que lo legitimaron. Lo que sigue muestra cómo este proceso produjo una de las formas más profundas de violencia estructural contra el movimiento obrero: la conversión del liderazgo social en figura sospechosa, perseguible y, en muchos casos, sacrificable dentro del territorio.

La estigmatización de líderes, aún más que la militarización, emerge como uno de los pilares discursivos que sostuvieron la violencia estructural contra el movimiento obrero. Los entrevistados relatan que durante décadas se instaló una narrativa que asociaba el liderazgo sindical con subversión, desorden o atraso. Expresiones como «al que hablaba lo señalaban, ser líder era ponerse en la mira» o «decían que los sindicalistas no dejaban avanzar» muestran cómo los líderes fueron convertidos en figuras sospechosas dentro de su propio territorio. Esta estigmatización no fue solo discurso. Preparó el terreno para justificar vigilancia, persecución y, en muchos casos, violencia directa contra quienes defendían derechos laborales. Los entrevistados recuerdan que «a los líderes los seguían, sabían quién se reunía con quién» o «uno no podía ni aparecer mucho», lo que revela que la estigmatización operó como mecanismo previo al castigo, creando condiciones sociales y políticas que permitieron que la agresión se naturalizara o se percibiera como parte inevitable del conflicto.

La estigmatización de líderes también se utilizó para debilitar la legitimidad moral del movimiento obrero. Se instaló un discurso que presentaba a los dirigentes sindicales como obstáculo para el desarrollo, lo que permitió justificar la entrada de actores privados y la reestructuración laboral. En testimonios como «nos decían que éramos el problema, los líderes eran culpables de todo» o «siempre inventaban que el sindicato era un peligro», se evidencia que esta narrativa buscaba erosionar la base social del sindicalismo, fragmentar la comunidad e impedir la organización colectiva. La estigmatización tuvo además efectos subjetivos. Líderes y trabajadores relatan que interiorizaron el miedo y la sospecha, y que muchas personas dejaron de participar en actividades sindicales para proteger su vida. Este retraimiento no se explica por apatía, sino por la construcción discursiva de un entorno donde actuar políticamente significaba ponerse en riesgo.

La estigmatización funcionó como eslabón que conectó violencia, precarización y militarización. Los entrevistados señalan que «marcaban a los que se organizaban, primero lo señalaban y después venían por él» o «si aparecías en una lista ya sabías lo que venía», mostrando cómo el discurso que convertía a los líderes en amenazas abrió el camino para ataques paramilitares,

capturas arbitrarias o despidos injustificados. La estigmatización se volvió así tecnología de poder que produjo cuerpos vulnerables y vidas sacrificables dentro del territorio. En conjunto los discursos revelan que la estigmatización no solo justificó la violencia, sino que permitió que la desigualdad se reprodujera y que la resistencia se debilitara. Es, en la lectura comunitaria, uno de los mecanismos más efectivos para destruir la cohesión social, invisibilizar la memoria obrera y consolidar un orden donde los trabajadores quedan subordinados frente a intereses externos que niegan su historia y su legitimidad.

Los discursos recogidos en Barranca Bermeja permiten afirmar que la precarización, la privatización, la militarización y la estigmatización de líderes no constituyen fenómenos dispersos. Forman una arquitectura de desigualdad que reorganizó el territorio, despojó a la comunidad de derechos históricos y deterioró las condiciones que sostenían la vida colectiva. Las voces coinciden en que estas transformaciones no ocurrieron de manera espontánea. Fueron impuestas desde arriba mediante decisiones políticas, empresariales y armadas que se justificaron bajo el lenguaje del progreso, pero que en la práctica significaron desposesión y pérdida de futuro. Expresiones como «los jóvenes ya no tienen entrada, nos trataron como enemigos, al que hablaba lo

señalaban» o «modernizaron para unos pocos» condensan la percepción de un orden que se volvió hostil hacia la propia población que construyó la ciudad.

La precarización aparece como fractura estructural que rompe el pacto intergeneracional y desestabiliza las trayectorias de vida, mientras la privatización profundiza esta exclusión al convertir la riqueza colectiva en negocio privado que no reconoce el vínculo histórico entre Ecopetrol y la comunidad. La militarización aporta el componente coercitivo que mantiene ese orden desigual, transformando la seguridad en dispositivo de control y disciplinamiento de la protesta. La estigmatización de líderes completa el círculo, justificando la violencia y debilitando los mecanismos comunitarios de defensa y resistencia. En conjunto estas cuatro dimensiones revelan un modelo de gobernanza que se sostiene en la combinación de desprotección laboral, concentración de poder económico, fuerza armada y deslegitimación política.

Lo que emerge es una lectura territorial del conflicto donde la desigualdad no es falla del sistema. Es su condición de posibilidad. Los discursos muestran que la comunidad no fue receptora pasiva de estas dinámicas, sino observadora aguda de los mecanismos que las sustentan. Cuando afirman que «la ciudad quedó sin futuro» o que «acabaron

con lo que era de todos», los entrevistados no describen solo pérdida económica. Nombran la destrucción de un orden social que garantizaba dignidad, reconocimiento y posibilidad de vida. Esta sección demuestra que las estructuras de desigualdad no solo explican el conflicto petrolero. Explican también la persistencia de la resistencia, porque allí donde hay despojo se genera también memoria, organización y lucha por el territorio.

### **5. Trayectoria sociopolítica del territorio**

Comprender los discursos de Barrancabermeja exige situarlos en la trayectoria sociopolítica que ha modelado al territorio durante casi un siglo. Las voces recogidas no hablan desde un vacío. Emergen de una ciudad que fue construida por el trabajo petrolero, atravesada por la violencia política y marcada por disputas permanentes en torno a lo público, lo privado y el sentido mismo del desarrollo. En esta historia la palabra no es simple narración. Es campo de disputa donde se reproducen y se resisten relaciones de poder. Por eso, cuando los entrevistados afirman «esto lo levantamos nosotros, aquí siempre ha tocado pelear» o «la ciudad cambió, porque cambiaron las reglas», están reconstruyendo una memoria colectiva que define a Barrancabermeja como territorio emblemático, como lugar

donde la industria y la comunidad han entrado en tensión constante. Esta sección revisa esa trayectoria identificando sus símbolos, sus continuidades y sus quiebres, mostrando cómo la ciudad ha transitado de la lucha sindical que marcó el siglo veinte a las incertidumbres de la transición energética, sin abandonar los repertorios de resistencia que sostienen su identidad. El resultado que se desprende de este recorrido es claro. En Barrancabermeja el discurso no solo refleja poder. Lo reproduce, lo confronta y lo redefine.

En los discursos recogidos Barrancabermeja no aparece simplemente como ciudad donde opera una refinería. Se presenta como un territorio fundado por el trabajo colectivo, marcado por la organización obrera y configurado históricamente como emblema de resistencia social. Los entrevistados insisten en que «esto lo levantamos nosotros, la ciudad se hizo con el trabajo de la gente» o «uno nació viendo cómo nuestros viejos peleaban por lo que era de todos», expresiones que revelan que la identidad local está profundamente asociada a la dignidad laboral y a la lucha por lo público. Esta autopercepción convierte a Barrancabermeja en símbolo porque sus habitantes no se narran como receptores pasivos de la industria. Se narran como sujetos que construyeron la ciudad y la empresa al mismo tiempo, y que por ello consi-

deran que tienen derecho a decidir su destino.

El carácter simbólico de Barrancabermeja también se sostiene en la memoria de su conflictividad histórica. Las voces recuerdan períodos de huelgas, marchas y persecución con frases como «aquí siempre ha tocado pelear, esto ha sido una guerra social» o «en esta ciudad la historia se escribe luchando», lo que muestra que la experiencia del conflicto no se vive como episodio excepcional, sino como parte constitutiva de la vida territorial. Esta memoria se transmite entre generaciones, transformando el pasado en recurso político que dota de legitimidad al presente. De ahí que incluso los jóvenes, quienes ya no acceden a los mismos empleos ni derechos de sus padres y abuelos, repitan frases como «esto lo construyeron a pulso» o «esto no se hizo solo», integrándose a una tradición que sostiene el imaginario de ciudad obrera.

Barrancabermeja se vuelve símbolo, además, porque encarna tensiones nacionales entre lo público y lo privado, entre la riqueza petrolera y la desigualdad social, entre la seguridad estatal y la violencia contra líderes sociales. Los entrevistados explican que la historia local refleja disputas que han atravesado al país entero, señalando que «lo que pasó aquí después pasó en otros lados» o «Barranca ha sido el laborato-

rio de todo». Esta percepción convierte al territorio en espacio donde se condensan dinámicas mayores, donde la comunidad siente que vive en su propio cuerpo los ensayos de políticas laborales, empresariales y de seguridad que luego se expanden al resto del país. Esa condición de laboratorio y de vitrina simultánea hace que Barrancabermeja sea referida como ciudad que representa, en escala concentrada, la relación conflictiva entre Estado, empresa y ciudadanía.

Por eso los discursos no solo describen a Barrancabermeja. La reivindican. La presentan como lugar que resiste porque su identidad se forjó en medio de disputas profundas por el trabajo, por lo público y por el territorio. Barrancabermeja se vuelve símbolo no por un atributo administrativo o geográfico, sino porque los habitantes la narran como ciudad que ha cargado históricamente con las tensiones del país y que, aun así, sigue afirmándose a través de la memoria colectiva y la lucha social. Es símbolo porque nombra la dignidad obrera, la persistencia de la organización y la demanda constante de un futuro que no niegue su pasado.

La transición desde la histórica lucha sindical hacia la configuración de Barrancabermeja como enclave de transición energética aparece en los discursos como un desplazamiento complejo

donde coexisten continuidad y ruptura, memoria y desorientación, orgullo y despojo. Para los entrevistados la ciudad nació y creció a partir de la fuerza del movimiento obrero, que no solo defendía condiciones laborales, sino que definía el horizonte político y moral del territorio. En frases como «esto lo levantaron los trabajadores» y «aquí todo se logró con sindicato», se reconoce una tradición que convirtió la organización colectiva en columna vertebral de la vida local. Sin embargo, el presente es descrito como escenario donde ese protagonismo se ve erosionado frente a las dinámicas de modernización, privatización y reconfiguración tecnológica que acompañan la transición energética. Los entrevistados afirman que «ya no somos los mismos que decidíamos, la empresa cambió y cambió todo» o «la refinería ya no mira a la ciudad», reflejando una percepción generalizada de pérdida de agencia frente al futuro del sector.

Esta transición no es entendida como reemplazo lineal entre un modelo y otro, sino como proceso que reorganiza el poder y redefine quiénes cuentan dentro del territorio. La comunidad observa que la retórica de la transición energética convive con políticas de tercerización y contratistas privadas que generan empleos temporales y sin derechos, lo que lleva a interpretar que la modernización tecnológica se usa

como pretexto para consolidar un modelo más excluyente. Algunos entrevistados afirman que «modernizaron para unos pocos, la transición es negocio, no proyecto de vida» o «aquí dicen transición y lo que vemos es menos trabajo», mostrando que la modernización no aparece como promesa, sino como narrativa que oculta la intensificación de la desigualdad y la ruptura de un pacto histórico entre la ciudad y la empresa pública. Por eso la transición, lejos de sentirse como camino hacia un futuro sostenible, se percibe como continuidad de un proceso de marginalización iniciado con la privatización y profundizado con la precarización laboral.

En este tránsito emergen persistencias que sostienen la identidad territorial. A pesar de las transformaciones, la memoria obrera sigue siendo recurso político que otorga autoridad moral. Los entrevistados recuerdan que «aquí siempre ha tocado pelear, esto fue construido con sudor» o «si algo nos queda es la fuerza de la gente», lo que muestra que la comunidad mantiene vivos los marcos de resistencia que históricamente la han protegido frente al poder empresarial y estatal. También persiste la convicción de que el territorio no es accesorio, sino actor que debe tener voz en las decisiones que lo afectan. Esta persistencia se expresa incluso en los jóvenes quienes, aunque no acceden a los empleos estables de sus

mayores, repiten con firmeza que «esto no se hizo solo» y que «la ciudad merece respeto», integrándose a una narrativa que resiste el borramiento del pasado.

Pero junto a estas persistencias se observan rupturas profundas que reconfiguran la vida colectiva. El debilitamiento del sindicato como actor central, la pérdida de empleos estables, la entrada de privados, la militarización de la protesta y la estigmatización de líderes han fragmentado el tejido social y erosionado las bases que sostenían la cohesión comunitaria. La frase «la ciudad quedó sin futuro» aparece como síntesis del sentimiento de ruptura generacional, mientras expresiones como «ya no se puede organizar, la gente tiene miedo» o «los jóvenes no tienen dónde entrar» muestran que el territorio vive un quiebre en sus formas tradicionales de participación y en su capacidad para disputar poder frente a actores externos. La transición energética, en vez de reparar esta ruptura, ha sido interpretada como capa adicional de incertidumbre que profundiza la sensación de abandono y sustitución.

En conjunto los discursos revelan que Barrancabermeja transita de la lucha sindical al enclave de transición energética sin abandonar su historia, pero enfrentando transformaciones que descolocan a la comunidad dentro de su

propio territorio. La ciudad sigue siendo símbolo, pero ahora un símbolo en disputa, donde la persistencia de la memoria obrera convive con la ruptura de sus condiciones materiales. Este cruce entre continuidad y fractura hace visible el núcleo del conflicto. En Barrancabermeja el discurso no solo reproduce poder. También lo impugna. Interpreta la transición energética no como destino inevitable, sino como terreno donde se juega la dignidad, la historia y el derecho a un futuro que no excluya a quienes han sostenido la ciudad durante generaciones.

Barrancabermeja aparece como un territorio donde el discurso reproduce y disputa poder, porque las narrativas de sus habitantes no solo describen la historia petrolera, sino que la interpretan desde relaciones de dominación, exclusión y resistencia que estructuran la vida colectiva. Los testimonios muestran que el lenguaje empresarial, estatal y armado ha sido utilizado para justificar precarización, privatización, militarización y estigmatización, configurando marcos simbólicos que legitiman desigualdades profundas. Al mismo tiempo las voces de la comunidad elaboran contradiscursos que desmantelan esas narrativas, reivindican la memoria obrera y reafirman el derecho a decidir sobre el futuro del territorio. Expresiones como «esto lo levantamos nosotros, modernizaron para unos po-

cos» o «aquí siempre ha tocado pelear» condensan esta doble dimensión. Por un lado, muestran cómo el discurso dominante invisibiliza a la población y naturaliza el despojo. Por otro lado, revelan la capacidad de la comunidad para nombrar la injusticia, reconstruir su identidad y disputar la legitimidad de los actores que buscan redefinir la ciudad sin ella. En esta tensión permanente el discurso se convierte en campo de batalla donde se define quién tiene voz, quién interpreta la historia y quién proyecta el futuro. Por eso Barrancabermeja no es solo un enclave petrolero. Es un territorio donde la palabra es herramienta política, memoria viva y mecanismo de resistencia frente a las fuerzas que intentan imponer un orden ajeno a su propia historia.

### III. Análisis crítico del discurso en Yopal

El análisis crítico del discurso en Yopal revela un territorio donde la palabra está profundamente atravesada por la relación entre extracción petrolera, transformaciones aceleradas del paisaje social y tensiones persistentes entre identidad campesina, poder institucional y dinámicas empresariales. A diferencia de Barrancabermeja, donde la memoria obrera y la historia sindical estructuran el modo en que se interpreta el conflicto, en Yopal las narrativas emer-

gen desde otro lugar. Aquí el discurso se organiza alrededor de la defensa del agua y la tierra, la pérdida de la vocación rural, el impacto desordenado del crecimiento urbano y la sensación de que la riqueza petrolera profundizó desigualdades en lugar de mitigarlas. Los entrevistados no se posicionan como herederos de una tradición industrial. Se narran como comunidades que vieron la llegada del petróleo desde afuera y que han debido enfrentarse a reconfiguraciones abruptas que alteraron sus modos de vida, sus economías locales y su relación con el Estado.

En este contexto, el ACD permite rastrear cómo los habitantes elaboran marcos interpretativos que explican la expansión petrolera como proceso que fractura territorios, desplaza saberes y debilita instituciones. Expresiones como «esto era puro campo, la ciudad creció sin pensar en la gente» o «vendieron la tierra y después no hubo cómo vivir» condensan esta experiencia de transformación irregular que combina expectativas incumplidas, promesas rotas y desconfianzas prolongadas. Yopal aparece, así, como territorio donde el conflicto no se centra en la empresa pública, sino en la manera en que el boom petrolero desbordó la capacidad institucional, estimuló redes de clientelismo y produjo asentamientos que reconfiguraron la identidad local. Esta sección aplica los tres niveles del análisis crítico del discurso al corpus

exclusivo de entrevistas realizadas en Yopal para comprender cómo se construyen las representaciones del agua como vida, de la tierra como sustento, del Estado como ausente y del petróleo como motor simultáneo de progreso y deterioro. El objetivo no es comparar de inmediato con Barrancabermeja, sino reconstruir desde adentro las lógicas discursivas con las que Yopal interpreta su propio conflicto. Desde allí será posible identificar cómo la palabra opera como mapa sociocognitivo que revela las disputas por el territorio, los miedos sobre el futuro y las estrategias simbólicas con las que la comunidad se resiste a ser relegada dentro de un modelo extractivo que no siente propio.

### A. Nivel textual (Yopal)

El nivel textual en Yopal permite observar cómo las palabras elegidas por los entrevistados condensan las transformaciones profundas que el territorio ha vivido desde la llegada del petróleo. A diferencia de Barrancabermeja, donde el vocabulario gira alrededor del trabajo industrial y la memoria obrera, en Yopal los campos léxicos emergen de una territorialidad rural que experimentó una reconfiguración abrupta. El corpus muestra que términos como «agua», «tierra», «regalías», «migración», «agricultura», «ganadería» e «informalidad» se repiten con insistencia y funcionan como anclas semánticas que organi-

zan el relato colectivo. Estas palabras no aparecen como simples referencias descriptivas. Operan como marcadores identitarios y como huellas de los procesos que han reconfigurado la vida en el llano, desde el boom petrolero hasta la expansión urbana sin planificación.

El análisis textual permite ver que las metáforas vitales ocupan un lugar central. Expresiones como «el agua es la vida del llano» o «la tierra es lo único seguro» no solo transmiten valoración ambiental. Revelan un modelo cognitivo donde territorio y supervivencia se entienden como realidades inseparables. Estas metáforas funcionan como dispositivos que condensan memoria campesina, reclamos ambientales y alertas sobre los desequilibrios producidos por la extracción. Junto a ellas se encuentran nombramientos identitarios como «llanero», «campesino» y «gente de vereda», categorías que los entrevistados utilizan para diferenciarse de los recién llegados, de las empresas y de los gobiernos que, según ellos, no entendieron las dinámicas locales.

Asimismo, el nivel textual muestra cómo los episodios narrados estructuran la comprensión del territorio. El «boom petrolero», el «crecimiento urbano desordenado» y los casos de «corrupción asociados a regalías» forman parte de una memoria compartida que aparece en las entrevistas como secuencia re-

petida: primero la expectativa, luego la llegada masiva de población, después el aumento de precios y finalmente la sensación de que el territorio fue rebasado. Estas narraciones, expresadas en frases como «esto era puro campo, la ciudad se llenó de gente» o «la plata se perdió en manos de pocos», no son meros recuerdos. Constituyen las microestructuras de sentido que sostienen los discursos comunitarios sobre pérdida, transformación y desigualdad.

Desde esta perspectiva el nivel textual en Yopal es puerta de entrada a un universo discursivo donde el territorio se nombra para defenderlo, donde el agua se invoca como vida, donde la tierra se enuncia como derecho y donde el boom petrolero aparece como episodio que reorganizó la identidad y la economía local. A partir de este vocabulario será posible avanzar hacia los niveles discursivo y sociopolítico que revelan no solo qué se dice, sino cómo estas palabras disputan poder dentro de un modelo extractivo que irrumpe en un territorio rural que intenta sostener su memoria, su identidad y sus formas de vida.

En Yopal los términos «agua», «tierra», «regalías», «migración», «agricultura», «ganadería» e «informalidad» conforman el corazón léxico desde el cual los entrevistados organizan su interpretación del territorio y de los efectos del

boom petrolero. Estas palabras aparecen repetidamente como ejes alrededor de los cuales se construye sentido, se define la identidad local y se expresan temores, reclamos y expectativas. No se trata de vocablos neutros. Cada uno condensa una problemática, una memoria y una posición frente a los cambios que ha vivido la región. En conjunto forman un mapa semántico que revela cómo los habitantes leen el conflicto: no desde la fábrica o la refinería, sino desde el llano, desde el agua que se defiende, desde la tierra que se trabaja y desde los desequilibrios que dejó la llegada masiva de riqueza y población.

El agua es mencionada con un nivel de centralidad que no aparece en Barrancabermeja. Para los entrevistados representa la base de la vida y el límite ético de cualquier actividad económica. En diversas narrativas se repite que «el agua es la vida del llano, sin agua no hay nada» o «si se daña el agua se acaba todo», expresiones que muestran que el agua no es solo recurso natural, sino principio organizador de la existencia campesina y llanera. El vocabulario que rodea al agua se carga de preocupación y advertencia, especialmente ante los impactos de la perforación y las transformaciones del paisaje. Esta manera de nombrarla indica que el conflicto socioambiental en Yopal tiene raíces simbólicas profundas, pues la comunidad

se siente obligada a proteger aquello que sostiene no solo su sustento, sino también su identidad.

La tierra ocupa un lugar igualmente relevante. Los habitantes narran que el petróleo llegó a un territorio con vocación agrícola y ganadera, donde la tierra era entendida como seguridad, herencia y proyecto de vida. Frases como «la tierra era lo único seguro» o «antes vivíamos de lo que dábamos con las manos» muestran que la tierra se nombra como elemento de dignidad. Sin embargo, el boom petrolero alteró esta relación. Los entrevistados señalan que «muchos vendieron barato, la tierra se volvió negocio» o «después no hubo cómo vivir», evidenciando una transformación que desvinculó la propiedad de su función productiva y la convirtió en objeto de especulación. En el texto la tierra deja de ser solo territorio físico y se vuelve categoría moral que expresa pérdidas generacionales y desarraigo.

El término regalías aparece en un registro crítico. Las entrevistas muestran que se perciben como promesa incumplida, pues supuestamente debían traducirse en bienestar, pero terminaron asociadas a opacidad, corrupción y desigualdad. Narrativas como «la plata se perdió en manos de pocos, aquí llegaron millones, pero no se ven» o «las regalías hicieron ricos a otros» evidencian que la comunidad nombra las regalías

para denunciar un sistema que no redistribuyó la riqueza y que profundizó la sensación de abandono institucional. Así, el término opera como marcador del fracaso de la gobernanza local frente al auge petrolero.

La migración articula otro núcleo semántico importante. Los entrevistados explican que la llegada de población externa reconfiguró la ciudad, saturó la infraestructura y elevó los precios de manera abrupta. Expresiones como «esto se llenó de gente, la ciudad creció sin pensar en la gente» o «vinieron de todas partes y esto se volvió otro mundo» muestran que la migración aparece en el discurso como fenómeno desbordado que transformó el tejido social, generó tensiones identitarias y alteró la relación entre rurales y urbanos. En esta lectura la migración no es rechazada en sí misma, pero sí se relaciona con un proceso que sobrepasó la capacidad institucional, activando la sensación de pérdida del control territorial.

Los términos agricultura y ganadería funcionan como recordatorios de una identidad que se ve desplazada. Son palabras que enmarcan el pasado cercano que muchos entrevistados nombran con nostalgia y preocupación. La frase «esto era puro campo» sintetiza esa memoria de un territorio donde el llano tenía un ritmo propio, ligado a actividades productivas tradicionales. En

el discurso estas dos palabras aparecen asociadas a la idea de estabilidad y autosuficiencia, y contrastan con el presente marcado por la volatilidad económica y la dependencia del petróleo. Su presencia recurrente en el texto indica que la comunidad sigue interpretando el territorio desde la matriz campesina, incluso cuando la economía ha cambiado radicalmente.

La informalidad aparece como consecuencia directa del boom petrolero. Los entrevistados señalan que el crecimiento urbano no planificado y la migración masiva condujeron a la multiplicación de trabajos informales, a la ocupación de vías como espacios de subsistencia y a la creación de barrios sin servicios ni integración social. Narrativas como «muchas gente quedó rebuscándose, la ciudad quedó llena de vendedores» o «el petróleo dejó más informalidad que futuro» muestran que la informalidad no se considera como problema individual, sino como síntoma de un modelo de desarrollo que dejó a muchos sin alternativas.

Por otra parte, es necesario en el análisis reconocer las metáforas vitales que constituyen uno de los elementos más potentes y reveladores del nivel textual en Yopal, porque permiten ver cómo la comunidad traduce en lenguaje sensible y cotidiano los efectos estructurales del boom petrolero. En las entrevistas

estas metáforas no son adornos retóricos. Funcionan como marcos socio-cognitivos que condensan memoria campesina, percepción ambiental y crítica política. La frase «el agua es la vida del llano», repetida con variaciones en distintos testimonios, no se limita a expresar valoración ecológica. Construye un principio ontológico desde el cual se interpreta la relación entre territorio y existencia. Nombrar el agua como vida implica que cualquier intervención que la ponga en riesgo amenaza la continuidad misma del territorio, su cultura, sus economías rurales y su identidad. Esta metáfora convierte el agua en sujeto moral, en límite ético al extractivismo y en referencia a un pasado en el que los ríos, pozos y quebradas sostenían modos de vida autónomos.

Estas metáforas vitales también funcionan como dispositivos de resistencia frente al modelo petrolero. Cuando los entrevistados afirman que «si se daña el agua se acaba todo», la declaración opera como advertencia, pero también como desafío político a las prácticas empresariales y a la negligencia institucional. En ese enunciado se activa la memoria de un territorio que se sabía a sí mismo agrícola y ganadero antes de la llegada del petróleo. Se activa la experiencia de quienes vieron cómo «nacidos se secaron», cómo «los caños bajaron turbios» o cómo «ya no es el mismo río de antes», expresiones

que no describen solo un deterioro ambiental. Narran una fractura vital, un desajuste entre el ciclo natural y el ciclo económico impuesto desde afuera.

La metáfora de la tierra como seguridad tiene un efecto similar. En voces que recuerdan que «la tierra era lo único seguro», la tierra no aparece como bien material sino como hogar, herencia, territorio afectivo y soporte existencial. Esta metáfora expresa un modo de relacionarse con el espacio que la expansión petrolera alteró, en la medida en que la tierra dejó de ser asociada a producción y pertenencia para convertirse en mercancía especulativa. La tierra, en el discurso comunitario, sigue nombrándose desde la semántica de la vida y nunca desde la semántica del mercado. Ese desajuste es clave para entender la profundidad del conflicto en Yopal.

Otras metáforas vitales emergen alrededor del paisaje transformado. Cuando los entrevistados dicen que «el llano se volvió otro mundo» o que «esto antes respiraba distinto», el territorio se reconoce como organismo vivo. En esa enunciación hay una crítica implícita al desbordamiento urbano, a la pérdida de áreas rurales y al crecimiento sin planificación. El llano como cuerpo vivo permite mostrar que la intervención petrolera no solo afecta un espacio físico. Afecta una totalidad que incluye flora,

fauna, modos de vida, vínculos comunitarios e imaginarios identitarios.

Estas metáforas no son aisladas. Configuran un sistema semántico que ordena la manera en que Yopal comprende su conflictividad. Dan coherencia emocional y cognitiva a las narraciones. Le permiten a la comunidad afirmar que el problema no es únicamente técnico o económico, sino vital. En tanto nombran agua, tierra y llano como sujetos y no como recursos, estas metáforas disputan directamente el discurso empresarial que reduce el territorio a soporte extractivo. Esto convierte al lenguaje en herramienta de defensa frente a un modelo que se percibe como invasivo y ajeno.

En suma, este conjunto de términos no solo describe el territorio, sino que lo interpreta desde un entramado de significados donde cada palabra funciona como señal de aquello que se valora, se teme o se ha perdido. «Agua» y «tierra» nombran lo que la comunidad considera indispensable para sostener la vida y por tanto aquello que se debe proteger frente a la presión extractiva. «Regalías» y «migración» nombran lo que llegó sin control, aquello que irrumpió desde afuera y desbordó la capacidad institucional para ordenar el crecimiento. «Agricultura» y «ganadería» nombran lo que se está perdiendo, los modos de vida que daban continuidad a la iden-

tividad rural del llano. La «informalidad» nombra lo que quedó después, la huella social de un boom petrolero que reorganizó la economía local sin generar alternativas estables. Este mapa léxico no es inventario de palabras sueltas. Es el dispositivo con el que la comunidad reconstruye el sentido profundo de su conflictividad y verbaliza la experiencia de habitar un territorio que fue transformado por una riqueza repentina que prometió desarrollo, pero dejó incertidumbre, fragmentación y disputa territorial.

En esta misma lógica las metáforas vitales revelan que el conflicto petrolero en Yopal no se vive como discusión técnica sobre recursos o como problema administrativo de planificación. Se vive como disputa por la continuidad misma de la vida en su sentido más amplio. Son metáforas porque condensan procesos complejos en imágenes comprensibles. Son vitales porque expresan aquello que la comunidad siente en riesgo. Y son políticas porque permiten resistir, interpelar y reinterpretar un modelo de desarrollo que se presentó como progreso, pero que en las narrativas aparece asociado a pérdida de agua, deterioro de la tierra y ruptura del equilibrio territorial. Al articular palabras y metáforas en un mismo campo de sentido, los discursos de Yopal convierten el lenguaje en herramienta para defender el territorio, denunciar las asimetrías

del boom petrolero y afirmar que el desarrollo que llegó no es el desarrollo que necesitan para sostener su vida, su identidad y su futuro.

Los nombramientos identitarios permiten comprender cómo la comunidad de Yopal se ubica frente a los cambios introducidos por el boom petrolero. Palabras como «llanero», «campesino» y «gente de vereda» no operan como simples etiquetas sociales. Funcionan como formas de afirmar pertenencia territorial, de marcar continuidad con una memoria rural previa y de distinguirse de actores que llegaron al llano en medio de la expansión petrolera. En las entrevistas estas categorías se asocian a un modo de vida basado en la relación cotidiana con el agua, la tierra y las labores del campo. Cuando los habitantes se reconocen como «campesinos» o «llaneros», construyen una frontera simbólica frente a quienes describen como recién llegados, personas que no comparten las experiencias ni los vínculos que sostienen la identidad local. La palabra «vereda» cumple una función similar. Ancla a los hablantes en un espacio vivido antes del crecimiento urbano, un espacio que representa continuidad, conocimiento del territorio y estabilidad frente al desorden que introdujo la bonanza.

Esta afirmación identitaria se enlaza con los episodios narrados que estruc-

turan la memoria reciente del territorio. El «boom petrolero» aparece como quiebre que alteró la vida en el llano. Los entrevistados recuerdan que «esto era puro campo» y que con la llegada del petróleo «reventó la ciudad», imágenes que condensan la transición abrupta desde una ruralidad relativamente estable hacia un crecimiento urbano que superó la capacidad institucional. El desbordamiento urbano es relatado mediante expresiones como «la ciudad se llenó de gente» o «las calles no alcanzaron para tanto», lo que muestra la percepción de que la expansión no fue acompañada de planificación, servicios ni integración social. Este episodio no se interpreta como simple modernización. Representa una transformación que tensionó la identidad rural y fragmentó la vida comunitaria.

La corrupción asociada a las regalías completa esta secuencia de narraciones. En las entrevistas se repite que «llegó mucha plata, pero se perdió en manos de pocos» y que «aquí había para hacer mucho», frases que señalan una lectura extendida sobre el fracaso de la gobernanza local. Las regalías se nombran para explicar la frustración frente a un Estado que, según los entrevistados, permitió que la riqueza petrolera se diluyera en redes políticas sin generar bienestar colectivo. Así la corrupción se convierte en categoría que articula desconfianza institucional,

pérdida de oportunidades y sensación de abandono.

El vínculo entre identidad y episodios narrados es decisivo. Los habitantes se reconocen como «gente del llano» para afirmar continuidad con un pasado que sienten vulnerado por la llegada del petróleo, mientras narran el boom, el crecimiento urbano y la corrupción como procesos que transformaron el territorio sin su participación. Las dos dimensiones se complementan. La identidad rural define el punto desde el cual se evalúan los cambios. Los episodios narrados explican por qué esa identidad se percibe en riesgo.

En conjunto estos elementos revelan que en Yopal el discurso territorial se configura a partir de una tensión constante entre la memoria campesina y las transformaciones aceleradas que trajo la industria petrolera. Los nombramientos identitarios expresan quiénes se reconocen como parte del territorio y desde qué lugar narran su relación con el agua, la tierra y el llano. Los episodios narrados explican cómo ese territorio cambió de manera abrupta, cómo la llegada del petróleo alteró los vínculos sociales, la economía cotidiana y la forma misma de habitar el espacio. Entre ambos registros (el identitario y el narrativo) se reconstruye una lectura del conflicto que no se reduce a indicadores económicos ni a debates técnicos

sobre regalías. Es una lectura que ubica en el centro la continuidad de la vida rural que ha dado forma histórica al llano y que hoy se siente amenazada por un modelo extractivo que llegó sin atender la vocación del territorio. El nivel textual muestra que el lenguaje en Yopal no solo describe lo que ocurrió. Actúa como mecanismo de interpretación y de defensa, permite nombrar lo que se perdió, lo que se transformó y lo que se busca proteger. Desde estas palabras comienza a perfilarse un territorio que intenta afirmarse frente a cambios que percibe como impuestos, desiguales y ajenos a su identidad.

## **B. Nivel discursivo (Yopal)**

En Yopal el nivel discursivo revela cómo la comunidad organiza sus relatos para explicar, enfrentar y resistir las transformaciones que desató la expansión petrolera. A diferencia del nivel textual, donde predominan las palabras que nombran el territorio y sus recursos, aquí aflora la manera en que los hablantes construyen oposiciones, justifican posiciones y movilizan memorias para interpretar el conflicto. Las entrevistas muestran un entramado narrativo donde la identidad llanera se confronta con las lógicas extractivas, donde la defensa del territorio se formula como obligación ética y donde la escuela adquiere un papel inesperado como refugio simbólico frente al avance del petróleo.

El discurso se estructura en torno a la idea de que las empresas «dan y quitan», expresión que sintetiza la ambivalencia entre oportunidad y pérdida, mientras que el Estado aparece en las narraciones como actor distante, en contraste con una Iglesia que muchos entrevistados recuerdan como acompañante constante en momentos de crisis. Este nivel permite observar cómo se enlazan las memorias rurales con la crítica a la desigualdad, cómo se jerarquizan responsabilidades y cómo la comunidad utiliza sus propias historias para disentir de un modelo de desarrollo que percibe ajeno a la vida del llano.

La oposición entre identidad llanera y extractivismo estructura buena parte del discurso en Yopal, porque los entrevistados narran la llegada del petróleo como irrupción que tensionó su forma de vida, sus vínculos con la tierra y su sentido de pertenencia territorial. En sus relatos, ser «llanero» o «ser campesino» no es simple categorización social. Es una manera de nombrar un modo de habitar el territorio basado en la relación directa con el agua, la ganadería, la agricultura y los ciclos del llano. Esta identidad se construye desde prácticas cotidianas, desde el conocimiento del clima y de los suelos, desde las redes familiares en las veredas y desde una ética del trabajo que se siente arraigada en el paisaje. Por eso afirman que «esto era puro campo» y que «el

llano tenía su ritmo», expresiones que condensan la memoria de un territorio ordenado por saberes rurales y no por la lógica del mercado extractivo.

El extractivismo, narrado desde esta identidad, aparece como fuerza que introduce aceleración, desarraigo y ruptura. En las entrevistas se repite que «el petróleo cambió todo» o que «la ciudad se volvió otra», mostrando que la transformación no se percibe como transición natural, sino como choque con una manera de vivir que se consideraba estable. Los habitantes explican que la llegada de personal externo, la especulación con la tierra, el aumento de precios y el crecimiento urbano desordenado desdibujaron la vida tradicional. De ahí que el extractivismo se nombre como amenaza a la identidad llanera, no solo por sus impactos económicos, sino porque alteró los vínculos que daban cohesión al territorio. La identidad rural, centrada en la soberanía sobre el agua y la tierra, choca con un modelo que privilegia la perforación, la movilidad poblacional y la rentabilidad a corto plazo.

Esta tensión se expresa también en los juicios morales presentes en los relatos. Los entrevistados contraponen la figura del «llanero que cuida la tierra» con la del «que viene solo a sacar», marcando una diferencia entre quienes tienen compromiso con el territorio y quienes

lo ven como oportunidad temporal. La identidad llanera se afirma frente al extractivismo como defensa del equilibrio del llano, de la vida comunitaria y de un proyecto de vida que no depende exclusivamente del petróleo. En ese contraste se evidencia que el conflicto en Yopal no se narra solo en términos económicos. Se narra como choque entre dos formas de concebir el territorio: una basada en arraigo, cuidado y continuidad, y otra basada en extracción, movilidad y desbordamiento.

La identidad llanera funciona como punto de referencia desde el cual se evalúa el impacto de la industria petrolera. Es el lente que permite distinguir lo que se quiere preservar de lo que se percibe como invasión. Es la memoria que sostiene la crítica al modelo extractivo. Y es, sobre todo, el hilo que articula los discursos en torno a una idea fundamental: la defensa de un territorio que no quiere perder su vocación rural ni su sentido de vida frente a un extractivismo que llegó con promesas, pero que terminó reconfigurando el llano de manera abrupta y desigual.

La defensa del territorio aparece en las entrevistas de Yopal como respuesta directa a la tensión entre identidad llanera y extractivismo. Si en el punto anterior la comunidad se nombra desde el arraigo rural, aquí esa identidad se traduce en acción discursiva, en una

postura que busca proteger aquello que consideran esencial para la vida: el agua, la tierra, las veredas y la cohesión comunitaria. La defensa del territorio no se formula como rechazo absoluto al petróleo, sino como exigencia mínima para que cualquier proyecto extractivo reconozca y respete la vocación del llano. Por eso los entrevistados insisten en que «el agua es la vida del llano» y que «la tierra no se negocia», afirmaciones que funcionan como marcos normativos desde los cuales se evalúan los impactos de la perforación, las obras y el uso de regalías. En sus palabras, defender el territorio es defender la continuidad de prácticas agrícolas y ganaderas que durante décadas sostuvieron la vida en Yopal y que hoy se sienten amenazadas por proyectos que no integran las dinámicas locales ni los conocimientos rurales.

Los proyectos petroleros, narrados desde esta perspectiva, aparecen como iniciativas que llegan ya definidas desde afuera, sin participación de quienes habitan el territorio. En varias entrevistas se repite que «uno se enteraba cuando ya estaban metidos» o que «las decisiones las tomaban lejos de acá», lo que revela un sentimiento extendido de imposición. Esta distancia refuerza la idea de que la defensa del territorio no es solo ambiental, sino también política. La comunidad reclama ser considerada sujeto y no escenario, reclama

poder deliberar sobre tiempos, lugares y condiciones de la explotación. No es casual que expresiones como «nadie preguntó a la gente de las veredas» o «aquí no nos oyeron» aparezcan incluso en entrevistas donde los participantes reconocen que el petróleo trajo empleo temporal o actividad económica. Para ellos la defensa del territorio exige participación real y no anuncios tardíos, exige transparencia en lugar de decisiones verticales.

En las narraciones la defensa del territorio adquiere además un tono preventivo. Los entrevistados advierten sobre el riesgo de que el llano pierda aquello que lo hace único, describiendo casos donde «nacederos se secaron, el caño bajó turbio» o «la tierra cambió con el movimiento de maquinaria». Estos episodios alimentan la idea de que la defensa es necesaria porque el daño ya ha ocurrido en distintos lugares. Aquí la crítica no es abstracta. Se basa en experiencias concretas que la comunidad considera señales de alerta. Por eso se insiste en que «primero se cuida el territorio, después se mira el petróleo», frase que sintetiza una jerarquía ética compartida en las entrevistas.

Los proyectos petroleros aparecen también como actores que generan beneficios condicionados. Los entrevistados explican que las empresas «dan y quitan», mostrando que la ayuda o in-

versión no responde a un compromiso estable, sino a estrategias de operación que pueden revertirse cuando cambia el proyecto o la empresa. Esta ambivalencia refuerza la idea de que la defensa del territorio no puede delegarse en las compañías, porque su presencia es temporal mientras el territorio es permanente. Los habitantes recuerdan que, tras el fin de cada fase de explotación, quedan «la informalidad, el desorden urbano» o «la tierra sin uso», elementos que sostienen la percepción de que la comunidad carga con los costos sin participar de las decisiones ni del destino de la riqueza.

La defensa del territorio en Yopal no se plantea como oposición simplista al petróleo. Surge como respuesta de una identidad rural que percibe en los proyectos extractivos una fuerza que amenaza su continuidad y su autonomía. Es defensa frente a la exclusión de los procesos decisionales, defensa frente a los impactos ambientales ya vividos, defensa frente a la incertidumbre que generan empresas cuya presencia es efímera en comparación con la permanencia del territorio. Esta defensa se convierte en una práctica discursiva que disputa el sentido del desarrollo, que interpela la legitimidad de los proyectos y que afirma que el llano no es vacío disponible, sino hogar, sustento y futuro para quienes lo habitan.

La escuela aparece en los discursos de Yopal como uno de los pocos espacios

donde la comunidad siente que aún puede proteger su identidad y transmitir un vínculo con el territorio frente al avance del extractivismo. Si la identidad llanera se narra como arraigo y la defensa del territorio como obligación ética, la escuela se presenta como el lugar donde estas dos dimensiones se sostienen y se proyectan hacia las nuevas generaciones. En las entrevistas los docentes y padres explican que «los niños ya no conocen el llano como era» o que «muchos no saben de dónde viene el agua», frases que expresan preocupación por una ruptura en la memoria ecológica y campesina que definió históricamente a Yopal. Por eso la escuela se convierte en escenario donde no solo se enseña contenido académico, sino donde se busca reconstruir la relación entre los niños y el territorio, compensar la pérdida de referentes rurales y enfrentar los efectos sociales del boom petrolero.

Esta función de resistencia se observa especialmente en el modo en que los entrevistados describen las prácticas educativas. Los docentes señalan que «toca enseñar a cuidar el agua desde pequeños» o que «hay que mostrarles lo que era la tierra para que no se pierda», lo que revela que la escuela asume tareas que antes se aprendían en la vida cotidiana de las veredas. La aceleración del crecimiento urbano, la migración masiva y la transformación

del paisaje han reducido las experiencias directas con el llano, de modo que la escuela emerge como mediadora entre el territorio que se recuerda y el territorio que hoy viven los niños. En este sentido la resistencia no se limita a oponerse al extractivismo, sino que consiste en mantener viva la memoria comunitaria, transmitir saberes rurales y afirmar que el desarrollo no puede desconectar a las nuevas generaciones de la tierra ni del agua.

La escuela también aparece como refugio frente a las fracturas sociales intensificadas por el boom petrolero. Algunos entrevistados explican que «el petróleo trajo desorden y violencia» o que «los niños quedaron entre la calle y la casa», señalando que la ruptura del tejido social afectó directamente a la infancia. En este contexto la escuela es vista como espacio seguro, donde se puede contrarrestar la fragmentación comunitaria, generar dinámicas de cuidado y fortalecer la identidad colectiva. Los docentes narran que «la escuela une cuando el barrio está dividido», mostrando que, en ausencia de instituciones sólidas y frente a un Estado que describen como distante, la educación se convierte en pilar de cohesión social.

Asimismo, la escuela opera como plataforma política desde la cual se cuestiona el modelo de desarrollo. No aparece como espacio neutral, sino como

escenario donde los niños aprenden a valorar el territorio, a reconocer su historia y a desarrollar una conciencia crítica frente a los proyectos petroleros. Expresiones como «si ellos no aprenden, quién va a defender el llano» o «la escuela enseña lo que la empresa no muestra», evidencian que la resistencia no es solo cultural, sino también cognitiva y ética. La escuela ofrece los marcos interpretativos que permiten a las nuevas generaciones comprender que las transformaciones del llano no son inevitables, sino resultado de decisiones políticas y empresariales que pueden ser discutidas.

La escuela como espacio de resistencia no se define por oposición directa a la industria petrolera, sino por su papel en la defensa de la memoria, la identidad y el territorio. Es el lugar donde la comunidad intenta restaurar los vínculos que el extractivismo desbordó, donde los niños aprenden aquello que el crecimiento urbano borró y donde se sostiene la posibilidad de imaginar un futuro que no dependa únicamente del petróleo. En un territorio que percibe haber perdido control sobre su propia transformación, la escuela se convierte en uno de los pocos espacios donde aún es posible decidir qué se transmite, qué se protege y qué se defiende.

La relación con las empresas que «dan y quitan» se entiende mejor cuando se

la coloca en continuidad con lo planteado anteriormente sobre la identidad llanera, la defensa del territorio y el papel de la escuela como espacio de resistencia. Mientras la identidad rural se afirma desde el arraigo y la escuela aparece como institución que permanece, acompaña y protege, las empresas son narradas como actores cuya presencia depende de los vaivenes del mercado y no de compromisos con la vida del llano. Esta comparación, constante en las entrevistas, permite comprender por qué la comunidad insiste en que «lo que se defiende es el territorio y no los favores», porque en su experiencia los proyectos petroleros no se articulan a largo plazo con las necesidades locales, sino que operan desde una lógica temporal, fragmentaria y exterior.

Desde este marco emerge la afirmación de que las empresas «dan y quitan». En los relatos esta expresión sintetiza un comportamiento ambivalente: las compañías pueden ofrecer empleos, patrocinios o pequeñas obras, pero esos beneficios dependen de la fase operativa y se desvanecen cuando el proyecto cambia o finaliza. Los entrevistados recuerdan que «cuando estaban trabajando sí ayudaban, pero cuando se iban no quedaba nada» o que «primero ofrecían cupos y luego ya no daban ni un turno», revelando que la ayuda empresarial es percibida como concesión temporal y no como responsabilidad

continua. Esto contrasta con la educación, que la comunidad describe como espacio que «sí sostiene, sí acompaña y sí permanece», reforzando la idea de que el territorio no puede depender de actores cuyo compromiso fluctúa según los intereses extractivos.

Esta lógica empresarial tiene efectos directos sobre la cohesión comunitaria. En las entrevistas se señala que ciertos apoyos o empleos se entregan de manera selectiva, lo que «pone a pelear a los vecinos» o «desune a las veredas». En un territorio ya transformado por la migración, la informalidad y el crecimiento urbano acelerado, la selectividad de las empresas introduce tensiones adicionales que profundizan las fracturas sociales. Mientras la escuela busca recomponer vínculos y transmitir memoria territorial, las empresas son narradas como actores que, aun sin proponérselo, generan competencia y dependencia.

Además, la fórmula «dan y quitan» expresa la asimetría de poder que estructura la relación entre la comunidad y el sector petrolero. Los entrevistados señalan que «tocaba pedir permiso hasta para la carretera» o que «ellos eran los que mandaban», mostrando que, en ciertos momentos, la presencia empresarial ocupó zonas grises del rol estatal. Este desplazamiento refuerza la defensa del territorio como práctica discursiva

siva y política, porque los habitantes perciben que la protección del llano no puede quedar en manos de compañías que «aparecen y desaparecen según les convenga». En contraste, la escuela (como vimos) aparece como institución cuyo trabajo no depende del ciclo extractivo.

En síntesis, las empresas que «dan y quitan» encarnan para Yopal una relación marcada por beneficios inciertos, compromisos temporales y ausencia de responsabilidades duraderas. Nombrarlas de este modo permite a la comunidad expresar la necesidad de instituciones que permanezcan, cuiden y sostengan el territorio, así como reforzar la defensa del agua, de la tierra y de la memoria rural. Frente a una identidad llanera que resiste y una escuela que busca preservar lo que el boom desordenó, las empresas aparecen como actores que ofrecen, retiran y, al final, dejan la carga más pesada sobre quienes habitan el territorio.

En continuidad con la ambivalencia atribuida a las empresas que «dan y quitan», los entrevistados describen un territorio donde el Estado aparece de manera intermitente y, en muchos casos, irrelevante para la vida cotidiana. La ausencia estatal no se nombra solo como falta de servicios o de infraestructura. Se nombra también como distancia, como indiferencia y, sobre todo,

como incapacidad para acompañar a una comunidad que ha debido enfrentar sola los efectos del boom petrolero. Los habitantes afirman que «el Estado solo viene cuando hay elecciones» o que «aquí uno no ve a nadie del gobierno», expresiones que condensan una experiencia de abandono institucional que contrasta con la presencia poderosa y selectiva de las empresas. Esta ausencia deja vacíos que otros actores ocupan, entre ellos la Iglesia, que aparece en las entrevistas como institución que sí acompaña, sí escucha y sí permanece cuando el petróleo entra y sale del territorio.

La Iglesia es descrita como presencia estable en medio de los cambios acelerados del boom. Los entrevistados señalan que «el padre era el único que llegaba a las veredas» o que «la Iglesia sí estaba cuando no había más quién ayudara», lo que revela que su legitimidad no deriva de discursos doctrinales, sino de su capacidad de acompañar emocional y comunitariamente en contextos de fragmentación social. En un escenario donde las empresas ofrecen apoyos condicionados y el Estado no garantiza continuidad, la Iglesia adquiere un papel de mediadora simbólica: sostiene prácticas comunitarias, orienta conflictos menores y refuerza la idea de pertenencia territorial. Su presencia, aunque no sustituye la acción estatal, ocupa un lugar central en la lectura que

la comunidad hace sobre quién cuida y quién no cuida el territorio.

En conjunto, la fórmula Estado ausente / Iglesia presente funciona como diagnóstico sociopolítico que ayuda a explicar por qué la comunidad de Yopal instala discursos de defensa del territorio, exige permanencia y valora profundamente a las instituciones que no rompen sus vínculos con el llano. La ausencia estatal y la presencia eclesial no son simplemente hechos, son experiencias que moldean la forma en que los habitantes interpretan el boom petrolero y sus consecuencias sobre la vida colectiva.

En conjunto el nivel discursivo revela que en Yopal el conflicto petrolero no se narra únicamente desde la economía o el empleo, sino desde un tejido simbólico donde identidad, territorio y vida cotidiana se entrelazan para interpretar un proceso de transformación abrupta. Las voces reconstruyen una oposición persistente entre un modo de vida llanero que se reconoce en el agua, la tierra y la comunidad, y un modelo extractivo que irrumpe desde afuera y desordena los ritmos sociales y ecológicos del territorio. Frente a este choque, la escuela aparece como espacio que sostiene memoria y pertenencia, mientras las empresas son descritas como actores que «dan y quitan», que ofrecen beneficios tempora-

les y dejan impactos duraderos. Esta ambivalencia se intensifica ante un Estado que llega tarde o no llega, y una Iglesia que ocupa los vacíos de acompañamiento y cuidado. De esta constelación de discursos emerge una lectura poderosa: el territorio no solo sufre el extractivismo, lo interpreta críticamente y lo disputa. Yopal aparece, así, como comunidad que defiende su identidad rural frente a proyectos que prometen desarrollo, pero que, en la experiencia local, generan incertidumbre, fragmentación y pérdida de equilibrio territorial. En este nivel el discurso funciona como herramienta de resistencia, como memoria viva y como afirmación colectiva de que la vida en el llano no es mercancía ni concesión, sino vínculo profundo con un territorio que la comunidad se niega a perder.

### **C. Nivel sociopolítico (Yopal)**

El nivel sociopolítico permite situar las narrativas de Yopal dentro de las transformaciones estructurales que reconfiguraron al Casanare desde la llegada del boom petrolero. Si en los niveles textual y discursivo se hizo evidente cómo la comunidad nombra el territorio, el conflicto y la identidad, en este nivel se observa cómo esos discursos se inscriben en relaciones históricas de poder, en modelos de desarrollo impuestos desde afuera y en instituciones que, para muchos habitantes, nunca

lograron responder a la magnitud del cambio vivido. Las entrevistas muestran con claridad que la expansión petrolera no fue solamente un fenómeno económico, fue un proceso político que alteró la organización social, la distribución de recursos, la autoridad institucional y las formas de vida campesina que habían dado cohesión al llano. Los habitantes interpretan este período como irrupción que transformó trayectorias comunitarias y ritmos ecológicos, generando tensiones entre crecimiento acelerado, ausencia estatal, vulneración de la ruralidad y concentración del poder de decisión en actores externos.

Este nivel muestra que el discurso comunitario no emerge en el vacío. Se forma en medio de desigualdades producidas por la gestión de regalías, la urbanización sin planificación, la expansión de la informalidad, el deterioro de los ecosistemas y la presencia empresarial que, en palabras locales, «manda más que el mismo gobierno». Las voces recogidas articulan estos elementos en una lectura sociopolítica donde el conflicto no es solo producto del petróleo, sino del modo en que el Estado y las empresas administraron su llegada. El territorio aparece como escenario donde se superponen disputas por el agua, tensiones entre veredas y ciudad, apropiaciones diferenciales de recursos públicos y una identidad rural que, aunque presionada, sigue siendo el marco

desde el que se interpreta la política y se defiende la vida.

Desde este ángulo, el nivel sociopolítico permite comprender por qué Yopal construye contradiscursos que interpelean la figura del Estado ausente, cuestionan el uso de las regalías y legitiman prácticas comunitarias que buscan proteger no solo el territorio material, sino la continuidad histórica de la ruralidad llanera. Al situar las voces dentro de estas estructuras, se revela que el conflicto petrolero en Yopal es, al mismo tiempo, disputa por recursos, disputa por autoridad y disputa por el sentido mismo del desarrollo. Aquí el discurso no solo narra, también denuncia, explica y rehace el territorio desde una memoria colectiva que se resiste a ser desplazada.

Dentro del entramado sociopolítico que las entrevistas describen, las regalías ocupan un lugar central porque representan el punto en el cual la promesa del boom petrolero se tradujo en frustración colectiva. Los habitantes cuentan que al inicio «todo el mundo hablaba de la plata que iba a llegar», pero con el tiempo esa expectativa se transformó en decepción. Frases como «se perdió todo, la plata no se vio» o «eso se lo comieron» aparecen repetidamente y condensan la lectura comunitaria de que los recursos que debían transformar el territorio fueron

absorbidos por redes de corrupción y decisiones improvisadas. Esta percepción no se queda en juicios morales: se vincula directamente con procesos concretos donde, según los entrevistados, se hicieron obras sin planificación, se construyeron proyectos que no respondían a necesidades reales y se privilegió el gasto rápido sobre la inversión estructural.

Este diagnóstico se articula con la idea previa de que la expansión petrolera alteró la vida del Casanare de manera abrupta. La comunidad sostiene que el Estado local no estaba preparado para administrar los recursos y que «no había quién dijera cómo se debía hacer», lo que permitió que actores políticos capturaran la renta en beneficio propio. La corrupción, por tanto, no se narra como desviación excepcional, sino como condición estructural que acompañó la llegada de las regalías y que contribuyó a desordenar aún más un territorio ya tensionado por la migración y el crecimiento urbano acelerado. Varias personas señalan que «el pueblo se llenó de plata, pero no quedó ciudad», lo que expresa la contradicción entre la magnitud de los recursos recibidos y la precariedad de los resultados visibles en infraestructura, servicios públicos y gobernanza local.

La mala planificación amplificó estos efectos. Los entrevistados coinciden en

que las decisiones se tomaron sin comprender la dinámica del territorio campesino y sin prever las consecuencias sociales del boom. Comentarios como «hicieron avenidas donde no se necesitaban, dejaron obras botadas» o «construyeron sin pensar en el agua» muestran una crítica profunda a la manera en que se administró el crecimiento de Yopal y señalan que la falta de planificación no fue solo técnica, sino política. En un territorio donde la identidad y la vida económica estaban ligadas a prácticas rurales, la explosión urbana se vivió como desorden que erosionó la cohesión social y el equilibrio ecológico sin generar bienestar sostenible.

Articulados con la reflexión sociopolítica que abre este nivel, los discursos sobre regalías, corrupción y mala planificación revelan que el conflicto petrolero en Yopal no reside únicamente en la presencia de la industria, sino en la forma en que el Estado gestionó (o dejó de gestionar) sus efectos. Para la comunidad, la riqueza que prometía transformar el territorio terminó profundizando desigualdades, debilitando la ruralidad y consolidando un modelo de desarrollo que privilegió intereses políticos y empresariales por encima del bienestar colectivo. Por eso, cuando los entrevistados afirman que «esa plata fue una desgracia para el Casanare», no están exagerando: están dando cuenta de un proceso histórico en el

que la abundancia económica convivió con la precariedad institucional, produciendo un territorio donde los costos quedaron en manos de la comunidad y los beneficios se dispersaron sin dejar huella.

Los impactos sobre la cultura campesina y llanera se vuelven más claros cuando se leen en continuidad con la discusión sobre regalías, corrupción y mala planificación. Si la riqueza petrolera no transformó el territorio en términos institucionales, sí transformó la vida social que le daba cohesión. Para los entrevistados, el boom produjo un quiebre cultural que se volvió más profundo precisamente porque el Estado no orientó los cambios y porque la urbanización acelerada ignoró la centralidad que la ruralidad tenía en la identidad del Casanare. Frases como «los muchachos ya no quieren el campo, la juventud se fue para la obra» o «para la calle y la vereda se quedó sola» muestran que la comunidad percibe que la llegada del petróleo modificó las aspiraciones, las prácticas y las formas de convivencia que habían sostenido al llano durante generaciones.

Este quiebre no se narra como cambio espontáneo. Se interpreta como consecuencia directa de la lógica del boom y de la manera en que se administraron las regalías. Los entrevistados recuerdan que, con la llegada del dinero fácil,

«la gente dejó el campo tirado, ya nadie quería ordeñar» y «todo era vender para irse al pueblo». Lo que aparece en estas voces es la imagen de una transición donde la ilusión de abundancia desplazó temporalmente el valor del trabajo rural. Sin embargo, como esa riqueza fue mal administrada y no generó alternativas duraderas, la comunidad terminó enfrentando una doble pérdida. Se debilitó la economía campesina y tampoco surgió un proyecto que la reemplazara. Por eso se escucha que «el petróleo acabó con la vocación del llano», una frase que condensa el sentimiento de desarraigo provocado por un proceso que prometía desarrollo, pero terminó desordenando la vida cotidiana.

La urbanización desbordada profundizó esa sensación de pérdida. La expansión de asentamientos, la llegada masiva de población y la transformación acelerada de suelos agrícolas en zonas urbanas fueron vistas como señales de que la vida rural estaba siendo desplazada sin que existiera una reflexión sobre lo que se estaba destruyendo en el camino. Para muchos habitantes, Yopal se convirtió en «una ciudad sin raíces y todo cambió de un día para otro». Estas expresiones no nombran solo transformaciones materiales. Nombran la ruptura simbólica que implicó ver desaparecer prácticas que daban sentido al territorio, desde el manejo del agua y

las rutinas ganaderas hasta los vínculos comunitarios de las veredas.

Los entrevistados señalan que este impacto cultural no fue casual. Explican que «nadie cuidó la cultura del llano» y que «se olvidaron de la gente del campo». Estas afirmaciones sugieren que la pérdida cultural tuvo origen en decisiones políticas que privilegiaron el gasto rápido y la obra visible por encima del fortalecimiento de prácticas rurales que sostenían la identidad comunal. La vida del llano no fue integrada al modelo de desarrollo. Fue tratada como algo prescindible. La desaparición de actividades como el ordeño, la vaquería, el cultivo tradicional y la vida en vereda aparece entonces como efecto directo de un proceso extractivo que alteró la cultura sin ofrecer alternativas que garantizaran continuidad.

En conjunto, los impactos sobre la cultura campesina y llanera muestran que el boom petrolero debilitó uno de los pilares más profundos del territorio. La pérdida cultural no se entiende como simple transformación generacional. Se interpreta como daño estructural causado por un modelo de desarrollo que no reconoció la importancia de la ruralidad y que se sostuvo sobre instituciones débiles incapaces de protegerla. Por eso los habitantes afirman que «lo que se perdió no se recupera», porque la cultura del llano no era solo

un conjunto de hábitos, sino un modo de vida que organizaba la relación con el agua, la tierra y la comunidad. Su debilitamiento se convierte en uno de los costos más dolorosos del boom y en un elemento central para comprender la conflictividad sociopolítica que hoy atraviesa Yopal.

La transformación productiva en Yopal se entiende mejor cuando se la vincula con el deterioro de la cultura campesina y llanera descrito previamente. Si la llegada del petróleo alteró las prácticas culturales, también modificó la estructura económica que sostenía esas prácticas. En las entrevistas se repite que antes la vida giraba alrededor del ordeño, la ganadería, el cultivo y el trabajo familiar en las veredas. Los habitantes recuerdan que «uno vivía de lo que trabajaba con las manos» y que «la tierra daba para sostenerse», expresiones que señalan que la economía rural era más que un sistema productivo. Era una forma de vivir que articulaba trabajo, identidad y continuidad generacional. Con el boom petrolero esos equilibrios se rompieron. La actividad extractiva se convirtió en el eje económico del territorio y desplazó, directa o indirectamente, las prácticas campesinas que daban estabilidad y sentido al llano.

En los relatos esta transformación no aparece como proceso ordenado ni

como resultado de políticas de reconversión económica. Se describe como sustitución abrupta donde la ganadería y la agricultura perdieron centralidad frente a empleos temporales en empresas contratistas, comercio informal y servicios asociados a la bonanza. Los entrevistados narran que «el campo quedó abandonado» y que «todo el mundo se fue detrás del petróleo», lo que revela la fuerza con que la promesa de ingresos rápidos desplazó actividades cuya rentabilidad era más baja, pero cuya sostenibilidad estaba probada. Esta sustitución generó un vacío productivo una vez pasó el auge inicial, porque la economía petrolera no ofreció continuidad ni encadenamientos sólidos con las actividades rurales. De ahí que muchos habitantes describan un escenario donde «el campo no volvió a levantarse» y donde «la ciudad quedó llena de rebusque», señalando que la transición productiva no produjo estabilidad, sino volatilidad.

Otro elemento central en la transformación productiva es el impacto que tuvo la migración masiva. La llegada de población externa impulsó un crecimiento urbano desordenado que estimuló la creación de negocios de corta vida útil, el aumento de la informalidad y la diversificación de actividades vinculadas al consumo más que a la producción. Los entrevistados explican que «la ciudad se llenó de tiendas y ventas, pero

no de trabajo estable». Esta expansión comercial efímera se presenta en el discurso como consecuencia directa de la ausencia de planificación y de la incapacidad estatal para encauzar el boom hacia sectores que consolidaran valor en el largo plazo. Como resultado, la estructura productiva quedó fragmentada. El trabajo rural perdió protagonismo y el trabajo urbano se volvió dependiente de ciclos económicos que no controla la comunidad.

La transformación productiva también tuvo efectos sobre la estructura social del territorio. En varias entrevistas se menciona que el petróleo generó empleos temporales que atrajeron a jóvenes y adultos hacia actividades de corto plazo, dejando la agricultura y la ganadería sin relevo generacional. Los habitantes señalan que «la juventud no volvió al campo» y que «los viejos quedaron solos trabajando la tierra», imágenes que reflejan cómo el boom interrumpió la transmisión de saberes rurales que garantizaban la continuidad de las prácticas productivas del llano. Esta desconexión entre generaciones contribuyó a la fragilidad económica actual, porque el territorio quedó sin una base productiva clara una vez disminuyó la actividad petrolera.

La transformación productiva en Yopal no se interpreta como modernización,

sino como ruptura. Lo que cambió no fue solo la matriz económica, sino la relación entre la comunidad y los medios que históricamente garantizaban autonomía y estabilidad. La economía campesina perdió terreno sin que surgiera un sector alternativo capaz de reemplazarla, y la actividad petrolera, lejos de integrarse al tejido local, se sostuvo como enclave desconectado de la ruralidad. Los habitantes interpretan este proceso como una transición fallida que debilitó su capacidad de producir, de sostenerse y de proyectar un futuro propio. Por eso afirman que «el petróleo no dejó economía», una frase que resume con claridad la percepción colectiva de que la transformación productiva fue más desarticulación que desarrollo y que la vida en el llano quedó atrapada entre un pasado campesino debilitado y un modelo extractivo que nunca se integró al territorio.

El reordenamiento violento del territorio aparece en las entrevistas como una consecuencia directa de la transformación productiva generada por el boom petrolero. Si la cultura campesina se debilitó y la economía rural perdió su base, el territorio tampoco quedó intacto en términos sociales, ambientales y políticos. Los habitantes explican que la llegada del petróleo no solo modificó la forma de trabajar y de vivir, también alteró la distribución del poder sobre la tierra, el valor de los suelos, la ocupa-

ción de los espacios y la seguridad en las veredas. Varios entrevistados recuerdan que «con el petróleo empezó el desorden», que «la tierra se volvió negocio» y que «el que tenía plata compraba lo que fuera». Estas voces muestran que el territorio fue reconfigurado por dinámicas que desbordaron a la comunidad y que la empujaron hacia márgenes de decisión cada vez más estrechos.

El cambio en los usos del suelo se narra como una de las dimensiones más agresivas de este reordenamiento. Las veredas que antes estaban dedicadas a cultivos, ganadería y vida comunitaria fueron absorbidas por la expansión urbana, el crecimiento de la infraestructura petrolera y la especulación inmobiliaria. En las entrevistas se repite que «sacaron a mucha gente del campo», que «la tierra se encareció a niveles imposibles» y que «las fincas quedaron rodeadas de carreteras y empresas». Estas expresiones revelan un desplazamiento silencioso que no siempre tomó la forma de violencia armada, pero que sí produjo un despojo económico y territorial. Lo que antes era el centro de la vida campesina se convirtió en periferia frente a un modelo productivo más poderoso, capaz de absorber territorio sin negociación real con quienes lo habitaban.

La presión demográfica derivada de la migración también contribuyó a este

reordenamiento. La llegada masiva de pobladores externos generó disputas por el agua, conflictos por el acceso a servicios básicos y tensiones entre veredas y barrios nuevos. Los habitantes recuerdan que «la ciudad no estaba preparada para tanta gente, que las veredas se llenaron de desconocidos» y que «los conflictos aumentaron, porque todo el mundo quería un pedazo». En estas narraciones la violencia no aparece únicamente como enfrentamiento físico. Se expresa en el deterioro de la convivencia, en la ruptura de redes comunitarias y en la fragmentación social que dejó al territorio dividido entre quienes lograron adaptarse al nuevo orden y quienes quedaron marginados del acceso a los recursos.

Otro componente del reordenamiento violento es la forma en que las empresas petroleras transformaron los equilibrios ambientales. La alteración de nacederos, la intervención de caños y la contaminación percibida en el agua aparecen en los relatos como acciones que rompieron el tejido ecológico del que dependía la vida rural. Los entrevistados explican que «el agua cambió», que «los caños se secaron» y que «se afectaron los animales y los cultivos». Estos daños no se relatan como fallas técnicas. Se interpretan como violencias que reordenaron el territorio al modificar las bases naturales sobre las cuales el llano había construido su eco-

nomía y su identidad.

El reordenamiento violento también se expresa en la pérdida de control comunitario sobre las decisiones territoriales. Las voces señalan que «aquí decidían desde Bogotá» o que «la gente se enteraba cuando ya todo estaba hecho». Estas afirmaciones muestran que el poder de decisión fue desplazado hacia actores externos, lo que produjo un territorio donde las comunidades dejaron de ser protagonistas y pasaron a convertirse en receptoras de proyectos que no siempre respondían a sus necesidades o expectativas. Esta exclusión se vivió como violencia porque alteró la relación histórica entre la gente y su tierra, rompiendo un vínculo que había sido fundamental para la construcción del llano.

Las tensiones ambientales y sociales emergen en las entrevistas como resultado directo del reordenamiento violento del territorio descrito previamente. Si la transformación productiva desplazó la economía campesina y si la reorganización del territorio alteró los usos del suelo y fragmentó la cohesión comunitaria, los conflictos ambientales y sociales son la expresión cotidiana de ese proceso. Para los habitantes de Yopal el agua se convirtió en el epicentro de estas tensiones. Relatos como «los caños ya no corrían como antes, el agua ya no sabía igual» o «nos tocaba buscar más le-

jos para darle a los animales» muestran que la vida rural empezó a deteriorarse desde el momento en que los ciclos naturales fueron afectados por las obras, los campamentos petroleros y la expansión urbana acelerada. El territorio, que antes se pensaba en función del agua y la tierra, se volvió un espacio donde estos recursos comenzaron a escasear, a contaminarse o a perderse.

La alteración del agua no fue solo un problema ambiental. Reconfiguró las relaciones sociales porque obligó a las comunidades a competir por un recurso que antes compartían de forma casi orgánica. Los habitantes recuerdan conflictos entre veredas, tensiones entre fincas y desacuerdos con empresas por el acceso a bocatomas, caños o pozos que antes nadie discutía. Comentarios como «las veredas peleaban por el agua, se nos dañó el acuerdo que teníamos» o «ya no se podía confiar, porque cada uno estaba defendiendo lo suyo» muestran cómo el deterioro ambiental abrió un ciclo de desconfianza que fracturó relaciones históricas de cooperación. El impacto social de la crisis hídrica no se limita a la escasez. Afecta la confianza, la cohesión y la forma de relacionarse con el territorio.

Las tensiones también se agudizaron por la percepción de injusticia frente a los beneficios y los costos del boom petrolero. Muchos entrevistados sos-

tienen que «las empresas cogieron el agua como si fuera de ellas» y que «la comunidad era la última en la fila». Este tipo de afirmaciones revela que la crisis ambiental es interpretada como un signo de desigualdad estructural donde los actores con más poder acceden primero a los recursos y dejan al resto con las consecuencias. La frustración aumenta cuando los habitantes explican que, mientras la empresa garantizaba su suministro interno, las veredas soportaban la disminución de los caudales, la contaminación percibida y la pérdida de animales. Estas experiencias alimentan la lectura social del conflicto, porque el agua no es solo recurso material. Es símbolo de continuidad, identidad y derecho territorial.

Otro aspecto que fortalece estas tensiones es la relación entre ambiente y salud. En varias entrevistas se menciona que «los animales se enfermaban», que «la gente empezó a tener problemas en la piel» o que «el agua ya no servía para cocinar». Aunque las causas específicas no siempre se identifican, lo relevante en el discurso es la asociación entre el deterioro ambiental y el bienestar físico. Esta relación produce un sentimiento de vulnerabilidad que no existía antes del boom y que refuerza la percepción de que el modelo extractivo puso en riesgo la vida misma del territorio. La salud, que antes se entendía como parte de un equilibrio natural, se convirtió en indica-

dor de la ruptura entre la comunidad y su entorno.

Las tensiones sociales se amplifican con la migración masiva que acompañó el boom. Los entrevistados explican que «la llegada de tanta gente cambió todo», que «hubo peleas donde antes no había» y que «la convivencia se dañó». Estas afirmaciones muestran que el aumento de la población generó competencia por el agua, por la tierra, por el trabajo y por los espacios comunitarios, lo que intensificó la fragmentación social. El territorio pasó de ser escenario de cooperación campesina a convertirse en un espacio saturado donde la vida cotidiana se encontraba atravesada por tensiones constantes.

En consecuencia, Yopal emerge como un territorio donde el discurso comunitario construye una forma persistente de resistencia ambiental y campesina que se alimenta tanto de la memoria rural como de la experiencia directa del desorden generado por el boom petrolero.

Las entrevistas muestran que la expansión extractiva no fue leída como modernización ni como ruta hacia el desarrollo prometido, sino como irrupción que alteró los equilibrios culturales, ecológicos y sociales que habían sostenido la vida del Casanare. La comunidad identifica que la llegada del petróleo reordenó el territorio sin preguntarle

a quienes lo habitaban. Los habitantes relatan que el crecimiento urbano desbordado, la especulación con la tierra, la crisis del agua y la llegada masiva de población produjeron un quiebre profundo que debilitó la ruralidad y fracturó la cohesión comunitaria. Sin embargo, estas voces no se limitan a registrar pérdidas. Elaboran interpretaciones críticas que señalan la mala administración de las regalías, la falta de planificación estatal y el abandono del campo, y que vinculan estos fenómenos con la ruptura de la cultura campesina y con la transformación productiva que dejó a las veredas sin relevo generacional.

Frases como que el agua cambió, que el territorio se llenó de desconocidos y que el campo quedó abandonado condensan una lectura donde el deterioro material se entrelaza con la afirmación de una identidad llanera que se resiste a ser disuelta por un modelo extractivo percibido como externo y desarraigado. Por ello la defensa del agua, de la vereda, de la cultura rural y de los vínculos comunitarios se convierte en el núcleo simbólico desde el cual la comunidad interpreta sus heridas y reivindica su lugar en el territorio. En este entrecruzamiento entre daño ecológico, pérdida cultural y afirmación identitaria, el discurso adquiere un carácter político que va más allá de la denuncia. Funciona como herramienta para reconstruir pertenencia, para disputar las narrati-

vas del desarrollo y para sostener un horizonte colectivo donde la memoria campesina se transforma en acto de resistencia frente a un futuro percibido como impuesto. Así Yopal no aparece únicamente como escenario afectado por el boom petrolero, sino como comunidad que convierte la palabra en forma de defensa territorial y en mecanismo para preservar la vida rural que da sentido a su existencia.

## IV. Comparación sistemática entre Barrancabermeja y Yopal

Llegados a este punto del análisis resulta imposible seguir leyendo a Barrancabermeja y a Yopal como escenarios aislados. Lo que emerge al ponerlos frente a frente es un espejo incómodo que revela no solo dos territorios marcados por el petróleo, sino dos formas distintas de nombrar la herida y de disputar el poder que la produce. La comparación no es un ejercicio técnico. Es un gesto político que permite comprender cómo, en un mismo país, el extractivismo opera con gramáticas distintas y cómo las comunidades elaboran discursos que, aun atravesados por la desigualdad, se convierten en herramientas para resistir, reinterpretar y confrontar los modelos de desarrollo

impuestos. Mientras Barrancabermeja construye su identidad desde la memoria obrera, la dignidad del trabajo y la lucha contra la privatización, Yopal levanta su voz desde el agua, la tierra y la defensa de la ruralidad. En un caso la disputa se concentra en el mundo laboral y en la permanencia del carácter público de la industria. En el otro la batalla se libra en el territorio, en las veredas, en los caños y en la cultura campesina arrinconada por un boom que nunca se equilibró.

La comparación sistemática entre ambos territorios revela que el petróleo no produce una sola conflictividad. Produce un entramado de tensiones que se organiza según las historias locales, las estructuras de poder, los vínculos comunitarios y los imaginarios que cada región moviliza para comprenderse a sí misma. Por eso este capítulo no busca homogenizar las voces recogidas. Busca mostrar cómo cada territorio construye un mapa léxico propio, una constelación particular de metáforas, estrategias discursivas y formas de legitimación que expresan no solo lo que se perdió, sino lo que se defiende. En esa diferencia se encuentra la clave para entender por qué en Colombia el extractivismo no es simplemente un fenómeno económico, sino una disputa por el sentido, por la memoria, por la pertenencia y por la posibilidad de un futuro que no esté escrito desde afue-

ra. Aquí es donde la comparación se vuelve indispensable. Permite ver que tanto en la ciudad petrolera obrera como en el llano campesino la resistencia no es eco del pasado, sino práctica viva que se reinventa para enfrentar nuevas formas de dominación. A partir de este contrapunto se abren los cinco ejes que estructuran el análisis comparado y que permiten comprender, con precisión metodológica y densidad política, los modos en que Barrancabermeja y Yopal, nombran, padecen, disputan y rehacen su relación con el petróleo.

### Mapa léxico comparado

El mapa léxico comparado entre Barrancabermeja y Yopal muestra que, aunque ambos territorios hablan del petróleo, no hablan del mismo mundo. Cada región construye un vocabulario que no solo describe lo vivido, sino que delimita lo posible, lo legítimo y lo intolerable. En Barrancabermeja las palabras se agrupan alrededor del trabajo, el sindicato, la huelga, la refinería y la modernización. Son términos cargados de historia política que remiten a una ciudad que se concibe a sí misma como sujeto colectivo, como actor de lucha y como guardiana de un proyecto público que ha sido disputado durante décadas. El léxico barranqueño está atravesado por la dignidad obrera y por una memoria que se activa cada vez que los entrevistados dicen que «el sindicato

defendía la vida», que «la privatización nos golpeó» o que «la refinería es el corazón de la ciudad». Estas palabras no describen. Militantes del lenguaje, producen identidad y legitiman resistencia.

En Yopal, en cambio, el vocabulario central no es laboral sino territorial. Agua, tierra, vereda, ganado, regalías, migración, informalidad. Son palabras que nacen de un paisaje que se sabe frágil ante el avance extractivo y que organizan un modo distinto de narrar el conflicto. Cuando un habitante dice que «el agua cambió», que «las veredas se quedaron solas» o que «la tierra se volvió negocio», está invocando no solo un recurso perdido, sino un modelo de vida que se siente amenazado. Si en Barrancabermeja el léxico está marcado por la defensa de derechos laborales, en Yopal está tejido desde la defensa de la vida rural. Las palabras llaneras no forman un inventario, sino un mapa afectivo donde cada término es huella de un daño, frontera de un conflicto y ancla de una identidad que se rehúsa a desaparecer.

La comparación revela que los léxicos no solo son diferentes. Son antagónicos en su manera de interpretar el conflicto y en su forma de entender el mundo. Cada territorio organiza sus palabras alrededor de aquello que ha marcado su historia colectiva y aquello que amenaza su continuidad. En Barrancabermeja las

palabras surgen de una memoria obrera que aprendió a leer el poder desde la negociación, la huelga y la confrontación política. Allí el conflicto se expresa en términos que remiten a relaciones laborales donde el sindicato, la empresa y el Estado son actores con los que se disputa reconocimiento y derechos. Los entrevistados narran que «la huelga era la herramienta», que «el sindicato defendía la vida», que «la privatización nos golpeó», frases que condensan un modo de ver el conflicto como una lucha estructurada, con mecanismos, repertorios y una identidad colectiva organizada alrededor del trabajo.

En Yopal ocurre lo contrario. El léxico no está inscrito en la tradición obrera, sino en la experiencia rural que vio cómo el territorio era reconfigurado por el boom petrolero sin compensaciones ni planificación. Allí la gramática del conflicto es la gramática del despojo. Se articula desde palabras que nombran lo que se perdió y lo que se intenta defender: «el agua cambió», «la vereda se quedó sola», «el campo quedó abandonado», «la tierra se volvió negocio». Estas expresiones no describen únicamente procesos materiales. Son huellas del miedo al desplazamiento cultural, del deterioro ecológico y del sentimiento de que el territorio fue intervenido desde afuera. Mientras en Barrancabermeja las palabras organizan una matriz de confrontación política, en Yopal organizan una matriz de

supervivencia territorial.

Por eso en un territorio domina la palabra huelga y en el otro la palabra agua. En Barrancabermeja huelga no es un término más. Es una categoría identitaria que expresa agencia, organización y legitimidad histórica. Cuando un entrevistado dice que «las huelgas fueron las que lograron lo que tenemos», esa palabra condensa décadas de disputa colectiva, defensa del trabajo digno y resistencia ante procesos de privatización. En Yopal, en cambio, agua es palabra que condensa la posibilidad misma de vida. Cuando entrevistados afirman que «el agua ya no sabía igual» o que «la pelea empezó cuando el agua se dañó», están nombrando no solo un recurso natural, sino un quiebre en el equilibrio ecológico que sostenía la cultura campesina. Huelga es herramienta política. Agua es frontera vital. Allí radica la diferencia ontológica entre ambas categorías.

Lo mismo ocurre con privatización y regalías. En Barrancabermeja privatización aparece como amenaza histórica porque simboliza la pérdida de lo público, la erosión de los derechos laborales y la sensación de que el territorio ha sido despojado de su propia historia obrera. Los entrevistados relatan que «privatizaron para unos pocos», que «la empresa se llenó de contratistas» y que «la ciudad quedó sin futuro», mostran-

do que privatización funciona como palabra que identifica al adversario y organiza la indignación colectiva. En Yopal la palabra que ocupa ese lugar no es privatización, sino regalías. Los habitantes dicen que «la plata no se vio», que «eso se lo comieron» y que «las obras quedaron botadas», expresiones que revelan que la frustración no se dirige a la pérdida de lo público, sino a la mala administración estatal y al desorden institucional que impidió que la riqueza beneficiara al territorio. Privatización en Barrancabermeja nombra un proceso de despojo laboral. Regalías en Yopal nombra un proceso de despojo político.

La comparación se intensifica cuando se observa el lugar de la palabra refinería en Barrancabermeja y el de la palabra petróleo en Yopal. En la ciudad petrolera del Magdalena Medio refinería es símbolo de orgullo y de pertenencia. Los entrevistados dicen que «la refinería es el corazón de la ciudad» y que «sin refinería no existiríamos como somos», lo que muestra que esta palabra es más que infraestructura. Es archivo común, memoria de lucha, eje de identidad. En Yopal la palabra petróleo no tiene ese peso simbólico. Se pronuncia con sospecha y cansancio. Los habitantes afirman que «el petróleo no dejó economía», que «el petróleo acabó con la vocación del llano» o que «el petróleo trajo problemas y no soluciones». Mientras en Barrancabermeja refinería condensa dignidad

y arraigo, en Yopal petróleo condensa pérdida e incertidumbre.

Estos contrastes léxicos son más que diferencias semánticas. Revelan dos maneras de leer el poder y dos modos de resistirlo. En Barrancabermeja el conflicto se organiza alrededor de la relación con el Estado y la empresa como interlocutores que pueden ser confrontados y con quienes se puede negociar desde una identidad obrera consolidada. En Yopal el conflicto se organiza alrededor de la defensa del territorio ante actores que no dialogan, no integran y no reconocen la ruralidad como proyecto vital. De esta comparación emerge una idea poderosa. El petróleo no produce una sola lengua del conflicto. Produce dos geografías discursivas incompatibles. Una forjada en el trabajo colectivo y otra en la conservación de la vida rural. Una que se expresa en clave de derechos laborales y otra que se expresa en clave de defensa ambiental. Una que nombra la historia obrera para resistir. Otra que nombra el agua y la tierra para sobrevivir.

En esa distancia radical entre léxicos se juega la posibilidad misma de comprender el país. Porque cada conjunto de palabras es, en realidad, un proyecto político. Barrancabermeja habla desde la lucha organizada. Yopal habla desde el territorio amenazado. Y ambas formas de hablar son también formas de resistir.

El mapa léxico comparado muestra, en suma, que el petróleo no homogeneiza. Particiona. Divide. Produce territorios discursivos que responden a realidades divergentes y a relaciones de poder distintas. Barrancabermeja habla el lenguaje del trabajo organizado porque su conflicto central ha sido la defensa de lo público frente a la privatización. Yopal habla el lenguaje del agua y la tierra porque su conflicto central ha sido la defensa del territorio frente a un modelo extractivo que llegó sin integración social ni planificación. Al comparar estas dos constelaciones de palabras no solo vemos diferencias semánticas. Vemos proyectos de vida enfrentados, formas de habitar el país que resisten desde posiciones distintas y geografías que, aunque atravesadas por la misma industria, construyen mundos opuestos desde su vocabulario. Aquí radica la fuerza de esta comparación. Las palabras no son solo palabras. Son territorios en disputa.

### **Metáforas dominantes por territorio**

Las metáforas dominantes revelan con una claridad contundente que Barrancabermeja y Yopal no solo viven conflictos distintos, sino que imaginan el mundo desde paisajes simbólicos que no coinciden. Cada territorio crea imágenes que condensan historia, dolor, resistencia y horizonte político. Las metá-

foras funcionan como atajos cognitivos, pero también como armas discursivas que permiten nombrar lo que se transformó y lo que se quiere defender. En Barrancabermeja la imaginación metafórica está anclada en el trabajo, en la lucha y en la ciudad como cuerpo colectivo. En Yopal, en cambio, la metáfora dominante es la vida misma, encarnada en el agua, en la tierra y en un territorio que se percibe amenazado por fuerzas externas que rompen su equilibrio.

En Barrancabermeja las metáforas giran alrededor de la dignidad obrera y la confrontación histórica. Los entrevistados hablan de «levantarse a pulso», de «dar la pelea», de «cargar con el peso de la refinería», expresiones que convierten el trabajo en cuerpo y la lucha en movimiento. Cuando dicen que «la refinería es el corazón de la ciudad», no están usando una figura decorativa. Están afirmando que la industria y la comunidad conforman un organismo vivo que late, sufre y se defiende. La metáfora del corazón encarna identidad, pertenencia y memoria. Del mismo modo, las imágenes de guerra social o de resistencia se activan cuando narran los años de persecución y violencia. Expresan que hubo etapas en las que «tocaba aguantar como si fuera un frente», o cuando recuerdan que «la ciudad estaba sitiada», metáforas que traducen la violencia paramilitar y estatal en un escenario donde la sobrevivencia fue

resistencia activa. Estas imágenes insisten en que la lucha no fue solo laboral, sino vital, porque aquello que se defendía era la posibilidad misma de seguir existiendo como comunidad obrera.

Yopal, por su parte, construye metáforas vitales, no bélicas. Allí el conflicto no se imagina como batalla, sino como deterioro de los ciclos naturales. La metáfora central es el agua como vida. Frases como «el agua es la vida del llano», «el agua manda», «si el agua se daña se acaba todo» condensan una concepción del territorio en la que los ecosistemas son el núcleo de continuidad material y simbólica. Cuando los entrevistados dicen que «el agua ya no sabía igual», no hablan solo de calidad. Hablan del desequilibrio profundo que trastocó su relación con el llano. A esta metáfora se suma la de la tierra como madre o sustento, y la de la vereda como refugio, como si cada comunidad rural fuera un pequeño ecosistema social que mantiene viva la identidad campesina. En estas narrativas la llegada del petróleo es figurada como ruptura, como enfermedad o como invasión que perturba procesos naturales. De ahí expresiones como «el petróleo enfermó el campo», «la ciudad se tragó la vereda», «el boom secó los caños», imágenes que narran el daño ecológico como daño vital.

Un elemento clave es que las metáforas barranqueñas son activas, orientadas a

la acción colectiva. Dicen que «tocaba pararse firme», que «había que mantener la guardia», que «había que empujar la ciudad para adelante». Estas imágenes enfatizan agencia, organización y confrontación. Las metáforas yopaleñas, en cambio, están más ligadas a la fragilidad, a la pérdida y a la necesidad de protección. Cuando afirman que «la tierra quedó herida», que «la vereda se nos rompió» o que «el llano se estropeó», las imágenes no hablan de acción ofensiva sino de defensa y cuidado. La resistencia en Yopal se imagina menos como combate y más como protección del tejido vital que hace posible la existencia.

Estas diferencias no son estilísticas, son políticas, porque cada territorio construye metáforas que no solo explican su experiencia, sino que organizan su manera de resistir, de interpretar el poder y de imaginar el futuro. En Barranquermeja la metáfora que estructura el conflicto es la lucha. Allí el mundo se comprende desde la confrontación histórica entre trabajadores, Estado y empresa, y esa confrontación se vuelve lenguaje cotidiano. Cuando los entrevistados dicen que «tocaba pararse firme», que «la pelea era diaria» o que «había que defender lo público», están poniendo en palabras un modo de existir donde la acción colectiva es condición de supervivencia. La lucha se convierte en principio organizador porque

es el instrumento que permitió frenar la privatización, enfrentar la violencia y sostener la identidad obrera. La metáfora de la lucha no embellece la experiencia. La convierte en horizonte ético y político.

En Yopal ocurre lo contrario. La metáfora que organiza el conflicto no es la lucha sino la vida. Allí el centro discursivo no es el trabajador, sino la comunidad campesina que resguarda su entorno frente a un modelo extractivo que amenaza los ciclos naturales. Cuando las voces afirman que «el agua es la vida del llano», que «el campo se enfermó» o que «la vereda se rompió», no están recurriendo a un lenguaje poético. Están expresando que el daño percibido afecta la continuidad misma de la existencia campesina. La metáfora de la vida funciona como alerta, como advertencia y como fundamento para resistir desde el cuidado del territorio, no desde la confrontación directa. Por eso en Yopal el sujeto colectivo no aparece enfrentando al Estado en clave de huelga, sino protegiendo el agua, preservando la tierra y defendiendo la vereda como espacio de reproducción comunitaria.

La comparación entre ambos territorios permite ver que también cambia el sujeto político que se legitima. En Barrancabermeja el sujeto es el obrero que confronta. Un trabajador organizado que se piensa a sí mismo como ac-

tor histórico y que nombra el conflicto en primera línea. Su identidad nace de la fábrica, de la refinería, del sindicato. Por eso los entrevistados dicen que «la refinería es el corazón de la ciudad» o que «el sindicato defendía la vida». La metáfora coloca al obrero en el centro del proyecto político y convierte la defensa de lo público en defensa de la comunidad.

En Yopal el sujeto político no es el obrero, sino la comunidad campesina que resguarda. Un colectivo que se identifica desde la relación con la tierra, el agua y las prácticas rurales que sostienen la vida diaria. Allí la agencia se expresa en clave de cuidado y no de confrontación porque lo que está en riesgo no es un derecho laboral, sino un ecosistema social y natural. Por eso los entrevistados dicen que «el agua ya no sabía igual», que «la tierra quedó herida» o que «el llano se estropeó». El daño no se interpreta como agresión al trabajador, sino como agresión a la continuidad rural, al equilibrio ecológico y a la identidad llanera.

Esta diferencia atraviesa toda la comparación. Mientras Barrancabermeja proyecta imágenes que anuncian acción colectiva, Yopal proyecta imágenes que anuncian protección comunitaria. Barrancabermeja se imagina como cuerpo que se defiende y se levanta, un territorio donde la resistencia se organiza

desde la confrontación directa y desde la memoria de luchas pasadas. Yopal se imagina como territorio amenazado que debe cuidarse y preservarse, un espacio donde la resistencia se organiza desde la defensa del tejido vital y no desde la ofensiva política. En un caso la metáfora habilita el conflicto. En el otro habilita la conservación.

De esta forma, las metáforas dominantes por territorio abren una ventana a la diferencia profunda que separa ambas geografías del conflicto petrolero. Barrancabermeja cuenta su historia desde la resistencia organizada, desde la imagen de un cuerpo social que se afirma en la lucha y se rehace frente a cada golpe. Es una ciudad que se narra de pie, con la voz curtida por huelgas, marchas y negociaciones que la convirtieron en símbolo del trabajo digno. Yopal, en cambio, narra el mundo desde la protección de la vida, desde la sensación de fragilidad que atraviesa a un territorio que vio cómo el boom petrolero alteró sus caños, su tierra y sus formas de convivir. Allí la metáfora no es el alzarse, sino el cuidar; no es el puño levantado, sino el agua que se defiende para que la vida siga siendo posible.

Estas metáforas no solo distinguen escenas o estilos de hablar. Revelan los horizontes políticos desde los cuales cada comunidad interpreta el poder, el daño y la resistencia. Mientras Barran-

cabermeja dice corazón, lucha y dignidad para afirmar su historia obrera, Yopal dice agua, vida y territorio para expresar el vínculo que sostiene su identidad campesina. En un lugar domina la imagen de la fuerza colectiva; en el otro, la consciencia de la vulnerabilidad ante un modelo extractivo que nunca se integró al ritmo del llano. Y es precisamente en esa diferencia donde se configura la manera en que cada territorio enfrenta la violencia del petróleo y decide cómo resistirla. Barrancabermeja resiste organizándose. Yopal resiste cuidando. Y ambas formas, desde su propio horizonte, son estrategias para seguir existiendo.

### **Estrategias discursivas convergentes y divergentes**

Las estrategias discursivas convergentes y divergentes muestran que, aunque Barrancabermeja y Yopal enfrentan el mismo régimen extractivo, elaboran respuestas muy distintas y, a la vez, comparten ciertos gestos de resistencia que revelan un trasfondo común en la manera de habitar el conflicto. La divergencia aparece primero en el modo de construir legitimidad. En Barrancabermeja el discurso se apoya en la memoria obrera como fundamento de autoridad. Los entrevistados evocan que el sindicato defendía la vida, que la lucha era de todos, que uno se paraba y hablaba por la refinería. Esta

estrategia articula la identidad con la acción política. La legitimidad proviene del pasado de organización y de la conciencia de clase construida en décadas de confrontación laboral y defensa de lo público. En Yopal la legitimidad surge de otra fuente. Allí lo que autoriza la palabra no es la trayectoria sindical sino la relación con la tierra y el agua. Las voces afirman que quien conoce el caño sabe cómo cambió, que el campesino siente cuando la tierra se daña, que la vereda sabe lo que pierde. La legitimidad nace del arraigo territorial, no de la institucionalidad laboral.

Otra divergencia aparece en las formas de enunciar el daño. En Barrancabermeja el daño se narra como ataque al trabajador, a los derechos, al carácter público de la industria. El discurso enfatiza despojo laboral, privatización, precarización y represión. En Yopal el daño se narra como ruptura del equilibrio ecológico, deterioro del agua, fragmentación de la comunidad y pérdida de la cultura campesina. Donde uno denuncia la tercerización, el otro denuncia la contaminación. Donde uno teme el debilitamiento sindical, el otro teme la desaparición de la vereda. Esta divergencia no es semántica, es ontológica. Barrancabermeja defiende un mundo construido en torno al trabajo. Yopal defiende un mundo construido en torno al territorio.

Sin embargo, junto a estas diferencias estructurales también emergen estra-

tegias convergentes que revelan un hilo común en la experiencia del extractivismo. Ambos territorios recurren a una estrategia de denuncia que se organiza en torno a un actor ausente: el Estado. En Barrancabermeja se afirma que el Estado llegó fue con represión, que nos dejaron solos cuando más nos golpeaban. En Yopal se dice que aquí no hubo quien pusiera orden, que el Estado llegó tarde y mal, que nadie cuidó el agua ni la tierra. En ambos casos la ausencia estatal se interpreta como abandono y como condición que permitió el desorden generado por la industria. Esta coincidencia instala un patrón nacional: donde el Estado se retira, la violencia del mercado avanza.

Otra convergencia se encuentra en la estrategia de construcción de comunidad como herramienta de resistencia. En Barrancabermeja la comunidad se construye mediante el nosotros obrero, un colectivo que se concibe como sujeto político capaz de negociar, protestar y frenar la privatización. En Yopal la comunidad se construye desde el nosotros campesino y veredal, un sujeto territorial que se cohesionan para proteger el agua, sostener la vida rural y denunciar la mala gestión de las regalías. Aunque los sujetos son diferentes, la estrategia es similar. En ambos territorios la comunidad se activa como respuesta, como refugio y como fuerza colectiva frente a procesos que se sien-

ten impuestos. La palabra comunidad funciona como ancla identitaria y como plataforma para interpretar el conflicto.

Así, existe una convergencia más profunda que atraviesa todas las narrativas. Tanto en Barrancabermeja como en Yopal las estrategias discursivas buscan recuperar agencia frente a una industria que, de distintas maneras, ha producido despojo. En Barrancabermeja la agencia se expresa en el lenguaje de la lucha. En Yopal en el lenguaje del cuidado. Pero ambos gestos desafían el intento de naturalizar el poder petrolero. Ambos rechazan la idea de inevitabilidad del extractivismo. Ambos reconstruyen la posibilidad de un futuro que no dependa exclusivamente del petróleo y que revalorice la historia, la vida y el territorio.

En esta combinación de divergencias y convergencias se revela la clave de la comparación. Cada territorio disputa el extractivismo desde su propia biografía social y política, pero ambos coinciden en transformar la palabra en instrumento de resistencia. Allí donde Barrancabermeja confronta, Yopal protege. Y en esa diferencia, sostenida por una misma voluntad de no rendirse, se expresa la fuerza política del discurso comunitario en Colombia.

### **Relaciones de poder y legitimación**

Las relaciones de poder y legitimación revelan con claridad que Barrancabermeja y Yopal no solo enfrentan actores distintos, sino que interpretan el poder desde posiciones históricas que no son comparables. En Barrancabermeja el poder se reconoce, se confronta y se disputa. En Yopal el poder se siente, se sufre y se ausenta. Estas diferencias no surgen únicamente de la forma en que opera la industria, sino de la manera en que cada territorio ha construido su relación con el Estado, con la empresa y consigo mismo como comunidad.

En Barrancabermeja el poder tiene rostro, trayectoria y memoria. La comunidad sabe quién manda, quién negocia, quién reprime y quién concede. Por eso la legitimación se construye desde la historia obrera. Los entrevistados recuerdan que «el sindicato tenía voz», que «a la empresa había que hablarle de frente», que «el Estado aparecía cuando había protesta, pero no cuando había necesidad». Esta memoria sedimentada convierte al sindicato en actor legítimo que confronta al Estado y a la empresa desde una autoridad moral cimentada en décadas de lucha. En este territorio la legitimación se produce desde abajo, pero opera hacia arriba. Se legitima al movimiento obrero y se cuestiona a las instituciones cuando actúan en función de intereses privados. El poder empresarial, cuando intenta imponerse mediante la tercerización o

la privatización, es interpretado como fuerza ilegítima, intrusa, contraria al carácter público que la comunidad asocia con Ecopetrol. La legitimidad, en Barrancabermeja, no proviene de la autoridad formal, sino de la coherencia con la historia de la ciudad.

En Yopal la relación con el poder adopta una forma completamente distinta. Allí el poder se siente distante y opaco. Las voces repiten que «el Estado no estuvo», que «nadie reguló el boom», que «todo lo decidían desde afuera». Esta ausencia vuelve difuso el mapa de la autoridad. A diferencia de Barrancabermeja, donde el conflicto se organiza frente a actores claros, en Yopal el conflicto se organiza frente a estructuras sin rostro. La legitimación no surge de la acción sindical ni de la historia productiva, sino de la relación íntima con el territorio. La figura legítima es la comunidad campesina, la vereda, el liderazgo local que conoce el agua y la tierra. Por eso las denuncias contra la empresa no se formulan desde la categoría de derechos laborales, sino desde la defensa del ecosistema y de la vida rural. Cuando los habitantes afirman que «la empresa manda más que el gobierno» o que «las regalías se perdieron en manos de los políticos», están revelando que el poder circula de manera informal, fragmentada y excluyente. La legitimidad no se disputa en mesas de negociación, sino en el terreno de la moral territorial: quien conoce el llano

tiene legitimidad para hablar de él.

La comparación muestra otro contraste fundamental. En Barrancabermeja la legitimación del poder estatal es siempre ambigua. El Estado aparece como garante de derechos en unos momentos y como agente de represión en otros. Por eso su legitimidad está en permanente negociación. En Yopal el Estado no alcanza siquiera ese estatus híbrido. Se percibe como entidad lejana que interviene con promesas, pero no con presencia efectiva. Su legitimidad se deteriora desde la inacción y la incapacidad. Los entrevistados explican que «la alcaldía no pudo con la ciudad», que «la gobernación no sabía qué hacer con las regalías», que «nadie cuidó el agua», lo que muestra que el poder estatal no se disputa; simplemente se disuelve en la crítica comunitaria.

También divergen las formas de legitimar la resistencia. En Barrancabermeja la resistencia se legitima políticamente. La ciudad se reconoce heredera de luchas que han marcado la historia laboral del país, y por eso la resistencia se interpreta como acto legítimo, incluso necesario, frente a intentos de privatización o represión. En Yopal la resistencia se legitima éticamente. Es válida porque defiende la vida, porque cuida el agua, porque sostiene la vereda, porque protege la continuidad campesina. No necesita argumentarse en términos de derechos. Se justifica desde la ame-

naza existencial que percibe la comunidad. De allí que las preguntas no sean cuántos empleos genera el petróleo, sino cuánto territorio destruye, cuánta agua altera y cuánta cultura rompe.

Lo que une a ambos territorios es que las relaciones de poder se interpretan siempre desde la experiencia de desigualdad. Tanto en Barrancabermeja como en Yopal las voces asocian el modelo extractivo con formas de dominación que excluyen a las comunidades de las decisiones que afectan su territorio. Uno lo expresa desde la pérdida de derechos laborales. El otro desde la pérdida de la vida rural. Ambos concluyen que el poder económico y político del petróleo, tal como opera en Colombia, desplaza, ordena y despoja. Pero cada territorio legitima su respuesta desde un lugar distinto: Barrancabermeja legitima la confrontación organizada y Yopal legitima la defensa territorial.

La diferencia entre Barrancabermeja y Yopal adquiere toda su densidad cuando se observa cómo cada territorio produce discursos que disputan, legitiman o denuncian el poder. No se trata solo de matrices culturales distintas. Es un modo radicalmente diferente de nombrar quién manda, quién decide y quién es afectado por la economía petrolera.

En Barrancabermeja, el poder se enuncia desde la historia obrera. Las entre-

vistas muestran un mundo donde el sindicato aparece como actor central, con fuerza, estructura y legitimidad social. Un entrevistado afirma que «el sindicato tiene mucha fuerza» y que incluso ocupa posiciones dentro del Estado, mencionando que «tenemos nuestro ministro de minas [...] que viene de ser líder sindical». En este territorio, el poder se explica en clave de organización: la gente sabe quién acumula autoridad, cómo se disputa y qué capacidad tiene para transformar decisiones. Incluso cuando se denuncia corrupción o cooptación, como cuando un entrevistado señala que «cuando se busca más los beneficios personales que los comunitarios», el punto de partida sigue siendo la existencia de un sujeto colectivo con poder histórico.

En Yopal, por el contrario, las entrevistas revelan un poder mucho más difuso, frágil y, sobre todo, externo al territorio. Un líder comunitario relata que en Casanare «la toma de territorios [...] se hace con violencia [...] para decirle a la petrolera: “explotas acá pero me pagas a mí”». Aquí el actor fuerte no es el sindicato, sino una constelación híbrida de empresas, élites locales, intermediarios y actores armados que intervienen directamente en el ordenamiento territorial. El entrevistado insiste en que no se puede separar «la comunidad» de los grupos armados, porque «forman parte de la comunidad». El poder, entonces,

no se reconoce como institución, sino como presencia sobre el territorio. Una presencia que decide dónde se perfora, quién recibe los beneficios, a quién se expulsa y quién accede a recursos como el agua o la tierra.

Esta divergencia también aparece en la forma en que cada territorio describe la relación entre empresas y Estado. En Barrancabermeja, aunque se critica la corrupción o el clientelismo, existe una expectativa de negociación y un horizonte de reconocimiento político. En Yopal, en cambio, los entrevistados describen un Estado incapaz de regular, incluso, actividades ilegales, como el vertimiento de agua asociada. Un entrevistado detalla que pozo tras pozo se cedió a campesinos que luego vertían «el agua salada [...] a los caños y luego eso va a la región», y que, aun cuando «eso lo sabe todo el mundo», ninguna autoridad interviene. Aquí el poder no se disputa. Se padece.

Mientras Barrancabermeja construye una legitimidad que parte del trabajo y la organización, Yopal construye una legitimidad fundada en el cuidado del territorio. Por eso, en Barrancabermeja la referencia al poder es huelgas, leyes, sindicatos y derechos laborales, mientras en Yopal es agua, veredas, contaminación, violencia y pérdida del equilibrio ecológico.

Desde esta perspectiva comparativa, la frase adquiere profundidad: el poder

no solo actúa sobre los territorios. Los territorios producen maneras propias de nombrarlo, resistirlo y legitimarlo. Allí donde Barrancabermeja construye poder desde la memoria obrera, Yopal lo disputa desde la memoria campesina. Allí donde Barrancabermeja exige reconocimiento político, Yopal exige protección territorial. Y en esta divergencia, sostenida sobre un mismo trasfondo de desigualdad, se revelan las geografías múltiples del extractivismo en Colombia, cada una con su propia gramática de autoridad, resistencia y sentido político.

### **Modos de resistencia y articulación comunitaria**

Los modos de resistencia y articulación comunitaria revelan quizás la diferencia más profunda entre Barrancabermeja y Yopal. Ambos territorios resisten, pero lo hacen desde tradiciones políticas, memorias colectivas y horizontes simbólicos completamente distintos. Resistir, en cada caso, significa otra cosa. Tiene otro ritmo. Otro sentido. Otro cuerpo colectivo que lo sostiene.

En Barrancabermeja la resistencia adopta la forma de acción organizada. El sindicalismo, la protesta y la movilización forman parte de una cultura política sedimentada durante décadas. Los entrevistados recuerdan que «el sindicato defendía la vida», que «aquí uno

se paraba y hablaba por la refinería», que «lo que tenemos ha sido porque se luchó». Este tipo de afirmaciones muestra que la resistencia no es episódica ni reactiva. Es una capa identitaria que organiza la vida social. La ciudad ha construido una memoria donde la protesta es legítima y la acción colectiva es un deber moral. Incluso quienes critican prácticas clientelares o divisiones internas sostienen que, «si no fuera por la gente que peleó, Ecopetrol ya no sería de nosotros». La resistencia se articula en torno a la defensa de derechos laborales, del carácter público de la empresa y de la dignidad obrera. Es resistencia de confrontación, resistencia de calle, resistencia que entiende el conflicto como espacio político.

En Yopal, en cambio, la resistencia se estructura desde el territorio, no desde la organización laboral. Las entrevistas muestran que la comunidad aparece más como guardiana del agua, de la vereda y de los vínculos campesinos que como sujeto de movilización masiva. Un entrevistado afirma que «el caño cambió», otro que «la tierra ya no produce igual», otro que «el territorio se llenó de desconocidos». Estas frases son más que descripciones ambientales. Funcionan como anclajes de resistencia simbólica. Cuando se dice que «la vereda sabe lo que pierde», se está afirmando que la autoridad para resistir no proviene de la afiliación sindical o de la experiencia política, sino del arraigo

territorial. La resistencia en Yopal es de cuidado, de denuncia, de articulación comunitaria en espacios como la escuela, la junta, la vereda. Es una resistencia que protege más de lo que confronta. Que sostiene la vida más de lo que disputa decisiones institucionales. Que se organiza no tanto para «ganar» frente a la empresa, sino para evitar que el territorio siga deteriorándose.

Pese a estas diferencias, existe un punto de convergencia que ambas geografías revelan con fuerza: la resistencia surge siempre de una experiencia compartida de despojo. En Barrancabermeja el despojo se denomina como pérdida de derechos, como precarización, como privatización. En Yopal como contaminación, pérdida del agua, ruptura de la cultura campesina. Pero en ambos territorios las voces afirman que «lo que pasó no nos benefició», que «la ciudad quedó sin futuro» o que «las regalías no se ven». Ambas comunidades identifican al petróleo como fuerza disruptiva que, aunque produjo riqueza, desordenó sus modos de vida. Esta coincidencia sugiere que la resistencia no es solo estrategia. Es respuesta histórica frente a un modelo económico que se impuso sin reconocer plenamente a quienes habitaban el territorio.

En Barrancabermeja la articulación comunitaria se construye alrededor del trabajo y la memoria política. En Yopal se construye alrededor del territorio

y la memoria campesina. Allí se grita. Aquí se cuida. Allí se confronta. Aquí se protege. Pero en ambos lugares, el discurso es la herramienta que permite que esas formas diversas de resistencia se constituyan como proyecto colectivo. La palabra huelga y la palabra agua, cada una desde su geografía, cumplen la misma función. Marcan el límite que la comunidad no quiere que se cruce. Y en esa defensa, cada territorio redefine el conflicto petrolero desde la vida que quiere preservar, ya sea la vida obrera o la vida campesina.

### **Implicaciones para políticas públicas y gobernanza**

Las implicaciones para las políticas públicas y la gobernanza que surgen de la comparación entre Barrancabermeja y Yopal son profundas y desestabilizan las lógicas tradicionales con las que el Estado y la industria han intentado gestionar el territorio petrolero en Colombia. Ambos casos muestran que la conflictividad no nace de la oposición irracional al desarrollo, sino de la incapacidad de los modelos de gobernanza para dialogar con las identidades, memorias, territorios y estructuras sociales que ya existían antes del petróleo. Los discursos recogidos revelan formas distintas de interpelar al Estado, pero comparten una idea: las instituciones no han logrado representar, proteger ni escuchar adecuadamente a las co-

munidades.

En Barrancabermeja las voces exigen políticas que reconozcan la historia obrera como componente central de la gobernanza del sector. La demanda no se limita al empleo. Reclama un Estado que entienda que el vínculo entre la ciudad y la empresa no es transaccional, sino político, construido en décadas de lucha y sacrificio. Cuando los entrevistados afirman que «lo que se ha conseguido es porque se peleó» o que «la empresa se llevó lo que era de todos», están señalando que cualquier política pública que ignore esta memoria está condenada a generar resistencia y desconfianza. Para este territorio, la gobernanza requiere fortalecer el empleo digno, frenar la precarización, garantizar participación vinculante en decisiones sobre modernización industrial y proteger a los líderes que han sostenido la vida comunitaria. No es un reclamo de concesiones. Es un reclamo de reconocimiento político, de reparación simbólica y de coherencia institucional con la historia de una ciudad que dio su fuerza de trabajo al país.

En Yopal, por su parte, las implicaciones para las políticas públicas se orientan a la gestión del territorio, del agua y del ordenamiento urbano. Las entrevistas muestran que el principal déficit no ha sido laboral, sino ambiental e institucional. Cuando se dice que «el caño

cambió», que «la tierra ya no produce igual» o que «las regalías se perdieron», se está denunciando una gobernanza que permitió el deterioro ecológico y el crecimiento urbano sin planificación. Las políticas públicas deben responder aquí a la urgencia de reconstruir confianza mediante la protección de los ecosistemas, la regulación estricta de impactos ambientales, la destinación transparente de regalías y la reconstrucción del tejido rural. El Estado, ausente durante el boom, debe aparecer ahora como garante de la vida campesina, no como administrador distante. El territorio necesita políticas que reparen y anticipen, no solo que mitiguen.

Un elemento transversal surge de ambas geografías. Las comunidades reclaman que la gobernanza petrolera deje de ser vertical y pase a ser participativa, vinculante y territorializada. El Estado no puede seguir diseñando políticas desde Bogotá sin integrar los repertorios locales de memoria obrera o de conocimiento campesino. La gobernanza futura del sector debe reconocer que la legitimidad no se construye únicamente desde la norma o la inversión, sino desde la capacidad de escuchar, integrar y proteger a quienes sostienen el territorio. La política pública necesita partir de una pregunta que las comunidades ya respondieron: ¿qué significa vivir con petróleo? En Barrancabermeja significa vivir con historia laboral y dig-

nidad. En Yopal significa vivir con agua, tierra y fragilidad ecológica. Cualquier política que ignore estas condiciones reproducirá desigualdades y prolongará el conflicto.

Por ello, la gobernanza del futuro debe asumir que el extractivismo no es una operación técnica. Es un proceso social que reordena la vida. Las entrevistas muestran que ninguna intervención será efectiva si no integra la memoria de los territorios. Barrancabermeja pide un modelo que repare la precarización y proteja su legado obrero. Yopal pide un modelo que proteja el agua y reconstruya la vida rural. Ambos territorios muestran que el desafío no es solo regular la industria, sino gobernar el territorio reconociendo sus historias y sus heridas. En esa integración entre política pública, memoria y territorio se juega la posibilidad de construir un futuro en el que el petróleo deje de ser causa de conflicto y se convierta en punto de partida para modelos de desarrollo más justos, sostenibles y democráticos.

Esta sección es clave para el libro porque revela que el extractivismo no produce efectos homogéneos, ni opera sobre territorios abstractos, sino que se inserta en geografías sociales profundamente diferenciadas. Barrancabermeja y Yopal no son variaciones de un mismo modelo. Son dos formas radicalmente distin-

tas de vivir, interpretar y resistir el petróleo. En una, el extractivismo entra en un territorio con memoria obrera, con instituciones comunitarias consolidadas y con un sujeto político capaz de negociar y confrontar. En la otra, el extractivismo irrumpe en un mundo campesino y llanero que carecía de redes organizativas equivalentes y que, en lugar de negociación, experimentó desorden, deterioro ambiental y reordenamientos violentos. Por eso en Barrancabermeja la palabra central es dignidad, mientras en Yopal es agua. Por eso la resistencia en un territorio adopta la forma de lucha organizada, y en el otro la forma de protección comunitaria.

Las diferencias no son matices. Son estructuras. Cada territorio produce un léxico propio, una memoria distinta, una gramática de legitimidad y una forma singular de interpretar el poder. Donde Barrancabermeja ve derechos vulnerados, Yopal ve territorio fracturado. Donde Barrancabermeja exige reconocimiento político, Yopal exige protección ecológica. Donde Barrancabermeja enfrenta procesos de privatización, Yopal enfrenta corrupción en el manejo de regalías. Estas divergencias construyen dos modelos territoriales que, aunque afectados por la misma industria, narran conflictos muy distintos y producen estrategias de resistencia no comparables. Comprender estas diferencias es indispensable para cualquier política pública

que aspire a transformar conflictos socioambientales en Colombia. El extractivismo no es un fenómeno uniforme. Es una fuerza que se adapta, se reconfigura y opera según la historia, la cultura y la forma de vida de cada territorio. Este capítulo demuestra, con evidencia discursiva, que el país no enfrenta un solo conflicto petrolero, sino múltiples conflictos que se expresan en lenguajes distintos y que requieren respuestas diferenciadas. Por eso esta sección es esencial: porque ilumina la arquitectura profunda del extractivismo y muestra cómo, en su choque con territorios tan diferentes como Barrancabermeja y Yopal, revela no solo desigualdades, sino también capacidades locales de resistencia, imaginación política y construcción de futuro.

## V. Convergencias estructurales del extractivismo: desigualdad, privación y resistencia

Aunque Barrancabermeja y Yopal aparecen como territorios profundamente distintos en su historia, su identidad y sus formas de habitar el petróleo, el análisis comparado revela que debajo

de esas diferencias opera una misma arquitectura de fondo. El extractivismo no actúa como fenómeno disperso, sino como una estructura que reordena la vida social a través de mecanismos que se repiten, aunque adopten formas específicas en cada geografía. Por eso, una vez expuestas las divergencias en léxicos, metáforas y estrategias de resistencia, es imprescindible girar hacia los elementos comunes que permiten explicar por qué ambos territorios producen conflictividad intensa y sostenida.

Las entrevistas muestran, de manera consistente, que la experiencia del petróleo en los dos casos está marcada por un mismo encadenamiento causal. Primero emerge la desigualdad estructural, visible en la precarización del trabajo en Barrancabermeja y en la mala administración de regalías en Yopal. Esa desigualdad da lugar a privaciones relativas que los habitantes nombran en registros diferentes (pérdida de derechos en un territorio y pérdida del agua en el otro) pero que generan sensaciones semejantes de injusticia y deterioro. Y es esa privación la que desemboca en una inseguridad ontológica que amenaza la continuidad de la vida comunitaria, ya sea la vida obrera o la vida campesina. Frente a estas amenazas, cada territorio activa repertorios propios de resistencia: lucha organizada en Barrancabermeja, defensa territorial en Yopal.

Este subcapítulo analiza precisamente ese punto de encuentro. Muestra cómo, más allá de sus trayectorias divergentes, ambos territorios comparten un mismo patrón estructural que permite comprender la conflictividad no como resultado de identidades aisladas, sino como efecto de un modelo extractivo que produjo desigualdad, erosionó seguridades básicas y obligó a las comunidades a reorganizarse para mantener su dignidad y su territorio.

### **De las diferencias territoriales a la matriz causal compartida**

Tras las divergencias se esconden patrones que repiten la misma lógica de fondo, aunque adopten formas distintas según la historia territorial. Este paso es conceptualmente fundamental. El extractivismo no se limita a producir impactos puntuales o a generar conflictos locales fragmentados. Funciona mediante mecanismos estructurales que reorganizan la vida social, redistribuyen el poder y producen desigualdades que atraviesan territorios diversos. De ahí la necesidad de pasar del contraste a la convergencia, de las particularidades al esquema que las articula. No porque las diferencias carezcan de valor, sino porque las similitudes revelan el modo en que la industria actúa como fuerza estructurante más allá de las especificidades culturales o geográficas.

Este giro permite enlazar directamente con la hipótesis que guía la investigación: la conflictividad en ambos territorios es efecto de una misma cadena causal donde la desigualdad genera privaciones, las privaciones alimentan inseguridad ontológica y esa inseguridad activa repertorios de resistencia. Identificar esta matriz no solo profundiza la comprensión del conflicto, sino que permite mostrar cómo territorios tan distintos terminan produciendo respuestas que, aunque diferentes en forma, comparten un origen común en la estructura del extractivismo.

Reconocer las diferencias entre Barrancabermeja y Yopal ha sido necesario para comprender cómo el extractivismo adopta formas territoriales específicas. Sin embargo, detenerse únicamente en esas divergencias impediría ver aquello que realmente sostiene la conflictividad en ambos escenarios. Una comparación territorial solo alcanza su potencia explicativa cuando es capaz de mostrar no solo cómo los territorios se diferencian, sino también cómo participan de una misma estructura que condiciona sus posibilidades de acción, sus experiencias de pérdida y sus repertorios de resistencia. Identificar patrones comunes es imprescindible porque permite entender el extractivismo no como un conjunto de impactos aislados, sino como un régimen que, aun adaptán-

dose a cada territorio, opera mediante mecanismos repetitivos que producen desigualdades, desestabilizan modos de vida y erosionan seguridades básicas.

Además, los discursos recogidos muestran que, pese a las trayectorias tan dispares de una ciudad obrera y un territorio campesino, las comunidades experimentan sensaciones similares de injusticia, abandono y amenaza. En ambos lugares se dice, con palabras distintas, que lo prometido no llegó, que el territorio se transformó sin participación y que la vida cotidiana se volvió más incierta. Estas coincidencias no son anecdóticas: indican la existencia de procesos estructurales que atraviesan a los dos territorios y que no pueden explicarse solo por su identidad cultural o su historia política. Por eso, analizar patrones comunes permite avanzar de la descripción a la explicación, y de la comparación empírica a la comprensión causal del conflicto.

Identificar convergencias es necesario porque permite iluminar lo que las diferencias tienden a ocultar. La trayectoria obrera de Barrancabermeja podría sugerir que su conflictividad es producto exclusivo de su historia sindical, mientras que la crisis ambiental de Yopal podría interpretarse como un problema local de gestión ambiental. Sin embargo, cuando se observa que ambos

territorios denuncian desigualdades persistentes, privaciones acumuladas y un mismo sentimiento de inseguridad frente al futuro, se hace evidente que el extractivismo opera como matriz estructural compartida. Por eso este giro analítico es indispensable: permite sostener la hipótesis central de la investigación y mostrar que, más allá de las voces específicas, existe una arquitectura común que explica la conflictividad petrolera en Colombia.

La necesidad de identificar patrones comunes conduce directamente a la justificación conceptual de este giro analítico. Si las diferencias entre Barrancabermeja y Yopal permiten entender cómo cada territorio experimenta y nombra el petróleo desde su propia biografía, es la mirada estructural la que permite comprender por qué ambos territorios terminan produciendo conflictividad intensa, aun cuando sus historias, identidades y repertorios políticos sean tan distintos. El extractivismo no opera como fenómeno local, dependiente exclusivamente de la cultura, la geografía o la trayectoria organizativa de un territorio. Actúa mediante mecanismos estructurales que se repiten en contextos diversos y que producen efectos similares en comunidades con características profundamente diferentes.

Este marco conceptual parte de reconocer que el extractivismo reordena la

vida social no por accidente ni por fallas individuales de gestión, sino a través de lógicas sistémicas: concentración de beneficios, redistribución desigual de costos, desregulación ambiental, debilitamiento de instituciones locales y asimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidad. Estas lógicas no necesitan replicarse de manera idéntica para producir efectos equivalentes. En Barrancabermeja adoptan la forma de precarización laboral y privatización; en Yopal se manifiestan como deterioro ambiental y corrupción en las regalías. Pero en ambos casos, el mecanismo estructural es el mismo: un orden extractivo que privilegia intereses externos al territorio y desplaza formas locales de vida, autoridad y bienestar.

Por eso la comparación no puede limitarse a describir cómo cada territorio vivió el petróleo, sino que debe mostrar cómo el extractivismo opera por encima de esas particularidades. La especificidad territorial explica la forma que toma el conflicto, pero es la estructura extractiva la que explica su origen. En términos sociológicos, lo local determina la superficie de la experiencia, mientras lo estructural determina la profundidad de sus causas. Así, aunque Barrancabermeja movilice su identidad obrera y Yopal movilice su identidad campesina, ambos territorios están respondiendo a un mismo proceso: la transformación desigual del territorio

y de la vida cotidiana bajo un modelo económico que los excede.

Justamente por esto, identificar mecanismos estructurales no implica negar las diferencias locales, sino entender que dichas diferencias expresan adaptaciones del extractivismo a territorios con capitales sociales, memorias y configuraciones institucionales distintas. La estructura es la que produce la desigualdad; la forma local es la que define cómo se resiste. En otras palabras, los territorios no moldean al extractivismo. Es el extractivismo el que moldea a los territorios. Y reconocerlo permite sostener con mayor solidez la hipótesis que guía esta investigación: la conflictividad social en ambos casos es resultado de un mismo entramado causal donde la desigualdad genera privaciones, las privaciones alimentan inseguridad ontológica y esa inseguridad activa repertorios de resistencia que, aunque distintos, nacen del mismo origen estructural.

La identificación de mecanismos estructurales permite enlazar directamente con la hipótesis de trabajo, y las propias entrevistas ofrecen evidencia contundente de esa convergencia causal entre desigualdad, privación e inseguridad. En Barrancabermeja, varias voces expresan que «la ciudad quedó sin futuro», que «a la gente de aquí la dejaron por fuera» o que «modernizaron para

unos pocos», lo que revela una percepción clara de pérdida relativa frente a un pasado donde la refinería era puerta de estabilidad y construcción de vida. En Yopal, aunque los términos cambian, el sentimiento es el mismo. Los habitantes dicen que «el caño cambió», que «la tierra ya no produce igual», que «las regalías se perdieron» o que «la ciudad se llenó de desconocidos», lo que muestra cómo el boom petrolero produjo deterioro material, ruptura del tejido rural y sensación de abandono.

Estas narrativas, cuando se leen juntas, muestran que la experiencia del petróleo, en ambos territorios, se organiza alrededor de una estructura causal compartida. La desigualdad aparece primero, ya sea como precarización laboral o como corrupción de regalías. Esa desigualdad genera privaciones sentidas como pérdida de derechos en Barrancabermeja y pérdida de territorio en Yopal. Y esas privaciones activan un estado emocional de inseguridad que amenaza la continuidad de la vida obrera o de la vida campesina. Frente a esa inseguridad, cada territorio activa repertorios propios: la lucha organizada en uno y la defensa ambiental en el otro. Pero ambos responden a un mismo origen estructural.

De esta manera, las entrevistas demuestran que, detrás de léxicos distin-

tos, metáforas divergentes y repertorios disímiles, opera una misma matriz que da sentido a la conflictividad. Las comunidades no están reaccionando a fallas aisladas de la industria o a problemas puntuales de gestión pública, sino a un proceso que reconfigura su mundo social de manera desigual, produce pérdidas profundas y amenaza su futuro inmediato. Es esta coincidencia en la estructura de la experiencia lo que habilita el puente hacia la hipótesis de trabajo: la conflictividad social en Barrancabermeja y Yopal es efecto directo de una cadena causal donde la desigualdad genera privaciones, las privaciones alimentan inseguridad ontológica y esa inseguridad se expresa en repertorios de resistencia que, aunque distintos en forma, comparten un mismo origen en el modo estructural en que opera el extractivismo en Colombia.

### **Desigualdad estructural como punto de partida**

Si existe un punto donde Barrancabermeja y Yopal se encuentran, a pesar de sus trayectorias históricas opuestas, es en la experiencia compartida de la desigualdad. En ambos territorios, las entrevistas muestran que el petróleo no se vivió como motor de bienestar equitativo, sino como una fuerza que distribuyó beneficios de manera concentrada y dejó a la mayoría enfrentando pérdidas materiales, incertidumbre

y deterioro territorial. En Barrancabermeja esta desigualdad adoptó la forma de precarización laboral, privatización progresiva y erosión de derechos que alguna vez estuvieron garantizados. En Yopal tomó la forma de corrupción en el manejo de regalías, deterioro acelerado del agua y la tierra, y una ausencia estatal que permitió que el boom petrolero avanzara sin regulación y sin límites claros.

Estas experiencias, aunque expresadas mediante léxicos distintos, señalan un mismo proceso estructural. Por un lado, trabajadores de Barrancabermeja afirman que «la ciudad quedó sin futuro», que «a los de aquí nos sacaron» o que «lo público se lo llevaron». Por otro lado, habitantes de Yopal denuncian que «las regalías no se ven», que «el caño cambió para mal» y que «nadie cuidó el territorio». Son frases que provienen de geografías diferentes, pero que comparten un diagnóstico esencial: la riqueza petrolera benefició a actores externos y dejó a las comunidades soportando las consecuencias negativas.

Partir de la desigualdad estructural permite, entonces, comprender que la conflictividad en ambos territorios no emerge de percepciones subjetivas ni de reclamos aislados, sino de la vivencia concreta de un modelo extractivo que concentró el poder económico y político y que distribuyó de manera di-

ferencial los costos y los daños. Aquí se ancla el punto de partida del análisis: tanto en Barrancabermeja como en Yopal, la desigualdad es el terreno donde germinan la privación relativa, la inseguridad ontológica y los repertorios de resistencia que caracterizan sus discursos.

En Barrancabermeja la desigualdad estructural se expresa, ante todo, como un proceso de precarización progresiva que rompe con la memoria de estabilidad laboral que definió a la ciudad por décadas. Las entrevistas muestran de manera insistente la sensación de que el trabajo, antes asociado a derechos, continuidad y proyecto de vida, se convirtió en un espacio incierto, temporal y debilitado. Varios trabajadores relatan que «a la gente de aquí la dejaron por fuera», que «ya no entran los jóvenes» y que «los contratos ahora son por días o por obra», frases que condensan la percepción de un quiebre generacional: mientras la refinería había garantizado movilidad social, la nueva estructura contractual empuja hacia la inestabilidad y el desarraigo. Esta precarización no aparece como un fenómeno aislado, sino como una transformación estructural que erosiona la identidad petrolera de la ciudad.

De manera paralela, la privatización aparece como segundo mecanismo

que profundiza la desigualdad. Los entrevistados describen que «lo público se lo llevaron», que «modernizaron para unos pocos» o que «todo se lo entregaron a contratistas», lo que revela que la privatización no se interpreta solo como cambio administrativo, sino como pérdida colectiva. Para ellos, privatizar significa desplazar a los trabajadores locales, debilitar la negociación colectiva y romper el pacto simbólico que había permitido construir una ciudad alrededor de una empresa pública. La privatización funciona, en este sentido, como una fuerza que fragmenta la comunidad, reduce la capacidad de defensa sindical y acelera la exclusión de quienes históricamente habían sostenido la actividad petrolera.

La pérdida de derechos es, finalmente, el elemento que articula ambos procesos. Las entrevistas evocan una época donde el trabajo estaba protegido y donde los obreros tenían incidencia real en las decisiones de la empresa. Frente a ese pasado, los testimonios actuales afirman que «los derechos ya no valen», que «lo que se conquistó se está perdiendo» y que «la empresa ya no responde por la gente». Estas afirmaciones permiten ver que la pérdida de derechos no es percibida como un retroceso técnico, sino como una herida a la identidad obrera y al carácter público que definió a Ecopetrol en el territorio. No se trata solamente de sa-

larios o prestaciones, se trata de la erosión de un modelo de sociedad donde el trabajo petrolero era fundamento de dignidad y reconocimiento.

En conjunto, la precarización, la privatización y la pérdida de derechos componen la forma específica en que la desigualdad estructural se manifiesta en Barrancabermeja. Las voces recogidas muestran que no se trata de fallas puntuales de gestión, sino de una transformación profunda del modelo laboral y productivo que reconfiguró la vida social. La desigualdad, para la comunidad, no es abstracción: es experiencia cotidiana que se traduce en menos estabilidad, menos voz y menos futuro para una ciudad que construyó su identidad alrededor de un trabajo que hoy siente amenazado y debilitado.

En Yopal la desigualdad estructural se expresa a través de un tríptico que aparece con fuerza en todas las entrevistas: corrupción en el manejo de regalías, deterioro ambiental acelerado y una ausencia estatal que permitió que el boom petrolero avanzara sin regulación ni control efectivo. Las voces del territorio coinciden en que las regalías, que debían ser la base para mejorar infraestructura, servicios y bienestar, se convirtieron en fuente de acumulación privada para actores políticos y contratistas locales. Los entrevistados afirman que «las regalías no se ven», que

«la plata llegó pero no quedó nada», que «los políticos hicieron fiesta con la bonanza», revelando un diagnóstico donde el petróleo no trajo desarrollo sino un ciclo de enriquecimiento selectivo. Esta corrupción no es narrada como un problema administrativo, sino como eje estructural de la desigualdad: la riqueza pública se perdió en manos privadas mientras la ciudad crecía sin planificación y las veredas enfrentaban abandono.

El deterioro ambiental constituye la segunda forma en que la desigualdad se hace visible. Las entrevistas describen una transformación profunda del agua, de los caños y de la tierra. Un habitante relata que «el caño cambió», otro que «la tierra ya no produce igual», otro que «el agua se contaminó», mostrando cómo el boom petrolero alteró las bases ecológicas de la vida rural. La desigualdad se expresa aquí como asimetría extrema: la empresa extrae valor del subsuelo y la comunidad asume los costos ambientales, sin compensaciones reales ni garantías de mitigación. Para Yopal, la desigualdad no se mide en ingresos, sino en el deterioro de aquello que sostiene la vida campesina. La pérdida del agua y de la fertilidad de la tierra se vive como pérdida de futuro, de cultura y de autonomía.

Finalmente, la ausencia estatal constituye el marco que permite que la co-

rrupción y el deterioro ambiental prosperen. Los entrevistados afirman que «aquí el Estado no estuvo», que «nadie cuidó el territorio», que «todo lo decidieron desde afuera», señalando un vacío institucional que dejó a la comunidad sin mecanismos de defensa, regulación o participación. La ausencia no se refiere solo a la falta de obras o de presencia burocrática: es una ausencia política que permitió que actores privados y grupos armados ocuparan el lugar del Estado en la gestión del territorio. Los habitantes recuerdan que «la ciudad se llenó de desconocidos», que «las veredas quedaron solas», que «los problemas los resolvía cualquiera», evidenciando que la desigualdad no proviene únicamente de la empresa, sino de un Estado que renunció a regular, a planificar y a proteger.

Así, en Yopal la desigualdad estructural se manifiesta como desposesión ambiental, desorden institucional y captura de recursos públicos por élites locales. La comunidad no habla de derechos laborales perdidos, como en Barrancabermeja, sino de agua, tierra y regalías que se evaporaron sin dejar bienestar. La desigualdad se vuelve tangible en los caños contaminados, en los suelos debilitados, en los barrios que crecieron sin servicios y en la frustración colectiva ante un Estado que no cumplió su papel. Y por eso, al igual que en Barrancabermeja, la desigualdad no

es un concepto abstracto: es experiencia vivida que transforma la manera en que el territorio interpreta el petróleo y la manera en que decide resistirlo.

Las evidencias discursivas permiten observar con nitidez cómo, a pesar de hablar desde historias y geografías distintas, Barrancabermeja y Yopal producen diagnósticos paralelos sobre la desigualdad que deja el petróleo. En Barrancabermeja, una de las frases que más se repite es que «la ciudad quedó sin futuro», expresión que condensa el sentimiento de pérdida de horizonte laboral y social tras la precarización, la tercerización y la privatización. Esta frase aparece vinculada a relatos donde se afirma que «a la gente de aquí la sacaron», que «ya no entran los jóvenes», que «lo que era de todos se lo llevaron», revelando una percepción generalizada de que la riqueza petrolera, lejos de consolidar bienestar, fracturó las bases que sostenían la movilidad social y la identidad obrera. El futuro se experimenta como algo arrebatado.

En Yopal la frase que ocupa un lugar equivalente es «las regalías no se ven». Con ella los entrevistados sintetizan la frustración frente a una bonanza que prometió desarrollo, infraestructura y bienestar, pero que terminó diluyéndose en redes de corrupción, clientelismo y obras inconclusas. Quienes hablan recuerdan que llegaron sumas inmensas

de dinero y, sin embargo, la ciudad creció sin planificación, las veredas siguieron abandonadas, el agua se deterioró y la tierra perdió productividad; decir que «las regalías no se ven» equivale a afirmar que la riqueza petrolera pasó por el territorio sin dejar beneficios colectivos, sin fortalecer la institucionalidad y sin mejorar las condiciones de vida.

Estas dos expresiones: «la ciudad quedó sin futuro» y «las regalías no se ven» no hablan de lo mismo en la superficie, pero sí en la estructura profunda del discurso. Ambas denuncian la ruptura del pacto que debía sostener la relación entre industria, Estado y comunidad. En Barrancabermeja se perdió el futuro laboral; en Yopal se perdió el futuro territorial. Pero en ambos casos el significado es idéntico: la riqueza petrolera no se redistribuyó, no fortaleció el tejido social, no garantizó protección ni derechos. Las frases funcionan como diagnósticos sintéticos de un mismo proceso de desposesión, cada uno formulado en el registro que corresponde a la identidad local.

Es precisamente este paralelismo discursivo el que confirma que la desigualdad estructural es el punto de partida común. No importa si se nombra desde el trabajo o desde el territorio; en ambos casos la comunidad describe una experiencia donde la promesa del pe-

tróleo se convirtió en pérdida, y donde la concentración de beneficios dejó a la mayoría enfrentando precarización, deterioro o abandono. Estas evidencias no solo comparan dos frases: iluminan la arquitectura compartida del conflicto.

En este paralelismo discursivo se hace evidente la convergencia más profunda entre los dos territorios. Aunque las palabras cambien y los horizontes simbólicos sean distintos, tanto Barrancabermeja como Yopal denuncian que la riqueza petrolera terminó concentrada en manos de unos pocos y dejó a la mayoría enfrentando precarización, deterioro o abandono. Las voces obreras afirman que «la ciudad quedó sin futuro», porque el trabajo estable se perdió, mientras las voces campesinas señalan que «las regalías no se ven», porque el dinero público nunca se tradujo en bienestar colectivo. Son expresiones diferentes, pero nacen de la misma experiencia de exclusión. En ambos casos, la comunidad observa que el petróleo produjo ganadores claramente identificables (contratistas, élites políticas, intermediarios, empresas) y dejó fuera a quienes habitan el territorio. Esta convergencia muestra que la desigualdad estructural no es una variación local, sino la condición común que sostiene la conflictividad en las dos geografías analizadas.

**Privación relativa: sentir que se perdió más de lo que se ganó**

Si la desigualdad estructural describe las transformaciones objetivas que dejó el extractivismo en cada territorio, la privación relativa muestra cómo esas transformaciones se experimentaron subjetivamente. En ambos casos, los discursos revelan que la comunidad no evalúa el petróleo por la magnitud de la riqueza producida, sino por el contraste entre lo que existía o se prometió y lo que finalmente quedó. La privación relativa es, por tanto, un sentimiento comparativo: nace de mirar atrás, medir el presente y concluir que el petróleo generó más pérdidas que beneficios. En Barrancabermeja este sentimiento se expresa al comparar el pasado industrial fuerte, estable y cargado de derechos con el presente precarizado, fragmentado y sin garantías para las nuevas generaciones. En Yopal toma la forma de una comparación entre la promesa exuberante del boom y la realidad del abandono, donde el dinero llegó, pero no transformó la vida de la comunidad.

Las entrevistas muestran que esta privación no es abstracta. Se ancla en signos concretos que los habitantes nombran repetidamente: pérdida del agua, pérdida del proyecto laboral, pérdida de la cultura campesina. Son referentes distintos, pero todos señalan la misma ruptura entre expectativas y resultados. Y es precisamente esa brecha (entre lo

que se esperaba y lo que se obtuvo) la que alimenta la sensación de injusticia que atraviesa los discursos de ambos territorios y se convierte en motor emocional de la resistencia.

En Barrancabermeja la privación relativa se expresa de manera especialmente contundente porque la comunidad compara su situación actual con un pasado industrial que funcionó como referente de dignidad, estabilidad y movilidad social. Las entrevistas evocan con claridad una época en la que «había trabajo para la gente de aquí», en la que los jóvenes podían proyectar su vida alrededor de la refinería y en la que el vínculo con Ecopetrol garantizaba no solo ingresos, sino reconocimiento social. Ese pasado opera como parámetro para medir el deterioro presente. Hoy los entrevistados afirman que «a la gente de aquí la dejaron por fuera», que «ya no entran los jóvenes» y que «todo se lo dieron a los contratistas», expresiones que no solo describen precarización, sino que evidencian la brecha entre lo que se tenía y lo que se perdió.

La privación se vive, entonces, como ruptura del pacto histórico que había unido a la ciudad con su industria. Los trabajadores recuerdan que antes existían derechos laborales claros, estabilidad contractual y una identidad compartida alrededor del trabajo petrolero. Frente a ese legado, el presen-

te aparece erosionado: tercerización, rotación constante, contratos temporales y pérdida del carácter público del empleo. Por eso la privación relativa no se formula únicamente en términos económicos, sino simbólicos. Cuando un entrevistado afirma que «la ciudad quedó sin futuro», está diciendo que el horizonte de vida construido durante generaciones fue cancelado.

En Barrancabermeja sentir que se perdió más de lo que se ganó es resultado de esa comparación inevitable entre un pasado que garantizaba seguridad y un presente que ofrece incertidumbre. La privación no surge porque falte empleo, sino porque se perdió la forma de vida que definía a la ciudad como enclave petrolero y como comunidad obrera. Es esa distancia entre memoria y realidad la que alimenta la sensación de injusticia y se convierte en uno de los motores centrales de la conflictividad social en el territorio.

En Yopal la privación relativa se construye a partir de una comparación permanente entre la promesa del boom petrolero y la realidad del abandono que quedó después. Las entrevistas muestran que la comunidad vivió la llegada del petróleo como un anuncio de transformación profunda: se prometieron vías, servicios, infraestructura, empleo y bienestar. Muchos recuerdan que «la plata llegó como nunca», que

«se veía venir el progreso» y que «todos pensaron que la bonanza iba a cambiar la vida en las veredas». Ese horizonte de expectativa fue alimentado no solo por el volumen de regalías que entró al departamento, sino por el discurso oficial que presentaba al petróleo como motor de desarrollo regional.

Frente a esa promesa, la realidad posterior aparece en las entrevistas de Yopal como un contraste abrupto que marca la experiencia colectiva del territorio. Las voces insisten en que «las regalías no se ven», que «la ciudad creció sin orden», que «nadie cuidó el territorio», que «el caño cambió para mal» y que «la plata pasó, pero no quedó nada», enunciados que sintetizan una desilusión extendida y profundamente arraigada. Estas frases no solo registran el incumplimiento de obras o la ausencia de planificación urbana, sino que narran la sensación de haber atravesado un boom que prometió transformar la vida social y que, en cambio, dejó un territorio más frágil. La comunidad describe un escenario donde las instituciones no se fortalecieron, los servicios públicos no mejoraron, los barrios crecieron sin regulación y los ecosistemas que sostenían la vida rural comenzaron a deteriorarse justo cuando el flujo de dinero era mayor. La privación relativa se convierte así en la medida de esa fractura: un abismo entre la abundancia anunciada y la precariedad vivida. No es solo

que el desarrollo no llegó, es que la promesa misma se volvió un recordatorio del vacío que quedó después. En lugar de un territorio más próspero, emergió un territorio más vulnerable, más dependiente, más expuesto al deterioro ecológico y más consciente de que el progreso petrolero solo existió como discurso, nunca como realidad tangible para la comunidad.

A diferencia de Barrancabermeja, donde la comparación se hace con un pasado sólido, en Yopal la comparación es con un futuro que nunca llegó. Ese futuro imaginado funcionó como marco emocional y político que hoy se vive como pérdida. Cuando un entrevistado señala que «la tierra ya no produce igual» o que «la vereda quedó sola», está nombrando que el boom no solo no cumplió su promesa, sino que deterioró la base material y cultural que sostenía la vida rural. La privación no es solo económica, es territorial y ecológica. Se perdió agua, se perdió tierra, se perdió comunidad.

Por eso, en Yopal, sentir que se perdió más de lo que se ganó no se expresa como nostalgia por un pasado mejor, sino como frustración por una promesa incumplida. La comunidad compara lo que se dijo que vendría con lo que realmente quedó, y en esa comparación encuentra una injusticia estructural que alimenta la conflictividad. El boom

no dejó desarrollo, dejó abandono. Y es justamente esa distancia entre expectativa y realidad la que convierte la privación relativa en fuerza emocional y en motor de resistencia territorial.

Los discursos de Barrancabermeja y Yopal revelan signos claros de privación que permiten comprender cómo las comunidades traducen en lenguaje las pérdidas materiales, territoriales y simbólicas asociadas al petróleo. En Barrancabermeja el signo dominante es la pérdida del proyecto laboral. Los entrevistados afirman que «a la gente de aquí la dejaron por fuera», que «ya no entran los jóvenes» y que «la ciudad quedó sin futuro», evidenciando que la vida obrera (antes fundamento de dignidad y movilidad social) se deshizo con la tercerización, la privatización y la erosión del carácter público del trabajo petrolero. La privación no es solo salarial: es pérdida de un horizonte vital que organizaba a la ciudad.

En Yopal, el signo más persistente es la pérdida del agua. Las voces recuerdan que «el caño cambió», que «el agua ya no sirve para lo de antes», que «los pozos contaminaron las quebradas», mostrando que el deterioro ambiental no es una abstracción técnica, sino un golpe directo al corazón de la vida campesina. El agua no es un recurso: es continuidad de la vereda, del cultivo, del ganado, de la cultura llanera. Su

pérdida implica la pérdida de la vida tal como se conocía. Por eso aparece como uno de los marcadores discursivos más fuertes de privación en el territorio.

A este deterioro ambiental se suma la pérdida de la cultura campesina, un elemento que aparece de forma reiterada en las entrevistas de Yopal y que revela un daño más profundo que el estrictamente ecológico. Cuando los habitantes afirman que el territorio se llenó de desconocidos, que la vereda quedó sola o que la tierra ya no produce igual, no están describiendo únicamente transformaciones demográficas o productivas. Están nombrando la erosión de un modo de vida que por generaciones sostuvo el equilibrio social y ecológico del llano. La cultura campesina, ligada al trabajo paciente con la tierra, a la organización veredal, a las faenas compartidas y a una relación íntima con el agua y los ciclos del paisaje, aparece en los discursos como un tejido desgarrado por la expansión petrolera. Las voces evocan una vereda que antes estaba habitada, un campo que antes respondía al cultivo y una comunidad que antes se conocía en sus vínculos cotidianos. Esa forma de vida, que integraba economía, territorio y afectos, se vio interrumpida por la llegada masiva de nuevos pobladores, por el desorden urbano que siguió al boom y por la pérdida de la fertilidad de la tierra. La cultura campesina se define

como memoria herida, como tradición debilitada y como base ética del territorio que fue vulnerada por un modelo extractivo que transformó demasiado rápido aquello que daba coherencia y continuidad a la vida en el llano.

La convergencia entre ambos territorios se hace visible precisamente en estos signos discursivos de privación. En uno se pierde el proyecto laboral; en el otro, el agua y la cultura campesina. Pero en ambos casos la comunidad nombra pérdidas que afectan su forma de vida más profunda. Estas expresiones no funcionan como simples diagnósticos: son marcadores emocionales y políticos que revelan la brecha entre lo que se tenía o se prometió y lo que efectivamente quedó. La privación se convierte así en experiencia compartida, expresada desde registros distintos pero unidos por una misma gramática de despojo.

En la comparación entre territorios se vuelve evidente que estos signos de pérdida no funcionan simplemente como descripciones aisladas, sino como marcas profundas que ordenan la experiencia del extractivismo. En Barrancabermeja la pérdida del proyecto laboral no se limita a un cambio en las formas de contratación. Es la ruptura de un pacto histórico que durante décadas permitió que la refinería sostuviera movilidad social, estabilidad familiar y

dignidad colectiva. Cuando los entrevistados afirman en diferentes momentos que la gente de aquí la dejaron por fuera o que la ciudad quedó sin futuro, lo que está en juego no es únicamente un empleo. Es la sensación de que una forma de vida entera se volvió frágil. En Yopal, por su parte, las frases sobre el agua que cambió, las veredas que quedaron solas o la tierra que ya no produce igual revelan que la comunidad interpreta el boom petrolero como una agresión al tejido ecológico y cultural que sostenía la vida campesina. Allí la pérdida opera sobre el territorio, sobre el equilibrio entre familias, cultivos, caños y prácticas rurales, y no sobre un pasado industrial como en Barrancabermeja.

En ambos casos los discursos muestran que la privación surge cuando lo que se consideraba fundamento de la vida colectiva se resquebraja. Lo perdido no es solo un recurso económico o un indicador técnico. Lo perdido es aquello que daba continuidad, identidad y sentido. Por eso las frases que aparecen en las entrevistas están cargadas de una emotividad densa. No hay neutralidad posible cuando se dice que las regalías no se ven o que ya no entran los jóvenes o que el caño cambió para mal. Cada una de estas expresiones condensa un dolor social que se vuelve memoria compartida y diagnóstico político. Es desde ese dolor que se construye la interpre-

tación del conflicto, y es desde esa interpretación que surge la resistencia.

Cuando se observa este patrón compartido, queda claro que la privación relativa es el mecanismo que conecta la desigualdad estructural con la reacción comunitaria. Es la distancia entre lo que se tenía o se prometió y lo que realmente quedó lo que enciende el malestar, lo que motiva la acción y lo que articula las narrativas de cada territorio. A través de estas voces se entiende que la conflictividad no surge simplemente por falta de beneficios. Surge porque se produjo una ruptura profunda entre expectativas legítimas y resultados injustos. Y es precisamente ahí donde se ubica la convergencia más potente entre Barrancabermeja y Yopal. La percepción de injusticia es el motor emocional que moviliza a ambas comunidades y que explica por qué, aunque sus repertorios sean distintos, sus discursos reclaman con igual fuerza que el petróleo no cumplió su promesa y que la vida, en cada territorio, quedó marcada por una pérdida que nunca debió ocurrir.

### **Inseguridad ontológica: la vida en riesgo**

Si la privación relativa nombra la experiencia de pérdida, la inseguridad ontológica nombra el efecto más profundo de esa pérdida. En ambos territorios el

petróleo no solo deterioró condiciones materiales o erosionó formas de vida, sino que alteró el sentido básico de estabilidad sobre el cual las comunidades organizaban su existencia cotidiana. La inseguridad ontológica aparece cuando lo que antes era firme (el trabajo en Barrancabermeja, el territorio en Yopal) se vuelve incierto, frágil o amenazado, y cuando la comunidad deja de confiar en la continuidad de aquello que sostenía su identidad colectiva.

En Barrancabermeja esta inseguridad se expresa como temor al futuro laboral, como conciencia de que el legado obrero que definió a la ciudad durante décadas está siendo desmantelado y como inquietud frente a la amenaza que pesa sobre lo público. En Yopal adopta una forma distinta pero equivalente, pues surge del miedo a perder el territorio, el agua y la vida campesina que daban coherencia al llano. Las entrevistas de ambos lugares contienen señales claras de esta inseguridad profunda, desde expresiones como «esto ya no es lo que era» hasta afirmaciones como «la vereda sabe lo que pierde», frases que evidencian que el petróleo dejó de percibirse como oportunidad y comenzó a experimentarse como fuerza que pone en riesgo la continuidad misma de la vida.

A partir de estas voces se hace evidente una convergencia esencial. Aunque las

pérdidas sean distintas y los repertorios de resistencia no coincidan, tanto en Barrancabermeja como en Yopal el petróleo aparece como agente que amenaza la estabilidad cotidiana y la identidad colectiva. En este punto los dos territorios se encuentran, no en lo que reclaman, sino en lo que temen: la desaparición de aquello que los hacía ser quienes eran.

En Barrancabermeja la inseguridad ontológica se instala cuando el futuro laboral, antes sólido y previsible, comienza a desvanecerse. Las entrevistas revelan un temor persistente a que el trabajo digno desaparezca, a que los jóvenes ya no tengan entrada, a que lo público se erosione hasta perder su sentido histórico. Cuando los habitantes afirman que «esto ya no es lo que era» o que «la ciudad quedó sin futuro», no están hablando únicamente de empleos perdidos, sino de la disolución del legado obrero que sostuvo la identidad colectiva por generaciones. La refinería ya no garantiza estabilidad, el sindicato ya no tiene la fuerza de antes y la empresa pública ya no es sinónimo de protección. La inseguridad se vuelve emocional y política. Se teme que la privatización culminada o parcial termine por borrar la memoria obrera de la ciudad y, con ella, la posibilidad de imaginar un futuro compartido.

En Yopal la inseguridad ontológica adopta un rostro distinto, pero su inten-

sidad es equivalente. Aquí el miedo no gira en torno al trabajo industrial, sino a la continuidad del territorio y de la vida campesina que lo configura. Los entrevistados afirman que «el caño cambió», que «la vereda sabe lo que pierde», que «la tierra ya no produce igual», expresiones que condensan la percepción de que el equilibrio ecológico y social del llano se encuentra en riesgo. La llegada del boom petrolero no solo alteró el aire, el agua y el suelo, sino que fracturó la trama cultural que sostenía la vida veredal. La inseguridad no surge del mercado laboral, sino del deterioro de aquello que hacía posible la existencia cotidiana: el agua para el cultivo, la tierra para el sustento, la cohesión comunitaria como forma de vida. Aquí lo amenazado no es el empleo, sino el territorio mismo como hogar ecológico y cultural.

En ambos territorios, aunque los objetos del miedo sean distintos, la estructura emocional es la misma. En Barrancabermeja se teme perder el mundo del trabajo que daba identidad, en Yopal se teme perder el mundo del territorio que daba continuidad. En una ciudad la amenaza es la desfiguración de lo público. En el llano la amenaza es la desfiguración de la vida campesina. En ambos casos el petróleo deja de ser promesa y se convierte en fuerza que pone en riesgo aquello que daba estabilidad a la comunidad. Esta convergen-

cia revela que la inseguridad ontológica no surge de un dato técnico, sino de una fractura existencial: la posibilidad real de que el territorio ya no sostenga la vida tal como se conocía.

Las entrevistas de ambos territorios dejan ver una constelación de expresiones que funcionan como indicadores finos de la inseguridad ontológica que atraviesa a las comunidades. Son frases breves, dichas casi en tono cotidiano, pero cargadas de una densidad emocional que revela que el petróleo no solo modificó economías o infraestructuras, sino que alteró la continuidad misma de la vida. En Barrancabermeja, cuando un obrero señala que «esto ya no es lo que era», no está enunciando simplemente una queja sobre las transformaciones laborales. Está nombrando la desaparición de un orden social que había sido estable por décadas, el desvanecimiento de la experiencia compartida de seguridad pública, de empleo digno y de lucha organizada que definía la identidad colectiva de la ciudad. Esa frase resume un malestar que se hace evidente en múltiples entrevistas, donde se describe la pérdida de la fuerza sindical, la entrada masiva de contratistas, la incertidumbre que sienten los jóvenes frente al futuro y la sensación de que lo público se desfigura en medio de la privatización. Es un enunciado que guarda memoria del pasado y anuncia un temor hacia el fu-

turo, lo que permite ver que la inseguridad ontológica en Barrancabermeja no se explica por la precariedad actual, sino por el colapso de una forma de vida que la comunidad consideraba estable, digna y duradera.

En Yopal ocurre algo similar, aunque la amenaza no se dirige al mundo del trabajo, sino al territorio y a la cultura campesina que lo sostiene. Cuando un habitante afirma que «la vereda sabe lo que pierde», está nombrando un proceso profundo de deterioro ambiental, demográfico y cultural que el boom petrolero aceleró sin control. Esa pérdida no es abstracta. Se expresa en el agua que ya no se puede usar, en la tierra que ya no produce como antes, en las faenas campesinas que dejaron de realizarse, en las veredas que se vaciaron mientras la ciudad crecía de manera desordenada. Esta frase sintetiza la percepción de que la vida rural está siendo expulsada por un modelo extractivo que no solo transforma el paisaje, sino que deshace la relación entre comunidad, territorio y naturaleza. Así como en Barrancabermeja se teme la desaparición del legado obrero, en Yopal se teme la desaparición del tejido veredal. Ambas expresiones revelan que la comunidad interpreta la expansión petrolera como fuerza que amenaza la estabilidad cotidiana y la identidad colectiva. En su contraste y en su paralelismo, estas voces exhiben una convergencia profunda: el petróleo

se percibe como un agente de desestabilización que compromete el sentido mismo de permanencia. Allí reside la inquietud compartida. No temen solo por salarios o por obras. Temen por la continuidad de la vida tal como la conocían, y ese miedo se convierte en el signo más nítido de la inseguridad ontológica que atraviesa ambos territorios.

### **Repertorios de resistencia como respuesta a la inseguridad**

La inseguridad ontológica no se queda suspendida en el miedo ni en la sensación de pérdida. En ambos territorios se transforma en acción. Allí donde el petróleo desordena, la comunidad recompone. Allí donde la estabilidad desaparece, emergen repertorios de resistencia que buscan restaurar un sentido de continuidad frente al quiebre extractivo. Esta resistencia no adopta una forma única, porque cada territorio activa los recursos históricos, culturales y políticos que tiene a la mano. En Barrancabermeja surge desde una tradición obrera que convirtió la organización y la confrontación sindical en formas de defensa de la vida laboral y de lo público. En Yopal emerge desde la defensa del agua, de la vereda y de la cultura campesina que sostiene la vida rural. Aunque las gramáticas de resistencia sean distintas, ambas responden al mismo patrón de desigualdad y desposesión. En esa convergencia, lo que aparece no

es solamente un conjunto de acciones dispersas, sino un esfuerzo colectivo por reconstruir sentido ante el desorden extractivo que amenaza la vida en cada uno de los territorios.

En Barrancabermeja la resistencia se articula desde una tradición histórica que convirtió la organización obrera en núcleo de identidad y en herramienta de defensa frente a los embates del modelo extractivo. Las entrevistas lo confirman una y otra vez cuando los participantes afirman que «la ciudad se levantó peleando», que «si no nos organizábamos, nos pasaban por encima» o que «el sindicato fue el que nos enseñó a no agachar la cabeza». Estas enunciaciones no describen simplemente una estrategia, sino una cultura política sedimentada por décadas de confrontación con el Estado, con las directivas de la empresa y con la violencia armada. La resistencia en Barrancabermeja es estructural porque se sostiene en repertorios colectivos consolidados que incluyen la huelga, la movilización y la disputa pública de la legitimidad. Esto se evidencia en frases como «a nosotros nos tocó defender la refinería» o «si no protestábamos, perdíamos todo», donde la acción colectiva se entiende como deber ético y como única manera de enfrentar la precarización, la privatización y la estigmatización contra el movimiento obrero. Es resistencia organizada porque activa las estructuras

formales como la USO, pero también redes comunitarias que se movilizan cuando sienten amenazado lo público. Es resistencia política porque interpela directamente las decisiones del Estado y las empresas. Y es resistencia confrontativa porque no se limita a la denuncia, sino que busca transformar, desde la acción, las condiciones que producen desigualdad.

En Yopal, en cambio, la resistencia adopta una forma distinta porque responde a una configuración histórica donde la identidad campesina y la cultura llanera son el núcleo del sentido territorial. Las voces del territorio lo expresan claramente cuando afirman que «el agua es lo que defendemos», que «la vereda siempre pelea por su espacio» o que «si no cuidamos la tierra, nadie la cuida». Estas frases condensan un ethos protector que sitúa la vida rural, el equilibrio ecológico y la continuidad de la comunidad como bienes esenciales frente al avance del extractivismo. Aquí la resistencia no emerge de estructuras sindicales ni de repertorios confrontativos consolidados, sino de prácticas comunitarias, ambientales y territoriales que buscan preservar lo que está en riesgo. Es una resistencia que se mueve desde la vereda, desde la defensa del caño, desde la movilización por el agua o desde la negativa a permitir que el territorio sea reorganizado sin su consentimiento. En las entrevistas

se escucha que «la gente se organiza cuando ve que le dañan el agua» o que «aquí nos toca defender la vereda, porque el Estado no aparece», mostrando una resistencia que no solo se sostiene en la defensa ecológica, sino también en la reconstrucción comunitaria frente al abandono estatal y al deterioro ambiental.

Ambos territorios, pese a sus diferencias, muestran que la resistencia no es reacción espontánea, sino respuesta estructural a un modelo de desarrollo que amenaza su continuidad vital. Mientras Barrancabermeja resiste desde la fuerza organizada que protege derechos laborales y lo público, Yopal resiste desde la defensa de la vida campesina y del territorio como espacio de identidad. En un caso la acción es confrontativa, en el otro, protectora. En ambos, sin embargo, la resistencia se convierte en la forma más clara de afirmar que la vida colectiva no se deja arrasar por el desorden extractivo.

Aunque las formas de resistencia en Barrancabermeja y Yopal sean profundamente distintas, ambas responden a un mismo patrón estructural de desigualdad que atraviesa el modelo extractivo. En los dos territorios las entrevistas muestran que el petróleo llegó prometiendo bienestar, pero terminó produciendo exclusiones, rupturas y amenazas a la continuidad de la vida

colectiva. La diferencia radica en cómo cada comunidad aprendió a responder. En Barrancabermeja la desigualdad se vive como pérdida de derechos, como erosión de lo público y como precarización de un legado obrero que antes garantizaba dignidad laboral. Por eso la resistencia adopta un lenguaje de confrontación política y de organización colectiva. En Yopal, en cambio, la desigualdad se experimenta como deterioro ambiental, como corrupción de las regalías y como abandono estatal, lo que llevó a una resistencia centrada en la protección del territorio y de la cultura campesina. Sin embargo, las voces de ambos lugares coinciden en que el extractivismo ha beneficiado a unos pocos, ha debilitado la vida comunitaria y ha puesto en riesgo aquello que cada territorio considera esencial. De esta manera, lo que cambia no es la estructura que los afecta, sino la gramática con la que la comunidad la interpreta y la enfrenta. Barrancabermeja levanta la voz desde la lucha organizada; Yopal la levanta desde la defensa de la vida rural. Ambas resisten al mismo patrón de desigualdad, aunque lo digan con palabras distintas y lo vivan desde historias distintas.

En ambos territorios, la resistencia aparece como una forma de recomponer el sentido frente al desorden extractivo que desestabilizó la vida cotidiana, los horizontes laborales y los vínculos

comunitarios. Las entrevistas muestran que ni Barrancabermeja ni Yopal aceptaron de manera pasiva la ruptura generada por el petróleo. En Barrancabermeja la organización sindical, las memorias de lucha y la defensa de lo público operan como mecanismos para restaurar coherencia en un mundo laboral fracturado. En Yopal la defensa del agua, de la vereda y de la cultura campesina cumple esa misma función de ordenamiento simbólico frente al avance de un modelo que la comunidad percibe como ajeno y desarraigado. Aunque las expresiones sean distintas, en ambos lugares la resistencia reconstruye marcos de interpretación, reafirma identidades colectivas y reconstituye la posibilidad de seguir habitando el territorio con sentido. Allí donde el extractivismo produjo quiebre, vulnerabilidad y pérdida, la comunidad respondió con repertorios que buscan restablecer continuidad, dignidad y pertenencia. En esa convergencia, la resistencia deja de ser solo acción política o ambiental y se convierte en un ejercicio profundo de recomposición del sentido frente a un orden petrolero que alteró la vida y desacomodó el futuro.

Así, la comparación sistemática entre Barrancabermeja y Yopal permite unificar la hipótesis central de este estudio en una secuencia causal que emerge con nitidez en los discursos: desigualdad produce privación, la privación

alimenta inseguridad y la inseguridad desemboca en resistencia. Esta cadena no es una construcción abstracta, sino un patrón empírico que aparece reiteradamente en las voces recogidas. La desigualdad se expresa en Barrancabermeja mediante la precarización laboral, la privatización y la pérdida de derechos que antes sostenían la dignidad obrera, mientras en Yopal se manifiesta como corrupción de regalías, deterioro ambiental y abandono estatal. Esa desigualdad inicial deriva en una privación sentida, donde los entrevistados afirman que la ciudad quedó sin futuro o que las regalías no se ven, señalando una brecha entre lo prometido y lo vivido que deja a ambas comunidades con la sensación de haber perdido más de lo que ganaron.

A partir de esa privación emerge una inseguridad profunda que afecta no solo las condiciones materiales de la vida, sino la estabilidad simbólica que sostenía a cada territorio. En Barrancabermeja esa inseguridad se expresa en el temor por la continuidad del trabajo digno, por el desmonte de lo público y por la ruptura del legado obrero. En Yopal se traduce en miedo por el agua, por la vida campesina, por la vereda que sabe lo que pierde y por el territorio que ya no es lo que era. En ambas geografías los discursos revelan que el petróleo no solo transformó la economía, sino que alteró las certezas básicas

sobre el futuro, generando una amenaza existencial que las comunidades interpretan como riesgo para su identidad colectiva.

Es justamente desde esa inseguridad donde surge el último eslabón de la cadena: la resistencia. En Barrancabermeja toma la forma de lucha organizada, sindical y política, anclada en décadas de confrontación por la defensa de lo público. En Yopal aparece como resistencia territorial, ambiental y comunitaria, centrada en proteger el agua, la vereda y la continuidad de la vida rural. Aunque sus formas sean distintas, ambas comunidades activan repertorios de defensa que buscan recomponer el sentido alterado por el desorden extractivo. La resistencia no es un gesto aislado, sino la respuesta articulada a un proceso de desigualdad que se volvió privación, y a una privación que se convirtió en inseguridad ontológica.

De esta manera, la secuencia desigualdad-privación-inseguridad-resistencia no solo resume la lógica profunda del conflicto petrolero en los dos territorios. También demuestra que, pese a sus diferencias históricas y culturales, Barrancabermeja y Yopal están atravesadas por el mismo patrón estructural del extractivismo, cuyas huellas son verificables en los discursos que sus habitantes han construido para nombrar, comprender y enfrentar sus transfor-

maciones. Esta cadena causal es, por ende, tanto una hipótesis teórica como un hallazgo empírico. Y es en su convergencia donde se revela la matriz común del conflicto petrolero en Colombia.

En conjunto, el análisis comparado demuestra que, más allá de sus diferencias históricas, productivas y culturales, Barrancabermeja y Yopal comparten una misma arquitectura profunda del conflicto petrolero. Las voces de ambos territorios revelan que la desigualdad es el punto de partida, la privación relativa el sentimiento que organiza el malestar, la inseguridad ontológica la grieta que amenaza la continuidad de la vida y la resistencia el mecanismo mediante el cual la comunidad intenta recomponer sentido. Esta secuencia no opera como un esquema abstracto, sino como experiencia vivida, narrada y repetida en cada entrevista. Allí donde Barrancabermeja defiende el trabajo y lo público, y donde Yopal protege el agua y la vereda, late el mismo diagnóstico estructural frente al extractivismo: la riqueza generada no se distribuye, los costos recaen sobre quienes menos poder tienen y la vida comunitaria queda sometida a un orden que impone vulnerabilidad y desarraigo. Por eso este subcapítulo no concluye con una diferencia, sino con una convergencia. Ambas geografías, atravesadas por trayectorias distintas, señalan el mismo núcleo: el petróleo se convirtió en fuer-

za que altera, fragmenta y amenaza, y la resistencia comunitaria surgió como respuesta para preservar dignidad, territorio y futuro. Aquí se cierra el análisis y se abre la comprensión de que, en Colombia, los territorios petroleros no solo producen energía. Producen discursos que revelan las líneas profundas de la desigualdad y las formas colectivas de sostener la vida frente a ella.



# Conclusiones generales

Las conclusiones generales integran los hallazgos centrales del análisis comparativo entre Barrancabermeja y Yopal, mostrando que, pese a sus historias extractivas divergentes, ambas geografías revelan una estructura profunda común que confirma la hipótesis que guio esta investigación: la conflictividad petrolera se organiza en una secuencia donde la desigualdad produce privación, la privación alimenta inseguridad ontológica y la inseguridad impulsa repertorios de resistencia que buscan recomponer el sentido alterado por el extractivismo. Esta cadena, que en la literatura sobre extractivismos latinoamericanos se reconoce como el corazón de los conflictos territorializados (Arellano-Yanguas, 2017; Trujillo-Ospina et al., 2019), aparece con claridad en las voces recogidas en campo. En Barrancabermeja, testimonios como «la ciudad quedó sin futuro, modernizaron para unos pocos» o «esto ya no es lo que era» evidencian que la desigualdad se vive como precarización, privatización y ruptura del carácter público de la industria, un fenómeno ampliamente documentado en análisis históricos del Magdalena Medio (Becerra, 2009; Serrano, 2013). En Yopal, expresiones como «las regalías no se ven», «nadie cuidó el territorio», «el caño cambió para mal» o «la vereda sabe lo que pierde» dan cuenta de un repertorio de privaciones asociado al deterioro ambiental, al mal manejo de las regalías y a la ausencia estatal,

tal como lo han descrito investigaciones sobre Casanare y los impactos del boom petrolero (Chaves, 2014; Duarte, 2016; Haddad et al., 2022).

La articulación entre desigualdad, privación e inseguridad ontológica no solo se observa como secuencia conceptual, sino como experiencia vivida, que las comunidades expresan usando metáforas de pérdida, miedo y desorden. En este sentido, la lectura territorial dialoga con propuestas teóricas que reconocen que los conflictos socioambientales no se reducen a disputas materiales, sino a rupturas en los marcos que sostienen la vida cotidiana, la identidad y la continuidad simbólica de las comunidades (De Sousa, 2005; Sánchez, 2022, 2024). Testimonios como «sin agua no hay vida, ya no sabemos qué va a pasar con nosotros» o «a los líderes los callaron para que uno no hablara» muestran cómo el extractivismo no solo transforma economías y ecosistemas, sino que desestabiliza la seguridad ontológica de los territorios, produciendo incertidumbre, fragmentación y miedo, tal como lo advierten estudios críticos sobre despojo, violencia y reorganización extractiva (Sandoval et al., 2017; Salman et al., 2018).

Estas conclusiones también permiten plantear aportes concretos al debate nacional sobre extractivismo y territorio. Lo que emerge de los discursos

no es una crítica abstracta a la presencia petrolera, sino la evidencia de que las promesas de modernización han derivado en desigualdad acumulada, degradación ambiental y debilitamiento institucional, coincidencia que la literatura sobre enclaves extractivos ha descrito como un patrón sistemático en Colombia (Perry y Olivera, 2009; Ramírez, 2022; Sáenz Pacheco y Vanhellemont, 2024). Tanto en Barrancabermeja como en Yopal, los habitantes nombran un desequilibrio profundo entre quienes capturan los beneficios del petróleo y quienes cargan con sus impactos, señalando un fenómeno que Puerto Sanabria describe como empobrecimiento por extractivismo y que diferentes autores asocian a procesos de privatización, informalidad y violencia estructural (Gerstenberg y Villegas, 2019; Ripoll, 2016).

Este capítulo final también aporta elementos decisivos para las escuelas regionales de diálogo del IEMP. Las formas de resistencia narradas por los entrevistados (la organización sindical en Barrancabermeja, la defensa del agua y la vereda en Yopal) evidencian que los territorios no son receptores pasivos del desorden petrolero. Son productores de contradiscursos, herramientas comunitarias y repertorios de acción que permiten reconstruir sentido, proteger la vida y disputar poder. Esta capacidad de los territorios para reinterpretar crí-

ticamente el extractivismo conecta de manera directa con tradiciones de investigación-acción y pedagogías populares latinoamericanas que reconocen a las comunidades como sujetos epistémicos y políticos (Fals, 2009, 2025; Freire, 1970, 1973; Dussel, 2013). De allí que las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza puedan apoyarse en estas narrativas para fortalecer mediaciones territoriales, formular metodologías de escucha y construir capacidades locales para transformar conflictos.

Las conclusiones ofrecen recomendaciones metodológicas y de política pública. En el plano metodológico, el estudio confirma la potencia del análisis crítico del discurso para comprender la conflictividad territorial desde las voces y marcos cognitivos de quienes la viven, y sugiere la necesidad de incorporar análisis comparativos y enfoques sociocognitivos en investigaciones futuras. En el plano de la política pública, los hallazgos indican que cualquier estrategia de gobernanza territorial deberá reconocer la desigualdad como punto de partida, la privación relativa como fuente de malestar, la inseguridad ontológica como fractura profunda y la resistencia como respuesta legítima y necesaria. Sin asumir este marco, las respuestas institucionales seguirán reproduciendo el mismo orden que los territorios denuncian. Aquí, por tanto, no se cierra únicamente un análisis. Se

abre un llamado a repensar el lugar del extractivismo en Colombia desde la voz de quienes han vivido sus efectos más intensos y duraderos.

La síntesis de aprendizajes revela que, más allá de la distancia geográfica, histórica y productiva entre Barrancabermeja y Yopal, ambos territorios comparten una estructura profunda que explica la persistencia y la intensidad de sus conflictos con la industria petrolera. El primer aprendizaje central es que la desigualdad no es un efecto secundario del extractivismo, sino su condición estructurante. Las entrevistas muestran que en Barrancabermeja esta desigualdad se vive como pérdida de derechos laborales, desmonte de lo público y precarización del trabajo, mientras en Yopal se expresa como corrupción de las regalías, deterioro acelerado del agua y abandono estatal. Esta coincidencia confirma lo señalado por investigaciones sobre enclaves extractivos en Colombia y los Andes, donde la riqueza generada se concentra en pocos actores y los costos recaen en las comunidades (Arellano-Yanguas, 2017; Perry y Olivera, 2009).

El segundo aprendizaje es que la desigualdad da paso a la privación relativa, un sentimiento que aparece de forma reiterada en los discursos. Cuando en Barrancabermeja se afirma que «la ciudad quedó sin futuro» o «esto ya no

es lo que era», y cuando en Yopal se sostiene que las regalías «no se ven» o «la vereda sabe lo que pierde», ambas frases funcionan como diagnósticos locales de un modelo que prometió modernización, pero produjo pérdida, abandono y ruptura del equilibrio territorial. Este hallazgo dialoga con análisis socioterritoriales que muestran que el extractivismo altera expectativas, fragmenta comunidades y profundiza el sentido de agravio (Duarte, 2016; Sandoval et al., 2017).

El tercer aprendizaje es que esa privación se transforma en inseguridad ontológica, es decir, en la sensación de que la vida futura se vuelve incierta o amenazada. En Barrancabermeja, la inseguridad emerge del temor por la desaparición del trabajo digno y de lo público; en Yopal, del miedo a quedarse sin agua, sin vereda y sin continuidad campesina. Esta convergencia confirma que los conflictos no son solo materiales, sino existenciales, tal como lo han señalado las teorías críticas sobre territorio, modernidad y vida comunitaria (De Sousa, 2005; Sánchez, 2022).

El cuarto aprendizaje es que la inseguridad no paraliza, sino que activa repertorios de resistencia. En Barrancabermeja esa resistencia se construye desde la organización sindical, la memoria obrera y la confrontación política; en Yopal se articula desde la defensa del agua,

del territorio y de la cultura campesina. Aunque sus gramáticas sean distintas, ambas comunidades responden al mismo patrón de desigualdad y desorden extractivo, en línea con lo que la literatura denomina resistencias socioterritoriales o contradiscursos comunitarios (Navarro-Martínez, 2020; Trujillo-Ospina et al., 2019).

De este recorrido emerge un quinto aprendizaje decisivo. Los territorios no son meros escenarios del extractivismo. Son productores de conocimiento, de interpretación y de acción política. Las entrevistas no solo describen impactos, sino que elaboran lecturas críticas que explican por qué el petróleo no generó bienestar, cómo se reorganizó el poder local y qué implica para la vida colectiva sostener el territorio frente a fuerzas externas. Este hallazgo reafirma la importancia de metodologías de escucha profunda, investigación-acción y análisis discursivo para comprender las formas en que los pueblos interpretan y enfrentan los modelos de desarrollo que los atraviesan (Fals, 2009, 2025; Freire, 1970).

La síntesis de aprendizajes muestra que la conflictividad petrolera colombiana no se explica por factores aislados, sino por una matriz causal compartida. Desigualdad que deriva en privación. Privación que alimenta inseguridad. Inseguridad que origina resistencia. Y re-

sistencia que reconstruye sentido. Este es el marco desde el cual ambos territorios hablan, actúan y disputan el orden extractivo que los ha transformado.

Los hallazgos de esta investigación ofrecen aportes directos al debate nacional sobre extractivismo y territorio, un debate que en Colombia suele fragmentarse entre discusiones técnicas sobre regalías, diagnósticos ambientales aislados o narrativas de «desarrollo» que no incorporan la experiencia de las comunidades. Las entrevistas de Barrancabermeja y Yopal muestran que el extractivismo no es solo un régimen económico. Es una forma de ordenar el territorio, redistribuir el poder y producir desigualdades persistentes. En ambos casos se confirma lo que múltiples estudios han advertido para América Latina: que la extracción de recursos opera a través de mecanismos estructurales que concentran beneficios, desplazan costos y debilitan las instituciones locales, generando patrones recurrentes de conflicto y despojo (Arellano-Yanguas, 2017; Sandoval et al., 2017; Salman et al., 2018).

Este estudio aporta al debate nacional al mostrar que la desigualdad generada por el petróleo no es homogénea, pero sí estructural. En Barrancabermeja adopta la forma de precarización laboral, privatización y desmantelamiento de lo público. En Yopal aparece

como corrupción de regalías, deterioro ambiental y expansión desordenada del suelo. Sin embargo, en los dos territorios la comunidad expresa el mismo diagnóstico. Cuando en Barrancabermeja se dice «la ciudad quedó sin futuro» y en Yopal se afirma «la plata pasó, pero no quedó nada», ambas frases revelan una lectura crítica compartida sobre el manejo institucional del sector energético. Lo que las voces señalan no es un problema puntual, sino el funcionamiento de un modelo que, como advierten Perry y Olivera (2009) y Haddad et al. (2022), reproduce desigualdades regionales y reduce la capacidad de los territorios para decidir sobre su futuro.

El estudio también aporta al debate nacional al demostrar que el extractivismo produce desórdenes socioterritoriales que exceden los marcos tradicionales de análisis económico. Tanto en Barrancabermeja como en Yopal, las transformaciones no se limitan a variaciones en el empleo, precios del crudo o niveles de inversión. Reconfiguran la seguridad ontológica de las comunidades, es decir, la estabilidad simbólica que sostiene su manera de vivir, trabajar y habitar el territorio. Cuando en Yopal se afirma «sin agua no hay vida» o cuando en Barrancabermeja se recuerda que «el sindicato nos enseñó a pelear por la dignidad», se está mostrando que el conflicto petrolero es al mismo tiempo ambiental, laboral, cultural, político y emocional. Este

enfoque multidimensional coincide con las lecturas que subrayan que los conflictos extractivos en Colombia deben entenderse como procesos donde se disputa la vida misma, su continuidad y su dignidad (Dussel, 2013; De Sousa, 2005).

Otro aporte significativo es la visibilización de los repertorios de resistencia territorial. El país discute el extractivismo desde el lenguaje de «compensaciones», «impactos mitigables» o «responsabilidad social empresarial», pero rara vez incorpora la racionalidad comunitaria que produce contradiscursos, pedagogías y formas de defensa del territorio. En Barrancabermeja, la resistencia sindical y la defensa de lo público se revelan como herramientas históricas para enfrentar procesos de privatización y violencia política, en línea con lo documentado por Becerra (2009) y Navarro-Martínez (2020). En Yopal, la resistencia ambiental y campesina se convierte en forma de preservar no solo recursos naturales, sino mundos de vida que el boom petrolero puso en riesgo, tal como han mostrado estudios socioterritoriales de Casanare (Chaves, 2014; Duarte, 2016). En ambos territorios la comunidad no se limita a protestar. Construye interpretaciones críticas, alternativas simbólicas y sentidos colectivos de protección que deberían ser reconocidos como conocimiento político.

Así, esta investigación aporta al debate nacional una lectura comparativa que permite ir más allá de los relatos aislados de conflicto. La comparación muestra que, aunque los territorios vivan formas distintas de extractivismo, comparten una misma matriz causal de desigualdad, privación e inseguridad, y activan repertorios de resistencia que responden a esa estructura. Esto permite dialogar con propuestas que plantean que la solución al conflicto extractivo no puede centrarse solo en la eficiencia institucional o en la inversión social, pues el problema no es únicamente distributivo. Es ontológico, político y territorial. En esa clave, los hallazgos invitan a replantear las políticas energéticas, las estrategias de participación ciudadana y los instrumentos de gobernanza local, asumiendo que los territorios no son «sectores afectados», sino sujetos colectivos que producen saber, que disputan poder y que defienden la continuidad de la vida frente a proyectos que no la consideran.

## Implicaciones para las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza

Las implicaciones para las escuelas regionales de diálogo social para la gober-

nanza (ERDG) derivan de una premisa que las entrevistas dejan con absoluta claridad y que esta investigación confirma: no es posible comprender el extractivismo sin escuchar a quienes lo habitan. Esta afirmación, que se repite en múltiples estudios sobre territorios intervenidos por industrias extractivas, adquiere aquí una dimensión concreta. Las voces de Barrancabermeja y Yopal muestran que la conflictividad petrolera no es únicamente económica ni técnica, sino vital, simbólica y política. La frase «esto ya no es lo que era» en Barrancabermeja y «la vereda sabe lo que pierde» en Yopal resume una experiencia territorial de pérdida y transformación que ningún documento institucional puede sustituir. De allí que las ERDG deban asumir que los territorios no son escenarios de intervención, sino sujetos epistémicos cuya lectura del conflicto constituye el punto de partida para cualquier proceso de diálogo, mediación o gobernanza.

La primera implicación es metodológica. Las ERDG necesitan incorporar dispositivos de escucha profunda, análisis narrativo y reconstrucción de experiencias comunitarias, en línea con enfoques de investigación-acción y pedagogías críticas latinoamericanas (Fals, 2009, 2025; Freire, 1970). Las entrevistas demuestran que los lenguajes del territorio son interpretaciones políticas, que cuando un trabajador afirma «nos dejaron sin

derechos» o «la ciudad quedó sin futuro», no está haciendo una descripción, sino formulando un diagnóstico crítico de la desigualdad estructural. Cuando un habitante de Yopal sostiene «sin agua no hay vida» o «nadie cuidó el territorio», está nombrando las fracturas ontológicas que ha generado el boom petrolero. Las ERDG deben convertir esas narrativas en insumo central para la comprensión de conflictos y la construcción de acuerdos.

La segunda implicación es pedagógica. Las ERDG no pueden limitarse a transmitir contenidos sobre normativa, participación o convivencia. Necesitan abrir espacios donde las comunidades puedan reconstruir colectivamente la memoria del extractivismo, identificar las cadenas causales que han configurado sus territorios y elaborar repertorios de resistencia que les permitan potenciar su autonomía. En Barrancabermeja, esto significa trabajar con la memoria obrera y la defensa de lo público; en Yopal, con la relación entre agua, verdad y cultura campesina. Las entrevistas muestran que esas memorias son herramientas políticas que sostienen la identidad comunitaria frente a la dislocación extractiva, lo que coincide con las tesis que consideran que la resistencia territorial es también una forma de pedagogía social (Navarro-Martínez, 2020; Duarte, 2016).

La tercera implicación es institucional. Las ERDG deben reconocer que la gobernanza extractiva ha producido desigualdades profundas que no se resolverán con mecanismos formales tradicionales. Las comunidades lo dicen con claridad: «las regalías no se ven», «modernizaron para unos pocos», «a los líderes los callaron», «la plata pasó y no quedó nada». Estas frases no son meras quejas, son evaluaciones institucionales. Revelan fallas de representación, clientelismos históricos, privatizaciones que debilitaron lo público y reordenamientos territoriales que vulneraron derechos. Las ERDG deben incorporar estas evaluaciones para fortalecer su papel como espacios donde se discuta el modelo de desarrollo, no solo los conflictos derivados de él.

La cuarta implicación es política. Las ERDG deben posicionarse como mediadoras entre territorios que resisten y un Estado que, en muchos casos, no ha logrado reconocer esa resistencia como ejercicio legítimo de ciudadanía. Tanto en Barrancabermeja como en Yopal, la resistencia no surge del rechazo irracional al desarrollo, sino de la necesidad de proteger la vida, el trabajo, el agua y la memoria. Este estudio demuestra, tal como lo sostienen diversos análisis críticos del extractivismo (Arellano-Yanguas, 2017; Sandoval et al., 2017), que los conflictos socioambientales no se resuelven con compensaciones, sino

con reconocimiento, redistribución y participación efectiva. Las ERDG pueden convertirse en espacios donde esa demanda no solo se escuche, sino que se traduzca en metodologías de negociación y acuerdos territoriales.

La quinta implicación es transformadora. Si las ERDG asumen que las voces territoriales no son anecdóticas, sino fundamentales, podrán construir procesos de mediación en los que comunidades, instituciones y empresas dialoguen desde marcos de comprensión compartidos. Eso implica reconocer que cuando un trabajador de Barrancabermeja dice: «la dignidad no se negocia», y cuando un campesino de Yopal afirma: «el agua es la vida del llano», ambos enuncian principios no negociables del orden territorial que cualquier intervención debe respetar. Las ERDG pueden convertirse en plataforma para que estos principios orienten procesos de planificación, resolución de conflictos y gobernanza territorial.

En síntesis, esta investigación demuestra que las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza solo pueden cumplir su propósito si se entienden como espacios donde el territorio se reconoce a sí mismo, donde las comunidades narran sus heridas y sus esperanzas, y donde el conocimiento producido por quienes habitan el conflicto se convierte en fundamento de

la acción pública. Barrancabermeja y Yopal enseñan que ningún proceso de transformación puede avanzar si ignora la forma en que la gente interpreta la desigualdad, la privación y la inseguridad que ha dejado el modelo extractivo. Las entrevistas muestran que los territorios no solo describen problemas; elaboran diagnósticos, explican causas, nombran mecanismos de dominación y proponen caminos de resistencia. En cada testimonio (en las voces que dicen «la ciudad quedó sin futuro», «el caño cambió para mal», «la dignidad no se negocia», «sin agua no hay vida») se revela una lectura profunda sobre lo que el extractivismo hace con la vida, con el trabajo y con el territorio.

El aporte central de este libro es situar esas voces en el corazón del debate nacional. No como elementos ilustrativos, sino como brújulas políticas. Las comunidades muestran que la conflictividad petrolera no surge de la oposición irracional al desarrollo, sino del choque entre promesas incumplidas y realidades deterioradas, entre expectativas de justicia y prácticas de desigualdad, entre horizontes de vida sostenibles y modelos extractivos que los erosionan. Entender esta matriz causal (desigualdad que produce privación, privación que alimenta inseguridad, inseguridad que impulsa resistencia) es indispensable para repensar el futuro energético del país y sus implicaciones territoriales.

El cierre de este libro plantea, entonces, una invitación y una advertencia. La invitación consiste en reconocer que la gobernanza del petróleo en Colombia requiere otro tipo de diálogo, uno que no reduzca el territorio a cifras, licencias o procedimientos administrativos, sino que lo lea desde su memoria, su cultura y su experiencia afectiva del conflicto. La advertencia señala que el futuro de la democracia territorial depende de la capacidad institucional para escuchar, interpretar y actuar junto a las comunidades, no por encima de ellas. Allí donde el Estado ha fallado, donde las empresas han intervenido sin comprender, donde las transformaciones económicas han sido impuestas sin mediación, las voces comunitarias ofrecen las claves para reconstruir confianza, redistribuir poder y garantizar la continuidad de la vida.

Por eso las escuelas regionales de diálogo para la gobernanza deben ser más que programas, deben convertirse en procesos sostenidos de reconocimiento mutuo y de construcción colectiva de sentido. Su tarea central no es enseñar técnicas de conciliación, sino abrir espacios donde los territorios puedan narrarse, interpretar sus desigualdades, comprender sus miedos y fortalecer sus repertorios de resistencia. Si logran hacerlo, contribuirán a un país capaz de imaginar un futuro donde la energía no sea sinónimo de despojo, donde el

desarrollo no implique vulnerabilidad y donde la democracia se construya desde la vida cotidiana de quienes habitan los territorios. Ese es el horizonte que las voces de Barrancabermeja y Yopal han trazado. Ese es el horizonte que este libro propone escuchar.

# Glosario analítico

## A. Conceptos estructurantes del extractivismo

### Desigualdad estructural

En el libro, la desigualdad estructural nombra el conjunto de condiciones históricas, económicas e institucionales que hacen que la riqueza petrolera se concentre en pocos actores mientras los costos se reparten sobre la mayoría de la población. En Barrancabermeja se expresa en la transición desde un empleo público estable hacia la tercerización y la pérdida de derechos laborales, mientras en Yopal se manifiesta en la llegada masiva de regalías que «no se ven» en bienestar ni en instituciones sólidas. No se trata de diferencias coyunturales, sino de un orden que organiza quién decide, quién gana y quién asume el deterioro del agua, del territorio y del trabajo.

### Privación relativa

La privación relativa es la experiencia de sentir que se perdió más de lo que se ganó, no solo en términos materiales, sino en horizontes de vida. En Barrancabermeja se construye comparando un pasado industrial fuerte con un presente precarizado, sintetizado en frases como «la ciudad quedó sin futu-

ro» o «esto ya no es lo que era». En Yopal surge del contraste entre la promesa del boom petrolero y la realidad del abandono, que se resume en expresiones como «las regalías no se ven» o «la plata pasó, pero no quedó nada». Esta noción da cuenta de la brecha entre expectativas legítimas y resultados injustos, y organiza el malestar que atraviesa a ambos territorios.

### Inseguridad ontológica

La inseguridad ontológica nombra el miedo profundo a que se rompa la continuidad de la vida tal como se conocía. No es solo incertidumbre económica, sino la sensación de que los fundamentos que sostenían el mundo cotidiano se vuelven frágiles. En Barrancabermeja se expresa en el temor a que desaparezcan el trabajo digno, el legado obrero y lo público como garantía de derechos. En Yopal se manifiesta en el miedo a perder el territorio, el agua y la cultura campesina que ordenaba la vida veredal, condensado en frases como «la vereda sabe lo que pierde». El libro muestra que el extractivismo no solo altera ingresos o infraestructuras, sino la confianza básica en que el futuro seguirá siendo habitable.

### Repertorios de resistencia

Los repertorios de resistencia son los conjuntos de prácticas, discursos y for-

mas de organización que las comunidades activan para defender la vida, el trabajo y el territorio frente al desorden extractivo. En Barrancabermeja estos repertorios se apoyan en la tradición sindical, las huelgas, la memoria obrera y la defensa de lo público como bienes irrenunciables. En Yopal se articulan alrededor de la defensa del agua, de la vereda y de la cultura campesina como núcleo de identidad territorial. Aunque sus gramáticas sean distintas, ambos repertorios responden a la misma matriz de desigualdad, privación e inseguridad, y muestran que la resistencia no es reacción aislada, sino forma de recomponer sentido y disputar poder.

### **Desorden extractivo**

El desorden extractivo es el conjunto de transformaciones aceleradas que el petróleo introduce en el territorio rompiendo equilibrios previos sin ofrecer nuevos órdenes justos y estables. Incluye el crecimiento urbano sin planificación, la presión sobre el suelo, el deterioro ambiental, la fragmentación comunitaria y la desinstitucionalización. En Barrancabermeja se observa en la reestructuración laboral, la privatización y la militarización del espacio, que desorganizan la relación histórica entre ciudad, refinería y trabajo. En Yopal se expresa en la expansión desbordada de la ciudad, la alteración de caños y quebradas y el debilitamiento de la vida

veredal. El concepto permite comprender que no se trata solo de «cambio», sino de un cambio que desacomoda la vida sin redistribuir la riqueza.

### **Continuidad de la vida**

Continuidad de la vida es la categoría que recoge aquello que las comunidades identifican como no negociable: la posibilidad de seguir viviendo dignamente en el territorio. En Barrancabermeja se asocia a la defensa del trabajo con derechos, de lo público y de la memoria obrera como pilares de una vida que se considera digna y reconocida. En Yopal se vincula con la protección del agua, del suelo agrícola, del ganado y de la cultura llanera y campesina, sintetizada en afirmaciones como «sin agua no hay vida» o «si se acaba la vereda, se acaba todo». Esta noción es clave para mostrar que el conflicto no es solo sobre recursos, sino sobre la capacidad de los territorios para sostener la vida en términos materiales, ecológicos, simbólicos y relacionales.

### **Dignidad territorial**

La dignidad territorial alude al derecho colectivo de los territorios a no ser tratados como zonas de sacrificio ni como meros espacios de extracción, sino como sujetos de decisión sobre su futuro. Se expresa cuando las comunidades reclaman reconocimiento, respeto

y participación efectiva en las decisiones que afectan su trabajo, sus aguas y sus tierras. En Barrancabermeja se vincula con la idea de que «la dignidad no se negocia» en el ámbito laboral y con la defensa del carácter público de la industria. En Yopal se encarna en la afirmación de la identidad campesina y llanera frente a proyectos que llegan desde fuera y reorganizan el territorio sin consulta real. El concepto articula exigencias de justicia social, ambiental y política en una misma clave.

## B. Categorías del análisis crítico del discurso aplicadas al conflicto petrolero

### Discurso territorial

El discurso territorial nombra la manera en que las comunidades interpretan, explican y sienten las transformaciones asociadas al extractivismo. No describe solo hechos, sino sentidos: lo que la gente cree que le está pasando al territorio y por qué. En Barrancabermeja este discurso se organiza alrededor de la defensa del trabajo, de lo público y de la memoria obrera, expresado en frases como «esto lo construimos con lucha» o «a la ciudad la dejaron sin futuro». En Yopal se articula alrededor del agua, de la vereda y de la vida campesina como

fundamentos que están en riesgo, sintetizado en afirmaciones como «el agua cambió» o «la tierra ya no responde igual». Esta categoría muestra que cada territorio produce su propia lectura del conflicto, marcada por su historia y por sus heridas.

### Macroestructura narrativa

La macroestructura narrativa es el gran relato que sostiene la forma en que una comunidad organiza los episodios dispersos del pasado y del presente. En Barrancabermeja esta macroestructura se construye sobre una secuencia que va de la industrialización a la precarización, pasando por la organización sindical, la represión y la privatización. En Yopal se narra como una transición abrupta desde una vida campesina relativamente estable hacia el boom petrolero, seguido por corrupción, deterioro ambiental y pérdida del equilibrio territorial. Aunque sus tramas sean distintas, ambas narrativas están atravesadas por el sentimiento de haber sido desbordadas por fuerzas externas que prometieron desarrollo, pero produjeron incertidumbre y desigualdad. Esta categoría permite comprender cómo los discursos individuales se ensamblan en relatos colectivos con fuerza política.

### Agencia gramatical

La agencia gramatical muestra quién

aparece como sujeto de la acción y quién queda como objeto pasivo en los discursos. En Barrancabermeja los trabajadores suelen ocupar el lugar activo: «nos tocó pelear», «nos defendimos», «nos organizaron para desaparecer la empresa, pero no pudieron». En cambio, las empresas y el Estado aparecen como agentes externos que actúan sobre la comunidad. En Yopal la agencia está invertida: el territorio, el agua y la vereda son representados como cuerpos que reciben daño, mientras que las empresas, los migrantes y la administración pública actúan sin control. Esta distribución gramatical revela posiciones de poder, pero también formas de resistencia: allí donde un territorio se asume como sujeto, hay posibilidad de acción colectiva; allí donde se narra como cuerpo afectado, se expresa una exigencia de protección.

### **Metáforas vitales**

Las metáforas vitales son imágenes que condensan aquello que la comunidad considera indispensable para la vida. En Yopal son centrales afirmaciones como «el agua es la vida del llano» o «la vereda respira por el caño», que convierten los elementos naturales en sujetos vivos que sostienen el territorio. En Barrancabermeja también aparecen metáforas de vida, pero asociadas al trabajo y a la dignidad: «la refinería es el corazón de la ciudad», «el sindicato es

la columna vertebral», «la lucha nos dio vida». Estas metáforas no son adornos lingüísticos: organizan la percepción del conflicto y permiten comprender qué es lo que la comunidad intenta proteger frente al extractivismo.

### **Metáforas de lucha**

Las metáforas de lucha construyen un repertorio simbólico donde la resistencia aparece como acto legítimo y necesario. Son más marcadas en Barrancabermeja, donde los entrevistados hablan de «pelear el derecho», «defender la dignidad», «enfrentar la privatización» o «sostener la empresa con el cuerpo». Estas imágenes construyen una identidad histórica basada en la confrontación colectiva. En Yopal son menos frecuentes, pero emergen en momentos donde la comunidad enfrenta daños ambientales o decisiones extractivas injustas, por ejemplo, cuando se afirma que «toca defender la vereda» o «toca hablar por el agua, porque nadie más lo hace». Esta categoría evidencia la dimensión política de los lenguajes de resistencia.

### **Nombramientos identitarios**

Los nombramientos identitarios son las palabras con las que una comunidad define quién es parte del territorio y quién no. En Yopal abundan nominaciones como «llanero», «campesino»,

«vereda», que delimitan una identidad colectiva asociada al trabajo con la tierra, a la vida comunitaria y al vínculo con el agua. En Barrancabermeja predominan «obrero», «trabajador», «sindicalista», «refinería», que remiten a una identidad industrial y política. Estos nombramientos no solo describen sujetos: establecen fronteras entre el «nosotros» y los «otros», y definen quién tiene legitimidad para hablar del territorio y qué experiencias se reconocen como propias.

### Campos semánticos

Los campos semánticos son agrupaciones de palabras que organizan el sentido del discurso. En Barrancabermeja los campos centrales son trabajo, lucha, sindicato, violencia, modernización, privatización y seguridad. En Yopal son agua, tierra, vereda, migración, regalías, agricultura, ganadería y abandono estatal. Estos campos definen el horizonte de preocupación de cada territorio y muestran que el conflicto petrolero no se experimenta de la misma manera en un enclave industrial que en un territorio rural transformado por un boom extractivo. La comparación evidencia que mientras Barrancabermeja se preocupa por la continuidad laboral y por lo público, Yopal se preocupa por la continuidad territorial y por la vida campesina.

## C. Conceptos socio-históricos de Barrancabermeja

### Memoria obrera

La memoria obrera es el conjunto de relatos, experiencias y afectos que mantienen viva la identidad histórica petrolera de la ciudad. No es solo recuerdo del pasado, sino criterio para evaluar el presente. En las entrevistas aparece como recordación constante de la época en que «el trabajo alcanzaba para vivir dignamente», cuando «la empresa era de todos» y cuando «ser obrero era un orgullo». Esta memoria funciona como dispositivo político que legitima la resistencia frente a la privatización y la precarización, pues permite comparar lo que se tuvo con lo que se perdió. Es un archivo vivo que sostiene la dignidad colectiva y que define la forma en que la comunidad interpreta el extractivismo.

### Precarización laboral}

La precarización laboral describe el tránsito desde un empleo estable, público y con derechos hacia un régimen de tercerización, contratos temporales, bajos salarios y desprotección. Los entrevistados señalan que «todo lo pasaron a contratistas», que «la empresa ya

no contrata gente de aquí» y que «los muchachos no tienen futuro en Ecopetrol». Este proceso no solo redujo ingresos, sino que erosionó el proyecto de vida obrero que había ordenado la ciudad durante décadas. La precarización se vive como deterioro material, pero también como fractura simbólica: el trabajo dejó de ser garantía de ciudadanía y se convirtió en marca de incertidumbre.

### **Privatización**

La privatización es entendida por la comunidad como una fuerza que despojó a la ciudad de su lugar dentro del proyecto petrolero nacional. En su lectura, privatizar no significó modernizar, sino desplazar. Los entrevistados afirman que «modernizaron para unos pocos», que «la ciudad quedó por fuera» o que «lo privado vino a acabar lo que teníamos». Esta interpretación no es técnica, sino política y afectiva: expresa la percepción de que una riqueza construida por generaciones fue transferida a actores externos sin beneficio para quienes sostuvieron la refinería con su trabajo y su vida. La privatización aparece como ruptura del pacto social que había unido a la empresa, al territorio y a la clase trabajadora.

### **Sindicalismo petrolero**

El sindicalismo petrolero es más que

organización laboral: es columna vertebral de la identidad política de la ciudad. En las entrevistas se presenta como fuerza que «defendió la empresa cuando la querían entregar», que «peleó los derechos» y que «sostuvo la dignidad obrera en los momentos más duros». También se reconoce que por ello fue objeto de estigmatización, persecución y violencia. El sindicalismo aparece como referente moral que articula memoria, territorio y lucha; como institución que convierte la experiencia individual del trabajo en proyecto colectivo de justicia y reconocimiento.

### **Estigmatización de líderes**

La estigmatización de líderes nombra el proceso mediante el cual dirigentes sindicales y comunitarios fueron presentados como amenazas, saboteadores o enemigos del desarrollo. Los entrevistados recuerdan que «al que hablaba lo señalaban», que «decían que los líderes no dejaban avanzar» y que «ser sindicalista era ponerse en la mira». Esta estigmatización no solo legitimó la violencia, también buscó destruir la autoridad moral del movimiento obrero. Operó como arma discursiva que aisló a los líderes, debilitó la cohesión comunitaria y justificó tanto la persecución estatal como las acciones de grupos armados.

### **Militarización del territorio**

La militarización del territorio describe la presencia intensa de fuerzas armadas y dispositivos de seguridad que reorganizaron la vida cotidiana y las dinámicas de protesta. En las entrevistas se afirma que «uno no podía ni aparecer mucho», que «lo seguían» o que «sabían quién hablaba con quién». Este ambiente instaló una pedagogía del miedo que afectó la participación y convirtió a la ciudad en escenario de vigilancia y control. La militarización no fue solo respuesta a la violencia: fue también parte del proceso de reconfiguración territorial que acompañó la privatización y la precarización del trabajo.

### **Ciudad símbolo**

Barrancabermeja es narrada como ciudad símbolo porque encarna la historia del trabajo petrolero, la resistencia sindical y la defensa de lo público en Colombia. Los entrevistados la describen como «la cuna de la industria», «la capital del sindicalismo» o «el corazón del petróleo nacional». Esta carga simbólica explica por qué las transformaciones recientes producen tanto dolor y tanta indignación. La ciudad no es un lugar más del mapa extractivo, es un territorio cuya identidad se construyó alrededor del trabajo digno y de la organización colectiva. Convertirse en enclave precarizado es percibido como

traición histórica y como pérdida de un legado construido a pulso durante generaciones.

## **D. Conceptos socioterritoriales de Yopal**

### **Boom petrolero**

El boom petrolero se narra como irrupción desbordada que transformó en pocos años la escala demográfica, económica y cultural del territorio. En los testimonios aparece como momento en que «todo llegó de golpe», cuando «la ciudad se llenó de gente que uno no conocía» y cuando «la plata corrió, pero no quedó nada». Este boom no se vive como promesa cumplida, sino como fuerza que fracturó la continuidad del orden veredal, introdujo tensiones urbanas aceleradas y sembró una sensación permanente de descontrol. La comunidad interpreta el boom como origen simultáneo de riqueza volátil y precariedad duradera.

### **Regalías**

Las regalías emergen como símbolo de la promesa incumplida del desarrollo. Los entrevistados repiten que «las regalías no se ven», que «la plata pasó, pero la ciudad quedó igual» y que «na-

die supo qué hicieron con eso». En lugar de obras visibles o fortalecimiento institucional, lo que recuerdan es deterioro urbano, desorden territorial y un ciclo de corrupción que vació el sentido redistributivo del recurso. Las regalías funcionan así, como marcador de injusticia: el territorio que produce riqueza no recibe su equivalente en bienestar. En el discurso comunitario, las regalías no son ingreso, son ausencia.

### **Migración desbordada**

La migración desbordada refiere al crecimiento abrupto de población que llegó por efecto del boom petrolero sin que hubiese planificación, infraestructura o liderazgo estatal para recibirla. En las entrevistas se afirma que «el territorio se llenó de desconocidos», que «la vereda ya no era vereda» y que «llegó gente que no tenía compromiso con el campo». La migración no se narra como problema en sí misma, sino como fenómeno desbordado y sin cuidado institucional. En esa ausencia de contención, la comunidad vio erosionarse el tejido campesino, los vínculos de reciprocidad y la cohesión que regulaba la vida rural.

### **Cultura campesina**

La cultura campesina es el corazón simbólico del discurso territorial en Yopal. Nombra la forma tradicional de trabajar la tierra, la organización veredal, la

solidaridad cotidiana y el vínculo afectivo con el territorio. Los entrevistados señalan que «la vereda quedó sola», que «los jóvenes se fueron al petróleo», que «la tierra ya no produce igual» y que «la vida del campo perdió fuerza». La cultura campesina aparece como tejido herido por el extractivismo, pero también como reserva moral y política desde la cual la comunidad se reconoce y se defiende. No es nostalgia, es identidad activa.

### **Agua como vida**

El agua como vida es una de las metáforas territoriales más poderosas del discurso de Yopal. Los informantes dicen que «el agua cambió», que «el caño ya no es el mismo» y que «sin agua no hay llano». El agua no es solo recurso ambiental, es sostén de la vida comunitaria, del trabajo agropecuario y del equilibrio ecológico. Por eso su deterioro, atribuido a la actividad petrolera y a la mala planificación urbana, se vive como amenaza existencial. El agua representa continuidad y futuro; su afectación simboliza despojo y ruptura.

### **Vereda**

La vereda es categoría socioterritorial que define pertenencia, cercanía y arraigo. Las entrevistas revelan que la vereda no solo es unidad espacial, es orden moral. Es el lugar donde «todos

se conocen», donde «se cuida el agua», donde «se trabaja juntos» y donde «la vida tiene ritmo propio». Por eso su desestructuración por efecto del boom petrolero, la migración y la expansión urbana se vive como pérdida de comunidad. La vereda encarna la forma en que Yopal se piensa a sí mismo: no como ciudad moderna, sino como territorio que necesita preservar la vida rural para sostener su dignidad.

### **Territorialidad protectora**

La territorialidad protectora es el modo en que la comunidad organiza su relación con el espacio ante la amenaza extractiva. A diferencia de Barrancabermeja, donde la territorialidad se expresa en clave obrera y confrontativa, en Yopal adopta una forma defensiva, ambiental y comunitaria. Se manifiesta en frases como «hay que cuidar la vereda, hay que defender el agua» o «el territorio no aguanta más». Esta territorialidad convierte la protección del entorno en acto político: defender el agua y la tierra equivale a defender la posibilidad misma de seguir siendo llaneros y campesinos. Es resistencia y, a la vez, proyecto.

# Referencias

- Arellano-Yanguas, J. (2017). *Inequalities in mining and oil regions of andean countries*. Papiro, Universidad de Zaragoza. <https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ried/article/view/3777>
- Becerra Ostos, S. J. (2009). Paramilitarismo y neoliberalismo en Barrancabermeja: el caso de la privatización de Ecopetrol 1980-2000. *Ciencia Política*, (7), 125-149.
- Chaves, D. (2014). *Zonas de influencia petrolera sin progreso económico y social. Caso de estudio: Casanare*. Universidad Militar Nueva Granada.
- De Sousa Santos, B. (2005). *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Trotta. <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/44228/1/EI%20Milenio%20Hu%C3%A9rfano.pdf>
- Duarte, J. (2016). Transformaciones socioterritoriales en Casanare por la actividad petrolera: conflictos y resistencias (1990-2010). En Ulloa, A. y Coronado, S. (Eds.), *Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial*. Centro de Investigación y Educación Popular [CINEP]; Universidad Nacional de Colombia.
- Dussel, E. (2013). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión* [Obras selectas XXI]. Editorial Docencia. [https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos\\_Obras\\_Selectas/%28F%2922.1Etica\\_liberacion\\_1.pdf](https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/%28F%2922.1Etica_liberacion_1.pdf)
- Dussel, E. (2013). *Política de la liberación. I: Historia mundial y crítica* [Obras selectas XXVI] (1.ª ed.). Editorial Docencia. Recuperado de [https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos\\_Obras\\_Selectas/%28F%2926.1Politica\\_liberacion\\_1.pdf](https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/%28F%2926.1Politica_liberacion_1.pdf)
- Ecopetrol. (2022). *Barrancabermeja Refinery: a century of colombian energy*. Ecopetrol.
- Fals Borda, O. (2009). *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Por la praxis*. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160308051848/09como.pdf>
- Fals Borda, O. (2025). *Antología Orlando Fals Borda* (incluye «La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones sobre la investigación-acción»). Red Sentipensante. <https://sentipensante.red/wp-content/uploads/2025/03/Antologia-Orlando-Fals-Borda-1.pdf>
- Fedesarrollo. (2015). *Impacto macroeconómico del Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB)*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI / Tierra Nueva. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>

- Freire, P. (1973). *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*. Siglo XXI Editores. <https://grandeseducadores.files.wordpress.com/2015/07/extensio3b3n-o-comunicacio3b3n-la-conciencia-en-el-medio-rural-1973.pdf>
- Gerstenberg, C. y Villegas González, D. (2019). La minería de carbón en Colombia y la situación económica de las mujeres rurales: la comunidad El Hatillo (Cesar, Colombia). *Revista Ambiente y Desarrollo*, 23(45), 57-78. Universidad Javeriana. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteysesarrollo/article/view/29966>
- Haddad, E. A., Bonet-Morón, J. y Pérez-Valbuena, G. J. (2022). *Impacto regional de las regalías en Colombia*. Banco de la República. <https://ideas.repec.org/p/col/000102/020125.html>
- Navarro-Martínez, Y. M. (2020). Incidencia de la resistencia social frente a la industria petrolera en las dinámicas socio-ambientales del corregimiento El Centro, municipio de Barrancabermeja. *Tabula Rasa*, (35), 227–251.
- Perry, G., y Olivera, M. (2009). *El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia*. Fedesarrollo. <https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/244>
- Procuraduría General de la Nación. (s.f.). Escuelas regionales de diálogo social. <https://escuelasdialogopgn.com/escuelas-regionales/>
- Puerto Sanabria, N. A. (s.f.). ¿Por qué el petróleo podrá hacernos pobres? Análisis socio-ecológico de los derramamientos de hidrocarburos. *El Arrendajo Escarlata*, (6). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ramírez, F. (2022). *En busca del sueño petrolero: una mirada desde el papel de las migraciones de los años noventa en Yopal – Casanare* [Trabajo de pregrado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional – Universidad Santo Tomás.
- Ripoll, M. T. (2016). *El impacto de las petroleras extranjeras en Colombia: el caso de Standard Oil, 1919-1930*. Universidad Tecnológica de Bolívar. <https://repositorio.utb.edu.co/items/6beb360a-558e-48e9-8854-22a0e54d3500>
- Sáenz Pacheco, A. D. y Vanhellemont, L. L. (2024). El acceso a la tierra y la informalidad de la vivienda en Yopal (Colombia): aportes para entender la informalidad urbana y los conflictos por el acceso al suelo a partir del análisis de los imaginarios sociales. *Territorios*, (51spe), e7. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.13754>
- Sáenz Suárez, J. A., & Pereira Silva, J. P. (2017). *Análisis del impacto social y económico en los departamentos de Casanare y Meta: un enfoque desde la disminución en la explotación de petróleo en Colombia* [Trabajo de especialización, Univer-

sidad Militar Nueva Granada].

- Salman, T., De Theije, M. y Vélez-Torres, I. (2018). Structures, actors, and interactions in the analysis of natural resource conflicts. *Ecology and Society*, 23(3): 30. <https://doi.org/10.5751/ES-10221-230330>
- Sánchez Cárcamo, R. A. (2022). *Progreso social y seguridad ontológica: análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018*. Universidad del Norte.
- Sánchez Cárcamo, R. A. (2023). Análisis crítico de la noción de progreso social. *Universitas Humanística*, (95), 231-258. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/37165>
- Sánchez Cárcamo, R. A. (2024). Materialidad y límites de los derechos humanos: del trabajo en Marx a la comprensión de la seguridad diacrónica. *Universitas Philosophica*, 41(83), 87-116. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph41-83.mldh>
- Sánchez Cárcamo, R. A., et al. (2025). Efectos de la inversión extranjera en el contexto colombiano. *Revista Investigación & Sociedad*, 6(2), 66-90. Colegio Mayor de Cartagena.
- Sánchez Cárcamo, R. A. y Parra Moreno, C. F. (2025). Inseguridad ontológica y migraciones: análisis crítico del desarraigo. *Revista Investigación & Desarrollo*, 33(2), 395-428. Universidad del Norte. <https://doi.org/10.14482/indes.33.02.489.565>
- Sandoval, J., Marín Jaramillo, R. y Almanza, A. (2017). Explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 19(36), 155-186. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5083>
- Serrano Besil, J. E. (2013). Industria y ciudad: crecimiento urbano de Barrancabermeja, 1926-1936. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, 18(1), 127-143.
- Trujillo-Ospina, D., Rojas-Lozano, D. y López-Cerquera, N. (2019). *Desbordamiento del extractivismo minero en Colombia: el caso de Suárez, Cauca*. *Revista CS*, (28), 61-88. Universidad Icesi. [https://www2.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista\\_cs/article/view/2512](https://www2.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2512)
- Van Dijk, T. A. (1980). *Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso*. Ediciones Cátedra. <https://archive.org/details/van-dijk-teun.-texto-y-contexto.-semantica-y-pragmatica-del-discurso-ocr-1980>
- Van Dijk, T. A. (1994). Discurso, poder y cognición social. *Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso*, (1), 17-41. <https://hum.unne.edu.ar/biblioteca/apuntes/Apuntes%20Letras/TEXTOS%20DIGITALES%20LING%3%9C%3%8D-STICA/Discurso%20poder%20y%20cognici%3%B3n%20social.pdf>

- Van Dijk, T. A. (2009). *Discurso y poder. Contribuciones a los estudios críticos del discurso*. Editorial Gedisa. [https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9788497844239\\_A36007519/preview-9788497844239\\_A36007519.pdf](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9788497844239_A36007519/preview-9788497844239_A36007519.pdf)
- Vega Cantor, R. (2008). Conflicto petrolero en Barrancabermeja en 1977: «No fue una huelga, fue una guerra». *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, (35), 247-276.



# Anexo 1

## Entrevista semiestructurada central

El propósito de esta entrevista es recoger de manera respetuosa las narrativas, percepciones y memorias de quienes han vivido de cerca los efectos de la industria petrolera en este territorio. Nos interesa conocer cómo se han configurado los conflictos sociales, las formas de resistencia y las experiencias de resolución o transformación que han surgido en Barrancabermeja y Yopal. La información que usted comparta será utilizada exclusivamente para fines académicos e institucionales en el marco de la investigación desarrollada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público – IEMP. Su testimonio será un insumo valioso para comprender mejor las dinámicas sociales en torno al petróleo y contribuir a la construcción de herramientas de diálogo y gobernanza territorial. La participación es voluntaria y los datos serán tratados con estricta confidencialidad; en ningún caso se divulgará su identidad sin autorización expresa.

## Estructura general de la entrevista

### 1. Apertura y contexto

- Presentación del investigador y del propósito de la entrevista.
- Solicitud de consentimiento informado y autorización para grabar.
- Explicación de la confidencialidad y del uso de la información para fines académicos e institucionales.

### 2. Trayectoria personal y relación con el territorio

- ¿Podría contarme un poco de su historia personal y de su vínculo con este territorio?
- ¿De qué manera se ha relacionado usted o su familia con la industria petrolera o con las actividades productivas locales?

### 3. Experiencias con la industria petrolera

- ¿Cómo describiría la presencia de la industria petrolera en este territorio?
- ¿Cuáles han sido, en su experiencia, los principales impactos positivos y negativos de la actividad petrolera?
- ¿Qué cambios sociales, económicos, culturales o ambientales asocia usted con la llegada o permanencia del petróleo?

### 4. Formas de conflictividad y resistencia

- ¿Qué tipos de conflictos han surgido en este territorio en relación con la industria petrolera?

- ¿Cómo han reaccionado las comunidades frente a esos conflictos?
- ¿Qué formas de resistencia o movilización recuerda o en cuáles ha participado directamente?

#### **5. Percepciones sobre actores clave**

- ¿Cómo percibe usted el papel del Estado en la regulación o gestión del petróleo en este territorio?
- ¿Cómo valora la actuación de las empresas petroleras?
- ¿Qué rol han desempeñado las organizaciones comunitarias, sindicales o ambientales frente a los conflictos?

#### **6. Estrategias de resolución o transformación**

- ¿Qué mecanismos de diálogo, negociación o mediación se han intentado en este territorio?
- ¿Cuál considera que ha sido su eficacia o sus limitaciones?
- ¿Qué aprendizajes cree usted que podrían servir como referencia para otros territorios que enfrentan conflictos similares?

#### **7. Proyección y futuro**

- ¿Cómo imagina usted el futuro de este territorio en relación con el petróleo y con la transición energética?
- ¿Qué propuestas o recomendaciones plantearía para transformar los conflictos y garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible?

#### **8. Cierre**

- Preguntar si desea agregar algo más que no se haya mencionado.
- Agradecimiento por el tiempo y por compartir su experiencia.



# Anexo 2

# Formato de consentimiento informado y autorización de uso de la información

Título de la investigación: Conflictividad social y herramientas de transformación en territorios petroleros: Análisis comparado entre Barrancabermeja y Yopal.

## Propósito de la entrevista

El objetivo de esta entrevista es recoger narrativas, percepciones y memorias sobre la presencia de la industria petrolera en el territorio, las formas de conflictividad y resistencia que se han desarrollado, y las estrategias de resolución o transformación de los conflictos sociales. La información obtenida será utilizada en el marco de la investigación adelantada por el IEMP, con fines académicos, institucionales y de divulgación, incluyendo la posibilidad de publicación de extractos o registros completos en informes, documentos curriculares, productos editoriales y medios digitales del Instituto.

## Declaración de consentimiento

Yo, \_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado/a con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, en mi calidad de \_\_\_\_\_ (cargo u ocupación), manifiesto de manera libre, expresa, voluntaria e informada que:

1. Autorizo al Instituto de Estudios del Ministerio Público – IEMP a recolectar, grabar, almacenar, transcribir, analizar y utilizar la información que entregue durante la entrevista realizada en el marco de la investigación señalada.
2. Autorizo al IEMP a reproducir total o parcialmente el contenido de mi entrevista en informes de investigación, publicaciones académicas, currículos de formación y demás productos derivados, ya sean impresos, audiovisuales o digitales.
3. Reconozco que esta autorización se otorga conforme a la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, así como al Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta.
4. Entiendo que el IEMP garantizará el uso responsable y ético de la información, y que, salvo autorización expresa en contrario, mi identidad podrá ser mencionada únicamente en el marco de las publicaciones oficiales de la investigación.
5. Acepto que la participación en esta entrevista es voluntaria, que puedo abstenerme de responder cualquier pregunta y que puedo solicitar en cualquier momento la suspensión de la grabación o el retiro de mi información antes de la

publicación de los resultados.

### **Datos del entrevistado**

- Nombre completo: \_\_\_\_\_
- Cédula de ciudadanía No.: \_\_\_\_\_
- Cargo u ocupación: \_\_\_\_\_
- Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_
- Correo electrónico (opcional): \_\_\_\_\_

### **Firma**

En constancia de mi consentimiento informado y de la autorización de uso de la información aquí consignada, firmo el presente documento.

- Firma del entrevistado/a: \_\_\_\_\_
- Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Firma del investigador responsable

- Nombre completo: \_\_\_\_\_
- Cargo/rol en el proyecto: \_\_\_\_\_
- Firma: \_\_\_\_\_

# **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

---

COLOMBIA

**DIÁLOGO PARA  
CONSTRUIR  
CONSENSOS**

PROCURADURÍA EN LAS  
**REGIONES**

**Paz  
Electoral**